



FLACSO
MÉXICO

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ACADÉMICA MÉXICO

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES
XVI PROMOCIÓN
2006 – 2008

“SENDEROS QUE (NO) SE BIFURCAN”

Movilización y representación en los productores cocaleros del Perú

Tesis que para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales

Presenta:

ANAHI DURAND GUEVARA

Directora de tesis: Dra. Ligia Tavera Fenollosa

Seminario de tesis: Movimientos sociales

México, D. F. Agosto del 2008.

Esta tesis contó con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

(...)Me detuve, como es natural, en la frase: Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan. Casi en el acto comprendí; el jardín de los senderos que se bifurcan era la realidad caótica; la frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. (...) En todas las ocasiones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras; el casi inextricable Ts'ui Pên, opta —simultáneamente— por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también, proliferan y se bifurcan.

Jorge Luis Borges
“El Jardín de senderos que se bifurcan”

RESUMEN

La presente tesis analiza cómo el movimiento cocalero peruano despliega una estrategia dual que alterna política de protesta y política de representación, explicándola a partir de la interacción de elementos internos y externos al grupo vinculados entre sí por fuertes liderazgos que viabilizan la acción colectiva. De un lado, sostenemos que factores constitutivos del movimiento tales como una identidad abierta y estructuras organizativas descentralizadas permiten organizar la protesta y facilitan la incursión en la arena política. De otro lado, elementos del entorno definidos como estructuras de oportunidad política, particularmente las aperturas institucionales que trae la transición democrática tras la caída del Fujimorismo, representan un escenario favorable para la acción de los movimientos en la arena electoral. En todo este proceso los líderes juegan un rol fundamental siendo quienes presentan la identidad, articulan la organización y orientan la evaluación del escenario. Asimismo, definen la forma por la cual participar en las elecciones valiéndose para ello de experiencias propias y cercanas, particularmente la experiencia cocalera boliviana. La participación en la arena electoral permite que hoy en el país existan autoridades "cocaleras" pero evidencia también tensiones y desafíos para el movimiento entre los que destaca la tensión discursiva entre el clasismo y la revaloración étnica y la tensión entre liderazgos fuertes y la democratización de las decisiones internas. Asimismo presenta el desafío de mantener la dualidad: interpelando a las autoridades del movimiento sobre la pertinencia o no de liderar las protestas y cómo conseguir representar demandas particulares del sector cocalero y otras más bien universales de la sociedad en general.

ABSTRAC

The present thesis analyses how the Peruvian 'cocalero' movement unfold a dual strategy which alternates a policy of protest and a policy of representation, explaining this strategy with base in the interaction among elements which are internal and external to the group, bonded trough strong leaderships which make feasible the collective action. In one hand, we propose that constitutive factors of the movement such as an open identity and decentralized organic structures facilitate the organization of the protest and the incursion in the political arena. In the other hand environment elements, as political chances opportunities, and particularly the institutional openings which imply the democratic transition after the fall of 'Fujimorismo', represent a favorable setting for the action of this movement in the electoral arena. In all this process the leaders play a fundamental role been who present the identity, articulate the organization and orientate the situation evaluation. Also, they define the way in which participate in the elections, with base in own experiences and those nearby, specially the 'cocalero' experience in Bolivia. The participation in electoral disputes allows the existence of authorities elected among the 'cocaleros' today in the country, but also evidence tensions and challenges to the movement, noticeably the discursive tension between class and ethnic revaluation, and the tension between strong leaderships and internal decision's democratization. There's the challenge of keeping the dualities: quizzing the movement authorities about the pertinence of leading the protests and how to represent the particular grievances of the 'cocaleros' and, at the same time, other universal grievances which touch the society in general.

AGRADECIMIENTOS

La presente tesis es resultado de un trabajo que no hubiera sido posible sin el concurso de una serie de apoyos y solidaridades que me brindaron el espacio, el tiempo y el ánimo necesario para la investigación. Agradezco en primer lugar a la Secretaria de Educación Publica (SEP) de México por la beca de estudios otorgada y a FLACSO por brindar un espacio académico propicio.

Quiero agradecer también a los productores cocaleros del Perú que me abrieron las puertas de sus casas y me entregaron sus historias, sin las cuales esta tesis simplemente hubiera sido imposible. Espero que la investigación realizada pueda aportar en algo a su propio proceso organizativo, brindando luces sobre los actuales desafíos que deben afrontar al haber optado por desempeñarse en el terreno contencioso y el político.

Un punto especial en mis afectos y gratitudes merece mi familia en Lima, particularmente mis padres a quienes debo el interés por las ciencias sociales y la preocupación constante por los destinos de nuestro país y los sectores menos favorecidos. Lo mismo que mis hermanas con quienes compartimos múltiples vivencias e intercambios que nos enriquecen y acercan permanentemente. A ellos y a Jano por la paciencia, las esperas y el amor con todo lo que implica.

Debo agradecer también a mis compañeros y amigos en el Perú, con quienes compartimos apuestas políticas y fueron todo este tiempo un interlocutor fundamental en el intercambio de ideas y opiniones sobre la realidad nacional y latinoamericana. En particular agradezco a Ana Cecilia a quien no encontrare a la vuelta de mi estadía mexicana pero cuyo recuerdo ha sido y es una fuente constante de inspiración.

Finalmente quiero agradecer a mi nueva familia latinoamericana en México con quienes hemos construido fuertes lazos de amistad y solidaridad, brindándonos la calidez necesaria para sentirnos en casa. Por que volvamos a coincidir y nos acompañemos en la compleja tarea de pensar salidas conjuntas en pos de un continente más libre y emancipado en el que haya espacio para la esperanza, la justicia... y los reencuentros felices.

INDICE

INTRODUCCION	9
---------------------------	----------

CAPITULO I: MOVIMIENTOS SOCIALES, PRINCIPALES EJES DE

ANALISIS.....	22
----------------------	-----------

1. ACERCAMIENTO TEÓRICO AL CONCEPTO DE MOVIMIENTO SOCIAL Y EJES

CONSTITUTIVOS	22
----------------------	-----------

<i>1.1 Ensayando una definición.....</i>	<i>22</i>
--	-----------

<i>1.2. La identidad como elemento constitutivo.....</i>	<i>28</i>
--	-----------

1.2.1 Acercamientos teóricos al estudio de la identidad colectiva	28
---	----

1.2.2 Principales componentes de la identidad colectiva.....	33
--	----

<i>1.3 La organización en los movimientos sociales.....</i>	<i>36</i>
---	-----------

1.3.1 Estructuras organizacionales y repertorios de protesta	36
--	----

1.3.2 El sector de movimientos sociales	38
---	----

2. MOVIMIENTOS SOCIALES Y ENTORNO POLÍTICO: ESTRUCTURA DE

OPORTUNIDAD POLÍTICA	40
-----------------------------	-----------

<i>2.1 Estructura de oportunidad política: Principales dimensiones</i>	<i>40</i>
--	-----------

2.1.1 Estructura de oportunidad política nacional	44
---	----

2.1.2 Estructura de oportunidad política internacional	46
--	----

3. MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

<i>3.1 Estado y movimientos sociales en América Latina</i>	<i>48</i>
--	-----------

<i>3.2 Los movimientos sociales en el área andina.....</i>	<i>52</i>
--	-----------

3.2.1 Dualidad estratégica y partidos étnicos: el caso peruano.....	56
---	----

CAPITULO II: LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO COCALERO.....

1. ESTUDIANDO EL MOVIMIENTO COCALERO EN EL PERÚ

<i>1.1 Aproximaciones y justificación del enfoque de estudio.....</i>	<i>64</i>
---	-----------

1.1.1 El movimiento cocalero ¿entre la ile galidad y el desarrollo?	64
---	----

1.1.2 Ensayando otra aproximación.....	67
--	----

2. LA IDENTIDAD EN EL MOVIMIENTO COCALERO: HISTORICIDAD Y DISCURSO

<i>2.1 La historicidad cocalera: Principales procesos.....</i>	<i>70</i>
--	-----------

2.1.1	Procesos migratorios y poblamiento de los Valles	70
2.1.2	El conflicto armado interno	73
2.1.3	Fujimorismo y clientelismo político.....	76
2.2	<i>El discurso interpelador</i>	80
2.2.1	La tensión entre el clasismo y la reivindicación étnica.....	80
2.2.2	El discurso compartido por el movimiento cocalero	85
3.	ARTICULACIÓN ORGÁNICA	89
3.1	<i>Construyendo la organización cocalera nacional</i>	90
3.1.1	Primeros esfuerzos (fallidos).....	90
3.1.2	Nuevo impulso organizativo: Formación de la CONPACC.....	94
3.2	<i>El peso de los liderazgos: bases regionales de la CONPACCP</i>	99
3.2.1	Líderes y organizaciones cocaleras en Valle del Huallaga	100
3.2.2	La FEPAVRAE en el Valle del Río Apurímac:	101
CAPITULO III : LA DUALIDAD ESTRATEGICA EN EL MOVIMIENTO		
COCALERO..... 105		
1. DUALIDAD ESTRATÉGICA: REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y MOVIMIENTOS		
SOCIALES		105
1.1	<i>Aproximaciones al estudio de la representación política</i>	106
1.1.1	La relación entre partidos políticos y movimientos sociales	109
2. EL MOVIMIENTO COCALERO EN EL TERRENO CONTENCIOSO		
2.1	<i>Ciclos, repertorios y principales eventos de protesta del movimiento cocalero</i> ...	112
2.1.1	Ciclos y repertorios de protesta.....	112
2.1.2	Principales eventos de protesta protagonizados por la CONPACCP.....	117
2.2	<i>Respuestas y reacciones ante la protesta cocalera</i>	122
2.2.1	Respuestas del sector de movimientos sociales y los partidos políticos	122
2.2.2	Respuestas estatales: criminalización de la protesta y desarrollismo agrario .	
	125
3. LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA		
DUAL		129

<i>3.1 La transición democrática como estructura de oportunidad política nacional.....</i>	<i>130</i>
3.1.1 Reformas (fallidas) en la política “anti drogas”.....	132
3.1.2 Legislación electoral: Cambios y posibilidades	134
3.1.3 Sistema de Partidos políticos, crisis y nuevas agrupaciones	138
<i>3.2 La estructura de oportunidad política internacional.....</i>	<i>142</i>
3.2.1 La presión norteamericana	142
3.2.2 El espejo boliviano: El ascenso de Evo Morales y su influencia en el Perú.....	145

CAPITULO IV: LA PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO COCALERO EN LA ARENA POLÍTICA..... 150

1. ¿PARTICIPAR O NO PARTICIPAR?: LA COYUNTURA ELECTORAL DEL 2006.....151

1.1 La discusión sobre la vía electoral por los canales orgánicos de la CONPACC..... 151

 1.1.1 Los primeros congresos de la CONPACC..... 151

 1.1.2 El IV Congreso Nacional de la CONPACCP..... 155

1.2. Cuando los líderes deciden... .. 158

 1.2.1 La invitación de Ollanta: Mujeres y militares en el Huallaga
 159 |

1.2.2 La conformación de Kuska Perú: El poder del caudillo en el Río Apurímac
 166 |

2. LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DEL MOVIMIENTO COCALERO 171

2.1 La identidad cocalera en la escena política: abierta y estratégica..... 171

2.1.1 Discurso e historicidad: tensiones y marcos de sentido
 175 |

2.2 Alcances y límites de las estructuras organizativas..... 180

2.2.1 Participación de la CONPACC y gremios locales en las elecciones..... 181

2.3 Y pese a todo un solo voto: La homogeneidad del voto en las zonas cocaleras. ..185

3. EL MOVIMIENTO COCALERO EN LA ARENA POLÍTICA: UNA PRIMERA

APROXIMACIÓN 189

3.1 La relación entre las autoridades y el movimiento cocalero..... 190

3.1.1 El Congreso y el Parlamento Andino: iniciativas e interlocución
 190 |

7

3.1.2 La relación en los Gobiernos locales	195
3.2. <i>El desafío de mantener la dualidad: representación política y protesta</i>	199
3.2.1 Autoridades y vía contenciosa.....	203
CONCLUSIONES	208
BIBLIOGRAFIA.....	215
ANEXOS.....	221
A. Hoja de coca y cocaína en el Perú y los países Andinos.....	221
B. Datos y resultados electorales.....	226
C. Instrumentos metodológicos.....	229

INTRODUCCION

Hace diez años si es que alguna vez salíamos en los medios de prensa era para decir que el campesino cocalero era narcotraficante, delincuente, terrorista... Lo peor era que nosotros mismos habíamos creído que si éramos delincuentes y que teníamos que escondernos.(...) Pero pasó el tiempo y nos enteramos de que teníamos derechos como campesinos y empezamos a pedir explicaciones y ahí nos dimos con la sorpresa de que nadie nos escuchaba. Cuando oían la palabra coca las autoridades se daban la vuelta y se iban. Al ver eso entendimos que teníamos que defendernos nosotros mismos si no nadie lo iba a hacer. A raíz de tanto abuso decidimos finalmente organizarnos. Ya la guerra había terminado y gracias a dios los cocaleros nos empezaron a seguir. Nos organizamos primero en los caseríos, luego en los distritos, las provincias y los departamentos. Hasta que finalmente se formo la CONPACC...hemos llegado a Lima en el 2003, hemos hecho que el presidente Toledo nos reciba y ahora ya nosotros también somos autoridades (Elsa Malpartida, ex secretaria de organización de la Confederación de Cocaleros del Perú)¹

Hasta principios del siglo XXI los productores de hoja de coca (cocaleros) eran prácticamente un actor inexistente en el Perú. Enclavados en la ceja de selva, entre la cordillera y la amazonía, existían básicamente como parte de los reportes policiales de lucha contra el narcotráfico. Es por ello que en el 2003 la llegada a Lima de miles de cocaleros organizados demandando un trato político de su problemática, conmocionó a propios y extraños cambiando significativamente la mirada sobre el actor que hasta entonces había primado. Los cocaleros trascendían así los marcos estrictamente policiales para colocarse como uno de los actores sociales más movilizadores del país. Entre enero del 2002 y diciembre del 2005 los productores de coca protagonizaron mas de 150 eventos de protesta en los distintos valles de cultivo y tres grandes movilizaciones nacionales en las cuales cocaleros de todos el país confluyeron a la capital para hacer oír sus demandas². Cuatro años después, el movimiento cocalero amplía su posicionamiento en la escena pública al participar del proceso electoral del 2006, siendo algunos de sus principales dirigentes candidatos a puestos de representación tanto en el Parlamento como en los Gobiernos

¹ Entrevista a Elsa Malpartida ex secretaria de organización de la Confederación de Cocaleros del Perú y actual representante peruana en el Parlamento Andino, realizada por Anahí Durand. Lima 15 de agosto del 2007.

² Datos tomados de la página web de la Defensoría del Pueblo www.defensoria.gob.pe 25 abril 2008. Por “evento de protesta” se cuenta cualquier alteración al normal desenvolvimiento de la vida pública (paralizaciones, cortes de carreteras, etc.) cuyas demandas van dirigidas al Estado. Vale anotar también que junto a las protestas contra las empresas mineras y los gobiernos locales, las protestas cocaleras han sido las más frecuentes en el país.

Locales. En esta primera experiencia electoral el movimiento logra importantes éxitos contando hoy con una representante en el Congreso Nacional, una representante en el Parlamento Andino y seis alcaldes distritales, existiendo “congresistas y alcaldes cocaleros” que ejercen cargos políticos sin abandonar por ello la vía contenciosa.

El caso de los cocaleros en el Perú está lejos de ser el único en el que los movimientos sociales apuestan por un doble camino de protesta y participación electoral. En el área andina destaca la acción del movimiento indígena en Ecuador y la del movimiento cocalero en Bolivia, en los cuales líderes que anteriormente ocuparon puestos de dirección en la organización social, ejercen ahora cargos de gobierno. Tal situación refleja cambios sustantivos en la mirada de los actores sociales frente al sistema político, alejada de posturas ideologizadas que rechazaban de principio la participación en el terreno político. Nos interpela también respecto a la crisis de representación, la misma que no puede seguir pensándose únicamente desde los partidos mientras se considera la acción de los movimientos sociales inserta en un orden institucional distinto y básicamente de carácter informal. Actualmente, distintas reflexiones teóricas sobre los movimientos sociales cuestionan dicha oposición entre política institucional y política de protesta. Para Goldstone (2003) estas dos esferas consideradas anteriormente como excluyentes, se interesectan constantemente, tejiendo fronteras borrosas y relaciones permeables de mutua dependencia. Por otra parte, según Kitschelt (1993) en las democracias contemporáneas las formas de articulación de intereses se diversifican, poseyendo los movimientos sociales, grupos de interés y partidos políticos, ventajas comparativas particulares para manejar problemas específicos. En suma, como lo señala Tavera (2007: 7) “resulta más conveniente pensar la crisis de representación política partiendo del supuesto de que esta función es compartida en la actualidad por un conjunto de actores”.

En este escenario de constantes cambios en la dinámica de los actores sociales y políticos ¿Cómo explicar la acción colectiva del movimiento cocalero peruano en la arena contenciosa y en la electoral, qué elementos -internos y externos al grupo- operan en el despliegue de dicha estrategia dual?

En torno a esta pregunta que guía nuestra investigación vale anotar que al abordar la problemática cocalera en el Perú han sido dos las líneas prioritarias de análisis: a) los diagnósticos económicos que profundizan en las posibilidades de desarrollo de las zonas

cocaleras y/o evalúan los programas productivos implementados para suplantar los cultivos de coca (Bedoya, 2003; Cabieses, 2006), b) Las investigaciones sobre el problema del consumo tradicional de hoja de coca, sus circuitos de comercialización y la producción destinada al narcotráfico (Antezana, 2006; Rospigliosi, 2006; U. Durand, 2006). La mayoría de esfuerzos por analizar la dinámica organizativa de los cocaleros son posteriores al 2005 y tienen un énfasis bastante coyuntural, enfatizando las dificultades organizativas de los productores peruanos en comparación con la experiencia boliviana. Ciertamente, en el caso de estudios a nivel de la región andina, destaca el estudio de Donna Lee Van Cott (2005) que se aproxima a los cocaleros bolivianos desde sus esfuerzos por constituir “partidos étnicos” entendidos como organizaciones políticas fundamentadas en la identidad étnica y estrechamente relacionadas con los movimientos sociales indígenas. No obstante, para el caso peruano, Van Cott deja fuera a los productores cocaleros, ya que la identidad étnica no se halla entre sus principales clivajes, no cuentan con una masa de votantes con intereses acordes ni tienen una estructura política organizacional que facilite su participación en el sistema de partidos.

De otro lado, al abordar la crisis de representación y la incursión de nuevos actores sociales en la arena política peruana la mayoría de respuestas ensayadas desde la sociología y la ciencia política, ponen énfasis en las características institucionales del sistema político y la actuación de los partidos, ignorando el papel que juegan los movimientos sociales. Scott Mainwaring (2006) por ejemplo, plantea que la persistencia de la debilidad democrática y la tendencia al caudillismo es un problema de deficiencias estatales. La pobre actuación del Estado en materia de políticas sociales y el mal uso de recursos públicos (corrupción) serían las causas de la desconfianza de los sectores populares en los partidos políticos y el sistema democrático en general, favoreciendo con esto la proclividad a las salidas autoritarias. Desde otra perspectiva, Martín Tanaka (1998), plantea el problema como una crisis de representación debida al colapso del sistema de partidos, proceso que favorece la inclinación por los “outsiders”, líderes independientes en términos ideológicos, y con un carisma que los acerca al populismo. Para el caso cocalero, en las últimas elecciones líderes vinculados a la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) ganaron puestos de representación. No obstante, al momento de explicar la acción cocalera en la arena política, los análisis volvieron a centrarse en la crisis de los partidos, el carisma

del outsider o la tendencia natural al populismo de actores poco institucionalizados, compartiendo el supuesto anotado por Cruig (2001) respecto a que los partidos políticos son los únicos medios autorizados para que los ciudadanos planteen sus demandas al Estado. El debate quedó inconcluso y el énfasis volvió a ponerse en los actores institucionales –los partidos, el Estado, el ejército- dejando de lado a los movimientos sociales.

Para responder a la pregunta de investigación, consideramos fundamental abordar la problemática cocalera desde la acción de los productores de hoja de coca y su dinámica como movimiento social, como “un desafío colectivo, planteado por personas que comparten objetivos comunes y organizan solidaridades en una interacción sostenida frente a las elites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1997: 21). Esto implica reparar en dos aspectos que aquí consideramos elementos constitutivos: a) La identidad colectiva, entendida como una construcción social de reconocimiento compartido, que implica límites, inclusiones y exclusiones que sitúan al individuo y al grupo respecto a otros (Cerulo, 1997). La identidad asume un carácter integrador pues proporciona un respaldo interpretativo que permite al sujeto encontrarse en círculos de reconocimiento común y un carácter abierto en tanto permite a los miembros del grupo resignificar su identidad o cambiarla cuando ésta se encuentre amenazada o desgastada (Pizzorno, 1998). b) la composición de sus estructuras organizativas, referidas a los niveles de articulación medianamente estables que viabilizan las decisiones permitiendo la puesta en escena de demandas y repertorios de protesta (McAdam, 2006). A través de estos canales el movimiento estructura, distribuye y ejecuta diversas responsabilidades, basándose para ello en normas y reglas de conducta compartidas que facilitan la interacción. La legitimidad y protagonismo de los líderes juegan un papel central en la efectividad del andamiaje organizativo y su permanencia en el tiempo

De otro lado, además de factores internos relacionados con la constitución del movimiento, responder nuestra pregunta de investigación implica problematizar los elementos del contexto, que explican su participación medianamente exitosa en la arena contenciosa y la arena electoral. Esto tiene que ver con el cierre y apertura de determinadas “estructuras de oportunidad política” (EOP) entendidas como señales consistentes del entorno que inciden sobre los actores favoreciendo o limitando su acción (Tarrow, 2006) La EOP puede abarcar cambios y continuidades en las aperturas de acceso al poder, en el terreno legislativo, la composición de las élites, las políticas represivas entre otros aspectos

cuya incidencia varía según el ámbito territorial de decisión, ya sea nacional o internacional. En tal sentido, para entender la estrategia dual del movimiento resulta importante reparar en los cambios ocurridos en la estructura de oportunidad política, específicamente en aquellos elementos de carácter nacional tales como la legislación electoral, los partidos políticos y las políticas estatales, junto a elementos internacionales en particular las posturas del gobierno norteamericano frente a la lucha contra las drogas.

Un último factor, que vincula los elementos internos y externos anotados, es el rol jugado por los líderes del movimiento. Además de cumplir un papel fundamental en la concreción y permanencia de las estructuras organizativas, los líderes son quienes presentan públicamente la identidad articulando discursos cohesionadores que legitiman las decisiones del movimiento. Al mismo tiempo que realizan éste trabajo interno, su papel es central en la evaluación de las condiciones del entorno político y la conveniencia o no de asumir determinadas estrategias. Al desempeñar esta doble función, los actores en general y los líderes en particular, desarrollan procesos de aprendizaje donde proyectan sus decisiones a futuro mirando siempre hacia el pasado “adquiriendo su labor un carácter experiencial que interactúa en forma permanente con otros movimientos y se sustenta más en la experiencia que en el ensayo, más en la práctica que en el cálculo” (González y Tavera, 2007: 36)

En suma, la presente tesis tiene por objetivo analizar el proceso por el cual el movimiento cocalero despliega una estrategia dual que alterna política de protesta y política de representación, identificando los elementos internos y externos al grupo que explican e inciden en dicha opción. Específicamente nos detendremos en:

- Definir un marco teórico conceptual para explicar la estrategia dual desplegada por el movimiento cocalero, definiendo para ello los elementos internos al movimiento social más relevantes como son la identidad y las estructuras organizativas, y los elementos externos a éste particularmente la estructura de oportunidad política nacional e internacional.
- Estudiar la construcción del movimiento cocalero a partir de los ejes constitutivos mencionados y su participación en la arena contenciosa, deteniéndonos en las demandas, eventos y repertorios de protesta, el peso de los liderazgos y las reacciones que se generan desde el Estado y el sector de movimientos sociales (SMS)
- Analizar las principales estructuras de oportunidad política nacional e internacional significativas para entender el despliegue de la estrategia dual del movimiento cocalero,

particularmente cambios institucionales y variaciones en las posturas de los partidos políticos frente a la participación electoral de los movimientos sociales.

- Abordar la participación del movimiento cocalero en la arena electoral, el éxito que logra, el rol de los líderes y las tensiones que origina en su interior la dualidad movilización – representación una vez que los cocaleros ganan puestos de representación popular.

Para abordar el problema de estudio planteamos como unidad de análisis general la CONPACC (Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras del Perú) que agrupa a los 12 valles cocaleros de la selva alta peruana. Analizar el proceso de la CONPACCP es relevante en tanto constituye el esfuerzo de unificación cocalera más amplio y sostenido en el Perú³. De otro lado, teniendo en cuenta la estructura federativa de la CONPACCP, la intensidad de la protesta y el protagonismo electoral alcanzado, requerimos distinguir un nivel de análisis local -territorial. En tal sentido, elegimos dos Valles en base a los siguientes criterios de selección: Producción significativa de hoja de coca, procedencia de la población en general (indígena/colona), historia política reciente, intensidad de las protestas, y participación del movimiento en la arena electoral. Creemos que el contraste de estos elementos y la forma en qué operan en cada una de las zonas elegidas permitirán un mejor análisis del movimiento cocalero y sus elecciones estratégicas. Las zonas elegidas son las siguientes:

- El Valle del Huallaga: Situado en el departamento de Huanuco, comprende cinco distritos y es la zona de mayor producción de hoja de coca en el Perú. Es una zona poblada por familias “colonas” de la costa y sierra norte del país, con una historia local marcada por la violencia política. En este valle las protestas del movimiento son sumamente frecuentes y de aquí provienen las dirigentes de la CONPACCP Elsa Malpartida y Nancy Obregón, actuales representantes parlamentarias.

- El Valle del Río Apurímac (VRA): Situado en la zona de selva del departamento de Ayacucho comprende 9 distritos y es la segunda cuenca de mayor producción de hoja de coca en el Perú. Es una zona poblada por familias quechuahablantes y una de las más golpeadas por la violencia subversiva. De este Valle proviene el ex secretario general de la CONPACCP Nelson Palomino. Es una zona donde el movimiento desarrolla una dinámica

³ Nos referimos a las cuencas de cultivo de coca ilegal pues según la normatividad peruana existen zonas de cultivo legal que venden su producción al monopolio estatal Empresa Nacional de la Coca (ENACO) tal como se explica con mayor detalle en el capítulo II.

de frecuentes protestas y donde surge Kuska Perú, agrupación que se presenta a elecciones municipales ganando en cinco distritos.

Cuadro N° 1: Características de las zonas seleccionadas

<i>Valle</i>	<i>Producción de hoja de coca</i>	<i>Procedencia poblacional</i>	<i>Hechos de Historicidad</i>	<i>Protestas⁴ sociales</i>	<i>Participación electoral</i>
Valle del Río Huallaga	Primer productor (34%)	Colona mestiza	Violencia política	Muy frecuentes	Parlamentarias
Valle del Río Apurímac	Segundo productor (30%)	Indígena quechua	Violencia política	Muy frecuentes	Alcaldes distritales

En cuanto al período de estudio consideramos trabajar entre 1998 y el 2007. En este lapso de tiempo se suceden hechos políticos y económicos relevantes para nuestra problemática de estudio tanto a nivel nacional como a nivel de los valles cocaleros. Nos referimos principalmente a la crisis del régimen autoritario de Fujimori y el inicio de un período de transición democrática que amplía las posibilidades de organización social en zonas hasta entonces militarizadas y genera rediseños políticos e institucionales favorables a la participación política de los movimientos sociales. Dentro de este lapso de tiempo identificamos dos momentos claves:

De 1998 al 2003: Esta es una etapa de organización interna, signada por el declive del régimen fujimorista y un nuevo boom en el precio de la coca. En este periodo los cocaleros se organizan en gremios a nivel local, privilegiándose una estrategia de protesta.

Del 2003 al 2006: Esta es una etapa de consolidación externa, signada por el posicionamiento de los cocaleros a nivel nacional, optándose por una estrategia dual movilización- representación. La coyuntura electoral del 2006 define la participación de los cocaleros en la arena política.

Nuestra hipótesis principal, plantea que la estrategia dual adoptada por el movimiento cocalero se explica a partir de la interacción de elementos internos entendidos como componentes constitutivos del mismo actor, y elementos externos relacionados con la estructura de oportunidad política, operando entre ambos de forma vinculante la acción de

⁴ La frecuencia de las protestas se mide según el índice de conflictividad social elaborado por la Defensoría del Pueblo www.defensoria.gob.pe

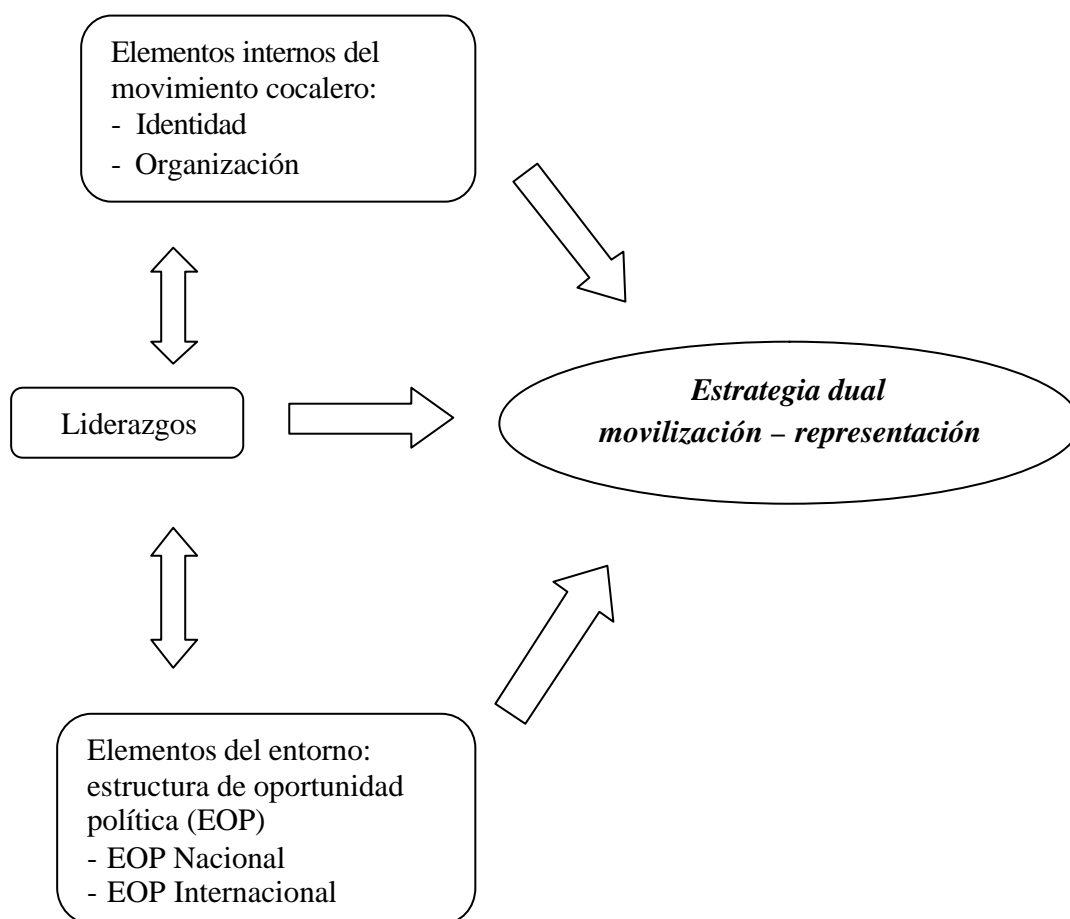
los líderes. De un lado la identidad compartida, signada por condiciones históricas determinadas y un discurso radical, se halla lo suficientemente abierta a elecciones estratégicas que principalmente los liderazgos permiten viabilizar. De otro lado, la estructura de oportunidad abierta con la transición democrática y signada por presiones del entorno internacional permite cambios sustantivos en el terreno institucional, reformándose puntos sustanciales de la política antidrogas, la legislación electoral y las agendas de los partidos, presentando como viable también el desempeño en el terreno electoral. Dentro de esta hipótesis se encuentran tres hipótesis secundarias:

La primera plantea que los ejes constitutivos más importantes en la construcción del movimiento cocalero refieren: a) Una “identidad” signada por procesos históricos tales como la movilidad migratoria, la violencia política y la pacificación fujimorista. Estos procesos inciden en la formulación de un discurso caracterizado por la constante polarización y la mirada sectorial donde se tensionan los marcos referenciales clasistas y étnicos b) Una estructura orgánica fragmentada, caracterizada por la primacía de los gremios locales por sobre las estructuras nacionales y fuertes liderazgos que no ceden cuotas de poder. Esto dificulta la consolidación de un gremio nacional pero no impide la toma de decisiones descentralizadas. Se delinea así una estructura orgánica tendiente al caudillismo y una identidad confrontacional pero abierta a diversos usos estratégicos, permitiendo que el movimiento articule una estrategia dual pese a su aparente debilidad interna.

La segunda hipótesis secundaria plantea que los cambios en la estructura de oportunidad política, relacionados con la crisis del régimen de Fujimori y la posterior transición democrática, son fundamentales para que el movimiento cocalero articule y legitime una estrategia dual. La caída del fujimorismo lleva a la reorientación en las políticas anti drogas trayendo una cierta apertura al dialogo que favorece a la organización cocalera. En el mismo sentido, durante la etapa de transición se realizan reformas a la legislación electoral y cambios en las agendas de los partidos positivas para la participación de los líderes locales. A nivel internacional, el giro represivo de la política norteamericana incide en el cierre de la oportunidad abierta por la transición, demostrando al movimiento los límites de la protesta y la necesidad de tentar espacios de representación política.

La tercera hipótesis sostiene que los líderes del movimiento cocalero juegan un rol fundamental en la adopción de una estrategia dual. Tanto al momento de organizar la

protesta como al incursionar en la arena política, los líderes desarrollan un trabajo de articulación y presentación de la identidad, tejiendo estructuras orgánicas al tiempo que inciden en la evaluación de la estructuras de oportunidad política. Los principales dirigentes cocaleros despliegan así un capital de liderazgo cultural, social y simbólico, desarrollando procesos de aprendizaje que se nutren de experiencias pasadas y presentes consideradas cercanas específicamente el caso boliviano. No obstante, si bien el peso de los liderazgos locales incrementa la efectividad de la acción, dada la debilidad de las estructuras orgánicas y la tendencia al caudillismo, dificulta también la democratización de las decisiones y la consolidación de una organización cocalera nacional. Resumiendo nuestro modelo explicativo podría resumirse de la siguiente manera:



Una hipótesis alternativa que contrastar, es la que define a las organizaciones cocaleras como un actor antisistema, radicalizado y coyunturalista, incapaz de consolidar una

identidad común e intrínsecamente proclive a la violencia. En tal sentido, la participación en la arena política del movimiento cocalero es decidida y explicada por actores institucionales externos, ya sea la crisis de los partidos políticos que facilita su incursión, el carisma de Humala que los convoca, o el arraigo del ejército en la selva que permite la confluencia de intereses (Durand, 2006; Rospigliosi, 2006; Antezana, 2005) Lo que se pretende es explicar la participación política cocalera desde el actor mismo, su particular constitución identitaria y la doble estrategia que guía su accionar. De esta forma buscamos dialogar con tesis como la planteada por Van Cott para el caso boliviano, según la cual la participación política del movimiento social es posible cuando el actor alcanza suficiente fuerza y cohesión interna. Esto no ocurre en el caso peruano, donde la participación en la arena política no responde a un estado de maduración del movimiento ni implica el abandono de la protesta. Se participa en elecciones por que se considera que existe una ventana de oportunidad favorable. Si bien existen tensiones y diferencias respecto a la decisión de pasar a la arena electoral y cómo hacerlo, el movimiento cocalero peruano se afirma en su estrategia de dualidad, sin “institucionalizarse” ni abandonar la política contenciosa.

Creemos que nuestra investigación adquiere relevancia en tanto amplía el área de análisis de la problemática cocalera, enfocando al actor social como eje central de la discusión y no como un elemento marginal en los debates sobre el narcotráfico o las políticas de desarrollo agrario. Asimismo, requiere ser comprendido en su especificidad histórica y no como “contraste no exitoso” frente a otras experiencias cercanas pero no por ello necesariamente replicables como es el caso cocalero en Bolivia. De otro lado, estudiar la estrategia dual desplegada por el movimiento cocalero, puede brindar luces sobre los nuevos actores sociales, sus cambios y continuidades en el Perú actual y también a nivel latinoamericano. Refiere así a procesos de reconfiguración identitaria que ocurren en el país, signados por el ascenso de elementos étnicos que son incorporados al discurso de los movimientos sociales con distintos énfasis y en tensión con otros componentes, como sucede con el debate entre clasismo y etnicidad presente en el discurso cocalero. Nos habla también de la actual fragmentación social y las dificultades de las organizaciones sociales para democratizar las estructuras organizativas y dotarlas de una institucionalidad que trascienda lo local y desplace caudillos sumamente arraigados. En tal sentido es central estudiar el desempeño de los líderes y el rol que juegan en la adopción de la estrategia dual,

deteniéndonos en sus trayectorias y las experiencias en las que se reconocen y se insertan. El peso de los liderazgos en el caso del movimiento cocalero puede aportar al estudio de otros movimientos sociales en el Perú post violencia política signado por la fragmentación territorial y sectorial, de modo que los poderes locales adquieren primacía sobre las estructuras nacionales y persisten las tendencias personalistas en la concreción de decisiones importantes para los objetivos fijados por el movimiento.

Comprender la actual dinámica cocalera, puede también enriquecer debates irresueltos que no pretendemos dar por concluidos pero sí abordar desde una perspectiva diferente, como es el caso de la recurrente crisis de representación política en el área andina. El análisis de dicha crisis ha sido enfocado principalmente desde los partidos políticos, dejando de lado a los movimientos sociales. Creemos relevante ensayar una concepción más amplia de la política que, teniendo en cuenta los elementos institucionales, aborde también la acción de los movimientos sociales que apuestan por la participación política, definiendo sus propias estructuras y dotando a su accionar de nuevos significados. Se trata de entender dinámicas complejas, donde la decisión de los movimientos sociales de combinar protesta y participación electoral no es necesariamente un proceso de confluencia armoniosa, dando lugar más bien a tensiones y debates que reflejan cambios importantes en las formas de participar y entender la política. Asimismo, esperamos contribuir a la línea de estudio que cuestiona la oposición entre política institucional y política de protesta, pues ambas esferas se intersectan siendo cada vez más los partidos y los movimientos sociales actores mutuamente dependientes (Tavera, 2007).

Finalmente, el análisis del movimiento cocalero, nos permite conectar diversos planos de discusión en tanto enlaza los niveles local, nacional, regional e internacional. Muchas de las decisiones del movimiento cocalero guardan estrecha relación con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, o se hallan influidos por los éxitos cocaleros en Bolivia. Estudiar el problema en sus conexiones externas resulta relevante para entender la acción colectiva de un actor local que debe enfrentar los intereses de un mundo cada vez más globalizado. Profundizar en esta línea de discusión es importante para contar con una mirada comparativa de los procesos de movilización y representación en el área andina.

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se basó en un enfoque cualitativo que abordó la problemática cocalera a partir de vínculos comunicacionales entre

aspectos teóricos de la discusión y datos de la realidad observados. Si bien nos apoyamos en algunas corrientes y definiciones teóricas, no partimos de un marco cerrado pues como mencionan Glaser y Strauss, la teoría es también una estrategia para el manejo de los datos, que nos brinda herramientas para generar nuevas conceptualizaciones, describir y explicar los fenómenos de la realidad (Glaser y Strauss, 1967). Como técnica de recolección de datos se optó por la entrevista, dando lugar a un proceso comunicativo por el cual obtuvimos de los sujetos información relevante para el problema de estudio. En nuestro caso, se aplicaron “entrevistas semi estructuradas”, es decir regidas por ciertas líneas argumentales que a la vez que orientaron los temas de conversación dejaron espacio para reflexiones espontáneas o la profundización de aspectos que el actor consideró conveniente. Se realizaron un total diecisiete entrevistas que abarcaron líderes del movimiento cocalero, autoridades y profesionales vinculados al tema según los criterios detallados en los Anexos. Consideramos nuestra propuesta metodológica como la mas adecuada en tanto nos permitió contar con un marco teórico amplio y recoger directamente las voces de los principales actores. Tanto el estudio y sistematización de la teoría como el análisis de las entrevistas, nos permitieron avanzar en el desarrollo del problema de estudio, dotando de mayor consistencia a nuestras afirmaciones y posibilitando la formulación final de las conclusiones.

El desarrollo metodológico de la investigación comprendió en un primer momento el levantamiento de información secundaria donde se acopió material bibliográfico, hemerográfico y bases de datos de instituciones específicas, visitando bibliotecas especializadas. Se sistematizaron además los datos estadísticos relacionados con la producción de coca y cocaína, las protestas cocaleras y los resultados electorales. En un segundo momento, se desarrolló el levantamiento de información en fuentes primarias: Se visitaron los Valles cocaleros comprendidos en el estudio realizándose las entrevistas semi estructuradas a los actores relevantes para la investigación. También se acopió material interno de la organización, como actas de reuniones, documentos internos, folletos y publicaciones del mismo movimiento y de sus organizaciones aliadas (Partido Nacionalista). Finalmente, en un tercer momento se analizó la información recogida, estableciéndose relaciones y comparaciones entre diferentes datos, variables e indicadores. Esto incluyó el análisis de los documentos y datos consignados en las matrices y fichas elaboradas, la

transcripción de entrevistas semi estructuradas realizadas y el análisis de las entrevistas recogidas (Ver Anexos)

La investigación consta de cuatro capítulos y un apartado final de conclusiones. En el primer capítulo ensayamos una definición de los movimientos sociales acorde con la problemática de estudio, esbozando a la vez un marco de análisis teórico para explicar la dualidad estratégica desplegada por el movimiento cocalero. De esta forma definimos los conceptos más relevantes y situamos la discusión en el contexto latinoamericano, particularmente en el área andina, donde adquieren relevancia movimientos que participan en procesos electorales. En el segundo capítulo analizamos la dinámica de construcción del movimiento cocalero en el Perú a partir de los dos ejes constitutivos que creemos inciden en su opción por una estrategia dual. Así, tras un breve balance de los estudios realizados sobre este actor, abordamos el proceso de construcción de la identidad a partir de la historicidad y los referentes discursivos compartidos, así como en la articulación orgánica en términos de estructuras y el peso de los liderazgos. En el tercer capítulo, nos centramos en el despliegue de la estrategia dual del movimiento cocalero a partir de su acción en el terreno contencioso, detallando a la par las principales estructuras de oportunidad política (nacional e internacional) que influyen en la acción del movimiento. Estudiamos las principales protestas y las reacciones que generan en el Estado y los partidos en el marco de condiciones que favorecen la participación electoral del movimiento cocalero, tales como la transición democrática en el Perú y la experiencia boliviana. En el cuarto capítulo analizamos la participación del movimiento cocalero en la arena electoral, realizando además un primer acercamiento al desempeño de las autoridades cocaleras en la gestión. De un lado analizamos el proceso de debate, legitimación y participación cocalera en la coyuntura electoral, de otro nos detenemos en el ejercicio del poder por parte de las autoridades vinculadas al movimiento y los desafíos que implica mantener una estrategia dual, es decir ser gobierno sin abandonar la vía contenciosa. Finalizamos la investigación con un apartado final de conclusiones que resume los principales hallazgos y aportes de la investigación, planteando también algunas preguntas que se desprenden del análisis y que sugieren líneas de análisis que esperamos puedan ser abordadas en posteriores investigaciones.

CAPITULO I

MOVIMIENTOS SOCIALES: PRINCIPALES EJES DE ANALISIS

El presente capítulo tiene por objetivo articular una definición de los movimientos sociales acorde con la problemática de estudio a partir de la identificación de determinados aspectos, considerados centrales en la orientación de las estrategias definidas por el movimiento. Se intenta así esbozar un marco de análisis teórico para explicar la dualidad desplegada por el movimiento cocalero que alterna política de protesta y de representación. En tal sentido, definimos los conceptos relevantes para dar cuenta de los elementos internos y externos al grupo que explican e inciden en dicha opción, a la vez que situamos la discusión en el contexto latinoamericano, particularmente en la región andina y el Perú.

En primer lugar realizamos un breve recuento de los principales enfoques teóricos que han primado en el estudio de los movimientos sociales. Analizamos así la importancia de la identidad y las estructuras organizativas como los componentes internos del actor que inciden de forma más significativa en la elección de sus estrategias de lucha. Luego de esto, nos centramos en los elementos del entorno que aportan a la explicación de la acción colectiva en el terreno contencioso e institucional, deteniéndonos en el concepto de estructura de oportunidad política. En segundo lugar, situamos la discusión en America Latina, deteniéndonos en factores fundamentales tales como el rol jugado por el Estado y la creciente importancia de los movimientos indígenas que cobran protagonismo político en el área andina, dando lugar a categorías como la de “partidos étnicos”.

1. Acercamiento teórico al concepto de movimiento social y ejes constitutivos

1.1 Ensayando una definición

Responder al cómo, cuándo y por qué surgen los movimientos sociales es y ha sido un tópico de reflexión constante en las Ciencias Sociales. Actualmente el término “movimiento social” es empleado para explicar una amplia gama de acciones

colectivas en distintos contextos sociales y políticos, abarcando una diversidad de demandas, identidades y formas de protesta. Esta heterogeneidad ha dado lugar a diferentes enfoques que enfatizan diversos componentes de la acción. Existen ya balances teóricos y resúmenes exhaustivos que exponen las principales corrientes teóricas en el estudio de los movimientos sociales⁵. Es por ello que antes que una nueva reseña presentamos aquí un panorama general del debate que nos permita construir una definición de movimiento social acorde con la problemática de estudio. Dentro de los enfoques teóricos predominantes se cuenta en primer lugar la denominada “Teoría de la movilización de recursos” (TMR) que surge a inicios de los ‘70 en los Estados Unidos. Entre sus principales representantes destacan Zald y Mc Carthy (1977) quienes, tomando como referente el modelo racional- instrumental planteado por Olson⁶-, ponen énfasis en los recursos que dispone un determinado grupo para conseguir objetivos comunes. Los movimientos sociales se definen como formas de acción mediante las cuales individuos excluidos del poder organizan los recursos necesarios para movilizarse en pos de demandas compartidas. La satisfacción o no de los objetivos comunes depende de la capacidad del movimiento para acopiar recursos, constituir redes sociales y tejer alianzas, adquiriendo una mejor posición para enfrentar a las elites políticas. Los movimientos sociales se hallan inmersos en juegos estratégicos de cálculo instrumental en torno a las relaciones de poder que inciden en su orientación política institucional y en su capacidad de auto producirse a si mismos, generando nuevos cursos de acción según se disponga de mejores recursos.

No obstante el aporte de este enfoque, el énfasis puesto en el cómo surge y se desarrolla el movimiento, sesga la explicación respecto al por qué de su existencia. En el mismo sentido, el énfasis que se coloca en los cálculos racionales de los actores para negociar alianzas, obtener recursos o propiciar intercambios, deja de lado dimensiones más bien subjetivas vinculadas a motivaciones culturales y a solidaridades no necesariamente mediadas por la lógica instrumental. Este enfoque además adopta una perspectiva según la cual las “elites” decisorias del sistema político son básicamente

⁵ Ver por ejemplo Tavera Ligia, *Movimientos sociales*, en “Lexico de la política, Baca Olamendi, FLACSO. Fondo de Cultura Económica, 2000; Casquette Jesús, *Política, cultura y movimientos sociales* Ed. Bakakeaz, Bilbao 1998

⁶ Olson plantea que la acción colectiva es posible en tanto existen incentivos positivos que maximicen sus beneficios

los actores institucionales, específicamente los partidos políticos. A los movimientos sociales les corresponde negociar con los partidos a la vez que siguen un curso tendiente a la institucionalización, pues en la medida que logran legitimar sus demandas, suelen ser incorporados al ámbito de la política partidaria. Es por ello que este enfoque no es muy relevante en nuestra investigación, salvo en los aportes que brinda para el estudio de la dimensión organizativa del movimiento y los recursos movilizados en torno a ello.

La “Teoría de oportunidades políticas” (EOP), desarrollada principalmente por autores como Charles Tilly, Sydney Tarrow y Doug Mc Adam, comparte el enfoque racional instrumental de la TMS, pero introduce la variable del contexto político. Mientras que para la TMR los movimientos sociales se explican por su capacidad de gestionar recursos por sí mismos, manteniéndose y auto produciéndose, en la Teoría de oportunidades políticas son las condiciones del escenario político las que influyen decisivamente en el surgimiento y desarrollo de un movimiento social. Elementos como las relaciones de poder, la constitución de los partidos políticos o el carácter del régimen, ya sea democrático o autoritario, definen estructuras de oportunidad que favorecen o limitan la acción de los movimientos. Para Mc Adam (1996) la estructura de oportunidad se define como el grado de probabilidad que tienen los grupos de acceder e influir sobre el poder político, siendo tres los puntos principales a tomarse en cuenta en su estudio: a) diferenciar oportunidades políticas de otras clases de oportunidades (culturales, sociales etc.), b) tener en cuenta las dimensiones que abarca la “estructura de oportunidad política y c) considerar las diferentes posiciones que puede tomar la EOP en el análisis, ya sea como variable independiente o variable dependiente. El enfoque de oportunidades políticas ha sido utilizado con diversos énfasis. De un lado se ha privilegiado estudiar el nivel institucional nacional, explicando cómo cambios en las legislaciones o en la estructura estatal influyen en la acción colectiva y la formación de los movimientos sociales (Kitschelet, 1993). De otro lado, el énfasis se ha colocado en los aspectos menos institucionalizados del sistema, relacionados con situaciones de crisis que dan lugar a momentos de conflictividad, tales como nuevos repertorios de protesta, cambios en la configuración de las elites o la capacidad de respuesta del movimiento a las políticas represivas

implementadas por el Estado (Tarrow, 1997). Si bien la propuesta de analizar los movimientos sociales a la luz del contexto político es un aporte pertinente, puede también soslayar otros factores tales como la capacidad del movimiento para generar nuevas condiciones que faciliten el surgimiento de nuevos movimientos y el papel activo que juega la acción colectiva en la reconfiguración de las elites políticas. La oportunidad política debe ser vista no solo como lo que explica sino también como una variable dependiente explicada a su vez por otros factores (Mc Adam, 1996). La EOP además, comparte la idea de que los movimientos sociales buscan incorporarse al sistema político, ámbito del que por definición no son miembros, estableciendo relaciones de rivalidad o complementariedad con los partidos según los intereses en común y las condiciones políticas (Tavera, 2007). En tal sentido, resulta más acorde con nuestra investigación, incorporar la estructura de oportunidad política como una variable exógena, que incide con diversos énfasis en la dinámica del movimiento pero no la determina ni la explica en sí misma, debiendo ser estudiada en interacción con los aspectos constitutivos del actor.

Finalmente una tercera línea de estudio es la teoría de los “Nuevos movimientos sociales”, desarrollada en la década del 70 en un escenario signado por los cambios estructurales del capitalismo occidental donde declina el movimiento obrero y surgen movimientos como el ecologismo, el pacifismo o el feminismo cuyos ejes articuladores antes que la clase o la ideología se centran en nuevos valores como la autonomía o la identidad. Pensadores como Touraine, Habermas, Melucci o Pizzorno analizan los cambios en la acción colectiva coincidiendo en señalar que las protestas se orientan cada vez menos al control político del Estado y más a la democratización de la sociedad. Touraine (1990) define a los nuevos movimientos sociales como conductas colectivas en lucha contra el poder dominante compuestas por tres elementos fundamentales: a) El principio de identidad, según el cual el actor se define por sí mismo, siendo consciente de su organización y práctica conjunta, b) el principio de oposición, referido a la capacidad del movimiento de nombrar a un adversario que surge en el conflicto, tomando conciencia de confrontar otras fuerzas. c) el principio de totalidad, entendido como la capacidad del movimiento para trascender al sistema histórico. Autores como Cohen y Arato (2000) analizan los

movimientos sociales desde una teoría social dual, según la cual los nuevos movimientos sociales a la vez que actúan sobre el terreno cultural, las normas y las instituciones, inciden en las estructuras económicas y políticas estatales. La acción de los movimientos sociales no necesariamente se orienta hacia el Estado ni a la consecución de beneficios económicos sino que prioriza la democratización de aspectos excluyentes de la sociedad. Cercana a esta línea de reflexión se cuenta lo propuesto por Offe (1996) para quien los movimientos sociales cuestionan “los límites de la política institucional” desdibujando la línea que separa los asuntos netamente “políticos” de los “privados” (como los temas morales por ejemplo). Se apunta así a la politización de las instituciones de la sociedad civil, tanto por vías contenciosas y formas simbólicas de protesta como por canales políticos representativos y burocráticos, impactando en el ejercicio de la autoridad política que se ve obligada a replantear sus viejos paradigmas de autoridad. El enfoque de los nuevos movimientos sociales incorpora elementos importantes a la reflexión, tales como el énfasis en la identidad, resaltando su potencial emancipador y el impacto en los componentes culturales y subjetivos de la sociedad. No obstante este enfoque tiende a tratar a los movimientos sociales como fenómenos unitarios en los que prima lo simbólico y el manejo de tecnologías de la información. Se sobredimensiona la búsqueda de lo “novedoso” en sociedades desarrolladas principalmente occidentales, dando por sentado que la acción de los movimientos se interesa más por cambiar sentidos comunes dominantes que por incursionar en el terreno de la representación. Se dejan de lado importantes procesos de acción colectiva que, como sucede en Latinoamérica, además de su contenido cultural e identitario, plantean reclamos de carácter distributivo e incursionan con gran protagonismo en la arena política. Es por ello que para la investigación rescataremos dos componentes de este enfoque, en primer lugar el énfasis colocado en la identidad de los movimientos sociales, y en segundo lugar, la atención prestada al impacto de los nuevos movimientos sociales en el terreno político y la democratización de las sociedades.

Tomando en cuenta los enfoques descritos, podemos entender a los movimientos sociales como formas de acción colectiva cuya razón de ser es la transformación de algún aspecto de la realidad. Siguiendo la definición de Tarrow los

movimientos sociales son “desafíos colectivos, planteados por personas que comparten objetivos comunes y organizan lazos de solidaridad en una interacción sostenida frente a las elites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1997). El poder de los movimientos se expresa en su capacidad de introducir contingencia en diferentes aspectos de la esfera pública y emana del desarrollo de una acción colectiva contenciosa, a través de la cual interpelan al orden imperante. Las formas contenciosas de acción colectiva al enlazar historias comunes, discursos cohesionadores, estructuras organizativas y liderazgos legitimados, dotan al movimiento de un alto potencial transformador. Asimismo, el desarrollo de la acción requiere que los objetivos comunes sean lo bastante significativos como para lograr que las personas involucren e incluso arriesguen sus vidas en torno a ellos; son “buenas razones” aceptadas por una comunidad y presentadas como posibles por líderes que explotan sentimientos previamente enraizados en la colectividad. Se fortalece así una identidad común sobre la cual se construye una base organizacional y se delinean las estrategias más adecuadas para lograr los fines, desafiando a adversarios que, como el Estado, cuentan con más recursos y oportunidades de contenerlos (Tarrow, 1997).

Para la investigación consideramos dos componentes constitutivos con capacidad explicativa para comprender la estrategia dual desplegada por el actor. Un primer componente es la identidad, que brinda un marco de reconocimiento a través del cual los sujetos se reconocen como actores sociales y politizan su vida cotidiana, identificando intereses comunes y un otro antagonista a quien enfrentar (Touraine, 1990). El segundo componente refiere a la organización del movimiento, pues la acción colectiva no puede explicarse sin tomar en cuenta cómo se movilizan recursos, cómo se constituyen y se mantienen las estructuras organizacionales y cómo se garantizan las funciones del liderazgo, dando solución a problemas de coordinación derivados de la conjunción de individualidades aparentemente disímiles. (Melucci, 1991). Tanto la identidad como la organización, son elementos centrales al momento de decidir las estrategias más adecuadas para el logro de objetivos que abarcan el desarrollo de formas contenciosas y la participación en el terreno político.

1.2. La identidad como elemento constitutivo

1.2.1 Acercamientos teóricos al estudio de la identidad colectiva

Definir la naturaleza de la identidad colectiva ha sido una preocupación permanente en las Ciencias Sociales, trabajada desde diferentes enfoques. Al respecto, Cerulo (1997) realiza un balance de las principales líneas de aproximación. De un lado reseña enfoques esencialistas que entienden la identidad colectiva como una cualidad intrínseca a cada miembro del grupo internalizada y unificada en la convivencia social, es el caso de la conciencia colectiva planteada por Durkheim o de la conciencia de clase anotada por Marx. De otro lado se cuentan los enfoques social constructivistas, desarrollados por teóricos como Peter Berger, Ervin Goffman o H. Becker, los cuales enfatizan el carácter procesual e interrelacional de la identidad, destacando el género, la raza y la clase social como las construcciones sociales identitarias más gravitantes en la vida social. Finalmente una tercera línea de estudio es el posmodernismo, entre cuyos exponentes destacan Foucault y Lyotard, basando su análisis en categorías deconstructivas que priorizan el análisis de la identidad a partir de la realidad cotidiana y las jerarquías de poder extendidas en la sociedad y expresadas en discursos generalmente en disputa.

Para Tilly (2006) los procesos de identificación colectiva implican un complejo trabajo de articulación y negociación, por el cual se activan mecanismos internos (cognitivos) y externos (relacionales). Al desarrollar una identidad común, los sujetos encuentran el sentido de la acción como algo propio y compartido, delimitando las fronteras del nosotros y articulando discursos sustentados en una serie de elementos simbólicos que dotan de mayor legitimidad a la acción. La identidad colectiva construida adquiere carácter político cuando refiere al gobierno o los partidos, interpelando a la esfera pública con sus planteamientos.

En el estudio de los movimientos sociales, la identidad colectiva ha sido trabajada desde distintas aproximaciones y con énfasis diferenciados. La teoría de movilización de recursos por ejemplo, al preguntarse qué lleva a individuos disímiles a comprometerse con la acción colectiva y desafiar los canales políticos convencionales, centra su respuesta en la existencia de intereses comunes que motivan el despliegue de los recursos necesarios para el logro de sus objetivos. La identidad colectiva se

construye en este proceso de identificación de intereses compartidos, acopio y movilización de recursos, pero no llega a ser una categoría central en tanto se halla mediada por la primacía de los intereses (Polleta y Jaspers, 2001). En la teoría de los nuevos movimientos sociales la identidad si adquiere mayor relevancia como base de la acción colectiva tal como se desarrolla líneas abajo.

En términos generales, podemos definir la identidad colectiva como una construcción social resultado de distintas condiciones históricas y de la interacción de diversas personas o grupos que brindan a los miembros de una colectividad los elementos para definir los límites de sí mismos y ser definidos por otros. Resaltamos dos enfoques teóricos del estudio de la identidad en los movimientos sociales: la teoría de los nuevos movimientos sociales y los estudios de “identity politics”⁷. Ambas vertientes nos brindan elementos para pensar un concepto de identidad acorde con un actor que, como es caso del movimiento cocalero, construye un nosotros lo suficientemente abierto como para asumir una estrategia dual que alterne movilización y representación, y lo bastante central como para incidir en el desarrollo del movimiento, desplegándose con distintos énfasis de acuerdo a las evaluaciones del colectivo.

Desde la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, Touraine plantea que, junto a la oposición y la totalidad, la identidad es uno de los tres elementos principales que definen a un movimiento social. El principio de identidad refiere al proceso por el cual el actor asume conciencia de su práctica y organización, así como de los otros que aparecen como adversarios a quienes interpelar. Los tres elementos se hayan intrínsecamente relacionados entre sí por lo que cada uno remite a los otros dos. Cuando el movimiento define los objetivos comunes, las demandas y cuestionamientos de las formas de control social vigentes que conforman su proyecto, los elementos de identidad, oposición y totalidad suelen relacionarse en tres niveles diferenciados: en el primero no están vinculados unos con otros, en el segundo se agrupan en pares y en el tercero los tres se vinculan en conjunto. Un proyecto de nivel elevado se caracteriza por una mayor integración de los tres elementos incrementándose significativamente las posibilidades de éxito de la acción colectiva, adquiriendo la identidad un fuerte peso

⁷ Puede agregarse un tercer enfoque que vincula la dimensión social y los aspectos psicológicos de la identidad, desarrollada por autores como J. Burke que no tomaremos en cuenta aquí.

ideológico (Touraine, 1990). No obstante, este fuerte enlace de los tres elementos puede resultar contraproducente. Por ejemplo, al momento de analizar dinámicas cambiantes en contextos de gran polarización es probable que el movimiento desarrolle más rápidamente el principio de oposición que el de totalidad, sin que esto implique desideologización o un proyecto de nivel poco elevado. Se corre el riesgo de soslayar el análisis, perdiendo de vista características de la constitución de la identidad del actor y de cómo se despliega durante la acción colectiva. Es por ello que antes que adherirnos a la propuesta toureniana, nos interesa rescatar el énfasis que coloca en el carácter relacional de la identidad vinculada a la capacidad de identificar adversarios comunes a quienes enfrentar en la protesta y en torno a los cuales articular estrategias de acción.

De otro lado, es importante para la investigación resaltar el carácter procesual de la formación de la identidad, en tanto no viene dada previamente a la constitución del movimiento ni resulta de la simple agregación de características e intereses individuales. La identidad se construye conforme los actores despliegan diferentes niveles de interacción, reconociendo historias comunes, negociando liderazgos y concretando niveles organizativos. Lo “colectivo” toma forma en el mismo proceso de acción, en tanto se integran significados y se logra consenso sobre las necesidades del movimiento y las estrategias más adecuadas para su consecución. En términos de Melucci “Sin la capacidad de identificación, el movimiento no podría percibir la injusticia como tal y no podría calcular los intercambios con la arena política” (Melucci, 1991: 339). El “nosotros” construido refiere no solo al reconocimiento de una condición compartida en términos de organización productiva (ser obrero, campesino, etc.) sino también a componentes simbólicos, culturales, condiciones históricas y cotidianas. Conforme la identidad se fortalece, se afirman solidaridades y los actores se reconocen parte de una unidad social, generándose adhesiones, ayudas mutuas y fusiones que afirman lazos de comunidad a la vez que orientan y dotan de sentido a las decisiones del movimiento.

Finalmente, dentro del enfoque de NMS, consideramos central para el estudio de la identidad del movimiento cocalero lo anotado por Pizzorno (1998) respecto a su dimensión dinámica y abierta. La identidad colectiva es abierta en la medida que se mantiene receptiva a diferentes cambios propios de su composición, orientación o contexto temporal. Cuando la identidad vigente se encuentra amenazada o desgastada,

la dimensión abierta permite que los sujetos, aun sin tener conciencia de ello, luchen por obtener otra o resignifiquen la existente pues la acción colectiva existe solo en base a una identidad. Tal proceso de cambio refiere a variaciones en las subjetividades compartidas que llevan a repensar la lealtad al grupo. La lealtad se afirma no solo en el reconocimiento de intereses comunes sino en la situación de compartir condiciones de vida que involucran ocupaciones, sensibilidades, aspectos culturales y la posibilidad de gozar beneficios colectivos. Estos elementos permiten a los individuos afrontar los diversos grados de incertidumbre que implica la acción colectiva y que escapan al cálculo racional pues es imposible tener elementos de evaluación para todas las variables inmersas en los momentos de la acción. La identidad abierta que propone Pizzorno se sostiene en lazos cambiantes por los cuales los diferentes yos intertemporales brindan los marcos necesarios para afrontar la contingencia.

Otra vertiente que estudia la identidad en la acción colectiva es la denominada Políticas de la identidad (“identity politics”) según la cual el reconocimiento de ciertas características compartidas, constituye uno de los ejes principales que operan cuando los movimientos sociales incursionan en la esfera pública. En tal sentido F. Polleta y J. Jaspers cuestionan el énfasis excesivo que las teorías de elección racional, ponen en los intereses como eje de la acción colectiva. Por el contrario, los autores destacan el rol que juega la identidad en las diferentes fases del desarrollo del movimiento social confiriendo a la acción un carácter expresivo que puede motivar nuevas adhesiones entre quienes comparten o se sienten identificados con las características del grupo impulsor.

(La identidad) es una conexión cognitiva moral y emocional entre el individuo y la comunidad, grupo o institución. Es una percepción compartida de una posición o relación que puede ser imaginada antes que experimentada directamente, y es distinta de la identidad personal aunque pueda formar parte de esta. La identidad colectiva se expresa en aspectos culturales – narrativas, símbolos, rituales, etc.- no se centra en cálculos racionales de elección de beneficios y permite el desarrollo de sentimientos positivos hacia los miembros del grupo (Polleta y Jaspers, 2001: 285).

Esta línea de aproximación destaca el rol de la identidad en cuatro fases de la protesta. En primer lugar, la identidad juega un rol importante cuando emerge el movimiento, se crean demandas colectivas y se concretan formas de organización. Según los enfoques de elección racional, ante la falta de canales políticos convencionales o ante momentos políticos considerados oportunos, la primacía de intereses comunes permite a los sujetos

articularse. La política de identidad plantea que intereses e identidades van enlazados entre sí desde el momento mismo de formación del movimiento pues al decidir iniciar la acción colectiva, los individuos ya comparten un mínimo de historicidad, de elementos culturales, de condiciones económicas (campesinos, obreros, consumidores, etc.) de género u opción sexual, que son la base para consensuar intereses y exigir su concreción. En un segundo momento, cuando el movimiento busca reclutar nuevos miembros, la identidad también cumple un rol importante en términos de generación de nuevas lealtades que impulsen la movilización. Tales lealtades comprenden conexiones emocionales y orientaciones racionales, que actúan como marcos de interpretación y permiten procesar las satisfacciones no solo en términos de consecución de beneficios personales sino también en el reconocimiento de avances colectivos. Los movimientos tienen capacidad para inventar nuevas identidades y conectarlas con otras expresiones ya existentes, de modo que los nuevos miembros encuentren vínculos comunicantes y estrechen lazos de solidaridad. En una tercera fase, al momento de decidir las estrategias a desarrollar, la identidad juega un rol importante en tanto puede expresarse como una demanda en sí exigiendo respeto a una identidad que ha sido sucesivamente subordinada (como sucede con los grupos étnicos por ejemplo). Se rechaza así la supuesta oposición entre la identidad como lo expresivo y lo estratégico como lo instrumental, en tanto existen identificaciones y elementos que conciernen a ambas esferas. En un cuarto momento, la identidad repercute también en los resultados ya sea que estos se manifiesten como cambios en las reglas de juego o como ampliación de marcos de reconocimiento simbólico, como sucede por ejemplo al promulgarse leyes favorables a la identidad del movimiento homosexual.

Finalmente, creemos importante tener en cuenta la línea de análisis sobre los “usos estratégicos de la identidad” es decir las formas en que esta puede ser “puesta en escena” según el movimiento lo considere adecuado o no para sus demandas. La identidad puede ser desplegada como una forma de acción estratégica colectiva, enfatizando en determinados componentes al mismo tiempo que puede suprimir o minimizar otros. Asumir que los actores pueden realizar un uso estratégico de la identidad implica dejar de lado visiones esencialistas que, sin caer en un reduccionismo de optimización de las probabilidades de éxito, reconocen la capacidad del movimiento

para constituir un nosotros más acorde con lo que quiere ser y cuándo quiere serlo. Como plantea Mary Berstain, la identidad no es estática y puede ser desplegada a nivel colectivo como parte de una estrategia política. La autora plantea tres usos estratégicos de la identidad que consideramos extensibles a nuestra investigación: a) la identidad puede ser usada para el empoderamiento interno del movimiento, siendo crucial el papel jugado por los líderes para generar compromisos y presentar la necesidad de mantenerse cohesionados b) La identidad puede ser desplegada para ganar posiciones políticas, sobre todo en actores estigmatizados para quienes afirmar una identidad en el espacio público resulta una meta en si. c) La identidad puede ser utilizada dentro de las estrategias, en tanto es a partir del énfasis en los rasgos identitarios que el movimiento cuestiona determinado consensos a la vez que alecciona a la sociedad sobre sus particularidades (Berstein, 1997).

1.2.2 Principales componentes de la identidad colectiva

La vivencia de una historicidad común y la construcción de un discurso compartido son dos ejes centrales para entender la composición de la identidad de un movimiento social. De seguro pueden existir o enfatizar en otros componentes pero pensamos que los elementos mencionados son los más apropiados para entender la constitución de la identidad en el movimiento cocalero y su importancia al decidir mantener una dualidad estratégica e incursionar en la arena política.

Entendemos la historicidad como una condición compartida de reconocimiento, apropiación y manifestación de una serie de procesos espacio temporales que anteceden al movimiento social. La construcción de una identidad colectiva no se desarrolla espontáneamente en cualquier situación, si no que va anclada a eventos y episodios precedentes que inciden en la vida de los actores y las formas de entender su cotidianidad, sus demandas sociales y procesos organizativos. Como afirma Sommers (1994), la constitución y desarrollo de los movimientos sociales presenta necesariamente un sedimento histórico sobre el cual se desarrollan las interacciones y se tejen identificaciones de solidaridades y antagonismos inscritos en procesos de disputas por el poder. No hay una historia universal ni un único agente histórico, sino que cada colectividad es susceptible de desarrollar historicidad, en base a componentes de raza,

género, clase social y las distintas formas en que se distribuye el poder. Atender a los hechos históricos que preceden y enmarcan a un movimiento social, permite conocer y entender mejor la relación entre las distintas partes implicadas, las causas de la acción, la apropiación selectiva que los actores sociales hacen de estos hechos y las relaciones entre secuencias de temporalidad y lugares en los que se sucede la historia y se conecta al presente. La historicidad no solo refiere a hechos en tanto acontecimientos del pasado susceptibles de registrar y conocer, tiene que ver también con las narrativas construidas respecto al mismo y que abarcan desde historias amplias y de larga duración, hasta otras más bien locales relacionadas con la cotidianeidad de los individuos. Las grandes narrativas no necesariamente se plantean en el sentido de discursos totalizantes y multiabarcadores, en los que la comprensión de los hechos se asume de forma absoluta desde un supuesto carácter científico. Las entendemos más bien en su dimensión amplia como marcos de referencia que nos hablan de procesos estructurales en los cuales pueden reconocerse historias individuales o de carácter local. Muchos de estos hechos pueden referirse a “dramas épicos” elaborados teóricamente, como puede ser la lucha del capitalismo versus el comunismo, mientras otros se articulan más bien a nivel social como pueden ser la lucha de los incas contra los españoles. Junto a estas grandes narrativas se cuentan las historias locales, ubicadas dentro de las denominadas “micro historias” que enfatizan en las racionalidades y las estrategias puestas en práctica por las comunidades, las familias y/o los individuos, revelando aspectos del grupo invisibilizados por las generalizaciones (Revel, 1996). Las historias locales nos hablan de la vida común de la gente y el impacto que sufre a partir de los cambios estructurales y los procesos históricos nacionales. Episodios que para una localidad carecen de importancia en otra resultan significativos, marcando decisivamente la identidad del actor en tanto refiere directamente a vivencias compartidas por los miembros del movimiento o sus antepasados.

En cuanto al discurso como eje estructurante de la identidad colectiva, en términos de Foucault éste se define como una producción social, controlada, seleccionada y distribuida a través de procedimientos que tienen por función otorgar explicaciones pero también dominar acontecimientos reduciendo la contingencia. El discurso excluye y enfatiza, deja fuera significantes y manifestaciones, inscribiéndose en diversas luchas de poder que enfrentan al actor y lo posicionan frente a determinados

enunciados “El discurso no es solo aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino también aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse” (Foucault, 1973: 15). Una de las principales características del discurso es la “voluntad de verdad” entendida como la capacidad de convencimiento y de auto convencimiento que dota al actor social de la certeza de estar diciendo y haciendo cosas justas y dignas de disputarse. Dicha voluntad refiere tanto a los objetivos comunes como a los saberes y aspectos culturales que identifican al grupo y que se enmarcan en procesos de búsqueda de legitimidad. Así mismo, los discursos no son estáticos ni neutrales; pueden ser levantados, omitidos o instrumentalizados en relación a determinados fines o conseguir hegemonía en un determinado espacio social. En términos de Laclau “la hegemonía es una forma de la política que se desarrolla en un campo social abierto en el cual algunos cambios solo pueden ser resultado de articulaciones que buscan concentrar el poder o resistirse al mismo” (Laclau, 1985: 39).

Un discurso consigue una posición hegemónica en el momento en que las diversas prácticas articuladoras que lo componen se enfrentan a otras antagónicas consiguiendo el reconocimiento de las equivalencias que lo caracterizan. La presencia de fuerzas antagónicas que operan como elementos de contradicción y la persistencia de límites de significado manifiestos en consensos que se busca romper, son elementos centrales en la lucha por conseguir hegemonía; disputa que implica básicamente superar las oposiciones y sostener la centralidad de otras formas de entender determinados aspectos de la realidad social. Conviene también resaltar lo planteado por Sommers respecto a la sedimentación espacial y temporal del discurso pues a la vez que nos habla del presente, discurre por cauces narrativos precedentes cuyo contenido ontológico le brinda un carácter trascendental permitiendo a los actores conectar diversos episodios en los que reconocerse. Los discursos brindan también a los actores criterios evaluativos que “permiten hacer distinciones cualitativas de léxico y lenguaje sobre una gran variedad de eventos, experiencias, caracteres, institucionales y factores sociales” (Sommers, 1994) Al construirse la identidad, se articulan discursos que adquieren un carácter público en tanto se vinculan a formaciones culturales e institucionales que trascienden las individualidades, como es el caso del discurso de la movilidad social, o el de la clase obrera. En suma, historicidad y discurso confluyen moldeando una

identidad compartida que es ante todo una construcción procesual, relacional, de carácter abierto e importancia transversal en las distintas fases de desarrollo del movimiento.

1.3 La Organización en los movimientos sociales

1.3.1 Estructuras organizacionales y repertorios de protesta

Junto a la identidad colectiva, las formas organizacionales son un eje constitutivo del movimiento social que incide significativamente en el despliegue de la estrategia dual. La forma en que un movimiento se organiza, los canales de coordinación que establece o el tipo de acción que prioriza, son elementos importantes que inciden en la definición de las estrategias y su puesta en práctica orientando el despliegue del nosotros construido. En líneas generales, la organización del movimiento social puede definirse como el subsistema de ordenamiento interno a través del cual el grupo viabiliza la acción colectiva dando solución a problemas de coordinación que se derivan de la conjunción de individualidades aparentemente disímiles. La definición de un andamiaje organizacional permite estructurar, distribuir y asumir una serie de compromisos y responsabilidades, basándose para ello en normas y reglas de conducta compartidas de carácter mayoritariamente informal que facilitan la interacción.

La teoría de la movilización de recursos destaca el vínculo existente entre los objetivos del movimiento y las formas organizacionales que adopta, debiendo entenderse sus logros a la luz de las adhesiones, liderazgos y compromisos que se generan. Para Zald y Mc Carthy (1997), analizar la estructura organizacional implica tener en cuenta la “cultura organizacional” dominante en el país así como los patrones históricos de movilización en los que éstas se enmarcan y que impactan decisivamente en el tipo de organización que asumirá el movimiento. De otro lado, la organización del movimiento da cuenta de un sistema de acción que se asocia a orientaciones y significados plurales, donde la acción colectiva se construye gracias a una inversión organizativa resultado de una combinación de elementos internos y externos. Así, el movimiento genera estructuras organizativas en correspondencia a definiciones identitarias pero también en relación al contexto en que se desenvuelve. Actualmente, los cambios producidos por la globalización hacen que las formas organizativas sean más variadas y flexibles. Las

redes son las formas más usuales de articulación, agilizando el intercambio entre los distintos miembros del grupo a la vez que facilitan el acercamiento con otros actores externos. Si bien estas redes son más frecuentes en las sociedades occidentales en general las organizaciones se hacen más fluidas y se atenúa la rigidez sindical y su sustento ideológico, a la vez que los distintos niveles de articulación (local, nacional etc.) consiguen mayores márgenes de autonomía (Melucci, 1999) La consolidación de las formas organizativas permite mantener la acción colectiva, sosteniendo con cierta constancia el desafío lanzado a los antagonistas. Una organización capaz de oponer resistencia debe desarrollar liderazgos legitimados y estructuras consolidadas lo suficientemente vinculantes como para superar egoísmos personales y la represión del Estado. Más importante que el tamaño del grupo es su capacidad de organizarse generando acciones disruptivas, que confrontan los marcos de sentido dominante y refuerzan los nuevos sentidos que el movimiento pretende posicionar; es el caso de las protestas no violentas en la lucha por los derechos civiles en Norteamérica de los 60 (Tilly, 2006).

Junto a las formas organizacionales es fundamental estudiar lo que Tarrow denomina “repertorios de protesta”, un concepto estructural y cultural a la vez que nos habla de “aquello que la gente hace cuando entra en conflicto con otros, lo que sabe hacer y lo que los otros esperan que haga” (Tarrow, 1997: 66). Los elementos del repertorio abarcan tanto las habilidades de los miembros de una población como sus formas culturales, pueden cambiar en el tiempo pero permanecen elementos centrales que se reconfiguran a la luz de las nuevas identidades emergentes. Los repertorios de protesta son susceptibles de ser utilizados por una diversidad de agentes sociales para alcanzar diversos objetivos, adquiriendo un carácter modular que permite su constante apropiación y transformación. Los viejos repertorios y los nuevos no se presentan aislados unos de otros, sino que conviven entre sí y son apropiados por los movimientos sociales según evalúan su efectividad y potencial en el marco de los discursos y estrategias definidas. El repertorio tradicional se transforma dando lugar a uno distinto,

que sin perder la ligazón con el antiguo, se presenta mas acorde con los nuevos sentidos que se disputan en la acción colectiva⁸.

Vale resaltar por último que el desarrollo organizacional del movimiento se halla en función de factores internos y externos. En el ámbito de los factores internos se cuentan las dinámicas de organización al interior del grupo, las mismas que generalmente van relacionadas con sus orientaciones políticas y sus bases económicas. La estructura interna incide significativamente en las estrategias y tácticas elegidas por ejemplo al momento de decidir si se negocia o no con otros actores como los partidos políticos. H. Kriesi (1996) señala dos elementos a tener en cuenta al momento de analizar el desarrollo organizacional del movimiento a) La *formalización* de la organización en tanto la constitución formal de una estructura de funciones debidamente reconocida (Junta Directiva), el status legal que posee (inscrita en Registros locales, nacionales, etc.) la afiliación y compromisos de los miembros. b) La *profesionalización* al interior del movimiento, relacionada con el número de líderes que puede financiar la organización y el personal que recibe algún tipo de remuneración de la misma (asesores legales, contadores, etc.) No necesariamente el movimiento más fuerte es el más profesional pero este factor nos da una idea de los recursos que se agencia el movimiento y de cómo los va utilizando. En el caso cocalero nos interesa analizar los procesos de formalización y profesionalización de la Confederación Cocalera (CONPACC) y cómo esto incide en la dualidad estratégica definida.

1.3.2 El sector de movimientos sociales

La construcción de los movimientos sociales y su dinámica de acción no se da en escenarios vacíos; junto a ellos actúan otros movimientos sociales, con identidades y reivindicaciones distintas pero con referentes de interlocución similares como pueden ser el Estado o los grupos de poder. A esta confluencia de organizaciones se le denomina el “sector de los movimientos sociales” (SMS) y es definido aquí como la configuración de grupos que optan por la acción colectiva contenciosa contra un otro antagonista con

⁸ En el movimiento campesino peruano por ejemplo, las ocupaciones de tierras y los paros agrarios forman parte de un repertorio de protesta tradicional que deja de tener relevancia con la Reforma Agraria de 1972. Al entregarse las tierras en manos de los terratenientes (“hacendados”) a los campesinos, estas ya no pueden ser ocupadas, por lo que el movimiento cocalero va a adoptar y transformar este repertorio incorporando nuevas prácticas como el cierre de carreteras.

el fin de conseguir objetivos comunes. (Tarrow, 1997). Otros autores como Zald y Garner enfatizan más bien la composición del SMS definiéndolo como el conjunto de las diferentes organizaciones antagónicas, competitivas o cooperativas que forman parte de una estructura de acción más amplia y cuya configuración se refiere a redes, relaciones y objetivos de acción medianamente coincidentes (Zald y Garner, 1985).

En esta investigación optamos por definir al SMS de acuerdo a su composición, pues discutir sobre el carácter contencioso o convencional de la acción nos remitiría nuevamente a la oposición partidos y movimientos que se pretende problematizar. (Tavera, 2007) Al momento de analizar el SMS debe tenerse en cuenta que se encuentra sujeto a “restricciones sistémicas” o características del entorno que moldean y limitan sus posibilidades de acción, entre las que destaca la naturaleza del sistema político, particularmente el Estado y los partidos. (Zald y Garner, 1985) Así mismo, su composición se halla en constante cambio variando sus límites de acuerdo al contexto político y territorial en que se desenvuelven. A nivel de un país la composición del SMS abarca las distintas organizaciones de alcance nacional, mientras que a nivel subnacional se limita a las organizaciones que interactúan en un ámbito local. Varía también el énfasis de las interacciones al interior del SMS pues existen coyunturas críticas en que la coordinación es mayor como puede suceder en situaciones autoritarias donde las protestas se articulan con mayor intensidad. En tal sentido es importante lo que señala Everett (1992) respecto a la fuerza de las coordinaciones y los compromisos que implican, pues cambios en los repertorios de protesta de determinado grupo pueden alterar las interacciones en el SMS; si algunos grupos se radicalizan y optan por métodos violentos es muy probable que otras organizaciones se alejen y prefieran no asumir esos riesgos. Así mismo, dentro del sector de SMS pueden producirse fricciones y crisis generalizadas, como sucede por ejemplo en Latinoamérica con el movimiento sindical y las dificultades para articularse e interactuar con los nuevos movimientos que surgen en escena post período de ajuste estructural en la década del '90.

Para analizar la dinámica y configuración del SMS resultan de importancia dos indicadores relacionados con el contexto político; la identificación partidaria de los miembros de base de las distintas organizaciones y las alianzas que concretan entre los grupos que componen el sector. (Kriesi, 1996) Respecto a las preferencias partidarias de

los activistas, suele darse por sentado que estos se inclinan a la izquierda, aunque no necesariamente sea así influenciando mucho el nivel de ideologización del movimiento y los discursos que comparten las organizaciones sociales con los partidos. Las afinidades partidistas predominantes en las bases y expresadas en el voto, brindan luces respecto a la conexión entre los partidos políticos y los movimientos sociales y sus formas de participar en la arena política. De otro lado, las alianzas entre organizaciones sociales refieren a las relaciones y acuerdos más o menos estables que los diversos grupos concretan en determinadas coyunturas, como puede ser el caso de las luchas contra regímenes autoritarios en que confluyen iglesias, sindicatos, federaciones de estudiantes etc. Las alianzas pueden diversificarse mucho proveyendo al movimiento de mayores elementos para fijar sus horizontes y lograr solidaridades decisivas al momento de la protesta. Como desarrollaremos, para el caso cocalero, la debilidad del Sector de Movimientos Sociales hace que no sea un referente importante al momento de plantear las estrategias y desarrollar la acción colectiva. No en todas las sociedades se logra articular un sector de movimientos sociales y de existir estos pueden variar de una sociedad a otra. Lo importante es identificar que más allá de las características individuales de cada grupo, estos a su vez se desenvuelven en una serie de redes institucionales y en comunidades de sentido más amplias, coincidiendo en algunos comportamientos, demandas y repertorios de protesta.

2. Movimientos sociales y entorno político: Estructura de Oportunidad Política

2.1 Estructura de oportunidad política: Principales dimensiones

Junto a los elementos constitutivos aquí explicados, la construcción del movimiento social y la definición de sus principales estrategias refieren a factores externos relacionados con el contexto político. Para dar cuenta de dichos elementos del entorno que favorecen o limitan las posibilidades de la acción colectiva, el enfoque de las oportunidades políticas resulta de gran pertinencia, en tanto nos permite identificar los principales procesos políticos y sociales que influyen en la dinámica del movimiento.

En términos de Tarrow las estructuras de oportunidad política (EOP) se definen como “señales consistentes del entorno político que inciden sobre los movimientos sociales favoreciendo o limitando su acción, impactando en sus recursos y capacidades” (Tarrow, 2006: 42). En el mismo sentido Mc Adam, concibe a la EOP como el grado de probabilidad de que los actores sociales puedan lograr mejores condiciones para sus demandas, de modo que una mayor apertura facilita el logro de resultados. (Mc Adam, 2006) Ambas definiciones refieren a determinadas situaciones políticas y/o sociales que abren o cierran posibilidades para el movimiento, incidiendo en sus evaluaciones, alianzas, repertorios de protesta y elecciones estratégicas. La estructura de oportunidad política permite conectar procesos internos del movimiento a fenómenos políticos y sociales del entorno en los cuales discurre la acción, dejando en claro que el actor no opera en una realidad estática, pues el cambio o la permanencia de determinados aspectos van a tener algún efecto sobre su acción. Se trata además de un proceso recíproco en tanto, a la vez que el movimiento recibe los impactos del entorno, puede también transformar determinados aspectos del sistema. La EOP opera así como una variable dependiente, que no sólo explica sino que también puede ser explicada por la incidencia de los movimientos en las reformas institucionales o en la composición de las alianzas políticas (Mc Adam, 1996)

Un punto central al momento de analizar la estructura de oportunidad política es delimitar las dimensiones que este concepto abarca diferenciándolo de otras condiciones catalizadoras. Al respecto, Mc Adam delimita cuatro dimensiones a) el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado, referido al carácter del marco legislativo y el andamiaje institucional b) La estabilidad o inestabilidad de las correlaciones entre las élites que ejercen influencia en el estado, c) La presencia o ausencia de alianzas entre el movimiento y las élites de modo que el actor social establezca redes de influencia conectadas al poder d) Capacidad y propensión del estado a la represión. Si bien en los tres primeros puntos existe amplio consenso, en el cuarto no lo hay, pues para autores como della Porta (1996) el impacto de la represión estatal no sería más que la *expresión* de la receptividad o vulnerabilidad del movimiento a la EOP. Mc Adam cuestiona esta propuesta argumentando que ‘ver a los sistemas de represión como un aspecto meramente expresivo de otros rasgos de la política o como herramientas de

intereses políticos específicos, equivale a negar la naturaleza impredecible de la represión y el complejo proceso social que estructura este tipo de operaciones” (Mc Adam, 1996: 57) . Para el caso de estudio, asumimos dicho argumento, pues la represión estatal si resulta una dimensión importante en las estructuras de oportunidad política más relevantes para el movimiento cocalero. En la medida que el Estado peruano otorga a la problemática de la hoja de coca un carácter social - delictivo, las acciones orientadas a su tratamiento implican tanto acciones de desarrollo agrario como acciones de represión directa en las que intervienen la policía nacional y el poder judicial. El mayor o menor énfasis que el gobierno coloque en los aspectos represivos del problema cocalero incide directamente en las posibilidades del movimiento para organizar la protesta y posteriormente desplegar una estrategia dual.

En la misma línea, resulta importante tener en cuenta lo anotado por della Porta respecto a las políticas públicas implementadas por el Estado para enfrentar la protesta, las mismas que operan a la vez como un buen indicador del efecto de la acción estatal en la dinámica del movimiento, sus repertorios y resultados (Della Porta, 1996). Las políticas públicas desarrolladas frente a la protesta refieren a los mecanismos y normas por los cuales el Estado legitima la “ley y el orden”, ordenando su aparato coercitivo en base al cuerpo de represión policial que dispone y a mecanismos legales orientados a penalizar las transgresiones a la norma. En el despliegue de estas políticas las interacciones entre el Estado y los movimientos sociales dan lugar a procesos de respuesta, adaptación e innovación interdependiente por lo que:

(...) Atender las políticas públicas permite en primer lugar analizar las interacciones entre el movimiento social y el entorno evidenciando la forma en que el Estado responde a la protesta. En segundo lugar, nos muestra como las tácticas policiales y la protesta se adaptan una a la otra en procesos de reciproca influencia, innovación y adaptación (Della Porta, 1996: 65)

De esta forma por ejemplo, ante una política estatal fuertemente represiva de agresión policial directa a las movilizaciones, los movimientos sociales pueden optar por asumir repertorios de protesta que privilegien actos simbólicos o de desobediencia civil. Las modalidades de política pública frente a la protesta varían de un contexto a otro según la importancia del sector de movimientos sociales, la composición de las elites y el carácter del régimen. Para della Porta son dos los extremos en estas políticas: el control tolerante y el endurecimiento represivo. Dentro de estos dos polos cambia la conjugación de tres

indicadores básicos: la selectividad de la represión policial (masiva o individualizada), el tiempo de intervención legal (inmediato o tardío) y el carácter de los procedimientos legales (garantista o restrictivo). Un nivel de represión masiva, de intervención inmediata y sustentada en marcos legales restrictivos sería un caso grave de endurecimiento represivo con los que un movimiento debería lidiar. (Della Porta, 1996)

Por último, resulta pertinente para el análisis de la EOP tener en cuenta lo que señala Tilly (2005) sobre la relación entre identidad colectiva y estructura de oportunidad política. Determinados cambios suscitados en la EOP pueden impactar en la constitución identitaria del movimiento, a la vez de incidir en la decisión de sus miembros sobre sumarse o no a las protestas. Un cambio muy radical de la estructura de oportunidad afecta la identidad del grupo marcando nuevos realineamientos en su interior; en el caso de un golpe de estado o una represión muy violenta un actor social de identidad dialogante y más bien pacífica puede asumir un carácter fuertemente confrontacional. Las respuestas del Estado a determinados acontecimientos políticos también activan nuevos límites alrededor de las identidades colectivas, tal como sucedió en los Estados Unidos tras el atentado del 11 de setiembre del 2002, que implicó que el discurso gubernamental trazara una línea divisoria entre patriotas y terroristas, forzando a diversos grupos a ubicarse en alguno de estos dos polos.

En suma definimos la EOP como condiciones del entorno sociopolítico que ofrecen al movimiento señales sobre la probabilidad de que las estrategias y acciones a desarrollar tengan un mayor o menor éxito. Dichas condiciones son dinámicas, cambiando según se produzcan nuevos realineamientos de las élites, se concreten rediseños institucionales y también según los movimientos sociales logren una incidencia efectiva en la esfera pública. En la identificación de las principales estructuras de oportunidad vinculadas al movimiento cocalero resultan centrales las dimensiones referidas al grado de apertura institucional, las alianzas con las élites y la capacidad de represión estatal. Tomar en cuenta la represión estatal implica a su vez abordar el diseño de políticas públicas implementadas por el Estado para hacer frente a las protestas. En el caso peruano este factor adquiere importancia en tanto el gobierno autoritario de Fujimori sustentó mucho de su poder en la presencia descentralizada de los aparatos represivos, situación que varía con la transición democrática y abre un nuevo ciclo de

protesta. Finalmente, tomamos en cuenta el impacto que la EOP tiene en los enmarcamientos discursivos presentes en la identidad de los actores, pues determinadas condiciones del entorno pueden ser vistas como más favorables para enfatizar en determinados componentes del discurso y silenciar otros. Vale tener en cuenta también que en el tema cocalero el grado de apertura de la EOP varía a nivel subnacional, nacional e internacional, articulando tres dimensiones territoriales que deben ser analizadas en su especificidad.

2.1.1 Estructura de oportunidad política nacional

Atender a las estructuras de oportunidad más relevantes para la dinámica del movimiento implica tener en cuenta el carácter territorial que abarca la misma y las distintas implicancias que adquiere según la distribución del poder y la posición del movimiento al interior de un país. En tanto la gran mayoría de los procesos de movilización social tiene aún como referente principal a los estados nación, es conveniente reparar en los dos niveles de análisis reseñados por Tarrow (1996): uno en el carácter seccional subnacional que adquiere la EOP en las distintas jurisdicciones (provinciales, distritales, etc.) donde el movimiento tiene presencia, y dos en las dinámicas específicas del grupo frente a las instituciones descentralizadas. La forma en que se vinculan las EOP y los movimientos sociales genera una red de regularidades institucionales que a nivel subnacional generan distintas oportunidades y ritmos distintos en los ciclos de protesta. Un movimiento con amplia distribución nacional puede generar reacciones distintas de las élites de poder regional o local, demandando a la vez un trato particular por parte del Estado. Las distintas interacciones establecidas entre las élites locales, el gobierno y el movimiento, inciden en el grado de apertura o el cierre de la oportunidad política.

Las variaciones subnacionales de la EOP y su impacto en los movimientos no son simple reflejo de dinámicas nacionales. Algunas estructuras de oportunidad son claramente más favorables al movimiento a nivel local, lo mismo que el comportamiento de las élites políticas puede obstruir la acción colectiva según el carácter, las demandas y los intereses socioeconómicos en juego. El hecho de que el movimiento cuente con el apoyo de determinados grupos de poder local puede brindar mayor respaldo a sus

demandas posicionándolos mejor frente al gobierno central. En sentido inverso, las elites nacionales pueden apoyar al movimiento para contrarrestar el poder de determinadas elites locales cuyo poder resulta incómodo u obsoleto para los proyectos de los grupos nacionales dominantes⁹ (Tarrow, 1996). Los ciclos de protesta también se ven afectados por la dimensión subnacional de la EOP, pues generalmente en el ámbito regional, provincial o distrital las instituciones y los partidos políticos tienen metas distintas y una capacidad de reacción más lenta y menos eficaz. Aunque en el ciclo de protesta declinan las acciones de impacto nacional, en los ámbitos locales puede continuar un período más prolongado requiriendo de otros procesos de negociación y decisión del movimiento. Tal situación tiene que ver además con los impactos diferenciados en la aplicación de las políticas públicas frente a la protesta a nivel nacional y sub nacional. Como señala della Porta, una política muy utilizada es la represión policial a movilizaciones de carácter nacional junto a procesos de negociación localizados a nivel estatal o regional, consiguiéndose beneficios parciales que pueden impactar en la cohesión del movimiento y la coordinación de actividades a futuro.

Para el caso de estudio tomamos en cuenta dos grandes EOP con implicancias directas en la estrategia del movimiento cocalero y distintas repercusiones a nivel subnacional en los valles de producción. Nos referimos en primer término a la crisis del régimen autoritario de Fujimori, que implica el resquebrajamiento del aparato represivo y clientelar montado con especial énfasis en las zonas cocaleras favoreciendo la organización de los campesinos y el desarrollo de las protestas. En segundo lugar, nos referimos a la transición democrática que sucede a la caída de Fujimori y que trae consigo una serie de reformas legislativas e institucionales que favorecen la participación electoral de los movimientos sociales e impactan en las posturas de los partidos políticos frente a estrechar vínculos con los mismos. En ambas situaciones el entorno internacional cumple un rol importante incentivando las reformas institucionales pero a la vez presionando por un tratamiento represivo al movimiento.

⁹ Como bien señala Tarrow, haciendo referencia a lo reseñado por el historiador Eric Hosbwn, en las luchas campesinas en el Perú entre 1950 y 1970 acciones del movimiento como las ocupaciones de tierras lograron la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, en buena parte por que contaron con el apoyo de las elites nacionales. Para la década del '70 el sector que asume el gobierno del país se oponía al poder de las élites locales, encabezadas por terratenientes (hacendados) que heredaron las tierras desde la colonia trabajándolas con métodos semi feudales que impedían el desarrollo de un proyecto capitalista de modernización del campo serrano (Tarrow, 2006)

2.1.2 Estructura de oportunidad política internacional

Si bien la gran mayoría de estudios sobre las oportunidades políticas se han centrado en los ámbitos de la política nacional, es innegable el papel fundamental que desempeñan las tendencias y sucesos internacionales a la hora de definir políticas estatales y alineaciones internas (Mc Adam, 1996). Fenómenos como la globalización, el desarrollo de las comunicaciones y la creciente importancia de los organismos multinacionales, refuerzan la importancia de las condiciones exteriores en el curso de la acción colectiva y las posibilidades del movimiento de concretar sus demandas. De este modo, la presión política internacional puede incidir de forma notable en la apertura o cierre de una oportunidad política, pues como sucede durante la guerra fría, la competencia con el bloque soviético favoreció la lucha por los derechos civiles en USA dañando la estrategia política y las correlaciones sobre las que se basaba la política racial y que eran utilizados por los soviéticos como propaganda contra el modelo norteamericano (Layton, 1995). En el mismo sentido puede leerse el triunfo sandinista en Nicaragua donde la retirada de ayuda militar de Estados Unidos al régimen de Somoza resquebrajó más aún su dictadura en el marco de una política global de respeto a los derechos humanos promovida por el entonces presidente Carter (Mc Adam, 1996).

De otro lado, Tarrow llama la atención sobre lo que denomina “movimientos transnacionales” refiriéndose a los movimientos que se articulan como redes globales, trascendiendo con su acción las fronteras nacionales e influyendo en la apertura de determinada EOP. Apoyados en innovaciones tecnológicas como el Internet, ciudadanos en lugares disímiles y alejados del planeta pueden intercambiar información y coordinar actividades permitiendo que determinados sucesos sean conocidos y denunciados rápidamente. Surgen así nuevas formas de acción colectiva donde se cruzan fronteras de colaboración y se emprenden campañas transnacionales de grandes repercusiones mediáticas. Es el caso por ejemplo de Greenpeace o el de Amnistía Internacional cuya estructura orgánica abarca diferentes países y sus acciones se basan en mecanismos de enlace y denuncia que interpelan a la comunidad internacional. En el mismo sentido resulta sumamente importante para los movimientos articular redes de solidaridad internacional capaces de ejercer presión sobre los gobiernos nacionales para dar lugar a la apertura de una nueva EOP favorable a sus plataformas. En el caso de las dictaduras

del cono sur en la década de los '70 por ejemplo, el movimiento de derechos humanos logró tejer importantes redes y solidaridades internacionales sobre todo entre los gobiernos socialdemócratas en España y Francia que cumplieron un papel significativo en los procesos de transición democrática de los '80 (Tarrow, 1996).

Para el caso cocalero, tener en cuenta la EOP internacional resulta fundamental en la medida que la política del estado peruano sobre la producción de coca responde directamente a mandatos internacionales de la ONU y a las posturas de los Estados Unidos, principal consumidor de cocaína y fuente de recursos para la lucha contra las drogas en los países andinos. La legislación nacional peruana sobre la hoja de coca se enmarca en los dictámenes de la Convención de estupefacientes prohibidos de la ONU emitido en 1949 que penalizó el cultivo y comercialización de la hoja.¹⁰ Asimismo los Estados Unidos, al ser la principal fuente de recursos para el financiamiento de las políticas sobre la coca en el Perú, definen el destino de los gastos, determinando un mayor énfasis en programas de desarrollo agrario o en operativos represivos. Finalmente, es central para el movimiento cocalero peruano la influencia que ejerce la experiencia organizativa de los cocaleros en Bolivia, principalmente el éxito que logra al participar de la arena electoral, al punto que el líder cocalero Evo Morales asume como presidente de la república.

En suma, basamos el estudio de la construcción de los movimientos sociales en elementos internos y externos que al interactuar orientan sus principales estrategias. Tanto la identidad, con sus componentes históricos y discursivos, como las formas organizativas y el peso de los liderazgos, operan sobre determinadas estructuras de oportunidad política que guían el curso de su acción hacia el despliegue de una estrategia dual. Sin embargo, no debemos perder de vista que los movimientos operan sobre realidades específicas, resultando pertinente detenernos en el análisis de los movimientos sociales en Latinoamérica en general y en el área andina en particular.

¹⁰ Lo concerniente al carácter internacional de la problemática cocalera se desarrolla con mayor profundidad en el capítulo III

3. Movimientos sociales en América Latina

3.1 Estado y movimientos sociales en América Latina

Estudiar los movimientos sociales, requiere tener en cuenta la complejidad y especificidad de las realidades donde se desenvuelve la acción colectiva y las problemáticas en torno a las cuales se articula. Desde América Latina se han ensayado diversas aproximaciones que intentan constituir un cuerpo teórico para entender los movimientos sociales. Un aspecto central a tener en cuenta en el análisis son las múltiples realidades – políticas, económicas, sociales y culturales- que conviven en nuestro continente dotando de mayor complejidad a los procesos de movilización social y representación política. En palabras de Quijano (1978), vivimos una suerte de “heterogeneidad estructural” manifiesta en la coexistencia y compenetración de diferentes niveles productivos, espacios sociales y dinámicas culturales. La modernización de Latinoamérica se haya signada por esta convivencia de fenómenos simultáneos en el tiempo y en el espacio que impactan en la vida cotidiana de los sujetos y los procesos organizativos que protagonizan. La reestructuración de la economía a escala mundial no anula dicha heterogeneidad sino que la reconfigura, instalando en el continente procesos productivos altamente tecnificados, como los centros de maquila articulados a grandes transnacionales, que conviven con bolsones de pobreza donde los individuos subsisten empleados en actividades primarias o engrosan el contingente de pobres urbano marginales. La convivencia de formas económicas, sociales y culturales de origen temporal diverso, producen fenómenos de simultaneidad y fragmentación entre los actores sociales, dificultando el reconocimiento como parte de una misma problemática. Exclusión y polarización social se vuelven características frecuentes en la dinámica de movimientos que deben luchar por no caer en el aislamiento.

Resulta importante también situar el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos en el marco de los últimos cambios suscitados a nivel del sistema político, principalmente a raíz de las “transiciones democráticas” y los procesos de ajuste estructural que significaron las reformas neoliberales. Al respecto, Álvarez y Escobar destacan dos factores comunes en esta etapa; la crisis del modelo de desarrollo

en la región (denominado modelo de sustitución de importaciones) y la crisis de los partidos políticos y los mecanismos de representación (Escobar y Alvarez, 1992). Con la vuelta a las democracias y el declive de los Estados desarrollistas, las formas de articulación social giran cada vez más hacia la identidad y la organización desde la vida cotidiana. Estas nuevas identidades se piensan de un modo distinto a occidente, acrecentándose su potencial como medio para democratizar diferentes espacios de la sociedad; el movimiento feminista por ejemplo vincula sus reivindicaciones de autonomía a la transformación del espacio doméstico, lo cual se expresa en la organización de cocinas populares que buscan garantizar el derecho de alimentación del colectivo. De otro lado, se producen cambios en las relaciones entre partidos políticos y movimientos sociales, las mismas que tradicionalmente se habían inclinado hacia el predominio de la estructura partidaria. Las organizaciones que surgen reclaman mayores márgenes de autonomía y cuestionan el rol de base movilizable a la que habían sido confinados. Los partidos políticos, debilitados por una persistente crisis de representación, deben aceptar negociar con los movimientos sociales, tejiéndose nuevas alianzas y formas de interacción que incluyen la posibilidad de que el movimiento construya su propia organización política identificándola como “instrumento” para participar de la arena electoral.

Otro aspecto relevante en el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos es el rol que el Estado y sus instituciones desempeñan, actuando como interlocutores y antagonistas a la vez. Esto ha llevado a que los movimientos desarrollen una tradición de participación política dual que implica su participación en la arena política electoral en distintas coyunturas y bajo diversas formas. Desde inicios del siglo XX el Estado en América Latina asumió un papel promotor de diversos proyectos modernizadores, que lo llevaron a interferir decisivamente en el desarrollo de los sectores productivos. De un lado, dicho protagonismo dio lugar a la constitución de un Estado patronal en torno a cual se articuló por ejemplo el movimiento obrero, y de otro lado permitió la consolidación de gobernantes carismáticos que encabezaron procesos de movilización social como sucedió con el peronismo en Argentina. Posteriormente en las luchas por la ampliación de derechos sociales, miles de pobladores tienen al Estado como principal interlocutor de sus demandas de vivienda, salud o educación. Para el

caso mexicano Fowaraker (1993) analiza cómo el Estado corporativo presidido por el PRI incide en la dinámica de los movimientos sociales orientando su lucha hacia las exigencias de democratización y autonomía, vinculándose con los partidos de izquierda que buscan la alternancia del poder. El autor alerta también sobre las formas clientelistas que genera un Estado corporativo y/o autoritario, constriñendo las posibilidades de acción de los movimientos sociales y generando lealtades que legitiman el status quo. El clientelismo y la manipulación de los gobiernos, generan lógicas de mediación que frenan la protesta de los movimientos sociales siendo un desafío para estos generar otras formas de incidencia en el sistema político alternativas a esta relación subordinada (Fowarekaer, 1990: 17). Esta afirmación resulta pertinente para el Perú, pues durante el régimen autoritario de Fujimori se impone el clientelismo como lógica principal de relación con los movimientos sociales, exigiéndoles a cambio de la atención a sus demandas, la adhesión a su proyecto político y sus afanes reeleccionistas.

De otro lado, los cambios en la estructura de oportunidad política relacionada con el sistema de representación, repercuten directamente en las formas de protesta que utiliza y en las estrategias de acción que delimita el movimiento. Esto influye en que el Estado sea visto por los movimientos como un ámbito de resolución de conflictos, lo cual se expresa en la cultura fuertemente legalista presente en los países latinoamericanos. Constantemente, los actores apelan a mecanismos legales como parte del repertorio de negociación del movimiento, ya sea presentando apelaciones, habeas corpus entre otros mecanismos que amplían la lucha al terreno judicial. Finalmente, el Estado también se constituye como terreno de disputa en tanto los movimientos sociales tienden a incursionar en política, ya sea en alianza con los partidos o generando sus propios instrumentos, a nivel local y también cada vez mas a nivel nacional. En las últimas décadas en el área andina, el ascenso de los movimientos indígenas y su creciente importancia en términos de participación electoral pusieron en evidencia la vigencia de esta política dual¹¹.

En América Latina las acciones de los movimientos sociales han repercutido en el terreno institucional promoviendo reformas y cambios en el diseño de las políticas

¹¹ Véase por ejemplo el estudio realizado por Donna Lee Van Cott, *From Movements to parties in Latin America, the evolution of ethnic politics*, Cambridge University Press, 2005

públicas. De manera dialéctica, los cambios en la legislación y en la orientación de las políticas interfieren en el curso de la movilización, lo mismo que el levantamiento de determinados discursos. En el caso peruano y cocalero en particular, es claro el peso del Estado como referente de la acción colectiva, influyendo en los discursos, abriendo canales institucionales y orientando las políticas. En primer lugar, durante el gobierno militar presidido por el general Velasco, el Estado cumplió un rol clave en la discusión sobre la cuestión indígena en el Perú, abordándolo a través de reformas institucionales que presentaron el tema como un problema “campesino”. La Ley de Reforma Agraria promulgada en 1969 liquidó toda hacienda cuya extensión sobrepasara las 20 hectáreas entregándola a los núcleos de población indígena que la ley uniformizó como “comunidades campesinas”. El posterior fracaso de esta reforma impulsó los movimientos migratorios a la selva donde se produce la coca. En segundo lugar, en el gobierno de Belaunde el Estado abrió canales importantes de participación al promulgar en 1981 la Ley de Municipalidades, según la cual los alcaldes distritales y provinciales pasan a ser elegidos por elecciones generales, dejando de ser designados por el poder Ejecutivo. Los gobiernos locales se establecieron así como espacios de disputa por el poder político, desarrollándose en las zonas rurales procesos de articulación que reconfiguran las elites locales y permiten una mayor participación de los campesinos-indígenas en el terreno de la representación estatal. (Muñoz, 2004). En el caso del movimiento cocalero, el gobierno local es considerado como el “espacio primario” de representación de los intereses de una población que en su mayoría se dedica al cultivo de coca. En tercer lugar, durante el gobierno de Toledo el Estado define una clara orientación de la política antidrogas hacia los postulados dictados por el gobierno norteamericano, basados en la erradicación de cultivos. La orientación geopolítica definida por Toledo y continuada por Alan García, privilegia las relaciones bilaterales con Estados Unidos expresada en la firma de acuerdos comerciales entre ellos el Tratado de Libre Comercio que incluye una serie de condicionamientos al Perú para entrar con más fuerzas al mercado norteamericano. La reducción de las hectáreas de coca será uno de los primeros requisitos puestos por Washington, llevándose a cabo en Perú acciones de erradicación que exacerban la protesta cocalera.

Vale resaltar finalmente, la identidad múltiple y abierta a diferentes elecciones que asumen los movimientos sociales, pues una organización de identidad clasista puede incorporar a la vez reclamos étnicos o de género. Así mismo, hoy más que antes, los movimientos se plantean diversos planos de acción, traspasando el ámbito puramente contencioso que solía ver al Estado como el enemigo al cual derrotar por estrategias centradas en la protesta o la insurrección, dejando el terreno de la representación a los partidos políticos. Es por ello que actualmente el estudio de los movimientos sociales debe aportar a la comprensión de los fenómenos de heterogeneidad y multiplicidad de los sentidos y estrategias de la acción colectiva, reflejada en procesos donde las identidades se hacen menos rígidas, las demandas además de redistributivas asumen elementos culturales, y las estrategias además de la protesta incluyen la participación en la arena político electoral. De este modo en América Latina los movimientos sociales responden a una lógica de conflicto, cuyas raíces se encuentran en la disputa por el control del sistema político y la redistribución de los recursos, por lo que la acción social generalmente es también política (Mayorga, 1992).

Estudiar los movimientos sociales en América Latina requiere tener en cuenta entonces la heterogeneidad estructural presente, los múltiples caracteres de la acción y sus diferentes vinculaciones entre sí. En el mismo sentido, las estrategias de los movimientos no se pueden pensar sin tener en cuenta al Estado como terreno de disputa y construcción de la acción colectiva. Sin embargo, más allá de estos rasgos comunes extensibles a los diversos países latinoamericanos, para el caso del presente estudio conviene analizar la problemática subregional específica de los movimientos sociales en la denominada “área andina” conformada por los países de Ecuador, Bolivia y Perú.

3.2. Los movimientos sociales en el área andina

Tal como los hemos anotado, lo específico de los procesos políticos y sociales en Latinoamérica, hace que los movimientos sociales tengan al Estado no solo como interlocutor contencioso en la protesta, sino también como espacio de disputa por conquistar puestos de poder para desde ahí viabilizar la resolución de sus demandas. Es por ello que en el despliegue de la dualidad estratégica movilización-representación la

identidad y las formas organizativas asumidas, inciden decisivamente en la mirada frente al sistema político y la participación en este. Todos estos factores son claves en las evaluaciones y la decisión del movimiento respecto a cómo y cuándo asumir una estrategia dual. Para nuestra investigación, nos interesa analizar la incursión de los movimientos sociales en la arena política andina enfatizando el último periodo de protagonismo político de los movimientos sociales que data de inicios de la década de los '90, signado por el asenso de los referentes étnicos como de la participación política.

En un sentido amplio, la participación de los movimientos sociales en la arena política no es un fenómeno estrictamente nuevo. Para no ir muy lejos en el tiempo, a inicios del S. XX la constitución de los partidos de Izquierda latinoamericanos estuvo profundamente ligada a la organización de sectores obreros y campesinos que operaron como una suerte de soporte cuya movilización permitía a los partidos posicionarse y negociar puestos de poder, ya fuera que participaran en elecciones o las rechazaran por considerarla una opción reformista. No podría pensarse el triunfo de la Unidad Popular en el Chile del los '70 sin el apoyo de una vasta red de organizaciones sociales básicamente sindicales, ni la importancia de las guerrillas centro americanas en los '80 sin el apoyo de redes de comunidades de bases cristianas y campesinas. No obstante, en estos casos de acción política vinculada a los partidos, el movimiento juega un rol tangencial permaneciendo por lo general subordinado a las dirigencias partidarias. La particularidad de la participación política de los movimientos sociales a inicios de la década de los '90 radica en que asumen directamente la tarea de competir por lograr representación política.

En el desarrollo de estos procesos confluye una serie de aspectos relacionados con cambios en los mecanismos formales de participación política y con períodos de crisis de los referentes ideológicos y organizativos que facilitan la participación directa. Es el caso de lo que sucede en los andes con la participación política del movimiento indígena en Ecuador o del movimiento cocalero en Bolivia. En lo institucional, la promulgación de leyes que flexibilizan las barreras para competir electoralmente, abren una ventana para la participación de los sectores rurales principalmente a nivel local (municipal), como sucede con la Ley de municipalidades en el Perú (1980) o la Ley de Participación ciudadana en Bolivia (1992) De otro lado, la crisis que atraviesan los

partidos de izquierda aportan al replanteamiento de las identidades y referentes de sentido, llevando a la búsqueda de otros “clivajes”¹² indentitarios desde los cuales pensar la acción colectiva contenciosa y también la participación electoral. (Van Cott, 2005)

Uno de los principales clivajes que los movimientos sociales andinos encuentran para desplegar los procesos de dualidad estratégica, es el relacionado con las identidades étnicas. Actualmente el proceso de globalización presenta la paradoja de que junto a una mayor conexión de las regiones a nivel mundial se acentúan identidades locales, entre ellas las indígenas, en un proceso que alcanza mayor intensidad en aquellos lugares donde aún existen importantes conglomerados de población originaria como pueden ser los Andes o Meso América. Como señala el antropólogo Ramón Pajuelo (2006), cobran fuerza procesos de movilización étnica, caracterizados por la transición de los movimientos indígenas de la esfera social a la arena política, convirtiéndose en fuerzas que no plantean proyectos separatistas frente a la unidad nacional de los Estados, sino que proponen la reformulación democrática de los sistemas de poder imperantes, en un sentido plurinacional e intercultural. Esta característica diferencia a los movimientos indígenas de América Latina de aquellos fenómenos de reivindicación étnica y religiosa que, recientemente han desatado conflictos muy violentos en otras partes del mundo como por ejemplo el medio oriente o Europa del Este (Pajuelo, 2006: 2). Siguiendo a Van Cott, la participación de estas agrupaciones étnicas en la arena política electoral se viabiliza a través de “partidos étnicos” definidos como:

Organizaciones autorizadas para competir en elecciones locales y nacionales cuyos líderes y miembros se identifican como pertenecientes a un grupo étnico y sus plataformas electorales incluyen demandas y programas de naturaleza étnica o cultural (...) La homogeneidad étnica de los miembros y el énfasis de lo étnico de las plataformas políticas varían en diferentes niveles según el sistema político y de acuerdo a las características de cada región (Van Cott, 2005: 5)

En base a esta definición, la citada autora desarrolla un amplio estudio sobre lo que denomina “la evolución de los movimientos sociales a partidos étnicos”, analizando bajo qué condiciones los movimientos sociales de carácter indígena se organizan en partidos étnicos que logran éxito en la arena política electoral. Van Cott sostiene que las aperturas del entorno institucional, los cambios en el sistema de partidos y la propia dinámica del movimiento social son los factores que explican la consolidación y éxito de los partidos

¹² Un “clivaje” (del inglés *cleavage*) puede ser entendido como una situación histórica crítica o línea de tensión que produce ruptura social y se ancla en elementos estructurales de naturaleza más estática que dinámica.

étnicos. En cuanto al entorno institucional, mientras más favorables sean las reglas formales a la inclusión de los sectores marginados, más probable será que los movimientos sociales actúen con éxito en la arena electoral. Son cuatro las reglas formales más importantes: a) una política de descentralización que favorezca la creación de autoridades territoriales (municipios, cantones, etc.) cuyas autoridades sean elegidas directamente por poblaciones mayoritariamente indígenas, b) el incremento de acceso al voto, lo cual supone la disminución de las barreras para su emisión, tales como dificultades administrativas o de tipo político como sucedía en el Perú donde la población analfabeta recién tuvo derecho a votar en 1979, c) las políticas de “cuotas” que supone la creación de distritos electorales y la reserva de determinados puestos de poder para grupos que se considera insuficientemente representados como las mujeres o los grupos indígenas, d) la representación proporcional en términos de apertura del sistema a partidos minoritarios y no solo a coaliciones, lo que facilita que grupos con bases locales pueden tener representación sin necesariamente establecer alianzas poco ventajosas con las mayorías. Respecto a los cambios en el sistema de partidos que favorecen la constitución de partidos étnicos, estos refieren a dos puntos principales. En primer termino, la permanencia de un sistema de partidos fragmentado o en crisis permite que surjan nuevos partidos con mayor facilidad y mejores posibilidades de conseguir votos. En segundo lugar, la crisis de los partidos de izquierda, históricamente vinculados a las organizaciones indígenas y campesinas, abre el espacio para nuevos referentes de sentido y el recambio de los liderazgos políticos.

Finalmente, los factores relacionados al movimiento social que explican su participación política, tienen que ver con su exigencia y respaldo a procesos de reforma constitucional. En estos períodos de reforma, las organizaciones sociales inscriben sus demandas de reconocimiento como integrantes de un Estado pluricultural logrando mediante la difusión que el resto de la población conozca y comprenda sus reivindicaciones. Asimismo, se toma en cuenta la consolidación organizacional interna reflejada en una duración temporal sostenida, una estructura directiva legitimada y una consistente densidad organizacional de redes y afiliados (Van Cott, 2005)

La propuesta de Van Cott es muy pertinente para pensar la acción colectiva de movimientos sociales que, sin abandonar la política contenciosa, desarrollan estrategias exitosas de participación electoral. En tal sentido nos ayuda a reflexionar sobre la dualidad

estratégica desplegada por movimientos sociales que como el indígena constituyen partidos no como alternativas distintas a la acción contenciosa, sino más bien como herramientas adicionales para la consecución de sus objetivos. Pese a estos aportes, para el caso peruano en general y el movimiento cocalero en particular los postulados de Van Cott pueden resultar insuficientes. De hecho la autora afirma que la ausencia de reglas formales favorables y la permanente debilidad y fragmentación de las organizaciones indígenas peruanas hacen que no existen partidos étnicos, en una afirmación que deja fuera la dinámica del movimiento cocalero. Creemos que los productores cocaleros, sin ser un movimiento puramente indígena, construyen una identidad en base a componentes étnicos tales como la defensa del uso tradicional de la hoja de coca, y lo plantean al incursionar en la política electoral como parte de sus reivindicaciones. Resulta conveniente entonces profundizar en la especificidad del caso peruano, definiendo los aportes y limitaciones del enfoque de “partidos étnicos” para estudiar la construcción del movimiento cocalero y la manera en que asume el despliegue de la dualidad estratégica.

3.2.1. Dualidad estratégica y partidos étnicos: el caso peruano

¿Qué sucede con los movimientos sociales en el Perú y cómo se ubican en este contexto de movilización indígena y luchas políticas sustentadas en la etnicidad? Si tenemos en cuenta que el Perú alberga similar proporción de población indígena que los otros países andinos, ¿cómo puede explicarse la debilidad de lo étnico, más aún en movimientos que como el cocalero asumen en Bolivia una clara identidad indígena? Respecto a las particularidades de la participación política indígena se han escrito ya análisis comparativos importantes¹³, entre los cuales queremos rescatar dos. El primer enfoque enfatiza las tendencias de participación y movilización indígena existentes cuestionando los estudios centrados en explicar la ausencia del movimiento indígena peruano. El segundo caso, plantea una propuesta de estudio centrada en la autodefinición del movimiento y las condiciones institucionales como

¹³ Ver las obras citadas de Albó Xavier, *El retorno del indio*. En “Revista Andina”, Año 9, N° 18. Centro Bartolomé de las Casas, Cusco 1991, Pajuelo Ramón; *Reinventando comunidades Imaginadas. Movimientos indígenas, nación y procesos sociopolíticos en los países andinos*. IFEA-IEP, Lima 2007, Degregori Carlos Iván, *Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú*. En Alberto Adrianzén y otros, “Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos”. Instituto Francés de Estudios Andinos - Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1993

factores que influyen decisivamente en la movilización indígena y la conformación de partidos étnicos.

Dentro del primer enfoque citado, Degregori critica el supuesto de que en materia de movilización indígena el Perú debería seguir el mismo camino que los países vecinos, de lo cual es fácil deducir que la experiencia peruana se trata de una “anomalía” derivada del persistente atraso de las luchas indígenas. Plantea así que “resulta mas apropiado preguntarse por lo que existe en la experiencia histórica peruana y lo que la hace peculiar, centrando la mirada en lo que hay y no en lo que supuestamente debería existir, atendiendo a las causas de estas particularidades” (Degregori, 1993: 56). En tal sentido, para comprender los procesos de participación indígena existentes en el Perú deben tenerse en cuenta tres elementos relacionados con condiciones particulares de la identidad. El primero refiere al peso de la izquierda clasista y su influencia en el campesinado pues desde sus momentos fundacionales, los partidos de izquierda en el Perú rechazaron la reivindicación de lo indígena por la fuerte connotación servil del término posicionando la definición “campesino” como la adecuada. En segundo lugar los procesos de migración y mestizaje cobran intensidad a partir de los años 30 y se desarrollan en múltiples sentidos, mayoritariamente de la sierra hacia Lima pero también de la costa y la sierra a los valles de la selva. Los nuevos pobladores protagonizaron procesos de mestizaje cultural donde las identidades originarias se reconfiguraron sustancialmente. En tercer lugar tenemos la promulgación de tempranas reformas institucionales como la ampliación del voto a la población analfabeta en 1980 y la ley de municipalidades de 1981 que transforman la estructura de las elites locales en el campo y permiten una mayor participación de los campesinos- indígenas en el terreno de la representación estatal. Finalmente, el conflicto armado interno que afecta con mayor intensidad a la población indígena y la implementación exitosa de las reformas neoliberales por el gobierno de Fujimori terminan por configurar las actuales condiciones de la movilización social étnica. En estas condiciones y desde un enfoque amplio que no busca lo “estricta y puramente indígena” Ramón Pajuelo (2007) señala las nuevas tendencias de participación indígena entre las cuales rescatamos dos. De un lado, la lucha de las comunidades campesinas e indígenas que se enfrentan a empresas mineras transnacionales que han incrementado su presencia en la zona andina tras la flexibilización de las leyes de minería, organizándose en la Coordinadora

Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). De otro lado, la movilización de los productores cocaleros y su posterior participación política sustentada en la revaloración del significado cultural de la hoja de coca. Para el autor se produce una suerte de “etnogenesis local”: los campesinos cocaleros redescubren sus orígenes culturales y los asumen como elementos de cohesión política y social. Estos procesos nos mostrarían que el Perú no se halla al margen de los procesos de politización de la etnicidad, aunque esta adquiere intensidades diferentes. Pese a que no existe un movimiento nacional de clara identidad indígena ni un partido unificado, sí podría constatarse que la movilización y participación de componentes étnicos está presente en la política nacional.

Van Cott (2005) no comparte ese enfoque y habla de la fallida formación de un partido étnico en el Perú, pues ella se concentra en el accionar de las organizaciones autodefinidas como indígenas. No existe política étnica peruana en tanto la debilidad de las organizaciones indígenas hace imposible la unificación de un movimiento que participe con éxito en la arena electoral. Las causas de esta debilidad refieren en primer término a la fuerte presencia de una izquierda de orientación clasista que posiciona la autoadscripción a lo campesino como legítima y repercute en la fragmentación de una población indígena dispersa a lo largo de un territorio nacional mucho más extenso que el de los países vecinos. En segundo lugar, refieren al entorno institucional poco favorable para la participación indígena pues las reformas descentralistas¹⁴ no han tenido la continuidad suficiente, no se cuenta con una ley de cuotas y el embate de la violencia de Sendero Luminoso significó un grave obstáculo de acceso al voto del cual la población indígena apenas viene recuperándose. Enfatizando en la autodefinición la autora no considera procesos de movilización y participación política de componentes étnicos la experiencia de CONACAMI, en tanto incluye comunidades de la costa semi urbanas y aunque algunos de sus líderes hablen quechua no hay una identidad quechua explícita. Tampoco el movimiento cocalero es considerado dentro de los procesos de movilización y politización étnica, pues lo constituyen pobladores de distintas regiones sin una lengua originaria común ni mayor relación con otras organizaciones indígenas de la amazonia como AIDSESEP (Asociación Interétnica de la Selva Peruana) que agrupa los principales grupos étnicos amazónicos. La

¹⁴ Por reformas descentralizadas la autora se refiere a las medidas adoptadas por los gobiernos para desconcentrar el poder estatal, delegando atribuciones políticas y recursos a los ámbitos territoriales más inmediatos a la ciudadanía como son en el caso peruano los distritos, provincias y regiones.

ausencia de movimientos indígenas y partidos étnicos en el Perú responde así a la incapacidad de las organizaciones para unificarse, dada su naturaleza cruzada por la tensión etnia-clase y a un entorno institucional poco favorable, expresado en aspectos como la falta de leyes de cuotas para representantes indígenas y las dificultades que aún enfrenta la población rural para emitir su voto (Van Cott, 2005).

Creemos que ambos enfoques son importantes para entender la situación general del movimiento indígena en el Perú pero pueden resultar limitadas para el análisis de casos específicos como el del movimiento cocalero. Por un lado, considerar llanamente a los productores cocaleros como un movimiento indígena implica soslayar elementos constitutivos de su identidad tales como los procesos migratorios y una dinámica de intensa movilidad territorial que hacen que lo indígena no adquiera hegemonía. La tesis de la “autogénesis” enfatiza la búsqueda esencialista y minimiza el carácter estratégico de la identidad y las formas en que es puesta en escena según el movimiento lo considere adecuado o no para la concreción de sus demandas. Asimismo desconoce el peso de los recursos económicos y los intereses internacionales tejidos en torno a la producción de coca y el combate al narcotráfico. Por otro lado, centrarse en la autodefinición como el componente decisivo en la articulación de movimientos étnicos, tal como lo hace Van Cott, implica obviar otros componentes más bien transversales, expresando una concepción un tanto rígida de los movimientos indígenas, que supone encontrar organizaciones consolidadas actuando en terrenos homogéneos. Así, la única forma por la cual los movimientos indígenas participarían del terreno de la representación política sería el tránsito de movimiento a partido étnico.

¿Cómo entender entonces la construcción de un actor que se cohesionan como movimiento a partir de la defensa de un producto ilegal como la coca pero a la vez incluye en su identidad fuertes connotaciones étnicas y culturales? Creemos que la construcción del movimiento cocalero se articula también en torno a referentes étnicos pero éstos no son los únicos ni necesariamente los principales. Es por ello que su participación en la arena política no puede pensarse solamente desde la definición de “partidos étnicos”, aunque si rescatemos elementos importantes de este enfoque para pensar el éxito de los movimientos sociales en la política, particularmente las características del entorno institucional. Resulta pertinente entonces pensar lo que sucede en el Perú respecto a la movilización étnica en general y

cocalera en particular desde conceptos relacionales y procesuales que enmarquen la acción colectiva en redes de significado más amplias, que contengan lo étnico pero a la vez lo trascienden y complejizen. La idea de “framing” o enmarcamiento puede brindarnos una entrada interesante pues tal como señalan Bendford y Snow (2000), los movimientos sociales son agentes activamente comprometidos con la producción y mantenimiento de sentidos, desarrollando en la acción colectiva “procesos de enmarcamiento” entendidos como formas de organizar la experiencia y ubicarla en referentes discursivos que los trascienden.

Los procesos de enmarcamiento pueden operar en el movimiento en tres sentidos: como *marcos de diagnóstico* (identificando problemas y atribuciones), *marcos de pronóstico* (orientando evaluaciones) y *marcos de motivación* (o referentes a tener en cuenta). En base a este núcleo, los marcos de acción permiten al movimiento atender sus problemas de forma interrelacional, fomentando acuerdos entre elementos disímiles e incrementando su capacidad de movilizar a la población (Bendford y Snow, 2000: 145)

No todos los discursos ni enunciados presentan la misma capacidad de enmarcamiento, resultando central identificar los “marcos maestros” aquellos que son más inclusivos y flexibles y pueden incidir en la acción colectiva de todo el sector de movimientos sociales. Una característica de este tipo de marcos es su potencial de “resonancia”, referido a su capacidad de incrementar la efectividad y legitimidad de las demandas. Existen marcos que resuenan más que otros y esto se debe a dos factores: uno a la credibilidad de quien enuncia el marco en tanto su consistencia discursiva y su constatación empírica, dos la notabilidad y su capacidad de generar consensos articulando en torno suyo a otros discurso, como sucede por ejemplo con el discurso de los derechos humanos. Los procesos de enmarcamiento influyen en la definición de estrategias, abren oportunidades políticas y a la vez repercuten en la construcción de la identidad, pues incluyen memorias compartidas e imaginarios colectivos (Bendford y Snow, 2000). En tal sentido, las reivindicaciones culturales y étnicas presentes en la identidad cocalera pueden dar cuenta de procesos de enmarcamiento según los cuales el movimiento organiza su discurso y experiencia en torno a un marco que lo dota de mayor legitimidad y resonancia en un contexto global favorable a la multiculturalidad y al respeto de los pueblos originarios. Defender el cultivo de la hoja de coca enmarcándolo en argumentos culturales como el respeto a prácticas milenarias de la cultura quechua, implica un proceso de recuperación de la identidad étnica, a la par que brinda mayor resonancia al discurso y lo distancia de posibles vinculaciones con el

narcotráfico. Esto coloca al movimiento en mejor posición para incursionar en la arena política, lo mismo que aludir a la experiencia boliviana como un referente de éxito en la participación electoral.

De otro lado, resulta importante el papel crucial que desempeñan los liderazgos en los movimientos sociales en la medida que impulsan la movilización de las partes agraviadas, facilitan la activación de recursos para el desarrollo la acción y juegan un rol determinante para enfrentar a los oponentes. Para explicar tal acción Erickson (2006) toma de Bourdieu el término “capital” desarrollando el concepto de “capital de liderazgo” para definir las diferentes habilidades, valores, conocimientos y potencialidades que conectan al líder con la masa y le permiten desenvolverse en diversas esferas dirigiendo los procesos de protesta o de negociación. El capital de liderazgo a su vez se halla compuesto de tres elementos

Capital cultural en forma de conocimientos, destrezas y habilidades que son propios de la comunidad agraviada y operan a la vez sobre audiencias externas, b) Capital social entendido como los vínculos sólidos que establece con activistas que apoyan al movimiento demostrando la capacidad de movilizar diversas redes de solidaridad, c) Capital simbólico, referido al carisma, el prestigio social y la autoridad moral (Erickson, 2006: 5)

En el despliegue de dicho capital y durante todo el transcurso de la acción colectiva, debe tenerse en cuenta que las elecciones de los actores en general y de los líderes en particular, no se basan solamente en cálculos relativos a los resultados esperados sino también en la repetición de aquellas elecciones que tuvieron efectos redituables en otros contextos temporales y/o territoriales, evitando las que no lo fueron. Desarrollan así un proceso de aprendizaje donde “miran hacia el futuro pero sosteniendo un espejo en el pasado” (Macy, 1990: 811) Reparar en los procesos de aprendizaje resulta relevante para comprender las decisiones que toman los actores y abordar las diversas interacciones que se producen entre movimientos sociales. Más allá de las asociaciones estratégicas y de nivel macro, el énfasis en la experiencia más que en el ensayo, en la práctica más que en el cálculo, sugiere la importancia de indagar sobre las relaciones de aprendizaje tanto directo como indirecto que se establecen entre los distintos actores del sector de movimientos sociales (González y Tavera, 2007:36).

Tenemos así que la capacidad de los dirigentes en el manejo del capital de liderazgo incide en la dinámica del movimiento, sus posibilidades de establecer alianzas y de contrarrestar la represión, limitando o favoreciendo la consecución de sus objetivos. Tal como desarrollaremos, en el caso de los productores cocaleros del Perú, los líderes juegan

un rol fundamental en la construcción del movimiento y la definición de las estrategias, pues son quienes emprenden la labor organizativa, encabezan las protestas y se deciden a participar de la arena electoral. En el mismo sentido, los cocaleros desarrollan procesos de aprendizaje signados por las condiciones de historicidad de su entorno, teniendo como referentes a esfuerzos organizativos anteriores pero sobre todo a la experiencia boliviana, donde la estrategia dual adoptada por el movimiento consigue un éxito importante. Existe así una constante mirada en “el espejo boliviano” a la vez que se desarrollan interacciones entre líderes y autoridades cocaleras de ambos países. No obstante, las condiciones específicas del movimiento en Perú, lleva a que muchas veces el liderazgo cocalero lide con el caudillismo, estableciéndose relaciones de competencia entre las dirigencias locales que impiden consolidar un gremio nacional.

En suma, realizamos el análisis del movimiento cocalero peruano y su participación en la arena política, tomando en cuenta un marco teórico conceptual que de un lado realza la importancia de componentes internos - tales como una identidad abierta a usos estratégicos y una estructura organizativa sustentada en liderazgos y redes mas amplias, y de otro lado enfatiza en la incidencia de factores externos al movimiento que operan como estructuras de oportunidad política que favorecen o limitan la acción colectiva. Estos componentes orientan las estrategias asumidas por los movimientos, entre ellas la que combina movilización y representación en un escenario donde cada vez menos los partidos políticos son los únicos vehículos de agregación de intereses autorizados. Dicha dualidad, se haya condicionada además por un contexto como el latinoamericano donde el Estado juega un rol primordial, lo mismo que otros factores como la presencia militar, que influyen en los procesos organizativos. Finalmente resulta indispensable situarnos en el actual contexto andino de movilización indígena y construcción de partidos étnicos, mirando las particularidades de la organización cocalera peruana en relación a las condiciones institucionales y los procesos de enmarcamiento y liderazgo. Planteado esto podemos abordar con detalle la construcción del movimiento cocalero peruano, realizando un breve balance de las distintas lecturas ensayadas al respecto para luego analizar a profundidad sus principales elementos constitutivos.

CAPITULO II

LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO COCALERO

Definidas las líneas teóricas para el estudio de los movimientos sociales, analizamos ahora el proceso de construcción del movimiento cocalero peruano, a partir de los componentes internos identificados como los más relevantes para entender el despliegue de su estrategia dual. Vale resaltar que desde las Ciencias Sociales este actor ha sido muy poco analizado, priorizándose al momento de estudiar la problemática cocalera otras líneas de investigación como las redes del narcotráfico o las políticas de desarrollo agrario implementadas en las zonas de cultivo.

El presente capítulo tiene por objetivo analizar la construcción del movimiento cocalero en el Perú. En primer lugar realizamos un breve balance de los estudios realizados discutiendo los enfoques de aproximación y justificando la mirada que prima en este estudio. Luego nos detenemos en el estudio de la identidad como eje constitutivo de la formación del movimiento, reparando en los principales hechos históricos que signan la vida en los valles cocaleros y en los referentes discursivos en que el movimiento enmarca sus propias reivindicaciones. Estudiamos después el proceso de articulación orgánica en términos de estructuras locales y nacionales y la consolidación de fuertes liderazgos que hacen posible la acción colectiva. Nos centramos en dos momentos organizativos: a fines de la década del '70 antes del estallido de la violencia y a inicios del 2000 tras la caída del fujimorismo y la apertura de una nueva estructura de oportunidad política¹⁵.

1. Estudiando el movimiento cocalero en el Perú

Hasta inicios del siglo XX, la coca y la cocaína tuvieron un carácter legal y ampliamente reconocido en la comunidad médica y farmacéutica mundial. Sin embargo, coincidente con un ascenso del sector conservador en la política norteamericana y el fin de la segunda guerra mundial, se impuso una mirada prohibicionista. Como parte de esta nueva política, en 1949

¹⁵ Conviene aclarar que el análisis de la construcción del movimiento – tanto en sus componentes de identidad como de desarrollo organizativo- se realiza a partir del estudio de los dos valles considerados más representativos (el Valle del Huallaga y el Valle del Río Apurímac) según los criterios de selección anotados en la Introducción.

la Comisión Investigadora de las Naciones Unidas clasificó a la hoja de coca como un problema internacional tanto social como químico. Pocos años más tarde, bajo la presión de los Estados Unidos, la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU reunida en 1961 incluyó a la hoja de coca en la Lista I de estupefacientes prohibidos, exigiendo a los países productores erradicar su cultivo, consumo y comercialización en cualquiera de sus formas¹⁶.

Estas prohibiciones internacionales y las medidas que adoptó el gobierno peruano para ejecutarlas, delinear una problemática compleja entre cuyos principales componentes se cuentan los intereses geopolíticos internacionales, las redes del narcotráfico y la acción colectiva de los campesinos cultivadores de hoja de coca. Para intentar explicar esta realidad, las ciencias sociales han ensayado algunas aproximaciones entre las cuales resaltamos dos grandes líneas de estudio. La primera vertiente se centra en la problemática derivada de la elaboración y venta de cocaína, dando cuenta de las dinámicas políticas, económicas y judiciales que el negocio del narcotráfico genera tanto en países productores como consumidores¹⁷. La segunda vertiente, es la que enfatiza los procesos de organización y movilización protagonizados por los productores de hoja de coca (cocaleros) en contra de la implementación de políticas que afectan su condición misma de agricultores, impactando en su identidad, sus dinámicas organizativas y en su posicionamiento frente al sistema político. Iniciamos este punto con un breve balance de los principales estudios realizados sobre el movimiento cocalero en el Perú.

1.1 Aproximaciones y justificación del enfoque de estudio

1.1.1. El movimiento cocalero ¿entre la ilegalidad y el desarrollo?

Una primera línea de análisis del movimiento cocalero es aquella que coloca a la ilegalidad como la principal variable explicativa de su comportamiento social y político. Para Ursula Durand (2006) “la defensa de un producto con un complejo estatuto de legalidad es el factor determinante en la dinámica de los cocaleros a lo largo de su

¹⁶ Para una historia detallada de la problemática de la coca y la cocaína en el Perú puede consultarse: Paul Gotemberg “Entre la coca y la cocaína: las paradojas de la droga entre Estados Unidos y Perú”, IEP, Lima 1999 y a Belén Luca de Tena, “La guerra de la Cocaína”, Madrid 2000.

¹⁷ Al respecto existen análisis muy pertinentes como el de Julio Cotler “Drogas y política en el Perú, la conexión norteamericana”, IEP, Lima 1999 y el de Ricardo Soberón “El control de drogas en el Perú en épocas de democracia”; TNI, Lima 2007.

historia como actores sociales.” (Durand, 2006: 2). Desde que los cocaleros emprenden sus primeros esfuerzos organizativos, la situación de ilegalidad cruza transversalmente su problemática, introduciendo complejidad a sus demandas pues defender un producto penalizado como la hoja de coca los pone en una posición muy desventajosa frente al Estado y la sociedad. Toda la dinámica del movimiento incluso la debilidad organizativa y la posterior participación política de los cocaleros se ve cruzada por esta situación. Al interior del movimiento, defender el producto ilícito genera radicalizaciones que terminan en la división de los productores. Los sectores más radicales que enarbolan la consigna “coca o muerte” son aquellos que defienden el cultivo ilegal de coca e incluso la producción de cocaína, mientras los sectores moderados, que aceptan la sustitución de cultivos y rechazan la elaboración de cocaína, tampoco llegan a deslindarse lo suficiente. Esto lleva a que la sociedad y el Estado vean a los cocaleros como un actor desprestigiado, signado por una “identidad criminal, totalmente radical y deslegitimado” pues sus acciones dejan entrever que no buscan romper su dependencia de la coca, sino que protegen su intención de seguir cultivándola. Así mismo, al momento de incursionar en la arena política, el estrecho vínculo de los productores con la criminalidad limita considerablemente sus posibilidades de generar alianzas que les permitan contar con un marco de apoyo más amplio. Puestas así las cosas, el movimiento se construye en la ilegalidad, se radicaliza para mantenerla y termina generando alianzas muy débiles que no cuestionen el sustrato ilícito de su actividad. En conclusión el defender un cultivo de condición polémica afecta la relación de los cocaleros con el Estado y la sociedad, convirtiéndose la ilegalidad en la explicación de su permanente debilidad organizativa y su aislamiento social y político.

Para Fernando Rospigliosi (2006) la construcción del movimiento cocalero se desarrolla en estrecha relación con sectores ilegales, particularmente los intereses del narcotráfico. Dado que según la Encuesta sobre consumo tradicional de hoja de coca el 90% de las hojas de coca va a la elaboración de cocaína y solo el 10% al consumo tradicional o la industria farmacéutica, la verdadera razón por la cual los campesinos defienden el cultivo de coca es por asegurar sus ganancias ilícitas. Las reivindicaciones enmarcadas en argumentos etnoculturales de defensa de la “hoja sagrada” o las propuestas de industrialización son falacias para justificar el negocio del narcotráfico. Es por ello que

la participación cocalera en la arena política y sus cercanías con determinados partidos “autoritarios” no hacen más que confirmar esta pretensión de continuar con el negocio de forma menos riesgosa.

Otro enfoque respecto al movimiento cocalero es el que se centra en los problemas de desarrollo y economía rural. Según esta línea, en la que destacan los planteamientos del economista Hugo Cabieses, la dinámica del movimiento cocalero no puede ser analizada sin tener en cuenta la ausencia de políticas de desarrollo viables para los agricultores de la selva alta. Desde que a raíz de la presión norteamericana se equiparó coca a cocaína, los sucesivos gobiernos peruanos no han podido plantear una política viable de desarrollo, limitándose a acatar los dictados internacionales que privilegian una estrategia de erradicación del cultivo y promoción de “Programas de Desarrollo Alternativo” (PDA). Para Cabieses (2005), ambas estrategias han fracasado sistemáticamente; las erradicaciones fracasan en tanto no reducen ni el cultivo de coca ni la producción de cocaína pues la producción se desplaza de un país a otro según aumente la represión produciéndose el denominado “efecto globo”: si en Colombia se intensifican las erradicaciones, la producción de coca se incrementa en Perú o Bolivia y viceversa (Ver Anexos). En el caso del desarrollo alternativo, éste fracasa en tanto se orienta exclusivamente a apoyar la guerra contra las drogas y la sustitución de cultivos sin mercados seguros ni precios competitivos. Lo que realmente hace falta es la ejecución de políticas de “Desarrollo Rural Integral Sostenible y Sustentable” (DRISS) pues los campesinos siembran coca ante la falta de alternativas de desarrollo y ante una posición del gobierno que asume sin reservas la equivalencia coca –cocaína. Es debido a la sordera del gobierno central que “miles de cocaleros se organizan para cambiar las políticas de desarrollo en sus valles, rechazando la guerra a las drogas y pidiendo alternativas justas y eficaces, contrarias a las que imponen los Estados Unidos”. (Cabieses, 2005: 70). La participación de los productores cocaleros en la arena política busca legitimar nuevas estrategias de desarrollo, satanizadas por los defensores de la política norteamericana. Avanzar en la resolución de la problemática cocalera implica aprobar una Ley de coca, reconocer a los productores cocaleros como interlocutores válidos e implementar una estrategia de DRISS; sólo así las movilizaciones cocaleras y su supuesta “radicalidad” podrán ser resueltas en un marco de diálogo y bienestar para los productores.

1.1.2 Ensayando otra aproximación

Si bien estos enfoques se centran en aspectos cruciales, creemos que analizar la construcción del movimiento cocalero supone no caer en determinismos irreductibles de preeminencia de un componente frente a otros. En el caso de la línea centrada en la ilegalidad, esta visión puede derivar en razonamientos normativos según los cuales un movimiento social solo podría conseguir cohesión orgánica, apoyo social y alianzas políticas duraderas si es que se mueve en los marcos de la legalidad. Plantear esto lleva a negar que muchos movimientos sociales surgen en los márgenes del sistema, es decir desarrollan la acción social ante vacíos legales y situaciones de exclusión que justamente buscan transformar. Lleva también a desconocer que en sociedades como la peruana la permisividad frente a lo “ilícito” tiene límites distintos y fronteras difusas, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de una sociedad que viene saliendo de un largo período de violencia política y de un proceso acelerado de reformas neoliberales. Los Comités de Autodefensa que se inician al margen de la ley para enfrentar la subversión, las Ligas de pobladores que invaden predios urbanos al llegar a la ciudad o las diversas Asociaciones de comerciantes informales son muestras de organizaciones en torno a actividades ilícitas toleradas por la sociedad y reconocidas como interlocutores por el Estado. Si bien es cierto que en el tema de la coca la ilegalidad adquiere una connotación distinta por su conexión al narcotráfico y los intereses internacionales en juego, darle el carácter de elemento decisivo y determinante de la dinámica de los productores deja de lado otros componentes como los geopolíticos, culturales, históricos o identitarios. En tal sentido resulta pertinente preguntarse si, cómo afirma Durand, efectivamente el movimiento cocalero tiene una “identidad criminal” que lo lleva a la radicalización y al aislamiento político. En primer lugar, este razonamiento no detalla qué factores históricos explican esta identidad ni cómo ésta se expresa en el discurso y en las alianzas políticas. Se asume que el movimiento pasa a una fase de radicalización evidenciada en la consigna “coca o muerte” -levantada además sólo por un valle- que culmina con la división de la CONPACC, sin tener en cuenta que a estas divisiones le han seguido reunificaciones que aumentan la complejidad del actor y lejos de aislarlo lo posicionan como uno de los más importantes al punto que logra participar en elecciones con la segunda fuerza política del Perú como es el Partido Nacionalista. Tampoco puede sostenerse que la “sociedad”

rechaza al movimiento cocalero por su defensa de un producto ilegal sobre todo si, pese a su identidad confrontacional (que no equivale a criminal) logra llevar adelante masivas huelgas y movilizaciones a la vez que incursiona con éxito en la arena política local y nacional. En el caso de los planteamientos de Rospigliosi, estos caen en el simplismo de equiparar coca-cocaína, sin reparar en el esfuerzo de académicos y políticos por diferenciar la hoja de coca de uno de sus 14 alcaloides (la cocaína). Aunque la mayor parte de la producción cocalera vaya al mercado ilícito, esto no es indicador suficiente para encasillar al productor en la categoría de narcotraficante, puesto que la elaboración de cocaína requiere de una serie de químicos que llegan al país sin que el gobierno intervenga con rigurosidad. Se cae además en la satanización fácil, desconociéndose que en sus discursos los líderes cocaleros no planten legalizar el consumo de cocaína ni levantarse contra el Estado. Por el contrario, han manifestado su interés por que se combata el narcotráfico y se promulgue una nueva Ley de coca que resuelva el complejo status legal de la hoja que puede ser vendida legalmente solo a al monopolio estatal de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) pese a que la ley prohíbe la existencia de los monopolios.

Respecto al desarrollo agrario como eje de análisis, compartimos la idea de que éste debe ocupar un lugar prioritario al momento de analizar la problemática cocalera. Sin duda, el hecho de que existan campesinos dispuestos a continuar cultivando coca pese a los riesgos que implica es un indicador de que no existe una adecuada política de desarrollo rural ni para las zonas andinas expulsoras de migrantes ni para las zonas receptoras en la selva. Resultan también muy acertadas las críticas que Cabieses plantea a los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA), ampliando el campo de análisis a otras variables además de la cuestión legal-ilegal. Sin embargo, la problemática de los productores cocaleros no pasa solamente por la implementación de estrategias de desarrollo sustentables, requiere pensar otros factores de su desenvolvimiento.

Proponemos que analizar la construcción del movimiento cocalero implica enfocar la mirada en la interacción de factores del entorno y elementos constitutivos tales como los procesos de construcción identitaria y articulación orgánica. La identidad, signada por condiciones históricas determinadas y un discurso abierto a elecciones estratégicas, permite al movimiento participar en política sin abandonar la protesta, desarrollando una

estrategia dual asumida como viable ante una organización cuyo desempeño hasta entonces había sido básicamente contencioso. Asimismo, la estructura orgánica del movimiento configura un sistema de acción asociado a orientaciones y significados, que solucionan los problemas de coordinación interna distribuyendo compromisos y responsabilidades, a la vez que viabiliza alianzas y coordinaciones con otros actores políticos y sociales. En ambos procesos los líderes asumen un rol preponderante viabilizando articulando discurso, evaluando las condiciones del entorno político y viabilizando con gran efectividad las decisiones del movimiento, teniendo en cuenta para ello experiencias cercanas de las que aprenden y se nutren. Como expondremos aquí, lejos de mantenerse aislado en la sociedad y rechazado por su defensa de un producto ilegal como la hoja de coca, el movimiento cocalero construye una identidad común, articula tejido organizativo, posiciona liderazgos y legitima una estrategia dual.

2. La identidad en el movimiento cocalero: historicidad y discurso

Para estudiar la construcción de la identidad compartida por el movimiento cocalero, abordamos en primer término los principales hechos históricos que marcan su existencia. En segundo lugar, nos centramos en la construcción del discurso asumido y compartido por el colectivo, identificando los principales hilos de reflexión y marcos de significado con los que los actores se reconocen y asumen para confrontar diversas luchas de poder. Así, mientras de un lado la historicidad moldea la identidad, el discurso a la vez que la constituye la presenta y explica ante la sociedad y los posibles adversarios. En el caso del movimiento cocalero analizaremos su historicidad a partir de tres principales hechos históricos; las migraciones a la selva alta (1920-1970), el conflicto armado interno (1980-1992) y la pacificación fujimorista (1993-2000). Creemos que estos procesos dotan de características específicas a la identidad cocalera en el Perú frente a procesos similares como el boliviano, aportando a la vez a la comprensión de la dinámica del movimiento, incluida su decisión de participar en la arena electoral. De otro lado, abordamos el discurso cocalero desde su conexión con tradiciones de pensamiento previas que han signado la vida política nacional y han sido adoptadas por los actores sociales en conexión con sus propias vivencias. Nos referimos a la tensión entre la vertiente de reivindicación

étnica y la vertiente que enfatiza la posición de clase. El discurso cocalero se mueve en esta tensión y es representativo de un debate aún latente en el país.

2.1 La historicidad cocalera: Principales procesos

2.1.1 Procesos migratorios y poblamiento de los Valles

La hoja de coca sólo puede ser cultivada en la denominadas zonas de “selva alta”, áreas ubicadas en la vertiente oriental de los andes entre los 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar y que en el caso del Perú abarcan 14 valles extendidos en 10 regiones¹⁸ (Ver anexos). Históricamente, estas zonas se hallaban poco pobladas por lo que desde fines del siglo XIX sucesivos gobiernos desarrollaron políticas de colonización para incentivar la migración a la selva alentando la producción de cultivos tropicales. Estos procesos dieron lugar a masivos desplazamientos que significaron experiencias de desarraigo cultural, reconfiguraciones de dinámicas productivas, cambios en la propiedad y nuevas experiencias organizativas que inciden en la identidad cocalera. Para la investigación nos centraremos en los procesos migratorios ocurridos en los Valles del Río Apurímac (VRA) en la región de Ayacucho y el del Alto Huallaga (VAH) en la región Huanuco.

El Valle del río Huallaga abarca los distritos de Tingo María, Daniel Alomina, Hermilio Valdizán, José Crespo y Castillo, Mariano Dámaso y Luyando en la provincia de Leoncio Prado en la región Huanuco y los distritos de Pólvora, Uchiza, Shunte y Nuevo Progreso en la provincia de Tocache, región San Martín. En esta zona, las primeras oleadas colonizadoras se producen a inicios del siglo XX a partir de actividades como la explotación del caucho y la extracción de la madera. Años después las migraciones se intensifican atraídas por el cultivo de coca al punto que desde la década del '40 la colonización se vuelve un proceso permanente, reforzada por la intervención del Estado que busca ampliar la frontera agrícola. Durante el primer gobierno de Belaunde en los años '60, con el fin de reducir la migración hacia Lima y eludir la reforma agraria, el Estado promovió el poblamiento de la selva intensificando los programas de colonización y priorizando la construcción de infraestructura vial destinada a incorporar los recursos de la Amazonía a la economía nacional (CVR, 2005). La construcción de la carretera

¹⁸ La división político territorial del Perú comprende 24 regiones o departamentos, subdivididas a su vez en 195 provincias y 1832 distritos.

Marginal de la Selva a lo largo del río Huallaga, facilitó el desplazamiento hacia esta región de miles de campesinos procedentes de la sierra de Huanuco, Ancash y Piura quienes multiplicaron por diez la población del Valle. Generalmente se trataba de peones de haciendas o mini fundistas de tierras empobrecidas que al decidir migrar rompieron los vínculos con sus lugares de origen, convirtiéndose en pequeños propietarios. Los agricultores rápidamente cayeron en el monocultivo de la hoja de coca, el producto de mayor rentabilidad en un contexto signado por el boom de la cocaína en manos de los carteles colombianos. La llegada de dinero ilícito en grandes cantidades reconfiguró valores y tradiciones culturales en campesinos que, sin mayor experiencia organizativa ni trayectoria política, se veían constantemente presionados por los agentes del narcotráfico y el creciente control estatal al cultivo. En 1978 la promulgación del Decreto Ley N° 22095 de represión al narcotráfico y control de los cultivos de coca, dio lugar a los operativos Verde Mar I y Verde Mar II, realizados por la policía, con el apoyo de la Marina de Guerra y la asesoría de la DEA. Estos operativos comprendieron la destrucción de secadoras de hojas de coca, así como el uso de dinamita para arrancar las plantaciones, cometiéndose graves excesos contra la población civil. Durante los '80 los altos precios de la hoja de coca continuaron incentivando la migración, aunque debido a la violencia muchos campesinos abandonaron temporalmente sus tierras para instalarse en ciudades intermedias, regresando luego de la “pacificación” ya en la década del '90 protagonizando procesos de intensa movilidad espacial.

El Valle del río Apurímac (VRA) comprende los distritos de la provincia de Huanta (Llochegua y Sivia), otros de la provincia de La Mar (Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui) en la región Ayacucho y los distritos de Quimbiri y Pichari, de la provincia de La Convención, en Cusco. Las primeras oleadas migratorias en esta zona pueden ubicarse a inicios del siglo XX cuando en 1909 el presidente Leguía promulgó la Ley de Tierras de Montaña N° 1220, que instaló en Ayna San Francisco la “Delegación de Tierras de Montaña” agencia encargada de legalizar la posesión de terrenos, convirtiendo a los colonos en pequeños propietarios. Sin abandonar las tierras de sus comunidades de origen, miles de campesinos pobres provenientes de la sierra de Huanta llegan a la selva a ocupar “terrenos despoblados” intensificando la agricultura a partir del desarrollo de ciclos económicos caracterizados por la alternancia de “booms” o producto motor: al boom del

barbasco en los años '40 le sucede el del café en los '50 expandiéndose los cultivos mientras el precio del producto es elevado y reduciéndose a su mínima expresión tan pronto bajan las ganancias. (Del Pino, 1996). Una segunda oleada migratoria tiene lugar en la década de 1960, con la apertura de la carretera Huamanga- San Francisco, que conectó la capital de la región Ayacucho a la ciudad más importante del VRA. Como manifiesta el Informe Final de la Comisión de la Verdad, el dinamismo económico del Río Apurímac contrastaba con la crisis de la sierra ayacuchana, tierra de comunidades estancadas en su crecimiento y limitadas a actividades agropecuarias poco productivas. En esta etapa, el boom de la hoja de coca, reemplazó al café como cultivo principal, acelerando el proceso de ocupación del valle por campesinos ayacuchanos al punto que para 1980, el VRA contaba con más de 100,000 habitantes, incluyendo mano de obra temporal que llegaba en épocas de cosecha. (CVR, 2005). A diferencia de lo que ocurrió en el Valle del Huallaga, ocupada por migrantes de muchas regiones del país, la colonización del río Apurímac es hecha principalmente por campesinos provenientes de las provincias del norte ayacuchano, que prolongan de esta manera un espacio cultural homogéneo. Es por ello que el cocalero del VRA es en su mayoría quechua hablante, mantiene sus tierras y sus parientes en su comunidad serrana y viaja a ella por lo menos una vez al año en que lleva a intercambiar productos. Sin embargo, al igual que en el Huallaga, la migración parte de una decisión individual e implica asumir una condición de pequeños propietarios en interacción con nuevos actores ajenos a la dinámica comunal, tales como los grandes comerciantes y los agentes del narcotráfico. La guerra interna detiene las migraciones debido a los altos niveles de violencia que los pobladores debieron enfrentar.

Tenemos así dinámicas de colonización que comparten elementos comunes pero a la vez se diferencian en puntos sustanciales, operando de distinta manera en la identidad del movimiento. En ambos casos por ejemplo, la acción de migrar es una decisión individual de comuneros serranos o peones sin tierra, que se instalan en la selva atraídos por los altos precios de la coca o por las políticas de promoción del Estado, convirtiéndose repentinamente en pequeños propietarios. A diferencia del caso Boliviano, donde buena parte de los colonos son en su mayoría mineros re localizados que trasladan su trayectoria sindical y política, los colonos peruanos cuentan con escasos repertorios organizativos o

de politización previa, debiendo relacionarse con actores muy poderosos – el narcotráfico, la DEA, la subversión- sin mayores herramientas para ello. De otro lado, en el caso del Río Apurímac los procesos migratorios tienen un componente étnico mucho más claro, evidenciado en el vínculo que se mantiene con la comunidad de origen y la procedencia ayacuchana quechuahablante de la mayoría de colonos. En el Huallaga, la migración proviene de diferentes zonas del país e implica una ruptura definitiva con el lugar de procedencia. Esto se ve reflejado en los procesos de auto identificación donde un valle se reconoce más fácilmente como indígena mientras el otro prefiere asumirse como campesino en una tensión discursiva que, como desarrollaremos más adelante, no llega a ser resuelta. En suma los procesos migratorios a los valles cocaleros se caracterizan por ser actos de ruptura orientados a la sobrevivencia en escenarios de muchos recursos y alta conflictividad, dando lugar a una intensa movilidad espacial y experiencias de reinserción y mestizaje que moldean decisivamente la acción colectiva.

2.1.2 El conflicto armado interno

Entre 1980 y el 2000 el Perú vivió un período de violencia política que enfrentó al Estado peruano con los grupos alzados en armas Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Las zonas cocaleras comprendidas en este estudio se cuentan entre las más afectadas por el conflicto pues la confluencia de Sendero Luminoso, los carteles del narcotráfico y las fuerzas armadas tuvo un saldo sumamente lamentable en términos de crímenes y violaciones a los derechos humanos.

En el Valle del Huallaga el inicio del conflicto armado interno puede situarse a fines de la década del '70 con la captación de los primeros docentes y estudiantes a las filas de Sendero Luminoso. Según la CVR, la rápida expansión de este grupo tuvo relación directa con la represión a los productores cocaleros que se desató con los operativos Verde Mar I y II. En un escenario sin partidos políticos ni organizaciones sociales consolidadas, Sendero capitalizó el descontento expresado en las protestas instalando importantes bases de apoyo en los distritos de Uchiza, Tocache y Paraíso. Para 1984 la presencia subversiva se había consolidado al punto que los senderistas capturaron en dos oportunidades la ciudad de Aucayacu, atentando repetidas veces contra la municipalidad y los puestos policiales. Este rápido posicionamiento de Sendero Luminoso se debió principalmente al rol de agente ordenador que ejerció en un contexto de auge del precio de la hoja de coca,

repliegue estatal y constantes abusos de los carteles del narcotráfico. Sendero era el que dictaba el precio de la hoja, hacía respetar el trabajo del cocalero, imponía cupos de venta a los narcotraficantes y resolvía conflictos comunales y familiares legitimando su presencia, tal como lo manifiestan diversos testimonios (CVR, 2004)

Sendero Luminoso tenía unas propuestas directamente para los agricultores por eso es que muchos campesinos, se han pegado porque defendían sus intereses, claro dentro de su programa. Yo discrepo totalmente con los que dicen que Sendero Luminoso vino a matar, veo la evidencia en mi persona; tenía unos vecinos interesados en quedarse con mi cocal que en ese tiempo producía 40 arrobas de hoja de coca, decían que yo era un vividor porque tenía mi cargo como Vice-Presidente de la Asociación de Agricultores y me acusaban de soplón pero Sendero vino y no me mato, no me asesino, entonces desde ahí yo lo veo en otro punto de vista¹⁹.

El control de Sendero en la zona se mantuvo hasta 1989 en que el Estado creó nuevas bases militares en Uchiza, Santa Lucía, Tocache y Madre Mía, desplegando una ofensiva militar coincidente con la disminución de los cultivos de coca por la baja del precio de la droga en el mercado mundial. La declaración de estado de emergencia en la zona intensificó la represión del ejército golpeando fuertemente a los cocaleros. En 1992, tras la captura de Abimael Guzmán y el autogolpe de Fujimori, Sendero es replegado y los campesinos deben replantear su apoyo a la subversión acogidos muchos a la Ley de arrepentimiento, que les permitía obtener cierta impunidad a cambio de entregar información importante. En 1994, con un Estado mucho más fortalecido en la zona, se implementó en la provincia de Leoncio Prado el “Operativo Aries” una operación contrasubversiva de gran magnitud, que tuvo como fin terminar con los últimos rezagos de la subversión. La espectacularidad del hecho y la cobertura periodística, fueron enmarcados como un triunfo inobjetable de las Fuerzas Armadas y en especial del Presidente Fujimori, empeñado en su reelección. Una vez completada la “pacificación” el ejército asumió el control directo de la zona vía los Comandos Político-Militares, que reemplazaron a toda autoridad civil, conviviendo con una población adversa, económicamente devastada, sin organizaciones sociales representativas y fuertemente golpeada por años de “política armada”.

En el Valle del Río Apurímac el inicio del conflicto armado interno puede situarse en 1982 cuando las primeras columnas senderistas llegaron a la zona pretendiendo apoyar

¹⁹ Entrevista realizada a Juan H.R, agricultor cocalero del Valle del Huallaga por Anahi Durand. Tocache, 23 de enero del 2008. Sus apellidos se mantienen en reserva a pedido del entrevistado

las luchas de los campesinos por asumir la comercialización de sus productos. La situación se agravó en enero de 1983 cuando el Estado asignó la lucha contra subversiva a la Infantería de Marina, cometiendo "los navales" graves abusos como el asesinato del líder Julio Orozco Huamani. Con dirigentes encarcelados, asesinados y otros desplazados por la violencia, se detuvo la naciente organización campesina del Valle y la prioridad pasó a ser la autodefensa. A partir de 1984, con el fin de contrarrestar esta violencia, surgen autónomamente del Estado los comités de "Comités de Autodefensa" (CAD), conformado por los pobladores varones de la zona, ya fueran productores de coca, frutales o diversas ramas productivas. En este mismo período se establecieron redes de acopio de coca y producción de pasta básica de los carteles del narcotráfico. Según la CVR se estableció una alianza temporal de las CADs con narcotraficantes colombianos y mexicanos, que pagaban "cupos"²⁰ en pleno boom del precio de la cocaína entre 1984 y 1986. Los cupos permitieron a las CADs comprar armas antes de que el gobierno las entregara, formando grupos de ronderos dedicados a tiempo completo conocidos como los "rentados" (CVR, 2005) La violencia y la indiferencia estatal, justifican para los productores el incremento del cultivo de coca y su comercialización al narcotráfico, aun sabiendo que esto es un delito. Difícil sin embargo, hablar de situaciones delictivas en un contexto donde la guerra trastoca los valores, haciéndose cotidiano robar, matar, violar o vender droga. Los dirigentes de la época no niegan la alianza con el narcotráfico, por el contrario la defienden, tal y como señala Francisco Barrantes "Pachín":

Seria mentir negar que hubo una alianza estratégica narcotráfico y autodefensas. Esa alianza hizo que la gente tome fuerza, que se armen mejor los DECAS, por eso cuidamos a la coca, si no hubiera habido coca no hubiéramos logrado la pacificación.(...) Aquí se han hecho miles de operativos y todo el costo lo ha pagado la coca, además en tiempo de guerra la coca era el único producto que podíamos mantener por que tenia mercado local y salida²¹.

La pacificación del Valle del río Apurímac, dio lugar a un escenario de violencia generalizada, donde los distintos actores de la guerra (FF.AA, Sendero y CADs) cometieron numerosas atrocidades aún impunes. Sólo a fines de 1989, el gobierno entregó

²⁰ Los "cupos" corresponden a montos de dinero que debe pagar el narcotráfico u otro actor económico a los grupos armados a cambio de operar en sus zonas de influencia. Durante el conflicto armado tanto Sendero Luminoso como los CADs y el mismo ejército hicieron del cobro de cupos una práctica frecuente

²¹ Entrevista a Francisco Barrantes, de apelativo "Pachín" jefe del Comando de Autodefensa de Pichari entre 1985 y 1990 y presidente de la Federación de Productores de Hoja de Coca que funcionó hasta el 2002 en que se disolvió para dar lugar a la Federación de Productores Agrarios del Valle del Río Apurímac (FEPAVRAE). Realizada por Anahí Durand. Lima, 16 de Agosto del 2007.

armas a las Autodefensas estableciéndose una relación de coordinación más fluida con el ejército. A partir de 1993, la violencia política declina en la zona, Sendero Luminoso es replegado selva adentro y los Comandos Políticos Militares asumen el rol de autoridades locales. Luego de la pacificación, los CADs conservan cierto nivel de influencia política, siendo sus principales líderes los que luego emprenden el esfuerzo de reconversión identitaria como productores de coca tal como lo desarrollaremos más adelante.

El proceso de violencia política involucra a los actores de ambos valles cocaleros, tanto en sus vivencias personales – la mayoría de los pobladores han sido afectados directamente- como en su dinámica de colectividades enfrentadas a situaciones límites. Ante escenarios de constante violación a los derechos humanos y cerrada polarización, los campesinos cocaleros optan por Sendero o por el ejército según sus intereses del momento, pues la guerra no permite planificaciones de largo plazo. En el Huallaga, la ausencia estatal y la temprana represión a los cocaleros, generaron una situación de descontento y abuso de los carteles que facilitó la aceptación de Sendero Luminoso, organización que se presentaba como una alternativa de orden y “mano dura”. En el Río Apurímac, la población, mucho más en contacto con los abusos que Sendero cometía en la sierra, optó por enfrentarse a la subversión organizando los Comités de Autodefensa, generando sus propios vínculos con el narcotráfico y alianzas con el ejército. Pese a estas reacciones distintas ante la violencia, el saldo en ambos valles es el mismo en términos de militarización y represión de toda organización social cuyo fin no fuera la autodefensa. Es también similar el impacto del conflicto armado pues tanto en el Huallaga como en el Apurímac, una vez superada la etapa más álgida de conflicto, los campesinos construyen la identidad cocalera sobre los códigos aprendidos en la guerra. La confrontación radical, la constante polarización y las tendencias autoritarias, son algunas de estas “herencias” que impregnan el nosotros cocalero.

2.1.3 Fujimorismo y clientelismo político

Un tercer proceso histórico que incide significativamente en la identidad cocalera es el período de gobierno fujimorista y la forma de relación clientelar que estableció con las organizaciones sociales que existían o fueron creadas luego de la “pacificación” de las zonas cocaleras. Con la finalidad de hacerse de una base social que facilitara su

permanencia en el poder, Fujimori implementó una red de instituciones orientadas a organizar el “apoyo directo” del Estado, despreciando la mediación de los partidos y promoviendo liderazgos locales con los cuales coordinar su campaña proselitista. En el tema droga, se promovió la denominada “Doctrina Fujimori” que en la práctica significó altos niveles de permisividad frente al narcotráfico dado el grado de corrupción que alcanzaron las Fuerzas Armadas y la estrategia de priorizar el enfrentamiento con la subversión antes que con el narcotráfico. Implicó también, en un contexto de baja en los precios internacionales de la cocaína, coordinar programas de desarrollo alternativo, introducir a la cooperación internacional y hacer coincidir el aparato clientelar del régimen a la realidad de las zonas cocaleras.

En el Valle del Río Apurímac, luego que Fujimori reconociera el papel de los CADs (denominados coloquialmente “ronderos”) presentándolos como aliados de las Fuerzas Armadas y defensores de la patria contra el terrorismo, estos se constituyeron como aliados claves del gobierno. El VRA fue considerada por el fujimorismo una de sus zonas de acción prioritarias creándose 6 de los 10 distritos territoriales que hoy existen. Junto a estos gestos políticos orientados a fortalecer la alianza con los ronderos, el fujimorismo instaló una serie de agencias estatales destinadas a ejecutar la política asistencial del gobierno, tal es el caso del Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA) o el Fondo de Compensación Social (FONCODES) que privilegiaron el trabajo con los CADs y con las organizaciones de subsistencia como son los Comedores Populares y los Comités del Vaso de Leche. Junto a esto, para coordinar las acciones destinadas a sustituir los cultivos de coca y promover el desarrollo alternativo, se creó en 1996 la Comisión de Lucha Contra las Drogas (CONTRADROGAS). Las autoridades utilizaron los programas sociales para cooptar a la población, condicionando la entrega de alimentos o el apoyo a la actividad agrícola a la participación en actos de adhesión al fujimorismo. Los líderes ronderos, cada vez más abocados a la producción de hoja de coca, son quienes impulsan el proceso de reorganización de los campesinos, asumiendo a la vez el liderazgo en la coordinación con las distintas instancias de gobierno. En tal sentido van las declaraciones del ex dirigente cocalero Nelson Palomino

Francisco Barrantes, que había sido comando de la Autodefensa, retoma el trabajo de organización campesina la última mitad de los 90 (...). Pachin tenía una dinámica muy de protagonismo personal, él además siempre fue un hombre del gobierno, fue uno de los

grandes aliados de Fujimori en el Valle, trabajó con Hernando de Soto y con Hugo Huilca, que fue candidato al congreso por Cambio 90. Ellos conseguían fondos, apoyos para la población y a cambio ya todos sabían por quién votar.²²

La buena relación entre los ronderos y el gobierno fujimorista permitió a los campesinos continuar sembrando coca, negociar con los programas de Desarrollo Alternativo y agenciarse de fondos para reemprender la organización. Esto sin embargo tuvo un costo en términos de ceder autonomía a un régimen que en aras de consolidar sus clientelas flexibilizó considerablemente los niveles de permisividad frente a la coca. Asimismo, las autoridades civiles y las militares siguieron una pauta de trato con las organizaciones sociales y los líderes, que favorecieron el caudillismo de determinados líderes, quienes ante la crisis de los partidos políticos, concentraron la interlocución con la autoridad, dependiendo de su intermediación la consecución de beneficios.

En el Valle del Huallaga, dadas las características distintas de la etapa de violencia y el apoyo conseguido por Sendero, el régimen fujimorista extendió su red clientelar en base a otros operadores, siendo el Ejército Peruano el encargado de organizar el contacto con la población. Hasta finales del '95, con el pretexto de priorizar la lucha contra la subversión, no se emprendieron acciones de erradicación forzosa de cocaleros, enfocándose todas las acciones a derrotar a Sendero y demostrar a la población que no debían apoyarlo. Esta nueva estrategia implicó reforzar los operativos militares pero también la realización de “campanas cívicas” de acercamiento a los pobladores, atendiendo a sus necesidades concretas. Los destacamentos policiales y las bases militares contra subversivas se involucraron en la construcción de carreteras, asfaltado de veredas, campeonatos deportivos, reparto de víveres entre otras acciones que los acercaron a la ciudadanía paliando los efectos de la represión que se ejercía paralelamente.

Desde mediados de los 90 la situación cambia radicalmente, sobre todo a partir del 95 con la primera campaña de reelección de Fujimori. Entonces el ejército hábilmente cambia y por un lado desarrolla su política asistencialista y por otro lado arremete con represión: garrote y zanahoria. Sucede algo que nunca habían visto las comunidades acá, un día viene el ejército allanando las casas, deteniendo gente, matando dirigentes y otro llega a construir carreteras,

²² Entrevista a Nelson Palomino, ex Secretario General de la FEPAVRAE y ex Presidente de la CONPACCP, realizada por Anahí Durand, Lima 10 de septiembre del 2006.

*repartir alimentos. Era algo extraño ver represión y apoyo social...el garrote y la zanahoria como dicen, [...]*²³

La inexistencia de organizaciones sociales consolidadas facilitó la presencia del Ejército como punta de lanza del fujimorismo en la zona. A cambio de este apoyo incondicional al gobierno y los jefes militares se beneficiaron del negocio de la droga tal es así que, burlando la presión norteamericana, los grandes narcotraficantes pudieron operar en el Huallaga sin problemas, entregando a cambio de la complicidad militar exorbitantes sumas de dinero²⁴. (Soberon, 2004). Progresivamente llegan también a la zona las agencias estatales del gobierno (PRONAA, FONCODES) que, sin alcanzar la importancia y cobertura del VRA, consiguen imponer una pauta de apoyo clientelar a la población, promoviendo principalmente las organizaciones de subsistencia conformadas exclusivamente por mujeres. Decenas de Comedores Populares y Clubs de Madres son creados bajo el impulso estatal, incrementándose la red de apoyo asistencial y la dependencia de la población a los y las líderes que se consolidan como intermediarios para la gestión de beneficios. A inicios del 2000, estos líderes surgidos en la etapa fujimorista, juegan un papel importante en la reorganización de los productores cocaleros.

Tenemos así que la pacificación de los dos valles por el gobierno de Fujimori supuso la implementación de una política asistencial, orientada a crear una red de clientelas que aseguraran el apoyo al régimen y su objetivo de mantenerse en el poder. Para ello, según la realidad de cada zona, el fujimorismo contó con distintos operadores y aliados, aunque el impacto que esta acción tuvo en la identidad del movimiento cocalero sea similar. En el VRA, la alianza entre el Estado y los Comités de Autodefensa, permite a los ex comandos ronderos posicionarse como interlocutores válidos con el Estado, manejando relaciones claves que los legitiman ante la población y que les permiten, cuando baja la intensidad de los enfrentamientos, reorientar sus actividades como cocaleros sin mayor problema. Se consolidan así liderazgos muy fuertes que dirigen la organización de modo personalista y en estrecha vinculación con las instituciones y autoridades fujimoristas que les facilitan recursos a cambio de apoyo político. En el

²³ Entrevista a Pedro Arevalo, ex dirigente de la Asociación Productores de Tocache, realizada por Anahí Durand en Tingo María 11 enero 2008

²⁴ Sólo después de la caída de Fujimori quedó al descubierto el alto nivel de corrupción castrense y el dinero ilícito concentrado por los mandos entre quienes destacan los generales Bellido y Hermoza Ríos.

Huallaga el proceso es distinto en la medida que el apoyo a Sendero fue mayor y no se dieron organizaciones autónomas como los CADS. Es por ello que la represión militar estuvo acompañada de la implementación de “campañas cívicas” desarrollando el Ejército distintas acciones que lo acercan al pueblo y lo colocan como operador del gobierno. Posteriormente también se instalan otras agencias que promueven la creación de organizaciones sociales como los Comedores y Clubes de madres, repitiendo el esquema de favores por adhesión política. Dada su relación con Sendero y el papel subordinado que tienen frente al poder militar, para estos nuevos líderes es más complicado asentar su legitimidad y reconfigurar sus actividades como cocaleros aunque finalmente también se valen de su liderazgo personal y su capacidad de mediación para hacerlo. En ambos valles, la identidad que construyen los cocaleros ésta moldeada por los hechos de este período, particularmente la relación clientelar y la tendencia personalista de los líderes, persistiendo una tendencia a ver la política como intercambio de favores, y manteniendo una visión muy pragmática de las relaciones con las instituciones y los actores políticos.

2.2 El discurso interpelador

2.2.1 La tensión entre el clasismo y la reivindicación étnica

Abordar los discursos políticos en el Perú implica una investigación exhaustiva que incluya una genealogía de las ideas en discusión, sus principales exponentes y los respectivos contextos históricos que enmarcan los debates. Asimismo, teniendo en cuenta lo que Foucault denomina “condiciones de utilización”, debe tenerse en cuenta el conjunto de procedimientos a los que los impulsores de estos discursos apelan para transmitirlos y lograr su aceptación, tejiéndose una serie de usos y estrategias que pugnan por lograr legitimidad y hegemonía (Foucault, 1973). Dado lo acotado de la investigación, nos centraremos aquí en los discursos políticos que pueden agruparse en torno a la denominada “tradicción radical” y la pugna de dos marcos maestros de fuerte resonancia que conviven en su interior (Bendford y Snow, 2000)

Al hablar de una “tradicción radical” en el Perú nos referimos a los cauces referenciales de largo aliento que canalizan en la memoria determinados hechos y afirmaciones, los mismos que al ser ordenados por colectivos y agrupaciones políticas, adquieren pretensión de verdad y potencial movilizador. Según lo planteado por Renique

(2004) los inicios de la tradición radical en el Perú se ubican a fines del s. XIX y se nutren de cuatro componentes fundamentales: la frustración respecto al liberalismo criollo, la aplastante derrota en la guerra con Chile, la reivindicación de la cultura andina y el rechazo a las clases dominantes costeñas. Con base en estos hechos, se va gestando un horizonte de impugnación según el cual, para ser un país moderno el Perú debía de romper con su nostalgia colonial y centrar la mirada en el pasado andino. Al traducirse en discurso político y encontrarse con las masas populares en determinadas coyunturas, el pensamiento radical genera profundas crisis y permite la irrupción de nuevos actores. En el s. XX la tradición radical se imbrica con el marxismo siendo José Carlos Mariátegui quien, contraponiéndose a la ortodoxia de la Internacional Comunista, realiza el esfuerzo más serio por sentar las bases del “socialismo peruano”. Muy resumidamente, la propuesta mariateguista parte de constatar la especificidad del desarrollo del capitalismo en el Perú, caracterizado por la convivencia de distintos tiempos y etapas productivas. La permanencia de haciendas semi feudales y urbes en crecimiento reflejaban dicha situación, haciendo del problema del indio un tema fundamental que solo podía ser solucionado dentro de un socialismo que respetara los valores culturales andinos y a la comunidad indígena como organización social. En paralelo, el líder del APRA Haya de La Torre se distancia del socialismo y plantea una “síntesis” entre elementos nacionalistas tomados de la revolución mexicana y conceptos ideológicos provenientes del marxismo. La tradición radical hereda del APRA la tendencia al vanguardismo y la vertiente caudillista mesiánica, mientras del marxismo de Mariátegui toma su raigambre insurreccional y la vocación por entroncar el socialismo con las demandas indígenas. El APRA y la izquierda son vertientes distintas de la misma tradición, aunque el primero atrapado en las luchas de la real politik se aleja de esta línea, dejando a los diversos partidos de izquierda pugnando por el legado de Mariátegui. Las iniciativas pro indígenas de los años 30, las luchas por la tierra en los 60 y el maoísmo de Sendero Luminoso en los '80 son algunos de los momentos y ramificaciones ideológicas inscritas en la tradición radical. En todos ellos, la densidad de los debates sobre “la cuestión de la tierra” el papel del indígena y las masas campesinas, llevan a que en los actores sociales, persista una tensión entre una vertiente de revaloración étnica indígena y otra mas bien clasista campesina. Creemos que los

cocaleros heredan esta discusión resignificandola según su historicidad y experiencias particulares.

Como marco maestro inscrito en la tradición radical, las reivindicaciones de contenido étnico²⁵ han influido considerablemente en el sector de movimientos sociales, brindándoles elementos para organizar sus demandas. En términos históricos, esta corriente plantea volver la mirada hacia la sierra y la situación del indígena, ignorado por una Republica formada por criollos costeños que heredaron de la colonia taras y prejuicios raciales. En tal sentido, es crucial lo que De La Cadena (2004) denomina la “insurgencia intelectual provinciana” que alcanza su máxima expresión entre los años ‘20 –‘30 con Clorinda Matto o Enrique Lopez Albuja, escritores que tratan de dar una imagen positiva del indio y abogan por su plena incorporación a la vida política nacional. Se gesta así una suerte de nacionalismo andino, que revaloriza el Incanato como una civilización telúrica, un gran imperio del cual había que rescatar su herencia, presentando este pasado como fuente de legitimación para demostrar que el indígena, vía la educación y la tutela del Estado era capaz de contribuir a la vida nacional. Gonzáles Prada dota a esta revaloración, más bien literaria y patriarcal, de un componente político planteando desde una postura anarquista, una crítica radical a la clase política peruana. Prada propone la tarea de construir el “Perú verdadero” cuyos principales protagonistas serían el naciente proletariado industrial y las masas andinas. Sin embargo no profundiza en cómo lograr esta aglutinación, siendo Mariategui quien mejor sistematiza políticamente una propuesta socialista que toma en cuenta el problema del indio despojándolo de sus componentes idílicos y pasadistas. (Renique, 2007). Mariategui actúa como una suerte de eslabón entre posiciones ideológicas marxistas y la revaloración simbólica de lo indígena. Posteriormente, ya en la década del ‘60 las reivindicaciones étnicas cobran nuevamente protagonismo. De un lado, José María Arguedas da cuenta del folclore, las tradiciones y

²⁵ Respecto a lo que aquí denominamos “revaloración étnica” resulta pertinente distinguir este conjunto de demandas basadas en la etnicidad, del denominado “indigenismo” referido más bien a las políticas estatales promulgadas “hacia y para” los pueblos indígenas. Al respecto Raquel Gutiérrez y Fabiola Escárzaga, desarrollan una crítica de las políticas indigenistas que buscan una inclusión subordinada de los pueblos indígenas al modelo político predominante sustentado por élites criollas y mestizas. Por el contrario, para las autoras, los distintos movimientos sociales de identidad étnica surgidos las últimas décadas en Meso America y los Andes cuestionan las concepciones prevalecientes respecto al estado y la nación, planteando reformulaciones sustanciales en torno a sus derechos culturales y de autogobierno. Ver al respecto: Gutiérrez Raquel, Fabiola Escarzada coordinadoras, *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, UNAM-UAP-JP-UACM, México, 2006.

la problemática de las comunidades indígenas de la sierra sur, sentando las bases de la antropología peruana y abriendo paso a una corriente literaria provinciana que mira con alteridad su entorno rural. De otro lado, las luchas por la tierra en las haciendas generan una coyuntura de gran movilización social, en las cuales se hallan presentes diversos elementos étnicos, tales como el uso del quechua y las vestimentas tradicionales en las asambleas populares. Sin embargo la ideologización de la época, el mestizaje y la hegemonía de los partidos de izquierda entre otros elementos²⁶, impidieron que estos componentes simbólicos dieran paso a un movimiento político indígena cohesionado de base quechua hablante, a diferencia de lo que ocurrió en Bolivia o Ecuador. Al iniciar la década del '90, con un contexto favorable a las demandas de los pueblos originarios expresado en la declaración del decenio indígena de la ONU en 1995, la firma del el Convenio 169 y diversos movimientos étnicos en Meso América y los Andes, las reivindicaciones étnicas en el Perú recobran cierta vigencia como marco discursivo. Muchas demandas sociales adquieren mayor resonancia y legitimidad al ser enmarcadas en este horizonte de etnicidad. Así lo entienden la CONACAMI (Coordinadora de Comunidades afectadas por la minería) que se declaran abiertamente indígenas reclamando al Estado por los daños ambientales generados por las empresas mineras, lo mismo que la COPIP que viene de un proceso anterior poco exitoso por constituirse como una organización indígena nacional. En suma, la “reivindicación étnica” se caracteriza por la revaloración de la cultura andina como fuente de legitimidad y en la impugnación al Estado por que afiance su carácter democratizador, compartiendo un sentimiento de exclusión frente a un país que desde su formación como república y hasta nuestros días, da la espalda a la sierra. El movimiento cocalero, con distintos énfasis según los valles, hereda y se asume parte de este marco de reivindicación étnica.

En cuanto al clasismo como marco maestro, éste se constituye en un discurso fundacional para el movimiento de trabajadores y opera como referente prioritario del sector de movimientos sociales a nivel mundial durante casi todo el s. XX. Como discurso, el clasismo se funda en los planteamientos marxistas sobre la organización de las sociedades en clases sociales. La adscripción de un individuo a determinada clase obedece

²⁶Sobre la especificidad del proceso de movilización indígena en Perú y su comparación con Ecuador y Bolivia puede verse la bibliografía citada en el capítulo I.

a criterios principalmente económicos, siendo la burguesía dueña de los medios de producción y el proletariado que vive de su salario, las dos principales clases del capitalismo. El “clasismo” refiere así a las identificaciones generadas por los actores, articulando discursos que apelan tanto a la situación laboral compartida como a los valores y condiciones de vida comunes (López, 1997). En el Perú, los inicios del discurso clasista tienen como exponente a Gonzalez Prada, quien desde las Universidades Populares hizo un arduo esfuerzo por acercarse a las nacientes clases obreras limeñas. En su propuesta de socialismo peruano Mariategui reconoce a la lucha de clases como el motor del cambio social, realizando serios esfuerzos para que los obreros que se incorporen al Partido Comunista Peruano desarrollen una identidad clasista con tradiciones y manifestaciones culturales propias. En ese entonces hablar de clases era referirse a los obreros urbanos o a los campesinos de los enclaves azucareros de la costa norte, es sólo con el colapso del sistema de hacienda y las luchas por la tierra la década del '50 que los indígenas andinos, asumen su reivindicación como clase campesina. Es decisivo en este proceso la acción de los partidos de izquierda, que tras la muerte de Mariategui escinden el PCP en múltiples facciones marcadas por la disputa Chino- Soviética. En 1958 la exitosa toma de las haciendas cusqueñas de La Convención y Lares lideradas por el troskista Hugo Blanco, dota de vitalidad al clasismo serrano, cobrando fuerza en la izquierda una tendencia a considerar al campesino como sujeto del cambio social en un país donde la mayor cantidad de las tierras andinas permanecía en manos de unos cuantos terratenientes blancos o mestizos. Se suceden movilizaciones ocupaciones de tierras en todo el país, mientras la izquierda principalmente en su vertiente maoísta alienta la conformación de sindicatos y federaciones campesinas locales cobrando protagonismo la Central Campesina del Perú (CCP). La dictadura de Velasco institucionaliza este “campesinismo clasista” como eje de identificación, asumiendo el Estado esta categoría para tratar el problema indígena: la reforma agraria reconoce a las comunidades indígenas como campesinas y transforma muchas de las haciendas en Cooperativas Agrarias, buscando incorporarlas en un patrón moderno de producción. En la década del 80, el grupo maoísta Sendero Luminoso inicia la “guerra popular” y consigue una presencia importante en la zona andina moviéndose muy bien dentro de la cultura indígena – sus militantes conocían el quechua y usaban la simbología andina- pero en base a una predica campesinista que no

incluye planteamientos étnicos²⁷ (Montoya, 1998). Vemos así que a lo largo de la historia contemporánea el clasismo campesinista logra cierta hegemonía como discurso de identificación de los movimientos andinos. Creemos que este arraigo, tal como afirma Flores Galindo, se debe a que :

El clasismo en sus inicios se limitó al reducido número de obreros sindicalizados y a las empresas del sector industrial, de ahí salieron los grupos de obreros pensantes dirigentes que renovaron el socialismo peruano. Pero el clasismo se propalo por otros sectores, dejando de ser una ideología para convertirse en una manera de encarar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado (...) El clasismo implica una concepción diferente de la democracia, reclamando un igualitarismo social, una reformulación de las relaciones sociales, una nivelación desde abajo.” (Flores, 1999: 59).

En una sociedad tan segmentada con la peruana, este discurso sintoniza muy bien con la necesidad de identificación de actores que en otro contexto pudieron haberse asumido como indígenas. Aunque con la crisis de la izquierda el clasismo haya perdido algo de su resonancia primigenia, su legado ha calado profundamente en actores que, como el movimiento cocalero, mantienen muchos de sus enunciados como eje referencial para sus propios discursos.

2.2.2 El discurso compartido por el movimiento cocalero

Antes que plantear una definición cerrada del discurso cocalero como una construcción inamovible, lo que se pretende es caracterizarlo en relación al proceso de construcción identitaria del movimiento. Ello implica en primer lugar tener en cuenta lo que Laclau (2006) denomina el “lugar de articulación discursiva”, es decir el espacio territorial y temporal desde donde se construyen las afirmaciones y se las presenta a la sociedad. En segundo lugar requiere aludir a la permanente tensión entre los dos principales marcos maestros de la misma: la reivindicación étnica y el clasismo. Como se mencionó, al asumir que la identidad se halla abierta a diferentes elecciones estratégicas, los actores pueden inscribirse en un continuum radical pero a la vez oscilar de un marco a otro según el peso de los componentes étnicos, los actores partidarios de la izquierda, las orientaciones de los

²⁷ Es importante reseñar lo mencionado por Fabiola Escarzaga para quien si bien Sendero Luminoso no se asume como movimiento étnico incorpora mayoritariamente a población indígena y mestiza a la cual involucra en una guerra popular de tácticas diferencias. La insurgencia senderista se alimentó así de la violencia que el sistema de exclusión étnica vigente acumuló en el Perú durante siglos y potenció su capacidad destructiva (Escarzaga, 1999 ;60)

líderes o las evaluaciones compartidas acerca de lo favorable o no de enmarcar las demandas en repertorios más amplios.

Respecto al espacio de articulación discursiva, este refiere al lugar marginal que los actores amazónicos en general y cocaleros en particular, ocupan dentro de la “tradicción radical”. Tal situación obedece a la poca importancia que la Amazonía tuvo para los pensadores que dieron forma al radicalismo peruano; al esbozar sus propuestas ni los pensadores vinculados a la revaloración étnica ni los marxistas tuvieron en cuenta la realidad de la selva, la configuración de sus actores sociales o el lugar que podría ocupar este vasto territorio en un proceso de transformación social del país. Mientras los andes ocupaban un puesto central, la montaña era vista como un espacio despoblado que para su integración debía ser colonizado y civilizado. Si bien la Amazonía era habitada por múltiples grupos nativos, la corriente étnica no los tomó en cuenta, considerándolos pueblos semi primitivos de cazadores y recolectores, sin una historia relevante como la Inca ni mayor apertura al mundo occidental. Asimismo, pese a que desde inicios del s. XX actividades extractivas como el caucho o la madera significaron un incremento poblacional y económico de ciudades como Iquitos o Moyabamba, no se desarrollaron elites intelectuales que reflexionaran sobre los problemas y posibilidades de su región como si ocurrió en las provincias andinas. La izquierda peruana por su parte, tardó mucho en mirar a la Amazonía ya fuera para incorporarla a sus debates o para organizar a las poblaciones que ahí se asentaban, compartiendo el imaginario de zonas vacías sin reparar en la especificidad de sus actores. Solo en los '70, con la intensificación de las migraciones por el primer boom cocalero, el panorama varía y la selva empieza a ser visibilizada por los actores políticos. De un lado, los mismos grupos indígenas amazónicos inician un proceso de unificación de demandas formando la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC). De otro lado, los partidos de izquierda marxista destacan cuadros a las ciudades amazónicas, impulsando la organización de los pobladores colonos, tales como profesores, agricultores del café o el arroz, logrando incorporarlos con cierto éxito a su ámbito de influencia. Vale resaltar que en ambos procesos los cocaleros quedan fuera pues los indígenas amazónicos los miran como foráneos y la izquierda como actores sumamente economicistas. El conflicto armado interno debilita tanto a las organizaciones indígenas como a los partidos de izquierda

siendo Sendero el principal referente campesinista en los valles cocaleros (CVR, 2004). A inicios de los años '90, ya avanzada la pacificación, las organizaciones indígenas constituyen la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDSESP) con un perfil orientado a la gestión de proyectos de desarrollo y a la constitución de partidos étnicos. Los cocaleros no son convocados en este esfuerzo uno por que los indígenas amazónicos no siembran ni consumen coca y dos por que continúan percibiendo a los colonos como agentes externos. Para este momento, los gremios campesinistas se hallaban sumamente debilitados y no pudieron sumar a las nuevas organizaciones cocaleras. Así las cosas, los productores cocaleros se insertan en la tradición radical desde su ubicación marginal (en un espacio ya marginal) a partir de su interacción con actores tan disímiles como Sendero Luminoso y las centrales étnicas. Es una apropiación difícil y selectiva, que teje una línea discursiva de enunciados que oscilan entre los marcos clasistas y étnicos, inclinándose hacia uno u otro según las condiciones socio históricas de cada Valle y según la lectura que el movimiento, y principalmente los líderes, hacen del contexto.

El marco clasista del discurso cocalero, se basa en la autoadscripción a una colectividad cohesionada por su lugar en la dinámica productiva, compartiendo una condición de clase como trabajadores de la tierra que define su ser campesino. A los cocaleros, en su mayoría migrantes andinos, no les era ajena esta línea campesinista; el proceso de reforma agraria desarrollado por Velasco impactó decisivamente en todo el mundo rural lo mismo que las ocupaciones de tierras impulsadas por los partidos de izquierda en la sierra. El componente igualitario al que elude el clasismo lo hizo rápidamente atractivo para actores constantemente criminalizados, que encuentran en su condición de trabajadores una fuente de legitimación; siendo el trabajo el componente que los dignifica e iguala. Posteriormente la predica de Sendero Luminoso dota de más elementos ideológicos a la identificación como clase campesina, logrando por casi una década afirmarse como discurso hegemónico en zonas cocaleras como el Huallaga. En este valle, la presencia senderista, sumada a factores como la dinámica receptora de migrantes procedentes de lugares muy diversos del país, hacen que la matriz clasista-campesinista adquiera más peso que la matriz étnica. A esto se suma una valoración positiva del mestizaje y la diversidad cultural, recurriéndose a la popularizada frase del escritor y antropólogo José María Arguedas “país de todas las sangres”. El ser campesino,

el trabajar la tierra opera como punto de partida para la identificación de un vario pinto conglomerado de familias con procedencias y culturas distintas. En gran medida este marco articula la cohesión interna del grupo y es la base de las demandas al Estado. La organización cocalera del Huallaga no rechaza la vertiente étnica pero suele inclinarse más hacia lo campesino.

*Los cocaleros somos campesinos de sangres diversas, somos todas las sangres, estamos en Tingo Maria pero tenemos diferentes culturas aquí. El Perú es muy grande, hay culturas muy distintas y siempre están mezclándose, encontrándose. Hemos avanzando tanto que hay una convergencia sólida y fuerte sobre lo que queremos hacer y ya somos capaces de tener un punto de llegada. Somos un movimiento campesino de productores agricultores de la hoja de coca, esa es nuestra base, nuestra esencia de cocaleros*²⁸

Por otra parte, el marco discursivo de revaloración étnica también se halla presente en el movimiento cocalero no en relación con el proceso de organización étnica amazónica, sino desde la vertiente andina ya reseñada en la tradición radical. De esta forma, hay una intención compartida de sentirse parte del legado andino, sobre todo de la cultura quechua y sus tradiciones en las que la hoja de coca cumple un rol importante tanto en la socialización cotidiana como en la realización de determinados rituales. Es cierto que la procedencia serrana de la mayoría de los cocaleros facilita la reivindicación de estas posturas pero la movilidad social y espacial antes descrita hace que muchas veces estos productores ya no hablen quechua y tampoco “chacchen”²⁹ coca o lo hagan muy esporádicamente. Lo que parece existir más bien es una relectura del valor de la identidad étnica como un marco de referencia mucho más favorable a las demandas del movimiento, tomando en cuenta especialmente la experiencia boliviana y el contexto internacional favorable a los pueblos indígenas. Enmarcar la hoja de coca en el discurso étnico, como un componente central de la etnicidad andina, implica interpelar al Estado sobre el respeto a la diversidad cultural y el derecho a ejercer prácticas ancestrales. En el Valle del Río Apurímac, donde la migración de ascendencia andina fue bastante homogénea, no resulta difícil asumir esta matriz de reconocimiento. Esto es entendido tempranamente por Nelson Palomino, profesor bilingüe quechua- castellano que define al movimiento cocalero como una organización de “campesinos indígenas” unidos básicamente por compartir la cultura

²⁸ Elsa Malpartida, entrevista citada

²⁹ El “chacchado” refiere en el Perú a la masticación tradicional de hoja de coca, en Bolivia a esta misma práctica se le denomina “acullico”

quechua. Como puede leerse en sus declaraciones, hay una clara constatación de que el tema indígena se halla bien posicionado en la agenda pública, existiendo recursos que despiertan el interés de la cooperación internacional y en general de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). No se explícita un rechazo a lo campesino, pero la inclinación hacia el eje indígena como factor de reconocimiento e interpelación se halla mucho más presente

*Nosotros somos indígenas y estamos en un gran proyecto de la nación quechua, nosotros estamos en avance en recuperar nuestros valores culturales, somos culturas vivas. Mi cultura es una mixtura de quechua y Asháninka y es nuestro deber moral defender eso. Las organizaciones cocaleras somos parte de este proyecto, somos campesinos indígenas, cultivamos la coca de nuestros ancestros, tenemos que hacer respetar. Es cierto que ahora hay una cantidad de grupos indígenas pero con la finalidad de llenarse los bolsillos, las grandes ONGs identifican al pobre hacen su proyecto y ya esta se embolsan la plata [...]*³⁰

Tenemos así un discurso radical atravesado por la tensión entre las posturas igualitarias del clasismo y la afirmación de la diferencia propias de las reivindicaciones étnicas. A nivel de la estructura cocalera nacional, esta situación va a resolverse con la inclinación por uno u otro marco referencial de acuerdo a los momentos de la acción -la protesta o la participación electoral- pero a la vez va a generar evaluaciones distintas del contexto que culminan en distanciamientos y hasta rupturas.

3. Articulación orgánica

El segundo eje que consideramos central en el proceso de constitución de un movimiento social son las formas organizacionales asumidas. Los canales orgánicos, las estructuras de coordinación y los liderazgos regionales y nacionales, son elementos que hacen posible la acción colectiva permitiendo al grupo actuar con cierto orden. De esta forma, se distribuyen responsabilidades, se asumen compromisos y se tejen redes con otros movimientos, dando mayor consistencia a las demandas. Las experiencias previas actúan como referentes organizacionales de las nuevas generaciones mientras que el contexto político influye favoreciendo o limitando las posibilidades de organización. Para el caso cocalero en primer lugar detallamos los dos principales momentos organizativos cruzados por el conflicto armado interno. En segundo lugar nos centramos en el proceso de

³⁰ Nelson Palomino, entrevista citada.

articulación nacional, signado por la transición democrática y el rol que juegan los líderes en la conformación de la CONPACC.

3.1 Construyendo la organización cocalera nacional

3.1.1 Primeros esfuerzos (fallidos)

Para contextualizar el análisis, debe partirse de la diferenciación entre valles de productores de hoja de coca “legales” e “ilegales” que se estableció en el Perú con la promulgación en 1964 del D.S N° 254 que limitó el cultivo de coca a aquellos valles de producción y consumo histórico tradicional (desde la época pre hispánica), ubicados básicamente en las zonas de selva de Cusco (La Convención y Lares) Puno (Sandia) y La Libertad (Ver Anexos). Estos valles son los únicos autorizados para vender el total de su cosecha al monopolio ENACO debiendo el resto de cocaleros (el 95%) sustituir sus cultivos de coca por otros productos agrícolas, algo que obviamente no se ha cumplido. Desde entonces los procesos organizativos de cocaleros legales y los ilegales corren por cauces separados pero en determinados momentos confluyen otorgando mayor resonancia a las demandas. Esto sucede en 1978 con la promulgación de la ley N° 22095 que ordenaba la reducción de los cultivos de coca a nivel nacional. Convocados por los cocaleros del Cusco agremiados en la Federación Provincial de Campesinos de la Convención, Yanatile y Lares (FEPCACYL) se funda el Frente Nacional de Defensa de los Productores de la Hoja de Coca (FENDEPCO) que agrupó a los valles legales del Cusco y Sandia y a los ilegales del Alto Huallaga y el Río Apurímac. Los principales objetivos de este Frente fueron exigir la derogatoria de la Ley 22095 así como frenar los operativos anti coca que se desarrollaban con intervención de la DEA. Sin embargo, el conflicto armado interno frenó esta iniciativa marcando un distanciamiento hasta hoy vigente entre los cocaleros legales y los ilegales en los cuales centramos nuestro análisis, específicamente en los valles del Huallaga y del Apurímac.

En el Valle del Río Huallaga, los primeros intentos organizativos se sitúan a inicios de la década del '60 en respuesta al informe técnico presentado por la OMS y aprobado por la ONU. Al limitar el gobierno peruano las zonas autorizadas de producción, los cocaleros del Huallaga fueron declarados ilegales, teniendo un plazo de dos años para sustituir sus cultivos de coca por otros productos agrícolas. En respuesta, se creó en 1964

el Comité de Productores de Coca de Tingo María que intentó sin éxito frenar las medidas represivas. Ya en 1978, tras la promulgación del Decreto Ley N° 22095, los operativos de represión a los cultivos ilegales se intensificaron, creándose la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) que funcionó con asesoría norteamericana en el Chapare boliviano y el Alto Huallaga peruano. Como reacción a esta ofensiva, los productores ampliaron la organización creando ese mismo año el “Comité de Productores de Hoja de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos” (CPHCLP-A) presidido por Tito Jaime Fernández. Esta organización desarrolló una serie de actividades y gestiones, entre las que destaca la huelga de noviembre de 1979 en la selva de Huánuco, San Martín y Ucayali. Para frenar las protestas cocaleras y cumplir las cuotas de reducción de cultivo, el gobierno ejecutó los operativos policiales Verde Mar I y II, con saldos dramáticos en términos de violaciones a los derechos humanos. Pese a esto, la organización cocalera no retrocedió y en marzo de 1980 convoca a un nuevo paro en el cual miles de campesinos se movilizan a la ciudad de Tingo María enfrentándose con los policías que arribaron desde Lima junto a integrantes de la Marina de Guerra y efectivos de la DEA. En 1982 el Estado arremetió nuevamente contra los cocaleros implementando los operativos Bronco I y II, con las mismas consecuencias negativas para los campesinos. El dramático desenlace de las dos huelgas y la represión policial desplegada, enfrentan a la población con el gobierno facilitando la entrada de la subversión. Conforme Sendero Luminoso consigue a sangre y fuego hacer respetar los intereses de los campesinos, la organización campesina se debilita siendo tachada de inoperante por los mismos subversivos. El asesinato de Tito Jaime, entonces alcalde de la provincia de Leoncio Prado y Presidente del CPHCLP-A, en abril de 1984³¹, pone punto final a esta etapa de organización cocalera autónoma. (CVR, 2004). En adelante, los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), promovidos por Sendero Luminoso se constituyen como único espacio de reunión. Estos organismos, menos estructurados que los sindicatos y aglutinadores de múltiples demandas ordenadas según las necesidades políticas definidas por el “Partido”, hacen que los pobladores se organicen en subordinación a los intereses senderistas. Ya en los '90 la pacificación

³¹ No se ha aclarado aún quién fue el responsable del asesinato del dirigente. Los indicios apuntan a sicarios del narcotráfico, aunque también se sospecha de Sendero Luminoso.

fujimorista y el cansancio de la población ante la violencia, terminan con los FEDIP aunque no se constituyan inmediatamente nuevas organizaciones.

En el Valle del Río Apurímac, los esfuerzos de organización siguen una tónica diferente en la medida que las migraciones que llegan a la zona no lo hacen exclusivamente para el cultivo de la coca, estando abiertas también a otros cultivos. En la década del 60, las oleadas migratorias traen un considerable incremento de los flujos comerciales surgiendo grupos de grandes propietarios y medianos comerciantes que imponen sus intereses pues controlan los medios de transporte para sacar los productos a diversos mercados del país. Para contrarrestar esta acción monopólica, los campesinos se agrupan en Cooperativas Agrarias de Producción y Servicios, formando entre 1970 y 1971 las Cooperativas “Valle del Río Apurimac”, “Unión Selvática” y “El Quinacho”. Pese a agrupar a buena parte de los agricultores, las Cooperativas tienen un accionar sectorial por lo que no satisfacen las expectativas de los socios que buscan tejer articulaciones más amplias. Es por ello que en 1979 se funda la Federación Campesina del Valle del Río Apurímac (FECVRA) cuyos socios eran mayoritariamente colonos que sembraban coca junto a productos como el café o el cacao. Es con el estallido de la violencia que la coca desplaza a todos los cultivos volviéndose el prioritario (Del Pino, 1996).

El conflicto armado interno afecta el proceso organizativo en curso, marcando el fin de un interesante proyecto autónomo. Las primeras columnas senderistas provenientes de la sierra de Huanta incursionan en la zona en 1982 pretendiendo apoyar las luchas de la Federación de Campesinos del Valle del Río Apurímac (FECVRA) por asumir la comercialización de sus productos. Para ese momento, la FECVRA se había constituido como una de las más importantes organizaciones sociales de Ayacucho, reuniendo a cerca de 100 comités locales y más de 2000 campesinos que vivían una etapa de crecimiento económico y constante búsqueda de mercados. El discurso senderista no fue bien recibido, pero los subversivos decidieron operar por su cuenta saqueando el almacén de uno de los principales comerciantes de barbasco. Es así que en 1983 se instala el Comando político-militar³² a cargo de la Infantería de Marina, que consideró a La FECVRA una "fachada

³² Como parte de la estrategia contra subversiva diseñada por el Estado peruano los Comando Político militares eran la instancia dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas encargadas de coordinar los operativos militares y regir la vida política de las denominadas “zonas de emergencia. En la práctica estos organismos concentraron mucho poder, al punto que toda organización social debía contar

senderista" asesinando a su presidente Julio Orozco Huamaní (CVR, 2004). Con este asesinato y el desplazamiento a la ciudad de la mayoría de sus líderes, la FECVRA quedó descabezada y cesó en sus funciones. A partir de 1984 los campesinos se organizaron principalmente en los "Comités de Autodefensa" (CADs) que se expandieron por todo el Valle para enfrentar a Sendero. La situación de violencia, expresada en el cierre de carreteras y dificultades de acceso a la zona, hace que declinen todos los cultivos menos la coca que se impone como el principal producto, dada la presencia del narcotráfico que opera con la venia de las autodefensas. A fines de 1989, todos los distritos del Río Apurímac contaban con CADs, una forma de organización pensada para la guerra que al recibir asesoría del Ejército adopta su forma jerárquica y vertical, exigiendo a la población un apoyo incondicional, ya sea entregando alimentos, dinero o participando directamente en los enfrentamientos con la subversión. El discurso de los CADs es poco político, se basa en preceptos militares de defensa de la patria y valores nacionales. Al declinar la subversión, los comandos de autodefensa disminuyen la intensidad de sus acciones, pero mantienen su influencia política al punto que son ellos los que emprenden el esfuerzo de organización cocalera.

Estos primeros esfuerzos organizativos protagonizados por los cocaleros se desarrollan de manera reactiva a presiones del contexto. En el caso del Huallaga, dichas presiones se hallan vinculadas con las medidas prohibicionistas implementadas por el Estado a través de operativos de erradicación de los cultivos. En el caso del VRA las presiones provienen de los propietarios y grandes comerciantes que imponen a los campesinos sus intereses. Vale resaltar que ambos procesos configuran experiencias autónomas y representativas de las demandas de la mayoría de pobladores de las zonas cocaleras, que pese a no tener experiencias organizacionales previas ni grandes niveles de politización, ensayan articulaciones para defender sus derechos. Ante estas iniciativas, el Estado, las elites locales y la Izquierda (representada por Sendero Luminoso) reaccionan con violencia, buscando liquidar la organización antes que reconocerla como interlocutora y dar lugar al diálogo. No solo los gremios locales son debilitados por este accionar, también la FENDEPCO, primer intento de articulación cocalera nacional es despreciada

con su permiso para funcionar y acababan por reemplazar a las autoridades electas principalmente alcaldes distritales y provinciales. Los Comandos Políticos Militares operaron en las zonas de mayor presencia subversiva como el VRAE y el Huallaga hasta el 2000 con la caída de Fujimori (CVR, 2004)

por el gobierno. El conflicto armado interno se nutre de estas contradicciones entre el Estado y los cocaleros y es el punto de quiebre común en ambos procesos organizativos. Tanto el CPHCLP-A como la FECVRA tienen en el inicio de la guerra el fin de sus acciones, ya sea por la acción del Ejército o de la subversión que atentan contra sus líderes y reprimen a sus miembros. Las organizaciones que se crean durante los años de violencia, tanto en el Huallaga como en el Apurímac, carecen de autonomía, estando sumamente presionadas por los grupos en conflicto. Los FEDIP y los CADs comparten altos niveles de subordinación y una pretensión multiabarcadora que exige la participación de toda la población en torno a los objetivos que los “entes rectores” (Sendero o las Fuerzas armadas) definen como prioritarios. A fines de la década del '90, sellada la pacificación, todos los antecedentes organizativos reseñados – los autónomos y los subordinados- operan como referentes del nuevo impulso organizativo.

3.1.2 Nuevo impulso organizativo: Formación de la CONPACC

Superada la etapa de mayor violencia, los pobladores de los Valles cocaleros retoman sus actividades productivas en un escenario completamente distinto. La puesta al descubierto de distintas redes de corrupción al interior del fujimorismo y la nueva alza en los precios de la cocaína tras el desplazamiento de los carteles colombianos por las redes mexicanas, generan un nuevo impulso en la producción de hoja de coca y nuevas presiones de los Estados Unidos. En 1999 el gobierno de Fujimori a través del Proyecto especial CORAH (Erradicación en el Alto Huallaga), dependiente del Ministerio del Interior y con fondos norteamericanos, inició acciones de erradicación a los cultivos de hoja de coca, provocando las primeras protestas espontáneas. Estas medidas, sumadas a cambios en la Estructura de Oportunidad Política (EOP) que abre la transición democrática, marcan el desarrollo de tres procesos paralelos que llevan a la conformación de la CONPACCP.

El primer proceso corresponde a la reactivación de las redes organizativas en el Alto Huallaga a inicios del 2000, bajo el impulso de una nueva generación de líderes formados al calor del conflicto armado, entre quienes destacan Nancy Obregón en Tocache y Elsa Malpartida en Tingo María, ambas con experiencia dirigencial en las organizaciones de mujeres creadas durante el Fujimorismo. Los campesinos se pliegan a su convocatoria exigiendo al gobierno que detenga las fumigaciones de los mismos coteles que años atrás

había permitido cultivar. Los abusos cometidos durante las campañas de erradicación³³ indignan a los campesinos rompiéndose el precario equilibrio logrado por el gobierno en base a la estrategia de combinar represión y asistencialismo. El espacio para la protesta se amplía además por la golpeada presencia militar debido al destape de sus vínculos con el narcotráfico. Después de muchos años, se coordinan acciones como los bloqueos de carreteras y la marcha a Tingo María, la principal ciudad del Valle, siendo decisiva la presencia de Nancy Obregón.

*Yo había sido presidenta del Comedor Popular de mi distrito, yo había tenido liderazgo entre las mujeres (...) A inicios del 2000 empieza una erradicación compulsiva, y soy elegida representante de los campesinos. La policía entró a reprimir, a golpear, encontraban mujeres o niños y los golpeaban. Ahí empezamos a organizarnos, empecé a llamar, a organizar grupos de 500 hombres por compañías, por pelotón y empezamos a luchar, a enfrentar a los erradicadores ellos tienen armas pero nosotros teníamos la fuerza de la masa. Llegamos en marcha hasta Tingo María [...]*³⁴

Junto a estas acciones de protesta, se nombra también una delegación de 15 dirigentes entre hombres y mujeres que viajan a Lima para conversar con el gobierno. En esta conversación los cocaleros se contactan con profesionales vinculados al estudio de la coca como Ricardo Soberón y Hugo Cabieses, proponiendo al gobierno conformar una Mesa de Diálogo. El gobierno de transición, que sucedió a Fujimori tras su renuncia, accede a la formación de esta instancia. Así, por primera vez en casi dos décadas el Estado y los productores cocaleros del Alto Huallaga se sientan a conversar.

El segundo proceso se desarrolla paralelamente en el Valle del Río Apurímac. En esta zona se había priorizado el desarrollo alternativo y los campesinos, en su mayoría ex comandos de autodefensa, tenían una buena relación con el gobierno constituyendo la Federación de Productores de Hoja de Coca del Río Apurímac (FEPOHCRA). Esta organización entró en funciones en plena crisis del precio de la coca, por lo que se abocó principalmente a gestionar el apoyo de la cooperación internacional³⁵. En el 2001, en la coyuntura de las erradicaciones, la FEPOHCRA se ve desbordada por las protestas de los

³³En las acciones de erradicación grupos de civiles resguardados por la policía se desplazan hacia las parcelas para arrancar las plantaciones de coca, buscando a la vez pozas de maceración de cocaína.

³⁴Entrevista a Nancy Obregón, ex Vice presidenta de la CONPACCP y actual congresista de la República, realizada por Anahí Durand. Lima, 21 de agosto del 2008

³⁵Entre 1995 y el 2000, como parte de la política de “reconstrucción” de las zonas más afectadas por la violencia ingresan al Río Apurímac diversas agencias de cooperación internacional para financiar proyectos de desarrollo agrario que promueven básicamente la siembra de café y de cacao. Entre estas agencias destaca la cooperación alemana GTZ, la agencia Adventista ADRA y la norteamericana Winrock que funciona con fondos de USAID hasta fines de los '90 en que es reemplazada por CARE.

campesinos que exigen al gobierno que continúe con el apoyo que el fujimorismo les brindó en épocas anteriores. Líderes como Antonio Laynes y sobre todo Nelson Palomino, ambos ex comandos ronderos, asumen la dirección forzando un giro radical en la organización, al punto que ese mismo año 2001 cambia de nombre a Federación de Productores Agrarios del Valle del Río Apurímac Ene (FFEPAVRAE). La organización constituida asume una postura sumamente confrontacional frente al Estado, cuestionando los logros de los Programas de Desarrollo Alternativo y rechazando la arremetida represiva en las cuencas cocaleras esforzándose por tender puentes con los dirigentes de los otros valles, particularmente del Huallaga donde las acciones de protesta ya habían alcanzado primeras planas en la prensa nacional. La gran mayoría de pobladores se adhirió a estos esfuerzos.

*La FEPAVRAE toma mas impulso el 2001, cuando ya nos cansamos del desarrollo alternativo y se venían las erradicaciones. Aquí CARE Perú empezó a entrar con eso de que tienen que erradicar o sembrar tal cosa, y para nosotros era preocupación por que al final casi todos estábamos dentro de la ilegalidad, no estamos dentro del registro de ENACO. Motivo de ello, con Nelson Palomino como nuestro secretario general empezamos a emprender la organización y plantear al gobierno que no se erradique. Desde el nivel distrital por todo el valle empezamos a organizarnos, [...]*³⁶

El último proceso tiene que ver directamente con los cambios en la estructura de oportunidad política particularmente con la “transición democrática” que se abre en noviembre del 2000 tras la renuncia de Fujimori y la elección de Alejandro Toledo, en un nuevo proceso electoral convocado por el Gobierno de transición. Respaldado por un amplio consenso democrático, en un inicio el gobierno de Toledo se esfuerza por reformular la estrategia nacional frente a las drogas, tomando medidas como el nombramiento de Consejeros especializados y modificaciones a la institucionalidad sobre drogas disolviendo la inoperante oficina de CONTRADROGAS y creando en su lugar la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Hay un reconocimiento explícito del fracaso de la guerra a las drogas ejecutada por Fujimori y que había costado a los Estados Unidos cerca de 107 millones de dólares en desarrollo alternativo y 80 millones en operativos de interdicción. La intención era construir una política de Estado sobre el tema de drogas, que primero fuera consensuada con los

³⁶ Entrevista Alejandro Gutiérrez, ex secretario general de la FEPAVRAE y actual alcalde de Sivia, realizada por Anahí Durand. Sivia, 19 de enero del 2008.

partidos políticos y la sociedad civil y sólo después discutida con los Estados Unidos. (Cabieses, 2004). El empresario liberal Ricardo Vega LLona fue nombrado presidente de la DEVIDA desarrollando una gestión abierta al dialogo.

Estos tres procesos, las protestas en el Huallaga ante las erradicaciones, la oposición del VRAE al desarrollo alternativo y la nueva política gubernamental de apertura al diálogo, favorecen la unificación de las cuencas cocaleras³⁷. La oportunidad se concreta cuando DEVIDA institucionaliza la Mesa de Diálogo, que se reúne en Lima entre septiembre y noviembre del 2001 siendo invitados los dirigentes de todas las cuencas cocaleras del Perú para discutir los lineamientos de la nueva política estatal sobre drogas coca y desarrollo alternativo. Estas reuniones permitieron que los líderes se conocieran e intercambiaran puntos de vista, sentando las bases para la conformación del gremio nacional. A esta tarea se abocan con mayor énfasis cuando el gobierno de Toledo abdica de su postura inicial cediendo a los condicionamientos de Estados Unidos que exigían aplicar la política “coca cero” reanudándose las erradicaciones. Tras estas coordinaciones, el 20 de enero del 2003 se realiza en Lima el I Encuentro Cocalero Nacional, donde se funda la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) siendo nombrado presidente Nelson Palomino La Serna del VRA, Vicepresidenta Nancy Obregón del Huallaga y Secretaria de organización Elsa Malpartida de Tingo María. Entre los principales Valles que agrupó la CONPACCP se contaban entonces: El Valle del Apurimac Ene (12,000 afiliados) Alto Huallaga (9,500), Monzón (2500), Pichis Palcazú (1000) y Jaén San Ignacio (300). Queda claro que la CONPACC surge de la articulación de procesos locales que se desarrollan en paralelo y fuertemente mediados por los cambios del contexto político. La crisis del régimen autoritario de Fujimori implica una mayor presión por parte de los Estados Unidos para el reinicio de las acciones de erradicación de cocaes, lo cual indigna a miles de pobladores acostumbrados a la anuencia del régimen en este tema. Asimismo las múltiples protestas que se desarrollan en todo el país contra el fraude electoral, mantienen ocupado al gobierno, dejando mas espacio para la organización de los cocaleros en sus localidades. La reacción de los productores contempla el establecimiento de relaciones con profesionales que

³⁷ Un esfuerzo previo de unificación se dio en 1998 con la fundación de la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONAPA) de corta duración y que agrupó principalmente a los cocaleros del Cusco.

actúan como asesores y dotan de mayor consistencia a las demandas, colocándolos en mejor posición para negociar con el Estado. La renuncia de Fujimori y la elección de Toledo permiten la creación de una nueva institucionalidad, con directivos abiertos al diálogo que intentan ejecutar una política antidrogas nacional menos supeditada a los intereses norteamericanos. Los dirigentes cocaleros saben leer esta apertura y luego de años de represión militarizada confluyen en una sola estructura aunque esto no significa que los gremios locales pierdan poder o cedan niveles de autonomía. El esquema federativo de la CONPACC y sobre todo el peso de los liderazgos regionales, resultan fundamentales para entender su estructura nacional signada por distanciamientos, rupturas, re unificaciones y alejamientos definitivos. El cuadro N°1 resume los principales gremios cocaleros de carácter local, diferenciando el tipo de producción (legal/ ilegal), las distintas formas organizativas que asumen los cocaleros y las articulaciones nacionales a las que se adscriben. Destaca por ejemplo el caso de los gremios de producción legal que no se articulan a la CONPACCP y se organizan como Centrales Campesinas con un claro carácter sindical y un discurso clasista. En el caso de los valles ilegales, el tipo de organización predominante es la Asociación y la Federación, las cuales implican una confluencia de carácter territorial aglutinando gremios comunales y distritales, a la vez que articulan un discurso cruzado por la tensión clasismo –etnicidad ya descrita. Salvo el Valle del Monzon, el resto de valles cocaleros importantes se han mantenido afiliadas a la CONPACCP aunque esto no significa que no hayan existido conflictos y rupturas temporales, tal como lo explicamos más adelante.

Cuadro N° 1: Organizaciones cocaleras actuales

Nombre	Ambito	Ubicación	Tipo	Afiliación
<i>FEPCACYL</i> Federación de Campesinos de La Convención, Lares y Yanatile	Sub Regional Producción Legal	Región Cusco, provincias sub tropicales de La Convención, Lares y Yanatile	Central Campesina	Líderes: Genaro Cahuana No afiliada a la CONPACCP
<i>APCOCAS</i> Asociación de Productores cocaleros de la Selva de Puno- Alto Inambari	Sub Regional Producción Legal	Región Puno: localidades de Alto Inambari, Sandia Y Carabaya	Central Campesina	Líderes: Dario Huaman No afiliados a la CONPACCP
<i>APAHOCA</i> Asociación de Productores Agropecuarios y de Hoja de Coca de Padre Abad-Aguaytía	Sub Regional Producción Ilegal	Región Ucayali, provincia de Padre Abad, localidades de Aguaytía, Pampa Yúrac, Huipoca, San Alejandro y Anexos	Asociación de productores cocaleros	Líderes: Flavio Sánchez Afiliada a la CONPACCP
<i>FEPAVRAE</i> Federación de Productores Agrarios del Valle del Río Apurímac-Ene	Inter. Regional Producción Ilegal	Región Cusco: Pichari y Kimbiri Región Ayacucho: Anco, Santa Rosa, Sivia y Llochegua	Federación de Productores y Cooperativas Agrarias	Líderes: Nelson Palomino, Alejandro Gutierrez Afiliada a la CONPACCP
<i>CPHCLP- A</i> Comité de Productores de Hoja de Coca de la Provincia de Leoncio Prado-Tingo María	Sub Regional Producción Ilegal	Huanuco: Provincia de Lencio Prado, localidades Tingo María y anexos en el Valle del Huallaga	Asociación de Productores cocaleros	Líderes: Elsa Malpartida Afiliada a la CONPACCP
<i>APCT</i> Asociación de Productores Cocaleros de Tocache “Saúl Guevara Díaz”	Sub Regional Producción Ilegal	San Martín: provincia de Tocache, distritos y anexos en el Valle del Huallaga	Asociación de productores cocaleros	Líderes: Nancy Obregón Afiliada a la CONPACCP
<i>APCOVM</i> Asociación de Productores Cocaleros del Valle de Monzon	Sub Regional Producción Ilegal	Región Huanuco: Valle del Monzon	Asociación de productores cocaleros	Líderes: Iburcio Morales Afiliada a la Junta de Productores

Elaboración: propia/ Fuente: Entrevistas realizadas

3.2 El peso de los liderazgos: bases regionales de la CONPACCP

Uno de los rasgos centrales de la CONPACCP es la presencia de dos procesos regionales diferenciados – el del Valle del Río Huallaga y el del Río Apurímac- cada uno con liderazgos muy fuertes reacios a ceder el poder en pos de la consolidación de figuras nacionales. Tal como se explicó, los líderes ocupan un lugar fundamental en el proceso de

organización del movimiento definiendo metas y proponiendo estrategias. Esta fuerza radica en la posesión de un determinado “capital de liderazgo” compuesto por capital cultural, social y simbólico, que les otorgan mayor legitimidad, les permite tejer alianzas y les dotan de fuerza moral para detener actos de represión del Estado y fortalecer al movimiento (Erikson, 2007). Al mismo tiempo se nutren de traiciones organizativas generando aprendizajes que permiten a la organización evaluar el escenario y posicionarse en él de acuerdo a los objetivos del movimiento. En este punto nos centraremos en los procesos organizativos de los dos valles mencionados y las características de los liderazgos ahí establecidos que confluyen en la CONPACC.

3.2.1 Líderes y organizaciones coca leras en Valle del Huallaga

A partir de las protestas durante las erradicaciones de 1999 en el Valle del Huallaga se constituyen dos gremios locales. De un lado los cocaleros de las zonas articuladas a la ciudad de Tingo María en la región Huanuco re lanzan el Comité de Productores de Hoja Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos” (CPHCLP-A), desactivado en los ‘80 tras el asesinato de su dirigente Tito Jaime en plena guerra interna. En este esfuerzo es fundamental el trabajo de líderes que se quedaron en la región durante la violencia y otros que regresan pasado el conflicto y vuelven a cultivar la hoja de coca. Como presidenta del Comité es elegida Elsa Malpartida Jara de 45 años, nacida en la sierra de Huanuco e hija de agricultores que se desplazan tempranamente a estas zonas de selva. Veinticinco años atrás, Malpartida conoció a Tito Jaime y participó junto a él de ese primer esfuerzo organizativo, sufriendo la represión y el embate de la violencia a la par que aprendiendo a desenvolverse en la arena contenciosa y situaciones de conflicto. Pese a ese contexto ella y su familia permanecieron en el Huallaga e incluso lograron mantener productiva su parcela y constituir una empresa familiar de transporte de carga y pasajeros en la ruta Tingo María- Pucallpa. Hoy día, la dirigente posee un terreno en las afueras de la ciudad donde cultiva café, naranjas y una hectárea de coca. El haber salido adelante en esta etapa de conflicto le otorga reconocimiento público y aunque no cuenta con una reconocida trayectoria política previa, es elegida dirigente, representando al CPHCLP- A en la Mesa de Diálogo y en la CONPACCP.

De otro lado, tenemos el esfuerzo organizativo que protagonizan los cocaleros de las áreas articuladas a la ciudad de Tocache en la región San Martín. Estos valles, afectados en su totalidad por la violencia de Sendero, los carteles del narcotráfico y el ejército, no contaban con ninguna estructura organizativa, por lo que al ejecutarse las erradicaciones, los cocaleros se ven en la necesidad de organizarse para confrontar a la policía. Con el aval de los militares, que aun tenían presencia en la zona, los pobladores constituyen la Asociación de Productores Cocaleros de Tocache (APCT), que tras los enfrentamientos asume el nombre de “Saúl Guevara Días”, en homenaje a éste campesino herido por las balas policiales. Como presidenta de la organización es elegida Nancy Obregón, nacida en Lima de padres procedentes del departamento serrano de Apurímac, quienes tras vivir varios años en el barrio popular de San Juan de Miraflores en Lima, migran a la selva a mediados de la década del ‘80 en pleno conflicto armado instalándose en el caserío Santa Rosa del Mishoyo. En este lugar, junto a su esposo y sus cinco hijos, Obregón cultiva yucas, naranjas y una hectárea de coca. Su historia personal, representativa de la de miles de migrantes que afrontaron la violencia, y su buena conexión con los pobladores gracias a sus años de trabajo con las organizaciones sociales de mujeres (Comedor Popular) hacen que a sus 33 años Obregón se convierta en la dirigente cocalera más joven. Pese no tener una gran experiencia política previa, Nancy Obregón al desempeñarse como dirigente del Comedor Popular aprende a relacionarse en el terreno público y toma de esa experiencia las habilidades necesarias para organizar a los cocaleros y posicionarse como una de las cabezas más visibles de la CONPACCP, liderando luego la corriente favorable a la participación política del movimiento cocalero.

3.2.2 La FEPVRAE en el Valle del Río Apurímac:

Con el reinicio de las erradicaciones en el Río Apurímac la organización campesina existente experimenta un giro radical, defendiendo el cultivo de coca y cuestionando los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) impulsados por el fujimorismo. Las posturas en contra de las ONGs que canalizan los fondos de la cooperación internacional para la ejecución de los PDA, se radicalizan bajo la acusación de quedarse con dinero que debía ser para los campesinos. Al frente de esta corriente en la FEPVRAE se cuentan ex comandos de autodefensa más jóvenes y con acceso a los medios de comunicación,

particularmente las radios locales desde donde denuncian el anquilosamiento de la organización y sus supuestos malos manejos. A inicios del 2002 la FEPAVRAE elige a una nueva junta directiva, caracterizada por levantar una plataforma básica pero integradora, cuyo principal y casi único punto es la defensa de los cultivos de hoja de coca, y por definir una estrategia que prioriza la movilización a la negociación. El cargo de Presidente lo asume Antonio Laynes, pero el verdadero poder lo ejerce Nelson Palomino, quien es elegido como Secretario de Organización y Defensa. Palomino es sumamente representativo del poblador del VRA; de padres quechua hablantes procedentes de la sierra de Huanta, nace en Ayna en la selva de La Mar, donde su familia cultiva una parcela de cube, coca y café que les permite enviar a sus hijos a estudiar a colegios públicos de Huanta. Una vez concluido el colegio, Nelson Palomino vuelve al VRA a trabajar en la agricultura pero el conflicto armado afecta directamente a su familia cuando Sendero Luminoso asesina a su hermano mayor, hecho que lo decide a enrolarse al Comité de Autodefensa. Pasada la etapa de mayor violencia, el contar con secundaria completa le permite trabajar como profesor bilingüe quechua-español y como comunicador en la radio Doble A, entablando permanente contacto con autoridades y campesinos que llegan a la radio a realizar denuncias. La experiencia de Palomino en los Comités de Autodefensa y su labor como coordinador de los profesores bilingües en la zona, le permiten relacionarse con distintas instancias del Estado (el ejercito y la oficina local del ministerio de educación básicamente) dotándolo de una experiencia importante que luego pone en practica en la organización del gremio. Asimismo la buena sintonía con la población que logra desde la radio, le permiten posicionarse como uno de los principales dirigentes de la FEPAVRAE y posteriormente como el líder de mayor protagonismo en la CONPACC, siendo quizás quien más ha influenciado en las decisiones y acciones del movimiento cocalero nacional.

Las dos principales bases regionales de la CONPACC se articulan principalmente en torno a líderes que logran organizar el descontento de la población. Aunque finalmente el interlocutor en ambos casos es el Estado, cada valle cuenta con sus propios detonantes organizativos. En el Huallaga las erradicaciones conllevan enfrentamientos directos con la policía, generándose nuevas estructuras para la protesta y la negociación, puesto que estaban desactivadas o no existían desde la guerra. En el río Apurímac, las pugnas dentro

de la FEPAVRAE, gremio constituido para trabajar con un estado fujimorista en retirada, hacen que se imponga una nueva generación de dirigentes que exigen cambios en la gestión, asumiendo la directiva local e impulsando el encuentro de la CONPACCP.

Si analizamos el “capital de liderazgo” de los tres líderes más importantes -Elsa Malpartida, Nancy Obregón y Nelson Palomino- tenemos que el componente cultural es el más fuerte. Como casi toda la población de los valles cocaleros, los líderes comparten una historia común de migrantes pobres, valores y prácticas similares relacionados con la cultura andina, que en el caso de Palomino se expresa más claramente por el ascendente étnico en el VRA, siendo crucial que este líder hable quechua y chacche coca. En los tres casos, el peso del componente cultural les dota de legitimidad interna, refuerzan las demandas y facilita la organización de las cuencas y su movilización en momentos oportunos. Por el contrario, la posición de capital social es uno de los puntos más débiles. Debido a la posición marginal de los valles cocaleros, el carácter ilegal del cultivo y las trayectorias personales de los líderes signadas por el conflicto armado, sus posibilidades y habilidades para establecer alianzas políticas y tejer redes sociales que den mayor soporte a sus demandas son muy limitadas. Herencia de la guerra, la pacificación militar y la despolitización del período fujimorista, prima en los líderes una actitud polarizadora que suele aislarlos de otras organizaciones sociales, por lo que les resulta muy difícil adaptarse al entorno político, primando una tendencia a cerrarse sobre sí mismos. Finalmente el capital simbólico, entendido básicamente como la posesión y manejo del carisma que brinda al líder autoridad moral y respeto, es algo difuso de leer debido a lo localizado de los liderazgos. Quizás el único que en determinado momento despliega cierto carisma de llegada nacional es Nelson Palomino, pero este no le alcanza para contrarrestar la represión estatal que se ejerce contra él, logrando aislarlo e incidiendo en las disputas y fracturas del movimiento cocalero³⁸. Asimismo, los principales líderes toman como referentes experiencias previas que les permiten emprender con éxito la labor organizativa. Tanto la experiencia cocalera en Tingo María de los '70, la labor en el Comedor Popular o en los Comités de Autodefensa, son experiencias en las que Malpartida, Obregón y Palomino adquieren habilidades y repertorios que luego toman en cuenta para su propia labor conductora al frete de los cocaleros.

³⁸ Véase la explicación al respecto en el capítulo III.

Resumiendo lo expuesto, la identidad cocalera se caracteriza por compartir una historicidad signada por situaciones límite. La constante movilidad social que genera la migración, junto a la polarización radical como recurso de sobrevivencia durante la violencia y el personalismo clientelar de la etapa fujimorista, son algunos de estos rasgos de la identidad moldeados por la historia reciente de los Valles cocaleros. Antes que calificarlos como positivos o negativos, estos componentes de historicidad operan en distintos momentos obstaculizando o facilitando algunas decisiones del movimiento, dando cuenta de una apertura a diferentes estrategias y experiencias organizativas. De otro lado, la identidad cocalera logra articular un discurso político, que se reconoce en tradiciones y marcos de significado que establecen los límites del nosotros identificando oponentes y enunciando sus demandas. El discurso cocalero se inscribe en la tradición radical pero oscila entre sus dos principales marcos; el clasismo y la revaloración étnica. Los procesos de auto identificación donde un valle se reconoce más fácilmente como indígena mientras el otro lo hace como campesino, generan una tensión discursiva que, como desarrollaremos más adelante, no llega a ser resuelta pero tampoco impide la existencia de niveles de confluencia nacional. Justamente, esta confluencia se plasma en las formas organizacionales descritas cuyos antecedentes se remiten a la década del '70 con el primer boom cocalero, viéndose frenados por el estallido de violencia. Posteriormente, cambios en la estructura de oportunidad política, y el surgimiento de una nueva generación de líderes en los dos principales valles cocaleros dan lugar a un nuevo ciclo organizativo. Tal reactivación de los gremios locales se produce en reacción a arremetidas estatales como las erradicaciones o la crisis de los programas de desarrollo, generando dos procesos paralelos: el del Huallaga y el del Apurímac, que se encuentran en la Mesa de Dialogo convocada por iniciativa del gobierno de transición democrática. Si bien esta iniciativa no adquiere continuidad, facilita la constitución de la organización nacional, conformándose la CONPACCP bajo un esquema federativo que mantiene la dirección de los líderes de las principales cuencas, quienes no ceden poder local. Veamos ahora como la identidad, con su peso histórico y tensiones discursivas, y las estructuras organizacionales, con su tendencia reactiva y fuertes liderazgos, operan al confluir con determinadas estructuras de oportunidad política en el desarrollo de la estrategia dual asumida por el movimiento

CAPITULO III

LA DUALIDAD ESTRATEGICA EN EL MOVIMIENTO COCALERO

En el presente capítulo analizamos el despliegue de la estrategia dual del movimiento cocalero en tanto su capacidad de desempeñarse de forma relativamente exitosa en el terreno contencioso y las evaluaciones que encauzan la decisión de participar en el terreno electoral. En primer lugar realizamos un breve análisis del debate teórico sobre la representación política y el papel que desempeñan en ésta los movimientos sociales. Posteriormente, analizamos el desempeño del movimiento en la protesta, deteniéndonos en las principales acciones y repertorios desplegados, así como en las reacciones que se generan al respecto desde el Estado y los partidos políticos. En el tercer punto nos centramos en las condiciones del entorno institucional, analizadas como estructuras de oportunidad política que favorecen la participación del movimiento cocalero en la vía electoral. De un lado, atendemos a los cambios ocurridos en la EOP nacional que trae la crisis del Fujimorismo y el proceso de transición democrática en el Perú, que suponen reformas en la política anti drogas y a la legislación electoral. De otro lado, se cuenta la EOP internacional, destacando los acuerdos asumidos por el Perú con los Estados Unidos y el ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia que se consolida como un referente central en las acciones del movimiento cocalero peruano.

1. Dualidad Estratégica: representación política y movimientos sociales

¿Pueden los movimientos sociales articular intereses o esta tarea es únicamente función de los partidos políticos? Si tenemos en cuenta que actualmente las formas tradicionales de agregación de intereses experimentan sucesivas transformaciones reflejadas en la desconfianza en los partidos, la volatilidad del voto, la disminución de identificaciones partidistas y un ascendente protagonismo de los movimientos sociales, nos damos cuenta que cada vez más partidos y movimientos interactúan y comparten la arena política siendo ambos actores constitutivos de las democracias contemporáneas (Tavera, 2007).

La participación de los movimientos sociales en la arena política, nos remite al persistente debate sobre la “crisis de representación” que experimentan las sociedades

latinoamericanas, al punto que se ha vuelto casi una constante que actores no vinculados a partidos tradicionales consigan triunfos electorales; es el caso de Correa en Ecuador, Ollanta Humala en Perú o Evo Morales en Bolivia. Desde la Ciencia Política, las explicaciones a estos procesos han privilegiado el análisis de la figura del “outsider” y/o la debilidad del sistema de partidos. Tales enfoques sin embargo no incluyen la posibilidad de que el movimiento adopte una doble vía que alterna política contenciosa y política de representación. Para competir en elecciones el movimiento social puede generar el partido, puede aliarse con este si ya existe o puede hacer uso de su nombre, estableciéndose una amplia gama de interacciones que amplían considerablemente las posibilidades de la acción colectiva y sus ámbitos de desenvolvimiento. La identidad juega aquí un rol fundamental en tanto sea más o menos abierta a la participación electoral, lo mismo que la consolidación de estructuras organizativas que permitirían un mejor desempeño en la arena política. Antes de analizar la dualidad estratégica en el movimiento cocalero, creemos conveniente reflexionar sobre el concepto mismo de representación política.

1.1 Aproximaciones al estudio de la representación política

El estudio de la representación política como concepto nos remite en primer lugar a los ejes de discusión planteados por Hobbes respecto a cómo el soberano es autorizado por sus súbditos a actuar por ellos representándolos y garantizando la paz pública. Si bien Hobbes desarrolla una perspectiva que acaba por abogar a favor del absolutismo del monarca sienta las líneas del debate sobre la representación política en las que han profundizado tanto la filosofía como las ciencias sociales y la ciencia política. Con el desarrollo del pensamiento liberal en el S. XIX el concepto de representación política se liga al proceso de aglutinación y expresión de intereses desvinculados presentes en una sociedad y a la idea del sufragio como el mecanismo más adecuado para la elección de los representantes. Teóricos como Burke definen a la representación política como una tarea delegativa por la cual el representante pone por encima los intereses nacionales debiendo los grupos sectoriales o locales ceder poder en aras de la comunidad mayor. Se da por sentado así que el representante goza de autonomía para decidir cuáles son esos intereses nacionales por que “esta más capacitado” que aquellos a quienes representa (Pitkin, 1962).

En sentido contrario, para el liberalismo americano la representación política consiste en la articulación de intereses individuales, por lo que los parlamentarios deben tratar de reflejar éstos lo más fielmente posible. El representante debe ser un “delegado” de los representados, uno más con sus mismas vivencias y por lo tanto no puede emitir un juicio ni definir una postura ni decidir sin consultarlos previamente. En ambos casos la representación política se piensa como el mecanismo que permite a todos los ciudadanos participar en el gobierno vía el sufragio, eligiendo las autoridades únicamente entre los distintos partidos políticos. Siguiendo un enfoque liberal, Pitkin propone una definición de representación que abarca mecanismos, procedimientos y también significados:

Representación significa actuar en interés de los representados, de manera sensible ante ellos. El representante debe actuar independientemente; su acción debe implicar discreción y discernimiento. El representado debe ser también capaz de acción y de juicio independientes y no comportarse siempre como necesitado de cuidado (Pitkin, 1962: 233)

La representación política se da siempre en un nivel público y en las democracias implica que los representados puedan elegir y juzgar a sus representantes limitando la discrecionalidad de sus decisiones. Dentro de este mismo enfoque liberal, los partidos políticos son sumamente importantes pues establecen estructuras de funcionamiento y canales de interlocución por los cuales ciudadanos y gobernantes eligen o son elegidos; siendo vías privilegiadas de acceso a los puestos de gobierno. Actores como los movimientos sociales no son parte de la política representativa y deben recurrir a los partidos para hacer valer sus intereses. Para Sartori la representación es un acto de delegación de responsabilidades públicas en un representante que es elegido entre varios partidos por elecciones libres y competitivas. Sin adscripciones partidistas los sistemas de representación de las democracias modernas entran en una profunda crisis (Sartori, 1986). El acceso a los puestos políticos se restringe a los partidos lo mismo que la interlocución con el Estado, dando por sentado que los movimientos sociales quedan fuera de la dinámica de representación política.

Otro enfoque de aproximación al estudio de la representación es el denominado “post estructuralista” según el cual en determinados momentos el todo puede representar al conjunto. Laclau (2001) es uno de los principales exponentes de este enfoque y concentra su análisis en la representación política bajo condiciones democráticas, cuestionando a la teoría clásica el énfasis en que el representante transmita lo más fielmente posible la

voluntad de quienes representa. La función de representar no es simplemente transmitir la voluntad de los representados sino hacer creíble esa voluntad ante ciudadanos distintos entre sí. La voluntad del representante, aunque siempre sea más cercana a un grupo determinado, debe demostrar que este interés sectorial es compatible con el interés general, por lo que no puede comportarse como un agente pasivo. La representación política abarca así un proceso en dos movimientos: un movimiento desde el representado hacia el representante y un movimiento correlativo del representante hacia el representado. Antes que el hecho de elegir entre partidos y delegar autoridad a las autoridades electas, la representación contempla la tarea de incorporar demandas marginales que exceden las exigencias de su grupo. Por ello, una tarea importante del representante es transmitir puntos de identificación a los distintos actores sociales presentes en la sociedad, acortando la distancia entre el interés del grupo y el de la comunidad nacional. (Laclau, 2001: 209). La representación en su doble movimiento -desde los representados hacia el representante y desde el representante hacia los representados- suele generar una tensión entre particularidad y universalidad, entre homogeneidad y heterogeneidad pues una pluralidad de demandas tiene que encontrar su expresión en una de las partes. Se desarrolla así un proceso de homogenización sustentado en coincidencias e identificaciones donde los partidos juegan un rol importante pero no son los únicos actores, pues las voluntades colectivas pueden articularse en torno a un líder carismático, una demanda compartida o una organización sectorial. Si bien pueden existir diferencias muy grandes entre los grupos presentes en la comunidad, la presencia de partidos no asegura el cierre de una brecha que solo puede ser mediada por una representación a la que se considera legítima, capaz de condensar y transmitir determinadas demandas o aspiraciones. Por ejemplo, durante los años '80 en América Latina, el movimiento de derechos humanos logró representar la lucha contra los regímenes dictatoriales, adquiriendo la representación política un componente de expresividad donde el todo se reconoce en alguna de las partes, no necesariamente un partido político o una institución gubernamental.

En suma, el concepto de representación política refiere al proceso por el cual individuos y agrupaciones tejen articulaciones que les permiten consensuar demandas y expresarlas en la esfera pública. El proceso de identificación de intereses, y la elección de representantes que los concreten, son puntos fundamentales en los que las organizaciones y los partidos políticos entran en juego. Sin embargo como afirmamos aquí, junto a los

partidos también se cuentan los movimientos sociales, desarrollándose una serie de interacciones que complejizan la trama política de las democracias contemporáneas.

1.1.1 La relación entre partidos políticos y movimientos sociales

Detenerse en la relación entre partidos y movimientos nos remite a un debate en el cual de un lado, se cuentan los enfoques que oponen ambos actores, considerando a los partidos políticos como las instituciones a cargo de agregar y representar intereses diversos y a los movimientos como canales para demandar intereses específicos. Es el caso de Jenkins y Klandermas (1995), quienes definen a la política de representación como a la actividad que desarrolla el conjunto de organizaciones que pretenden representar y agregar los intereses de distintos grupos sociales, específicamente los partidos políticos y grupos de interés. En otro ámbito se cuenta la política de protesta, actividad propia de los movimientos sociales que ante la crisis de los partidos constituyen un rival potencial de estos en la tarea de reestructurar intereses y mediar en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Se da por sentado que los movimientos sociales por definición no pertenecen al ámbito de la representación política, buscando ser incluidos en esta esfera ya sea compitiendo o negociando con los partidos políticos. A los movimientos se les reserva el campo de la protesta social y la lucha contenciosa, desconociendo que los partidos no siempre son capaces de representar demandas que trascienden los límites de la política institucional, relacionadas con nuevas subjetividades como la ecología o el género.

Una mirada distinta a esta oposición binaria es la plantada por Kitschelt (1993), quien cuestiona los “enfoques cíclicos” según los cuales en un primer momento los movimientos surgen como expresiones de insatisfacción de los grupos oprimidos. En un segundo momento, deben tender lazos con los partidos formales, los cuales deben incorporar sus demandas y dar cabida a alguno de sus líderes. Una vez que partidos y movimientos coordinan, pueden corregirse los aspectos institucionales que no estaban siendo resueltos de manera correcta, sellándose acuerdos inter elites propios del declive del ciclo de protesta. Para Kitschelt, esto no sucede pues los movimientos siguen actuando y generan sus propios mecanismos de hacer escuchar sus demandas no siempre vinculados a algún partido. Para este autor lo que se produce en las democracias modernas es una “diferenciación estructural” que permite la coexistencia de distintos modos de articulación

de intereses, conviviendo movimientos sociales, partidos políticos y grupos de interés cada uno con alguna ventaja para resolver mejor determinados temas. Por ejemplo, los partidos tienen una mayor capacidad para actuar en la esfera de las políticas públicas pero se les dificulta procesar demandas sustantivas como por ejemplo las de defensa de la ecología. Los movimientos sociales tienen ventajas para abordar problemas sustantivos relacionados a demandas de inclusión, identidad o en general bienes públicos puramente intangibles, desempeñando un papel como canales de representación paralelos, complementarios y de mutua retro alimentación con los partidos políticos.

De otro lado, se cuentan los enfoques que buscan analizar las relaciones que se tejen entre política institucional y política de protesta. En esta perspectiva, Goldstone (2003) propone que cada vez más las instituciones estatales y los partidos políticos son constantemente interpenetrados por los movimientos sociales, estableciéndose límites difusos y permeables entre estos. Lo que se establece son interacciones recíprocas y relaciones de complementación donde la protesta social y la política institucional se encuentran en distintos sentidos. Por ejemplo, la participación política convencional tiende a remitir a temas generales y abarcativos, mientras la política contenciosa se enfoca a demandas concretas relacionadas con la identidad e intereses de los actores, las cuales pueden verse contenidas en las plataformas de los partidos sin perder su especificidad. Finalmente los movimientos sociales pueden incidir significativamente en los resultados de los procesos electorales, proveyendo identificaciones a los partidos, movilizándolo el voto y respaldando determinadas agendas y plataformas. Es el caso de lo que sucede en México desde mediados de la década del '80, donde los movimientos sociales desempeñan un papel fundamental en la salida del PRI y la transición a la alternancia partidaria. No sólo son las élites políticas las que negocian y posibilitan los cambios sino también sindicatos de maestros, de pobladores urbanos, entre otras organizaciones sociales que se distancian de la influencia del PRI y ejercen una presión decisiva para la ejecución de los cambios políticos en el terreno institucional (Cadena, 2003).

Desde la teoría de los nuevos movimientos sociales también existen aportes importantes que enfatizan en las interacciones de partidos y movimientos. Para Cohen y Arato (2000) por ejemplo, los movimientos sociales desarrollan una estrategia dual que busca democratizar la sociedad política y societalmente por lo que, a la vez que actúan sobre

el terreno cultural, las normas e instituciones, también inciden en las estructuras políticas estatales. De un lado, los movimientos sociales desarrollan una *política de la inclusión*, dirigida a las instituciones políticas con el fin de obtener reconocimiento como miembros de la sociedad política, logrando beneficios para aquellos a quienes “representan”. De otro lado, desarrollan una *política de la influencia*, dirigida a transformar la esfera del discurso político, de manera tal que puedan generarse normas e interpretaciones para las nuevas identidades. Los movimientos sociales tienen por objetivo tanto democratizar la sociedad civil y defender su autonomía frente a la expansión de las lógicas economicistas y burocráticas, como democratizar la sociedad política abriendo las instituciones a nuevas identidades y propiciando la aprobación de normas más igualitarias. El éxito de los movimientos, debe ser concebido sobre todo en términos de la transformación de los valores, normas e instituciones arraigados en la cultura política, de modo que los derechos obtenidos estabilizan el mundo de la vida, el Estado y la economía pero también posibilita la emergencia de nuevos acuerdos institucionales que democratizan la sociedad en su conjunto.

En suma, pensar la representación política en las democracias actuales requiere cuestionar visiones clásicas según las cuales los movimientos sociales deben valerse de los partidos para participar de la arena política o simplemente desaparecer con el declive del ciclo de protesta. Desde la visión dual que aquí suscribimos la representación política es actualmente compartida por una serie de actores –partidos políticos, movimientos sociales, grupos de interés- que interactúan entre sí y cobran protagonismo de acuerdo a las aperturas del contexto político y las evaluaciones estratégicas del mismo grupo. Reformas a la legislación electoral, cambios en los referentes ideológicos de un grupo u otras aperturas institucionales, pueden favorecer la participación de un movimiento social en la arena política. Corresponde así analizar la acción contenciosa desarrollada por el movimiento cocalero como un primer aspecto de la estrategia dual que a su vez incide en la posterior decisión de participar en la arena electoral.

2. El movimiento cocalero en el terreno contencioso

El desarrollo de la protesta puede ser considerado el momento fundacional del movimiento, en tanto define el encuentro en torno a acciones concretas que implican la unificación de las demandas y el despliegue de repertorios para interpelar a los adversarios. Las condiciones

del entorno político y social son fundamentales tanto en la decisión de iniciar las protestas como en el curso que toman las mismas pues los recursos, aliados y redes que logran articularse inciden significativamente en el éxito o fracaso de las acciones. Siguiendo a Cohen y Arato (2000), la protesta se inscribe dentro de la política de inclusión, proceso en el cual los actores cohesionan demandas, las articulan y las dirigen a las instituciones políticas con el fin de obtener los beneficios que exigen. Eventos de protesta de fuerte intensidad y amplio alcance pueden posicionar positivamente al movimiento en la escena pública, ya sea colocándolo en posición ventajosa para negociar puntos clave de su agenda o generando una corriente de opinión favorable a sus demandas. Las respuestas del Estado a las acciones del movimiento pueden suponer políticas represivas que cierran la estructura de oportunidad política, lo cual sucede cuando el movimiento se halla debilitado aunque también puede ocurrir que una protesta amplia y numerosa sea duramente reprimida, entrando en juego variables como la postura de los partidos políticos y del sector de movimientos sociales (Della Porta 1995). En todos estos casos, el mayor o menor “éxito” de la protesta – en términos de los recursos internos movilizados por la organización, la generación de solidaridades y las respuestas del Estado- resulta decisiva para repensar las estrategias a seguir en el corto y mediano plazo. En el caso cocalero, la vía de la protesta es fundamental para su constitución como movimiento social y su posterior participación electoral.

2.1 Ciclos, repertorios y principales eventos de protesta del movimiento cocalero

2.1.1 Ciclos y repertorios de protesta

A inicios del año 2000, la organización cocalera surge y se consolida en la protesta, articulando acciones contenciosas que ya venían realizándose de manera espontánea y dispersa. Estas movilizaciones cocaleras se inscriben en lo que Tarrow (1997) denomina “ciclos de protesta” referidos a determinados momentos de crisis y recomposición del poder, donde los grupos opositores mejoran considerablemente la opción de concretar sus demandas planteando exigencias que poco tiempo atrás pudieron parecer descabelladas. En estos períodos, al incrementarse las posibilidades de desafiar al sistema político, los activistas y la población en general deciden poner a prueba los límites del control estatal; si las primeras acciones consiguen ciertos resultados favorables, se expande rápidamente la

idea de que es factible desafiar al régimen. Se amplían así las oportunidades políticas y se aceleran los procesos de aprendizaje por parte de los líderes y el movimiento en su conjunto, al tiempo que es un momento favorable para establecer alianzas políticas y proponer cambios institucionales en el terreno legislativo y /o de participación electoral.

La crisis del régimen autoritario de Fujimori a partir del año 1999, es la estructura de oportunidad política nacional que marca el inicio del ciclo de protesta cocalero. En su intento de reelegirse por segunda vez, el gobierno fujimorista cede a una serie de presiones internacionales entre ellas las planteadas por los Estados Unidos sobre el tema coca. Hasta entonces las políticas ejecutadas frente al cultivo de coca habían sido sumamente permisivas. No obstante, en una coyuntura de alza mundial del precio de la coca, los cultivos crecen de manera intempestiva generando la preocupación de los Estados Unidos que presiona al Perú para que retome los operativos erradicadores. Se produce así un cambio sustancial en la relación entre el Estado y los cocaleros, desarrollándose erradicaciones violentas que multiplican las protestas en los valles cocaleros del país.

Tal como se explicó en el capítulo anterior, el Valle del Río Apurímac fue un espacio privilegiado política y económicamente por el fujimorismo, invirtiéndose fuertes sumas de dinero de la cooperación internacional para financiar proyectos de desarrollo alternativo. Los Comités de Autodefensa y las Municipalidades distritales, promovían la ejecución de los proyectos en la zona y canalizaban los fondos de la cooperación. Dichos financiamientos destinados al desarrollo agrario eran entregados a los agricultores sin mayor restricción vía las Cooperativas de servicios o los programas sociales implementados por el fujimorismo. Con la crisis del fujimorismo la situación cambia pues, ya sin fuerzas para enfrentar las presiones norteamericanas, el gobierno acepta que toda la ayuda internacional sea condicionada a la disminución de los sembríos de coca. En adelante, los programas de apoyo alimentario a cargo de la Agencias Adventista (ADRA- OFASA), el apoyo familiar realizado por la organización evangélica Paz y Esperanza y sobre todo los proyectos de desarrollo agrario de USAID establecen que para ser beneficiarias las familias deben abandonar el cultivo de coca. Estas condiciones, sumadas a las constantes amenazas de erradicación, generan la indignación de los productores, resultando determinantes para entender el cambio de la postura de la FEPAVRAE y el desarrollo del nuevo ciclo de protesta. Así lo recuerda el ex alcalde de Sivia, Carlos Rua :

Hasta el 98 no había movilizaciones, se trabajaba estrechamente y había realmente coordinación, los alcaldes viajábamos a Lima de manera conjunta con los Comités de Autodefensas. Con los cocaleros no tanto por que teníamos el apoyo de USAID sin condiciones, el financiamiento era incondicional, pero a partir del 2000, 2001, la situación cambia, prácticamente todos los financiamientos a las municipalidades se han ido condicionando a una erradicación de cultivos, ahí empiezan las movilizaciones cocaleras³⁹.

En el caso del Valle del Huallaga, las protestas que abren el ciclo responden directamente al re inicio de los operativos de erradicación y no a los condicionamientos de la cooperación internacional, la cual nunca tuvo el mismo alcance que en el Río Apurímac. Las presiones de Washington, llevan a la reactivación del CORAH (Proyecto Especial de Control y reducción de los cultivos de coca en el Alto Huallaga) que organiza los operativos de erradicación en una etapa de flexibilización del poder militar. Brigadas de población civil vuelven a ser contratadas para arrancar las plantas de coca de raíz en las chacras y caseríos, actuando junto a la Policía Nacional que revisa las viviendas y busca pozas de maceración de cocaína. A diferencia de otros operativos, como los realizados en la etapa de pacificación, el ejército mantiene una actitud neutral que favorece las protestas. Los pobladores, que tenían al ejército como el principal agente represor en la zona que inspiraba temor y desconfianza por las cruentas violaciones a los derechos humanos cometidas, constatan que no van a enfrentar a los militares en las erradicaciones. En la medida que para muchos “nada podía ser peor que el ejercito” se evalúa que al enfrentarse a la policía las posibilidades de éxito serían mayores. El ciclo de protesta se inaugura con el enfrentamiento directo con la policía, levantándose contra un estado que hasta entonces había sustentado su poder en la presencia del ejército.

En cada ciclo de protesta los movimientos sociales despliegan “repertorios de protesta”, lo cual en términos de Tarrow refiere a “aquello que la gente hace cuando entra en conflicto con otros, lo que sabe hacer y lo que los otros esperan que haga” (Tarrow, 1997: 66). El repertorio de un movimiento abarca las habilidades de la población y sus formas culturales, puede variar en el tiempo pero permanecen elementos centrales que se reconfiguran de acuerdo a las nuevas identidades emergentes y la estructura organizativa dominante. Dicha condición de permanencia y reconfiguración, permite que los repertorios

³⁹ Entrevista realizada a Carlos Rúa, ex alcalde del distrito de Sivia por Anahí Durand. Ayacucho, 8 de setiembre del 2006

sean usados por distintos agentes sociales adquiriendo un carácter modular. En la interacción del movimiento y sus adversarios, los viejos y nuevos repertorios no se presentan aislados unos de otros, sino que conviven entre sí y son apropiados por los movimientos sociales de acuerdo a su efectividad y potencial. El repertorio tradicional se transforma dando lugar a uno distinto, que sin perder la ligazón con el antiguo, se presenta mas acorde con los nuevos sentidos que se disputan en la acción colectiva. (Tarrow, 1997). Los repertorios del movimiento cocalero se relacionan con la estructura organizativa y la identidad afirmada en sus respectivos discursos e historicidad. Retoman muchas prácticas de la década del '70 pero las resignifican y adaptan a las condiciones específicas del nuevo ciclo de protesta. De un lado, se cuentan acciones y habilidades heredadas y compartidas con distintas agrupaciones del sector de movimientos sociales como paros, bloqueos de carreteras o tomas de locales públicos. De otro lado, dado que se trata de actores territorialmente situados en una región marginal del país, se realizan marchas hacia las capitales regionales o a Lima, una medida que logra un fuerte impacto en la opinión pública.

En cuanto al repertorio compartido, tanto en el Valle del Huallaga como en el del Río Apurímac las experiencias organizativas autónomas de los '70 forman parte del antiguo repertorio conocido por experiencia directa o indirecta. En el VRA la dinámica de la FECVRA y en el Huallaga la experiencia de la APHCLC- A operan como referentes importantes retomándose en ambos casos las paralizaciones, convocadas entre el 2001 y el 2002. Debido a que paralizar el cultivo de un producto ilegal como la coca no tienen mayor repercusión en el Estado, los campesinos buscan extender el paro a toda la población, para lo cual “invitan” a las instituciones públicas (escuelas y centros de salud principalmente) a suspender sus labores. Al mismo tiempo cierran las principales pistas y carreteras que conectan con los polos urbanos afectando a otras actividades importantes en la zona como la industria maderera o de frutales. El cierre de la carretera Marginal de la selva en el Huallaga y el de la carretera Huamanga- San Francisco en el VRA se vuelve una práctica común en los paros, lo mismo que las movilizaciones por los centros urbanos de los poblados donde se visita las principales agencias estatales. Así mismo a nivel interno, el movimiento distribuye tareas tales como la organización de ollas comunes, de modo que la falta de alimentos no afecte a la población. Las paralizaciones locales, con su dinámica de cierre de carreteras y movilizaciones, son las actividades del repertorio más antiguas y recurrentes, es lo que los

productores hacen al entrar en conflicto, lo que saben hacer, lo que sus adversarios esperan que hagan. Así lo reconoce la parlamentaria y ex dirigente Elsa Malpartida.

Actuamos en las protestas, los cortes de carreteras las marchas de sacrificio por que si uno va y le dice señor presidente por favor escúcheme te tira la puerta o mas fácil ni te abre la puerta. Ningún ministro, ningún funcionario nos recibía ¿qué podíamos hacer? Había que gritar, que llamar la atención, eso definitivamente es lo que siempre hemos hecho: las protestas, las movilizaciones, las tomas de carreteras...sino no nos respetan.⁴⁰

Un punto central en el repertorio cocalero, por el impacto mediático y la corriente de opinión pública que puede generar son las marchas de sacrificio⁴¹ hacia las capitales regionales y en ultima instancia hacia Lima. No es una práctica necesariamente nueva pero es retomada a la luz de las nuevas condiciones sociales y políticas de los valles. En el Huallaga durante los '70 las marchas a Tingo María eran frecuentes, pero con la violencia dejan de producirse pues los Comandos Políticos Militares instalados para la pacificación impedían cualquier manifestación opositora. En este nuevo ciclo de protesta, caracterizado por las erradicaciones y la flexibilización del control militar, las marchas de sacrificio se retoman asumiéndolas como una herramienta primordial para sensibilizar a la población y confrontar directamente al poder en los espacios donde se localiza. En un país fuertemente centralista como el Perú, el Estado tiene cierta presencia en las capitales regionales pero sobre todo se concentra en Lima, locus privilegiado del poder tanto por la presencia de agencias y ministerios como por la carga simbólica colonial que conlleva. En las marchas de sacrificio los cocaleros y sus familias caminan por las principales carreteras del país difundiendo en el trayecto sus plataformas, instalándose en pueblos intermedios y cocinando en ollas comunes. Ponen especial cuidado en resaltar el carácter pacifico de la acción, siendo muy frecuente la consigna "Somos cocaleros no somos terroristas". Estas acciones tienen una doble direccionalidad; se dirigen a la sociedad para comunicar su problemática, plataformas y objetivos visibilizando a la población, y de otro se dirigen al Estado y sus instituciones demostrando la fuerza de la organización, capaz de movilizar miles de campesinos por cerca de veinte días. Refuerza también la cohesión del movimiento y su identidad misma pues pone en marcha una serie de acciones y recursos que requieren del concurso de todos

⁴⁰ Elsa Malpartida, entrevista citada.

⁴¹ Las marchas de sacrificio pueden ser definidas como largas caminatas emprendidas por el conjunto organización hacia los centros de poder político administrativo. Los miembros del movimiento y sus familias caminan por veinte o mas días y a lo largo del camino se detienen en los centros poblados más importantes para exponer su problemática y concitar solidaridades.

los miembros; organizar la alimentación, el cuidado de niños, definir voceros, aportar con dinero entre otras acciones, son ejecutadas por igual y el éxito repercute considerablemente en la estima del grupo que se siente capaz de grandes acciones.

Si nos habíamos propuesto entre nuestras actividades una marcha de sacrificio(...).Era la primera vez en la historia del Perú que los cocaleros de Ayacucho iban a emprender una movilización de este tipo, para eso decidimos que nuestra organización no tira piedras, no maltrata la propiedad privada, pacíficamente hemos llegado a Ayacucho. Decidimos en asamblea cada campesino aporta un sol mensual ahí nosotros arrancamos, todos pusieron su importe para la movilización⁴².

Analicemos ahora como operan los repertorios de protesta en los dos principales eventos de protesta que se producen durante la EOP abierta por la crisis del fujimorismo y que inciden decisivamente en la discusión del movimiento cocalero sobre participar o no en las elecciones. El primer evento es de carácter nacional en pleno ascenso del ciclo de protesta entre los años 2002 - 2003 y el segundo es de carácter local en la etapa de declive entre el 2004 -2005.

2.1.2 Principales eventos de protesta protagonizados por la CONPACCP

Con estos antecedentes de protestas locales violentas, en enero del 2003 se realiza en Lima el I Encuentro Cocalero Nacional, donde los valles más representativos ratifican la creación de la CONPACCP y definen una estrategia de defensa coordinada, según la cual tan pronto como se inicien las erradicaciones en cualquier valle del país, todas las organizaciones deben de sumarse a las protestas, realizándose un paro cocalero nacional. Tal como se dijo, la paralización de labores de agricultores de un producto ilegal cobra efectividad en tanto, gracias a las redes locales del movimiento y su capacidad de presión, las instituciones públicas y privadas cesan temporalmente sus actividades al tiempo que se bloquean las carreteras, tratándose más bien de un paro territorial más que sectorial. A menos de un mes del acuerdo de paralización, el 18 de febrero, se inician los operativos de erradicación de cicales en Padre Abad y Aguaytia. Las protestas se expandieron rápidamente y los líderes de este valle, entre quienes destaca Flavio Sánchez representante de Aguaytia en la

⁴² Nelson Palomino, entrevista citada.

⁴³ Como parte de sus acciones la agencia para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (DEVIDA) incluye estrategias comunicacionales como la transmisión de programas y spots radiales emitidos por radioemisoras locales. En estos programas se explica las ventajas de los cultivos alternativos y se persuade a los agricultores de dejar de cultivar hoja de coca.

CONPACCP, comunicaron a la prensa su decisión de marchar hacia Lima si el gobierno no enviaba una comisión negociadora. Como tal cosa no sucedió el 20 de febrero la CONPACCP declaró que se realizaría un paro cocalero nacional y marcha de sacrificio a Lima. El mismo día de la convocatoria se sumó a la protesta el Valle del Huallaga, al día siguiente debían sumarse los cocaleros del VRA pero una noticia detuvo las acciones: acusado de atentar contra la propiedad, apología del terrorismo, entre otros delitos relacionados con las protestas de noviembre del 2002 el presidente de la CONPACCP y líder de la FEPAVRAE Nelson Palomino es detenido por la policía cuando regresaba a San Francisco para organizar la huelga cocalera.

Pese a la detención de su líder, las protestas cocaleras se expandieron rápidamente.

Entre los principales puntos de la plataforma levantada destaca lo siguiente:

- Cese inmediato a las acciones de erradicación forzosa en todos los valles cocaleros
- Apertura de los padrones de compra del monopolio Empresa Nacional de la Coca (ENACO) e incorporación de todos los valles al padrón de productores legales
- Libertad inmediata de Nelson Palomino y cese a la persecución policial de los líderes.
- El retiro de las ONG que trabajan en los valles con financiamiento extranjero y la entrega de los recursos del desarrollo alternativo a las federaciones cocaleras.
- Asfaltado de las carreteras que conectan a los distritos del Valle con los centros urbanos. Particularmente las carreteras Huamanga – San Francisco y Tocache – Tingo María
- Construcción de centros educativos en los distritos y contratación de más docentes para los colegios ya existentes en el VRAE
- Obras de electrificación, agua y alcantarillado para todos los principales distritos⁴⁴

Como vemos, la plataforma combina elementos sumamente sectoriales que solo atañen a los cocaleros con otros de carácter más amplio que pueden beneficiar a la comunidad en general, impactando fuertemente en la localidad, al punto que facilita que diferentes actores se sumen a la protesta. Ante la ausencia de partidos políticos y espacios de articulación de intereses, una protesta sectorial como la cocalera termina aglutinando la diversidad de demandas de la población, representando este actor particular un descontento generalizado.

⁴⁴ Actas generales de la CONPACC, Febrero del 2003

En ausencia de Nelson Palomino, el liderazgo de la marcha de sacrificio fue asumido por Elsa Malpartida quien condujo la marcha desde Tingo Maria y Nancy Obregón que viajó a la selva ayacuchana a apoyar a Maricela Guillen, sub secretaria de la FEPAVRAE. Estos dos grupos movilizadas, el primero que venía del Huallaga por la carretera central y el segundo del VRA por la carretera los Libertadores, se encontraron en Lima el 3 de abril del 2003, tras casi dos semanas de marcha de sacrificio. En la capital, los cerca de seis mil cocaleros movilizadas se instalaron frente al Palacio, donde acamparon con sus familias, preparando ollas comunes y compartiendo frazadas para pasar la noche. Desde su llegada a la capital, la dirigencia cocalera mantuvo una dinámica de movilizaciones pacíficas por la ciudad y reuniones de solidaridad con grupos universitarios y colectivos de izquierda. Se presentaron además en los medios de comunicación nacional, exponiendo su problemática como agricultores pobres, provenientes de zonas profundamente golpeadas por la violencia y la exclusión; una realidad muy distinta a la imagen del narcotraficante que el gobierno había mostrado. Se generó así una opinión pública favorable a resolver el tema cocalero políticamente y no solo con represión. Cediendo a las presiones y ante el riesgo que las protestas se desbordaran, el 22 de abril el presidente Toledo recibe a 25 dirigentes en palacio de gobierno, con quienes firma el D.S 044-PCM-2003. Entre los principales compromisos del acuerdo, se contaron la realización de un estudio sobre la demanda del consumo legal de la hoja de coca, la actualización de los padrones de ENACO y la erradicación gradual y concertada de las plantaciones ilegales de coca⁴⁵. Pese a la insistencia de la delegación del VRAE, la libertad de Nelson Palomino no entró a discusión con el gobierno.

Luego de la marcha a Lima, los cocaleros regresaron a sus valles con un acta de compromiso firmada por Toledo y la sensación de triunfo por reuniese con el presidente de la República y ocupar las primeras planas de la prensa nacional. No obstante el éxito, a nivel interno la marcha dejó contradicciones, expresadas en las declaraciones de Maricela Guillen contra las dirigentes del Huallaga acusándolas de haber desistido rápidamente de exigir la liberación de Palomino. De otro lado, los dirigentes del Valle del Monzón rechazaron el acuerdo de erradicación gradual y concertada, pues consideraron que abría la puerta a nuevos operativos policiales. Tales fricciones entre los líderes locales acaban por estallar en el II Congreso Nacional de la CONPACCP, realizado en Lima en febrero del 2004 donde a

⁴⁵ Diario Oficial El Peruano, Lima, jueves 24 de abril 2003

diferencia del anterior no puede constituirse una plataforma unificada. A último momento los cocaleros de la FEPAVRAE dirigidos por Maricela Guillen deciden no asistir al evento desconociendo a la Directiva que mantenía a Palomino como presidente, los cocaleros de Monzón por su parte optaron por retirarse violentamente en plena sesión del II Congreso. Meses después el VRAE y el Monzón conforman la Junta de Productores de Hoja de Coca que mantiene prácticamente la misma agenda que la CONPACCP pero guarda posturas mucho más radicales en cuanto a la permisividad con el cultivo levantando el lema “coca o muerte”⁴⁶. De otro lado, la CONPACCP, debilitada por la ruptura y el encarcelamiento de su líder, convocó a una segunda marcha de sacrificio a Lima realizada en Mayo del 2004. En esta ocasión, los tres puntos principales eran el cumplimiento de los acuerdos y la derogación del DS. 044 y la libertad de Nelson Palomino. No obstante, las rupturas de la organización y la efectividad de represión gubernamental, hicieron evidente la crisis pues solo se movilizó el Valle del Huallaga y algunas cuencas menores. La escasa convocatoria restó importancia a la protesta, debiendo regresar los cocaleros sin siquiera ser recibidos por el gobierno.

Lo que se desarrolla en adelante son protestas locales de impacto limitado, entre las que destacan las ocurridas entre junio y julio del 2005. En el caso del Río Apurímac, los días 4 y 5 de julio los campesinos agremiados en la FEPAVRAE, se movilizaron por los principales pueblos del Valle hasta llegar a Huamanga protestando contra las amenazas de erradicación y la mala gestión del desarrollo alternativo a cargo ahora de la ONG norteamericana CHEMONICS. Esta vez la marcha no consiguió el apoyo de las fuerzas sociales huamanguinas y debió volver al valle sin haber dialogado con las instancias estatales. Lo cierto es que la FEPAVRAE, desde la detención de Palomino, atravesaba un período de crisis con fuertes cuestionamientos a Maricela Guillen por haberse aliado con la Junta de Productores, espacio marginal y poco representativo. Tras desistir de las protestas, el gremio afronta un período de disputas internas que terminan con la destitución de Guillen y el nombramiento de Alejandro Gutiérrez de la base distrital de Sivia, quien retoma las coordinaciones con la CONPACCP.

⁴⁶ Mientras la dirigencia de la CONPACC rechaza abiertamente el narcotráfico y permite la realización de operativos de interdicción de insumos para la cocaína en los valles, la Junta defiende el cultivo y comercializaron de hoja en general sin cuestionar su destino final así vaya al narcotráfico.

En el Valle del Huallaga, en junio del 2005 ante un nuevo operativo de erradicación de cultivos que incluyó fumigaciones indiscriminadas, los productores cocaleros comenzaron un paro regional que se extendió a la ciudad de Tocache. Dirigidos por Nancy Obregón, cerca de dos mil cocaleros bloquearon la carretera Federico Basadre, entre Puerto Pizana y Tocache. Se suman a la protesta los habitantes de Aguaytía, donde comercios y oficinas públicas permanecen cerrados debido a los piquetes de cocaleros de la zona. La protesta se extendió a la ciudad de Tingo María hasta donde se trasladan marchando por las diferentes calles para hacer oír sus demandas. Después de dos semanas, se levanta el paro regional, consiguiéndose el cese temporal de las fumigaciones que estaban afectando a otros cultivos, el ganado y la población en general. Pese a este relativo triunfo, en noviembre del mismo año, el Poder Judicial levanto una orden de detención de la dirigente cocalera Nancy Obregón acusada de delitos contra la tranquilidad pública y toma de carreteras. Obregón fue detenida en octubre pero apelo la decisión a una instancia judicial superior y logró su libertad bajo comparecencia a las pocas semanas.⁴⁷

Ambos eventos de protesta muestran momentos diferentes del ciclo y del uso de los repertorios coincidentes con el cierre de la estructura de la oportunidad política. La marcha de sacrificio a Lima del 2003 parece ser posible debido al acumulado organizativo generado durante la crisis del fujimorismo que favorece la cohesión de la CONPACCP y gracias a las solidaridades que el movimiento concreta en Lima, generando una corriente de opinión favorable a sus demandas. En las protestas locales del 2005, la EOP se cierra abriéndose un ciclo represivo evidenciado en la detención de Palomino, lo cual sumado a la salida temporal de la FEPAVRAE, debilita al gremio haciendo que mantenga su fuerza local pero sin conseguir el impacto nacional anterior. El movimiento debe así repensar sus estrategias, tomando en cuenta para ello las respuestas del Estado, el sector de movimientos sociales y los partidos políticos.

⁴⁷ A diferencia de Obregón que consigue ser puesta en libertad bajo comparecía, los delitos por los cuales estaba acusado Palomino – daño contra la propiedad y contra la libertad individual- no le permitieron beneficiarse de esa figura, debiendo afrontar el juicio detenido y siendo condenado a 14 años de cárcel.

2.2 Respuestas y reacciones ante la protesta cocalera

2.2.1. Respuestas del sector de movimientos sociales y los partidos políticos

Como se ha definido, el Sector de Movimientos Sociales (SMS) refiere a las diversas organizaciones antagónicas, competitivas o cooperativas que forman parte de una estructura de acción más amplia y cuya configuración contempla redes, relaciones y objetivos de acción medianamente coincidentes. Al momento de analizar el SMS debe tenerse en cuenta que este se encuentra sujeto a “restricciones sistémicas” o características del entorno que moldean y limitan sus posibilidades de acción, entre las cuales destacan la naturaleza del sistema político, particularmente el Estado y los partidos. (Zald y Garner, 1985). En el Perú a inicios del 2000 el SMS nacional lo conformaban básicamente los gremios clasistas como la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato de maestros (SUTEP), las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una serie de partidos políticos de izquierda vinculados con la experiencia de Izquierda Unida que se mantenían dispersos en el escenario. Debe anotarse que tras veinte años de conflicto armado interno, diez de autoritarismo fujimorista y una prolongada crisis de los partidos y los horizontes de sentido que los enmarcaban, el SMS se hallaba bastante debilitado. Los gremios clasistas nacionales de importante presencia hasta la década de los ‘80 habían sido fuertemente golpeados por Sendero, la represión fujimorista⁴⁸ y las reformas estructurales que incluían la flexibilización laboral y el declive de los sindicatos. Junto a esto la debacle de los partidos de izquierda, a los que tradicionalmente se vinculaban los gremios del sector, hacía que las restricciones sistémicas limitaran la importancia del SMS y sus posibilidades de apoyar al movimiento. Afecta también en la lectura de los cocaleros sobre la importancia de contar con el respaldo de estos gremios, considerándolos más bien como actores irrelevantes

Es distinto lo que ocurre a nivel de los valles, donde existe un sector de movimientos sociales particular, poco conectado con el SMS nacional y a la vez muy cercano al movimiento cocalero, siendo la relación mucho más fluida. En el Valle del Río Apurímac el SMS se halla conformado por los Comités de Autodefensas y por organizaciones de

⁴⁸.En diciembre de 1992 fue asesinado el Secretario General de la CGTP Pedro Huilca Tecse por un comando paramilitar vinculado al ejército.

subsistencia dirigidas por mujeres particularmente Comedores Populares y Clubs de Madres, todos formados durante el fujimorismo sin mayor tradición de protesta. En el Huallaga el férreo control militar que siguió a la etapa de pacificación, dificultó la conformación de organizaciones autónomas, siendo prácticamente las organizaciones de subsistencia dirigidas por mujeres las únicas activas. En ambos valles, durante los primeros eventos del ciclo de protestas cocaleras con las marcha de sacrificio del 2003, el apoyo del SMS a nivel local es unánime debido en gran medida a la identidad abierta construida por el movimiento que permite a sus miembros reconocerse como cocaleros y a la vez como comandos de autodefensa o miembros del comedor. El hecho de que las principales dirigentes cocaleras sean a la vez presidentas de las organizaciones de mujeres facilita la llegada a la población y su adhesión a las acciones convocadas. Asimismo, el carácter aglutinador de las plataformas, que incluyen tanto aspectos sectoriales como de interés general permiten que otras organizaciones se plieguen a las protestas, cohesionando un nosotros territorial, dentro del cual los cocaleros son los actores más representativos. Los dirigentes y el movimiento en general, desarrollan una efectiva movilización de las redes territoriales e incluso de parentesco, ambas bastante sólidas y relacionadas con un proceso de colonización que mantiene mucho de la estructura de la comunidad indígena.

En los valles todos apoyaron, la autodefensa con los CADS VRAE somos los mismos agricultores, la FECMAVRAE son las esposas de los mismos agricultores, no hay diferencia. Entre los tres gremios grandes, FEPAVRAE, FECMAVRAE y CADVRAE hasta ahora somos amigos y coordinamos todas las acciones por el bien de nuestro valle, solamente se oponen las ONGs operadoras que hacen mala inversión de su economía⁴⁹

En el caso del SMS nacional la respuesta frente a la protesta cocalera es débil y de recíproca indiferencia. De un lado las mencionadas organizaciones no demuestran mayor interés en respaldar activamente las luchas cocaleras, teniendo una posición poco clara sobre el tema. De otro lado, los cocaleros al igual que la gran mayoría de la población, identifican a los líderes del SMS como parte de una “clase política tradicional” demagógica, sectaria e ideologizada, rehusándose a coordinar con ellos en tanto desconfían de que puedan representar un apoyo efectivo para la concreción de sus demandas. Durante las marchas de sacrificio, el respaldo del SMS es sobre todo declarativo y tampoco de parte de la

⁴⁹ Alejandro Gutiérrez, entrevista citada.

CONPACC se hacen esfuerzos decididos por coordinar acciones primando una mirada de desconfianza.

...Otros gremios tampoco han apoyado, todos son partidarizados, con intereses políticos, cada quien lleva agua a su molino, ven que podemos estar alcanzando cierto nivel y podemos ensombrecer su liderazgo. Cuando estuvimos en Lima la CGTP y otros gremios ofrecieron apoyo, pero todo muy declarativo nunca un apoyo real de que vamos a luchar hombro a hombro a pesar de que vienen y discursean, no hay un apoyo real, hasta el financiamiento es propio⁵⁰

En cuanto a las alianzas con los partidos políticos, éstas refieren a las relaciones y acuerdos más o menos estables que el movimiento puede concretar en determinadas coyunturas. Las alianzas pueden diversificarse mucho proveyendo al movimiento de mayores elementos para fijar sus horizontes y lograr solidaridades decisivas al momento de la protesta. Durante las marchas de sacrificio a Lima, los productores cocaleros prácticamente no concretan alianzas con ninguno de los pequeños partidos políticos de izquierda en los que se dividió el frente Izquierda Unida. Tampoco las agrupaciones políticas “independientes” con representación parlamentaria como el APRA o Perú Posible (el partido del presidente Toledo) se pronunciaron respecto a las protestas cocaleras o tendieron puentes para un acercamiento. El único político que intentó acercarse al movimiento fue el ex congresista de Unión por el Perú Michel Martínez pero no contó con el apoyo de su bancada ni fue bien recibido por las dirigentas cocaleras que vieron con desconfianza su iniciativa. Lo espinoso del tema cocalero hace que los partidos mantengan su distancia a la par que la poca experiencia organizativa y política de los actores sociales sesga sus posibilidades de concretar alianzas políticas. Así lo manifiesta Maricela Guillen, quien reconoce la repercusión negativa de no contar con aliados

*Pedimos apoyos por ejemplo al presidente del gobierno regional, pero no hubo respuesta, también hemos pedido apoyo en Lima a varios congresistas y el único que nos apoyo fue el congresista Martínez. Pero cuando llegamos a Lima la señora Nancy Obregón se peleó con él, lo acusó de querer manipularnos y el señor Martínez se retiró. Nosotros no teníamos ningún aliado, tampoco asesor, hemos llevado a un señor cocologo Baldomero Cáceres pero en PCM no lo recibieron, eso yo pienso que nos ha afectado [...]*⁵¹

⁵⁰ Elsa Malpartida, entrevista citada.

⁵¹ Entrevista realizada a Maricela Guillen, ex secretaria de organización de la FEPAVRAE, realizada por Anahí Durand. Sivia, 20 de enero del 2008.

Durante las protestas locales del 2005 las respuestas del SMS local y nacional se mantienen en el mismo sentido. Al apoyo a nivel local, que incluye acatar las paralizaciones con el respectivo cierre de instituciones públicas, lo acompaña el silencio del SMS nacional, sobre todo de los gremios y partidos políticos tradicionales. Sin embargo, ya en un año pre electoral, nuevos personajes políticos que empiezan a perfilarse como protagonistas, particularmente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista, levantan voces discordantes con la política estatal respecto al tema coca y manifiestan una mejor disposición para apoyar las demandas cocaleras. Estos nuevos actores políticos sostienen un discurso crítico al enfoque represivo y subordinado a los Estados Unidos predominante en las respuestas estatales, logrando tender puentes más serios con el movimiento cocalero e influyendo en el hecho de que repiensen sus alianzas políticas y estrategias de acción.

2. 2.2. Respuestas estatales: criminalización de la protesta y desarrollismo agrario

En ambos ciclos de protestas cocaleras (2002-2003 y 2004-2005) las respuestas del Estado presentan mantienen dos líneas fundamentales: la permanente criminalización de la protesta con altas dosis de represión y la promoción de Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) con financiamiento de la cooperación internacional ejecutados por ONGs locales en los principales Valles cocaleros.

Durante la marcha de sacrificio del 2003, la postura del gobierno combinó exitosamente represión y apertura al diálogo. De un lado, presionado por la fuerza de la protesta y el sentido de la opinión pública, el gobierno decidió dialogar con los productores, discutiendo políticamente un tema que por años había sido tratado dentro de los asuntos de narcotráfico. En ese momento todavía se mantenía algo del clima de transición democrática expresado en los esfuerzos de la saliente administración de DEVIDA, presidida por Vega Llona, que buscó sentar canales de diálogo con los productores. Estos elementos facilitaron la reunión de los cocaleros con las autoridades del Estado en el tema, incluyendo el nuevo presidente de DEVIDA Nils Ericson, el Ministro de Agricultura y el mismo presidente Toledo quien manifestó que “Las puertas de palacio siempre estarán abiertas por que los cocaleros no son narcotraficantes”⁵². La firma del D.S. N° 044 recogió ese espíritu concertador e incluso tomó en cuenta parte de las propuestas de los agricultores. Sin

⁵² Diario el Peruano 21 de abril del 2003

embargo, ésta era solo una de las políticas del gobierno, pues de otro lado, paralelo a estas conversaciones, era detenido Nelson Palomino. Con el transcurrir de los meses, el gobierno dio marcha atrás en los acuerdos firmados con los coccaleros, suspendiéndolos y colocando mayor énfasis en la opción represiva. Un rol importante en esta respuesta criminalizadora lo jugó el entonces ministro del Interior Fernando Rospigliosi quien siempre manifestó su desacuerdo en dialogar con las organizaciones coccaleras. Una de las polémicas más duras fue la que sostuvo con Nelson Palomino a quien acuso de delincuente y boicoteador de la voluntad popular, al punto que la directiva de la FEPAVRAE lo declaró “enemigo irreconciliable” de los coccaleros. Dicha disputa pasaría al terreno legal luego de las protestas del 2002, con la detención y condena de Palomino a 14 años de cárcel. En este proceso judicial, tal como reconoce Rospigliosi, el Ministerio emprendió las acciones legales pues sabía el impacto que estas tendrían en la desestabilización de la organización coccalera.

Desde el Ministerio del Interior, además de la interdicción hubo un enfrentamiento fuerte con Nelson Palomino cuando era el jefe de la FEPAVRAE. El ministerio jugó un papel clave en la denuncia legal que se le hizo, el procurador del Ministerio del interior estuvo detrás de su detención y al final logro que fuera juzgado y lo terminaron sentenciando. Sabíamos que eso tendría un impacto fuerte en esa Federación que quedo debilitada, luego de eso ha habido una serie de peleas por el liderazgo.⁵³

Durante las protestas locales por los operativos de erradicación de junio y julio del 2005 el énfasis represivo se mantiene. Más aún ante la debilidad del gremio, las acciones que logran concretarse en cada uno de los Valles son fuertemente reprimidas por la Policía Nacional. Es el caso de lo que sucede en el Río Apurímac donde los coccaleros marchan a Huamanga y son reprimidos por la policía sin siquiera haber iniciado el diálogo con las autoridades regionales. En el Huallaga, los coccaleros llegan a Tingo María; desde esta ciudad realizan acciones como bloqueos de carreteras y se movilizan por la ciudad siendo también violentamente dispersados por la policía que detiene a 76 campesinos. La misma dirigente de la CONPACC Nancy Obregón es detenida y puesta en libertad con orden de comparecencia. Antes de estos sucesos no se habían producido detenciones masivas de campesinos durante la protesta, ahora no sólo esto sucede sino que prontamente son sometidos a proceso judicial. Tal incremento de la represión manifiesta el cierre de la

⁵³ Entrevista realizada a Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior 2002-2004, realizada por Anahí Durand. Lima, 5 de septiembre del 2006.

estructura de oportunidad política abierta por la crisis del fujimorismo, presentándose poco favorable para los cocaleros que deben re pensar las estrategias seguidas.

Estábamos presos cerca de 100 compañeros y si todos íbamos a estar presos quién iba a hablar por nosotros, como poder enfrentar a la represión si no estábamos a su mismo nivel. Nos habían apresado dos dirigentes a Nancy Obregón y a Nelson Palomino, nos reprimían y no nos escuchaban así respondía el Estado ahora solo con palos y lacrimógenas...Ahí empezamos a pensar en otras formas de hacernos escuchar.⁵⁴

En cuanto a las respuestas desarrollistas, estas refieren a los distintos proyectos avalados por el Estado y financiados por la cooperación internacional que se implementan en el marco de las políticas de “responsabilidad compartida” entre países consumidores y productores, según las cuales los primeros deben hacer esfuerzos por reducir la demanda contribuyendo a solucionar los problemas de subdesarrollo que cruzan el negocio del narcotráfico. Se financian y ejecutan los denominados “Proyectos de Desarrollo Alternativo (PDA) orientados en su mayoría a promover la sustitución de cultivos de coca por otros productos agropecuarios, brindando créditos, capacitación técnica, apoyo en la comercialización entre otras actividades. En el Perú la fuente de cooperación más importante proviene de los Estados Unidos cuyo gobierno la canaliza a través de USAID⁵⁵. Desde inicios del 2000, las ONGs se constituyeron como pieza fundamental en la política de lucha contra las drogas pues, según la estrategia de DEVIDA, la implementación de los PDA supone la contratación de un ente operador - Winrok primero, CARE Perú después y actualmente CHEMONICS – que maneja los recursos y planifica las acciones pero no ejecuta directamente los proyectos, subcontratando a su vez a ONGs locales conformadas en su mayoría por profesionales de la zona. Tal estrategia de trabajo y relación con el productor, llevó a que los cocaleros percibieran a las ONGs como brazos de funcionamiento estatal, generándose además una larga cadena de intermediarios que incrementan la percepción de que los beneficios de la cooperación se diluyen en sueldos y gastos operativos de la burocracia. Entre el 2001 y el 2003 CARE y sus ONGs sub operadoras decidieron los productos de sustitución, los planes de comercialización y en general toda la línea de intervención del llamado “desarrollo alternativo” sin consultar a los campesinos. También coordinaron con las municipalidades el manejo de los recursos,

⁵⁴ Pedro Arevalo, entrevista citada.

⁵⁵ También se cuenta la cooperación europea bi lateral alemana (GTZ) británica (OXFAM) y del fondo de Naciones Unidas (ONUDD) pero con menos recursos y con un alcance mucho más limitado.

presentando a los alcaldes un convenio que de ser firmado implicaba más fondos a cambio de su apoyo a la erradicación de cultivos. El desinterés por consultar a los campesinos, el uso burocrático de los recursos y los condicionamientos impuestos a alcaldes y productores, generaron en los cocaleros gran descontento que llegó a su punto más álgido en las protestas del 2002 con la quema del local de CARE en el Río Apurímac.

CARE entre el 2000 y el 2002 recibió entre 8 y 10 millones de dólares, y la gente percibía que esa plata no llegaba al campesino, a los campesinos les daban un par de cuyes, dos kilos de semillas, esos apoyos. CARE contrato a operadores locales que eran ONGS de Ayacucho, formadas casi exclusivamente para el trabajo con CARE, de la que recibían presupuesto y pagaban a sus trabajadores sumas que para la gente del valle resultaban excesivas entre 1200 y 2000 dólares mensual. Esto generaba rechazo en la población por que veía que los ingenieros eran ostentosos con su dinero.⁵⁶

Tras los incidentes del VRA y las críticas generalizadas de todos los valles a la gestión de CARE, DEVIDA convocó a nuevos entes ejecutores seleccionando a CHEMONICS. Si bien la relación de esta institución con los campesinos ha mejorado, continúa el esquema de trabajo basado en ejecutores y sub operadores, con los mismos mediocres resultados para el desarrollo de los agricultores. Siguiendo a Cabieses:

Los proyectos desarrollistas impulsados por el Estado y ejecutados por las ONGs no han dado resultados esperados en tanto parten del principio de erradicar cultivos de coca sin entender las complejidades socio culturales y económicas que este cultivo entraña, negando a la vez la participación de las familias campesinas y autoridades locales en las decisiones de los programas. Asimismo, privilegian productos rentables en el corto plazo pero que respecto a la coca no cuentan con mercados seguros y sostenibles en el tiempo. (Cabieses, 2004: 105)

Estas fallas en la estrategia y el diseño de las respuestas desarrollistas del Estado y sus ONGs operadoras, limitan su alcance y efectividad, por lo cual no llegan a ser una opción sostenible para los productores cocaleros.

En suma, para fines del 2005 la vía de la protesta, exitosa en un primer momento, se encontraba en un nivel de agotamiento tal que para salir de ese estado se hacía imprescindible dar nuevos pasos. Golpeada por el cierre de la estructura de oportunidad política abierta con la crisis del fujimorismo (que agudiza la represión), afectada por los conflictos internos y sin el apoyo de un SMS ya de por sí débil, la organización cocalera se ve en la encrucijada de definir hacia donde avanzar. Si bien no ha perdido el apoyo de los

⁵⁶ Entrevista a Ciro Moreyra, ex asesor de la Asociación de Municipalidades del Valle del Río Apurímac (AMUVRAE) realizada por Anahí Durand. Ayacucho, 21 enero del 2008.

productores cocaleros, que siguen movilizándose masivamente en los valles, si ha perdido capacidad de presión a nivel nacional, lo cual dificulta considerablemente la consecución de sus demandas. Los principales líderes de la organización cocalera en los principales valles, repiensen así las estrategias de acción inclinándose por una estrategia dual, leyendo las condiciones del contexto institucional como favorables para actuar en él.

3. Las condiciones institucionales en la definición de la estrategia dual

Como se mencionó al inicio del capítulo, la estrategia dual desplegada por el movimiento es posible por la interacción de condiciones internas y externas al movimiento, lo cual supone evaluar como favorables determinadas estructuras de oportunidad política relativas a la participación electoral. El rol central jugado por el Estado en los procesos de movilización en América Latina, hacen que esta mirada al contexto nacional ponga particular atención en las reformas de las políticas sectoriales y en los cambios a la dinámica de relación establecida entre el Estado y las organizaciones sociales. En el caso peruano diez años de autoritarismo fujimorista, significaron una política antidroga contradictoria, permisiva y militarizada, mientras la forma de relación con la sociedad fue eminentemente clientelista. Si la crisis del régimen fujimorista generó una EOP favorable para que el movimiento cocalero se afirme en la vía contenciosa logrando posicionarse como interlocutor ante las autoridades, la transición democrática permitió el rediseño de políticas e instituciones constituidas en los años de autoritarismo. Este nuevo contexto facilitó además el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas que, en el marco de una nueva ley electoral, se muestran menos reacias a vincularse con los productores cocaleros.

De otro lado, se cuentan las condiciones del contexto internacional, referidas principalmente a la postura del gobierno de Estados Unidos frente al tema drogas y al desarrollo de los movimientos sociales en los otros dos países productores como son Bolivia y Colombia. En el primer caso, la primacía de sectores conservadores del Partido Republicano, llevan a que el énfasis sea puesto en salidas represivas como la erradicación y las fumigaciones, en un contexto regional donde el Perú firma diversos tratados que implican una serie de condicionamientos en el tema coca. En el segundo caso, la experiencia del movimiento cocalero boliviano y el ascenso de Evo Morales a la

presidencia de Bolivia, se consolida como un referente central en las acciones del movimiento cocalero peruano. Pasemos a analizar las condiciones institucionales del contexto nacional e internacional que se reconfiguran presentándose como favorables para la estrategia dual del movimiento cocalero.

3.1. La transición democrática como estructura de oportunidad política nacional

Además de la crisis del régimen fujimorista, que implica nuevas condiciones para el desarrollo de la protesta, la denominada “transición democrática” es la segunda estructura de oportunidad política nacional que consideramos relevante para la dualidad estratégica desplegada por el movimiento cocalero. Este período contempla el replanteamiento de la política anti drogas y de las instituciones encargadas de su ejecución, así como la entrada de nuevos profesionales abiertos al diálogo. De otro lado tenemos que la transición permite lo que Van Cott denomina “marco legal” favorable, referido a la promulgación de leyes orientadas a ampliar la participación de sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres o los indígenas. (Van Cott, 2005). Todo esto en el marco de una prolongada crisis de representación expresada en la debilidad de los partidos políticos tradicionales y el surgimiento de nuevos grupos que posicionan nuevos referentes discursivos “nacionalistas” y tejen relaciones con actores contenciosos como los cocaleros.

En América Latina, el concepto de “transición democrática” fue particularmente trabajado por la ciencia política al calor de las crisis de las dictaduras del cono sur a mediados de la década de los '80. Ya desde entonces suscitaba polémica en tanto no especificaba hacia qué tipo de democracia se estaba arribando; si a un conjunto de reglas formales expresadas en leyes, elecciones y formas de control estatal o si más bien a un sistema político orientado a atender la justicia y la igualdad. Al margen de esta discusión- que aquí no profundizaremos- retomamos el término por su carácter temporal que nos permite ubicarnos en los procesos ocurridos a lo largo de un determinado momento de la política nacional. Siguiendo a O' Donnell, las transiciones se definen como “El intervalo entre un régimen político y otro, un proceso en el cual el autoritarismo comienza a modificar sus propias reglas ampliando derechos individuales y políticos” (O'Donnell, 1986: 6). En tal sentido, las reglas de juego entran en un estado cambiante, mientras los

actores políticos y sociales disputan por influir en estos cambios de modo que los beneficien en el futuro. La situación de inestabilidad y la búsqueda de acuerdos para la consolidación del nuevo régimen, permiten reformas y amplían las alternativas existentes.

En el caso peruano, tras la caída del Fujimorismo, asistimos a un particular período de transición democrática en tanto no se trataba de una “dictadura” en el sentido tradicional⁵⁷. Si bien Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, da un autogolpe el 5 de abril de 1992 cerrando el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, el año siguiente convocó a un referéndum que lo legitima y reforma la constitución permitiendo la reelección presidencial consecutiva, cosa que consigue en 1995. Resulta más conveniente definir al fujimorismo como un “autoritarismo competitivo”; un tipo híbrido de régimen en el cual, las instituciones formales son utilizadas como medio principal de obtener y ejercer un control autoritario; las reglas de juego frecuentemente son violadas pero a la vez se mantienen estándares mínimos convencionales de democracia (Levitsky, 2002). La crisis de estos tipos de régimen, y el período de transición que delinea, tienen que ver con cambios sustanciales al interior de la estructura autoritaria que los sostiene y también con las acciones que asume la oposición para cuestionar la legitimidad y representatividad del gobierno. Para Levitsky, en el Perú de fines de los '90 se producen cambios fundamentales cuando Fujimori intenta su tercera reelección en medio de probadas acusaciones de fraude, violando uno de los procedimientos que se jactaba de respetar, lo cual produce una oleada de movilizaciones, la censura de la comunidad internacional y fricciones al interior de su misma agrupación. Por su parte, la oposición cumple un rol fundamental en el terreno legislativo, denunciando la corrupción del régimen, las violaciones a los derechos humanos y el carácter autoritario del gobierno expresado por ejemplo en el intento por controlar el Tribunal Constitucional.

Según estos planteamientos, la transición democrática del fujimorismo es decidida principalmente por actores institucionales; de un lado quienes encabezaron las protestas contra el fraude electoral como Alejandro Toledo y su partido Perú Posible, de otro, las fuerzas opositoras con representación parlamentaria. La apurada renuncia de Fujimori en

⁵⁷ Para un estudio más detallado del fujimorismo y el período de transición democrática puede consultarse Martín Tanaka, *Democracia sin partidos Perú 2000-2005*, IEP Lima 2005. Steven Levitsky, *The rise of competitive authoritarianism*, Journal of Democracy. Volumen 13, N° 2 Abril 2002

octubre del 2000, tras el escándalo de los videos de Montesinos, favorecen a estos dos grupos siendo el Parlamento quien finalmente designa como presidente transitorio por un año al congresista por Cusco Valentín Paniagua con el mandato de organizar las elecciones presidenciales y desmontar en lo posible la mafia fujimorista enquistada en el Estado. La acción de los movimientos sociales no ocupa aquí un lugar importante. Sin caer en el extremo de anular la importancia de la protesta popular en la caída del régimen, lo cierto es que la debilidad ya descrita del SMS y el fuerte apoyo popular del que gozó Fujimori en los sectores más empobrecidos, impidió una acción colectiva protagónica por parte de los gremios y organizaciones existentes. Esto impidió que líderes sociales ocuparan puestos de gobierno en la nueva coyuntura política, obstruyendo a la vez el que se posicionara en el debate público una agenda nacional acorde con los intereses de los actores sociales. Durante el gobierno de transición y el período de Toledo lo que se sucedieron fueron protestas sectoriales como las desarrolladas por los cocaleros, los maestros o las enfermeras, manteniéndose la fragmentación social.

3.1.1 Reformas (fallidas) en la política “anti drogas”

En el tema coca, el gobierno de transición de Paniagua emprendió el replanteamiento de la política antidrogas fujimorista caracterizada por una permisividad selectiva frente al narcotráfico que, mientras reprimía a determinados elementos no comprendidos en sus redes, avalaba esta actividad y hasta participaba de sus ganancias tal como se supo posteriormente al enjuiciarse a jefes militares, policiales y al mismo Montesinos por sus vínculos con esta actividad delictiva. En un contexto de alza de precios de la coca, reacomodo de carteles del narcotráfico y crecientes movilizaciones cocaleras, en marzo del 2001 se crea la Mesa de Dialogo sobre coca, drogas y desarrollo alternativo, a la cual asisten autoridades estatales y líderes de los principales valles cocaleros, con el fin de esbozar una política nacional sobre el cultivo de coca. El presidente Alejandro Toledo continuó con esta política de apertura y dialogo, es así que en septiembre del 2001 desactiva CONTRADROGAS y crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) con Ricardo Vega Llona como su presidente. Por un período de ocho meses, esta nueva institución mantiene una postura de dialogo frente a los productores cocaleros, favoreciendo el encuentro entre los líderes de los diferentes valles y generando

un espacio propicio para la formación de la CONPACCP. Asimismo, las reuniones con el ex ministro de agricultura Alvaro Quijandria, refuerzan este plan de concretar una política de estado sobre coca que no estuviera completamente subordinada a los Estados Unidos.

*Hay un reconocimiento explícito del fracaso de la guerra a las drogas ejecutada por Fujimori y que había costado a los Estados Unidos cerca de 107 millones de dólares en desarrollo alternativo y 80 millones en operativos de interdicción. La creación de DEVIDA representaba la intención de construir una verdadera política de Estado sobre el tema de drogas, que fuera antes que nada consensuada con los partidos políticos y con la sociedad civil, para luego recién discutirla con los Estados Unidos [...]*⁵⁸

Sin embargo, este esfuerzo autónomo no pudo resistir la presión norteamericana más aun luego de la visita al Perú de George Bush en marzo del 2002, quien públicamente “exhortó” al presidente Toledo a acatar la política “coca cero” que ya venía implementándose en Bolivia. El gobierno peruano finalmente acató estas recomendaciones, motivando la renuncia de Vega LLona y su reemplazo en mayo del 2002 por Nils Ericson Correa. A partir de entonces DEVIDA centró la política frente a la hoja de coca en dos ejes: los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) anteriormente explicados, y la erradicación de hectáreas de coca en Valles ilegales en coordinación con el Ministerio del Interior, particularmente el proyecto CORAH (Comisión de Reducción de Coca del Alto Huallaga) de la Policía Nacional. Si bien la Mesa de Dialogo se cierra, constituye una experiencia valiosa para los cocaleros, que se retiran de esta experiencia aglutinados en un gremio nacional, con mayor experiencia en el dialogo con las autoridades y en contacto con profesionales (sociólogos, economistas, etc.) que brindan un soporte técnico importante al movimiento asesorando sus plataformas.

Los últimos años de gobierno Toledista, la erradicación de cocales y la dura represión al movimiento evidencian el fracaso del dialogo y la concertación como política de Estado en el tema coca. DEVIDA fija sus objetivos institucionales en tal sentido, planteando que se propone “articular erradicación (oportuna) al desarrollo alternativo en la comunidad (donde se erradica) y en el espacio (parcela o caserío) cuando sea viable, promoviendo el bienestar de la población y contribuyendo a la paz social en las zonas cocaleras” (DEVIDA, 2007). En este esquema la erradicación de los cultivos pasa a ser

⁵⁸ Entrevista a Hugo Cabieses, economista ex asesor de la CONPACCP Y, realizada por Anahí Durand, Lima, 28 de agosto del 2007.

requisito de la implementación de programas de desarrollo, debiendo la comunidad comprometerse a eliminar totalmente los cultivos ilícitos de coca. DEVIDA contrata como entes ejecutores a CARE Perú primero y a CHEMONICS después, insistiendo ambos en un esquema de sustitución de cultivos que por más rentabilidad momentánea que ofrezcan no pueden competir a mediano plazo con los precios de la hoja de coca. (Ver Anexos)

Durante la transición democrática las reformas favorables a la participación de las organizaciones cocaleras en las políticas antidrogas son efímeras. Dado el carácter de la transición peruana, en la cual los movimientos sociales no ocupan un lugar central, la inclusión de las organizaciones en el dialogo y rediseño de políticas no se afirma como una política de Estado, dependiendo más bien de la voluntad de los funcionarios. El esfuerzo de posicionar una mirada sobre el tema coca, alejada de lo policial y centrada en el desarrollo agrario, es rápidamente cortado por la falta de voluntad política ante las presiones externas. DEVIDA, repite el esquema de erradicación y de desarrollo condicionado que reprime y criminaliza la protesta y la producción de coca en general. Sin embargo, a lo largo de todo este proceso, los productores realizan aprendizajes claves para evaluar las posteriores estrategias a seguir. Cuentan con la experiencia de haber participado en instancias de diálogo y han logrado rodearse de profesionales cercanos que colaboran en la elaboración de las demandas y propuestas de políticas con el Estado. Aunque de corta duración, la experiencia reformista y participativa en el tema coca que trajo la transición democrática, abre para el movimiento cocalero nuevas oportunidades en términos de relaciones y les brinda nuevos marcos de evaluación, presentando como necesaria y sobre todo posible la participación en espacios institucionales.

3.1.2 Legislación electoral: Cambios y posibilidades

Tal como anota Van Cott para el estudio de los “partidos étnicos” en Sudamérica, uno de los puntos centrales para explicar la participación de los movimientos indígenas en la arena electoral son los cambios en las reglas de juego, más específicamente la promulgación de nuevas leyes orientadas a ampliar la participación de la ciudadanía. Entre estos cambios a las reglas formales resaltamos dos: leyes orientadas a descentralizar los puestos de representación política y reglas que favorecen la apertura del sistema a partidos minoritarios y no sólo a coaliciones (Van Cotte, 2006). El régimen fujimorista,

caracterizado aquí como un “autoritarismo competitivo”, apeló para perpetuarse en el poder a la restricción de libertades, la alteración del voto popular y la manipulación de las reglas previas a las elecciones. Esto implicaba atacar principalmente a los partidos poniendo vallas altas para su inscripción, dificultando las alianzas partidarias y restringiendo posibilidades de elección de potenciales líderes sociales opositores. Entre las leyes más restrictivas para la participación de los movimientos destaca la instalación del distrito electoral único y la ausencia de una legislación específica sobre partidos políticos.

La caída del régimen, y la subsiguiente transición democrática, trajo reformas en ambos puntos de la legislación. Durante el gobierno de Valentín Paniagua y el de Alejandro Toledo se emprendieron cambios legislativos orientados a despersonalizar la política y devolverle importancia a los partidos (Vergara, 2007). Estas reformas a su vez, fueron leídas por las organizaciones sociales como favorables a su participación en el terreno electoral. Una de las primeras normas modificada es la Ley Orgánica de elecciones que consagraba el distrito electoral único. De acuerdo a la ley fujimorista todos los candidatos al parlamento tenían las mismas posibilidades de ganar de acuerdo al porcentaje de votos que sacaran sin importar su procedencia regional. Quedaba a discreción de los partidos decidir si incluían o no candidatos de provincia lo cual casi no ocurría en tanto tenían más posibilidades de ganar los candidatos de las regiones mas pobladas, generalmente Lima y las ciudades de la costa. Líderes sociales de regiones poco pobladas como la Amazonía quedaban excluidos sin posibilidades reales de acceder al parlamento nacional, dejando sin representación a vastas zonas del país. Durante el gobierno de transición, el 27 de diciembre del 2000 se aprueba la modificación a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) instituyéndose el Distrito Electoral Múltiple para la elección de congresistas en los comicios de abril del 2001 y en adelante⁵⁹. Dicha norma crea 25 distritos electorales basados en las regiones del país y establece que la distribución de escaños se realizara de manera tal que a cada distrito le corresponda como mínimo una curul de las 120, repartiéndose las 95 restante proporcionalmente a la población electoral de cada departamento.

Artículo 21°.- (...) La elección de congresistas a que se refiere el artículo 90° de la Constitución Política del Perú, se realiza mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial, excepto en los

⁵⁹ Diario Oficial El Peruano, Lima 28 de diciembre del 2000

distritos electorales donde se elige menos de dos congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial (...) El JNE asigna a cada distrito electoral un escaño, distribuyendo los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito.⁶⁰

Esta medida modificatoria a la ley electoral incluye también la instauración de cuotas de género para la representación parlamentaria. Con esto se busca equiparar la presencia de parlamentarios varones y mujeres, quedando establecido que todos los partidos deben incluir en sus listas de candidatos al Parlamento un mínimo de 30% de mujeres.

Artículo 116°.- Las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben incluir un número no menor del 30% de mujeres o de varones. En las circunscripciones en que suscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.⁶¹

Gracias a la nueva norma del Distrito Múltiple cada una de las 24 regiones podía elegir un número de representantes de acuerdo a la población electoral que alberga, facilitando el control ciudadano sobre los parlamentarios y en general el ejercicio democrático del sufragio. Además, obliga a los partidos políticos a incluir a líderes regionales representativos que incrementaran sus posibilidades de colocar mayor cantidad de parlamentarios. La cuota de género establecida por la misma ley, eleva las posibilidades de protagonismo político de las mujeres líderes. En el caso de las regiones como Huanuco o Ayacucho donde buena parte de la población electoral se aboca al cultivo de coca, la nueva ley será fundamental, pues ahora los dirigentes cocaleros tienen más posibilidades de ser elegidos que con el distrito único.

De otro lado, en el gobierno de Alejandro Toledo se promulga la Ley de Partidos Políticos N° 28094⁶². Durante el fujimorismo, la actividad de los partidos estaba regulada por la misma LOE, según la cual solamente se distinguían dos tipos de agrupación política: partidos políticos y grupos independientes, además establecía como requisito para su inscripción recolectar firmas equivalentes al 1% del padrón electoral. Tales medidas se orientaban a debilitar las fuerzas opositoras y en general impedir el surgimiento de nuevos partidos que pudieran competir exitosamente con el régimen. De otro lado no existía regulación respecto a los fondos de financiamiento de los partidos, generándose un terreno propicio a la corrupción, pues los líderes o fundadores solían cobrar por su

⁶⁰ Diario Oficial El Peruano, Lima 28 de diciembre del 2000

⁶¹ Diario Oficial El Peruano, Lima 28 de diciembre del 2000

⁶² Diario Oficial El Peruano, Lima 12 de octubre del 2003

inscripción a los interesados en candidatear mientras el gobierno “compraba” a los congresistas opositores para que se pasaran a sus filas en un fenómeno que se denominó el transfuguismo. Siguiendo a Vergara, la Ley N° 28094 regula y homogeniza dimensiones cruciales de la vida de los partidos tales como la democracia interna, la transparencia financiera y el financiamiento público, constituyendo un paso importante en pos de fortalecer los partidos y racionalizar el sistema político caótico y fragmentado (Vergara, 2007: 21) Si bien la aprobación y aplicación de la Ley fue muy polémica, en tanto en la práctica dejó muchos vacíos y solo demostró cambios parciales, algunos aspectos fueron importantes para facilitar la participación de líderes y representantes de movimientos sociales. Es el caso de la regulación de candidatos “invitados” en las listas parlamentarias, personas que sin ser militantes del partido ni someterse a elecciones primarias pueden participar como candidatos a invitación del órgano del partido establecido, generalmente la dirección nacional o el comité ejecutivo. Para el caso del Partido Nacionalista liderado por Ollanta Humala, este punto es clave pues bajo esta figura por ejemplo, podía invitar a las dirigentes de la CONPACCP a ser candidatas sin necesidad de que militaran, atrayendo así el voto de los valles cocaleros.

Artículo 24: (...) Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el estatuto, esta facultad es indelegable dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a presidente y vicepresidente de la república los cuales serán necesariamente elegidos en elecciones internas.⁶³

Junto a estas dos reformas en la legislación electoral que facilitan la participación de los movimientos sociales, debe agregarse que desde 1981 existía la Ley Orgánica de Municipalidades según la cual los alcaldes de las provincias y distritos debían ser electos en comicios democráticos y ya no designados por el poder ejecutivo. La temprana promulgación de esa ley significó una democratización importante del espacio local, reconfigurándose las élites políticas ampliando campesinos e indígenas sus posibilidades de ocupar puestos de poder. Durante los años de conflicto armado, en los distritos donde los enfrentamientos alcanzaron los niveles más álgidos, los Comando Político Militar, concentraron todo el poder; ese fue el caso de la mayoría de distritos cocaleros en el Río Apurímac y en el Huallaga. Desde mediados de la década de los '90 pero sobre todo después de la caída de Fujimori, los distritos cocaleros vuelven a elegir sus autoridades

⁶³ Diario Oficial El Peruano, Lima 28 de diciembre del 2000

locales, viéndose a la municipalidad como el “espacio primario” de representación, en el cual los alcaldes deben respaldar plenamente sus demandas.

En suma las reformas a la legislación electoral tienen un efecto positivo en las evaluaciones del movimiento cocalero sobre participar o no en las elecciones. Las nuevas condiciones institucionales permiten en primer lugar la elección de líderes regionales que, como los cocaleros, ya no tienen que competir a nivel nacional donde inevitablemente iban a perder dada la poca población electoral de la selva. En segundo lugar, la cuota de género establecida por la ley favorece a la incorporación en los partidos políticos de mujeres líderes de organizaciones sociales que ganaron protagonismo durante el Fujimorismo. En tercer lugar, se amplían las posibilidades de incorporar como candidatos a invitados no militantes del partido lo cual trae oportunidades para dirigentes sin trayectoria política como los cocaleros. Finalmente, con la salida de los Comandos Políticos Militares, los gobiernos locales se consolidan como espacios de disputa política y ejercicio del poder mucho más factibles de acceder para los productores. Todo esto, en un contexto de mayor represión por el cierre de la estructura de oportunidad política, hace que los principales líderes de la CONPACCP vean la participación política como algo posible. De otro lado, los cambios generados por la transición democrática producen cambios significativos en el sistema de partidos y las nuevas orientaciones que priman en éste frente a los movimientos sociales.

3.1.3 Sistema de Partidos políticos, crisis y nuevas agrupaciones

Otro aspecto del entorno institucional relevante para la decisión del movimiento cocalero de incursionar en la arena electoral es el relacionado a la composición del sistema de partidos y la disposición de los actores que operan en este para acercarse a los movimientos sociales. En términos de Sartori, un sistema de partidos políticos se define como “el conjunto de interacciones resultante de la competencia entre partidos” (Sartori, 1992: 67). En el Perú desde inicios de los '90 el sistema de partidos se vio afectado por una profunda crisis de representación democrática que terminó por profundizar la desconexión entre las agrupaciones políticas y los intereses de la ciudadanía. Para Scott Mainwaring (2006) dicha crisis se explica por un problema de “deficiencias estatales”, caracterizado por la pobre actuación del Estado en materia de políticas sociales y uso de

recursos públicos (corrupción), que incrementa la desconfianza de las mayorías populares en los partidos políticos que ejercen o disputan el gobierno, favoreciendo la proclividad por las salidas autoritarias. Para Martín Tanaka (2005) el problema de la crisis de representación guarda relación directa con el colapso del sistema de partidos que se produce en el Perú entre 1992 y 1995 y que significó la práctica desaparición de los “partidos tradicionales”⁶⁴ que habían dominado la escena política en décadas pasadas. Luego de la salida de Fujimori, el sistema de partidos se mantuvo débil, con altos niveles de volatilidad electoral y permanente protagonismo de los “outsiders” y de agrupaciones “independientes” sin ideología y sin mucho respeto por las instituciones democráticas. Se genera así un ambiente de incertidumbre y conductas cortoplacistas, haciéndose necesario implementar reformas institucionales orientadas a fortalecer los partidos y reconstruir un sistema de partidos aún en crisis.

Ambas explicaciones coinciden en señalar que uno de los principales efectos de la crisis de representación fue el deterioro del sistema de partidos políticos. Para Vergara, luego de la caída del régimen, la lectura que prima durante la transición democrática plantea que si Fujimori había logrado acumular tanto poder se debía precisamente a la ausencia de partidos políticos; por tal razón debía generarse un sistema de partidos sólido, con instituciones fuertes y legitimadas cuyas interacciones no repitieran el esquema de control fujimorista (Vergara, 2007). Las reformas a la legislación electoral, la promulgación de la Ley de Partidos Políticos y la Ley Marco de descentralización, son expresión de esta idea de consolidar un sistema de partidos democrático y competitivo.

Sin embargo las reformas emprendidas, particularmente las relacionadas con el sistema de partidos no dieron los resultados esperados por el gobierno de transición. La crisis de los partidos tenía un carácter más bien estructural relacionado con la debilidad de los referentes de sentido y con serios problemas para aglutinar intereses en una sociedad fragmentada, elementos que una nueva ley no iba a solucionar. Si bien las reformas tienen algunos efectos positivos como bajar la valla de inscripción y ordenar la vida orgánica y el financiamiento de los partidos, no solucionan problemas como la fragilidad de las alianzas, la dispersión del voto o el caudillismo de las dirigencias. Para el 2005, en la etapa

⁶⁴ Tal sistema estaba conformado por los denominados partidos tradicionales, básicamente el APRA, la Izquierda Unida (IU) y el Partido Popular Cristiano, surgidos en los años '30 y sujetos a referentes ideológicos claros.

previa a los comicios presidenciales y parlamentarios del 2006 el número de partidos inscritos se mantenía alto⁶⁵ y éstos en su gran mayoría seguían definiéndose como agrupaciones independiente formadas de manera ad hoc para las elecciones, realizando comicios internos de manera apresurada y abusando de la figura de invitados para designar sus principales candidatos.

En este panorama la candidatura de Humala cobra protagonismo pocos meses antes del cierre del padrón electoral. Proveniente de una familia de profesionales ayacuchanos asentados en Lima y vinculados al Partido Comunista, Ollanta Humala ingresa al ejército a inicios de la década de los '80 adscribiéndose a una corriente reformista dentro del ejército conocida como “cacerismo”⁶⁶. En pleno conflicto armado interno, ya como comandante, Humala se desempeña como jefe militar de la Base contra subversiva de Madre Mía en el Alto Huallaga, en un período sobre el cual aun no se han esclarecido diversas acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos. Pero Humala se hace conocido a nivel nacional los últimos meses del fujimorismo por encabezar un levantamiento militar exigiendo la salida de los principales mandos militares colocados por Montesinos. A causa de este hecho fue detenido pero el gobierno de transición le concedió una amnistía y posteriormente el gobierno de Alejandro Toledo lo designó agregado militar en Francia. Tras algunas discrepancias con el régimen toledista, Humala renuncia a su puesto diplomático y pasa al retiro en el ejército, retornando al país para impulsar su proyecto político el Partido Nacionalista Peruano (PNP) el mismo que finalmente se inscribe en el padrón electoral en alianza con la agrupación Unión por el Perú. Rápidamente el ex comandante alcanza los primeros lugares en las encuestas en base a una plataforma de corte nacionalista que planteaba cambios al modelo neoliberal y una cerrada defensa de la soberanía. Asimismo, el PNP se alineó con los gobiernos progresistas en América Latina, particularmente el de Hugo Chávez, cuestionando el intervencionismo norteamericano en la política nacional y la exclusión del Perú en los procesos de integración regional. El rápido ascenso de Humala fue explicado por la

⁶⁵ Al final participan de las elecciones generales 23 agrupaciones políticas www.jne.gob.pe

⁶⁶ El “cacerismo” refiere a una corriente dentro del ejército peruano que reivindica la figura del mariscal Andrés Bello Cáceres, héroe de la guerra del Pacífico (1879-1884) que organizó la resistencia a la invasión chilena en base a grupos de combatientes indígenas. El cacerismo se caracteriza así por su exaltación del nacionalismo andino y la defensa intereses nacionales en el sentido planteado por el general Velasco que nacionalizó los principales recursos del país.

mayoría de analistas políticos como un nuevo “outsider” en tanto no provenía del sistema político, no tenía mayor trayectoria política y lograba convocar a las mayorías en base a su carisma y la representación emocional con los excluidos. Sin embargo el fenómeno Humala presentaba componentes particulares, en tanto su condición de militar lo hacía parte del sistema; históricamente en el Perú las Fuerzas Armadas han jugado un rol fundamental en la política, la construcción del Estado y la identidad nacional (Panfichi, 2006). El 68% de los presidentes peruanos han sido militares y muchos de ellos como Velasco ejecutaron importantes reformas a favor del campesinado. Más aun durante toda la etapa de pacificación, en zonas como las cocaleras los militares jugaron un papel político como representantes del poder ejecutivo a través del Comando Político Militar y como operadores directos del aparato clientelar montado por el fujimorismo.

Para actores sociales como los cocaleros la participación de un militar en la política no era un fenómeno nuevo y mucho menos causa de distanciamiento. Por el contrario llamó rápidamente la atención del movimiento por su postura nacionalista de defensa de los más pobres, poco favorecidos por las políticas neoliberales. Particularmente su posición sobre el tema coca fue la más clara de todos los candidatos, enmarcandola en un discurso nacionalista de defensa de la soberanía frente a los dictados de los Estados Unidos, tal como lo manifestó en una entrevista radial

*(En el tema coca)...el Estado peruano debe acordar un pacto con las cerca de 300 000 familias dedicadas al cultivo de la hoja de coca, debe comprometerse a comprar ese excedente de hoja de coca. Actualmente el gobierno empuja a la población, a través de la militarización, a sembrar la hoja de coca y venderla al narcotráfico. Yo apoyo la propuesta de los cocaleros de exigir que se abran los padrones de cultivo de ENACO y se suspenda la erradicación forzosa de los campos de cultivo [...]*⁶⁷

Para los cocaleros, acostumbrados a tratar con actores políticos que sistemáticamente habían eludido el tema coca en sus plataformas, el discurso del comandante cobra un plus que lo hace todavía más atractivo. Para el PNP y su líder Ollanta Humala los cocaleros resultan aliados atractivos, tanto por su protagonismo en términos de movilización social como por las coincidencias discursivas en torno a la soberanía y la necesidad de definir políticas nacionales sobre el tema coca. Asimismo, en un marco de reformas electorales que incentiva la convocatoria a líderes locales y permite contar con “invitados”, los

⁶⁷ Entrevista a Ollanta HUmalá realizada por Radio CPN el día 16 de marzo del 2006. www.cpn.com.pe.

cocaleros cobran relevancia como figuras a incluir en la lista electoral y también como una importante masa de votantes. Si bien los cambios en la legislación no dan resultados esperados en términos de institucionalización del sistema de partidos, sí permiten el surgimiento de nuevos actores políticos, transformando sustantivamente las agendas de los partidos y la disposición de éstos a acercarse a actores contenciosos como el movimiento cocalero, generalmente excluido de sus propuestas y debates.

3.2 La estructura de oportunidad política internacional

Dentro de las condiciones institucionales que facilitan la opción por una estrategia dual en el movimiento cocalero, se cuentan también las oportunidades que se abren o cierran en el escenario internacional. No olvidemos que la problemática cocalera adquiere una dimensión internacional debido al carácter regional del cultivo de la hoja de coca, que abarca los países de Colombia, Perú y Bolivia, y las diversas redes que conecta el procesamiento y comercialización de cocaína. De un lado los países consumidores, especialmente los Estados Unidos, identifican a las drogas como un problema social prioritario, llevando a cabo diversas políticas orientadas a atacar la producción de coca y el narcotráfico. La “guerra contra drogas” se constituye en uno de los principales ejes de intervención de los EE.UU en la región, contemplando una serie de condicionamientos a los gobiernos andinos, los mismos que a su vez supeditan a estos dictados su postura frente a los productores cocaleros. De otro lado, los países productores, experimentan procesos de articulación y movilización en torno al cultivo de coca, constituyéndose en un gremio cohesionado que impulsa exitosas protestas. En Bolivia, el asenso del dirigente cocalero Evo Morales a la presidencia de Bolivia deja en claro que también en la vía electoral pueden conseguirse triunfos. Dichos procesos inciden en significativamente en las evaluaciones del movimiento en el Perú y su opción por desplegar una estrategia dual.

3.2.1 La presión norteamericana

Es recurrente afirmar que la política del Perú en el tema de las drogas se halla influenciada por las posturas y decisiones de los Estados Unidos. Esta situación se remonta a la década del 50 en que Norteamérica consolida su hegemonía en América Latina. Hasta antes de la revolución cubana América Latina no era considerada zona prioritaria para los EE.UU

más preocupado por los sucesos del sudeste asiático (Vietnam, Corea) dada su ubicación estratégica frente a la URSS en un contexto de guerra fría. Luego de la caída de Batista los norteamericanos ponen más atención al continente a fin de evitar el desarrollo de movimientos subversivos. Se crea así la Alianza para el Progreso que combinaba un lenguaje reformista con políticas de contrarreforma. En este periodo el consumo de drogas abarcó amplios sectores de la sociedad norteamericana, por lo que los gobernantes advirtieron que este problema amenazaba la cohesión social, desafiando la vigencia de las normas políticas y sociales establecidas (Luca de Tena, 2000). Nixon hizo eco de estos temores declarando la lucha contra las drogas como cuestión de “seguridad nacional”, diseñando un paquete de políticas para aplicar en la región andina basado en la interdicción, la erradicación de cocales y el desarrollo alternativo. Con la llegada de Reagan al poder y en ascenso los neoconservadores, la política norteamericana cobró un cariz más intransigente, desarrollando una gran ofensiva contra las drogas en una cruzada que adoptó conceptos propios del puritanismo como salud moral. Esta posición prefería encontrar las causas del problema en los países latinoamericanos proveedores de cocaína, pues externalizar el problema ahorra a los políticos el trabajo de corregir las condiciones sociales y económicas que prevalecen en el interior de las ciudades norteamericanas. En 1982 se dictó la doctrina de seguridad nacional y se aprobó la “Defense Autorización Act” que permitía la participación de los militares norteamericanos en tareas contra las drogas al tiempo que Bolivia, Perú y Colombia se constituyeron en el teatro de operaciones de esta guerra (Luca de Tena, 2000)

La estrategia que privilegiaba la reducción de la oferta fracasó rotundamente pues ante los riesgos que el negocio entrañaba, los precios de la droga se elevaron. No obstante, en el esquema norteamericano, la cruzada de las drogas sustituía a la guerra fría y permitía continuar con el intervencionismo en América Latina, una vez superados los problemas de guerrillas e insurgencia. En 1986 el Anti Drug Abuse condiciona los vínculos económicos y políticos a la evaluación que el Congreso Norteamericano emite sobre el desempeño de los gobiernos en la lucha contra las drogas. De acuerdo a esto el presidente “certifica” si los países productores de coca o de tránsito “cooperan completamente” con los EE.UU. De no obtener la certificación los norteamericanos suspenden la mitad de la asistencia económica y militar. Tal situación ocasionó el rechazo de los gobiernos latinoamericanos

quienes no fueron tomados en cuenta por Bush siguiendo la línea conservadora de Reagan. En el caso del Perú, los militares norteamericanos instalaron una base de la DEA en Santa Lucia en el Valle del Huallaga, pese al malestar en los militares peruanos (Cotler, 1999).

En 1993 con la elección de Clinton el tema de la guerra contra las drogas pasó a un lugar secundario, pero en líneas generales se insistió en la línea represiva. En 1995 los fondos asignados por el congreso subieron a 13.200 millones de dólares, de los cuales el 21% se destinaba a los países proveedores de droga para que erradiquen las plantaciones de coca y fomenten el “desarrollo alternativo”. Se aprobó también el Plan Mundial de Acción, haciendo a la ONU protagonista de la lucha contra las drogas e inaugurando una fase de “responsabilidad compartida” entre países productores y consumidores, por lo que gran parte de los esfuerzos económicos se encaminan a sufragar planes de sustitución de cultivos. La elección de George W Bush en el 2000 supuso un nuevo giro conservador que enfatizó la erradicación de cultivos y se plasmó en las políticas de “Coca cero” en Perú y Bolivia y el Plan Colombia en ese país. Junto a esto en el 2002 entró en vigencia la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, siglas en inglés), mediante la cual un universo de 6,100 partidas arancelarias gozaban de acceso libre al mercado estadounidense hasta el 31 de diciembre del 2007 siempre y cuando se lograra la certificación del Congreso Norteamericano (Soberon, 2005). Dichas presiones motivaron el reinicio de las erradicaciones de coca y las protestas cocaleras del 2002 - 2003, pues el gobierno de Toledo puso particular empeño en posicionar al Perú como aliado de los Estados Unidos, cediendo a sus presiones y acatando los nuevos lineamientos. Como afirma el ex ministro Rospigliosi, la importancia norteamericana se debe básicamente a la procedencia de los recursos y la poca decisión política del Estado peruano

El peso de los Estados Unidos es muy fuerte por que la ayuda la ponen ellos, si no pusieran recursos no habrían programas de desarrollo alternativos, o muy pocos por que la Unión Europea también pone lo suyo. El punto es que el estado peruano no se interesa en plantear políticas propias sobre el tema, si el Perú no se interesa en el tema y ellos sí, entonces terminan poniendo la pauta. Es un problema de recursos y de decisión política, la mayor parte de ayuda antidroga viene de Estados Unidos, viene condicionada a algunos puntos si desarrollas PDA te dan dinero, si no quieres dinero no desarrollas ningún programa⁶⁸.

El proceso de negociación y firma del TLC Perú - USA entre los años 2004 y 2006 abrió una nueva coyuntura de presiones y condicionamientos que deja en claro la intención de

⁶⁸ Fernando Rospigliosi, entrevista citada.

Bush de continuar la guerra contra las drogas en base a una estrategia de erradicaciones forzosas. Acorde a ello, el gobierno de Toledo anunció que para avanzar en las negociaciones debía superarse la meta de erradicación anual, produciéndose fuertes debates con la dirigencia cocalera que se opone a esta iniciativa. Profesionales vinculados con las organizaciones cocaleras afirmaron que el TLC, lejos de desincentivar el cultivo, iba a llevar a que miles de campesinos que no están listos para competir con productos estadounidenses prefieran sembrar hoja de coca. En las zonas de selva alta, donde se cultiva también el arroz, el maíz amarillo o la palma aceitera, el TLC expondría a los productores a competir con importaciones subsidiadas, disminuyendo considerablemente sus ganancias. Esto orientaría al productor a cultivar coca en tanto es más rentable económicamente que los productos alternativos, tiene cuatro cosechas al año, no requiere de controles fitosanitarios y tiene un mercado seguro (Conveagro, 2005).

A estos cuestionamientos el gobierno de Toledo respondió con mayor represión intensificando las erradicaciones en los valles cocaleros durante el período 2004- 2005 cerrándose así la estructura de oportunidad política nacional abierta con la crisis del fujimorismo primero y la transición democrática después. Quedaba establecido así que la prioridad nacional era la firma del TLC y debían hacerse los esfuerzos para ello, reprimiendo así las protestas en los valles. En tal sentido la política coca cero impulsada por Bush y los condicionamiento norteamericanos en el marco del TLC son discutidos por el movimiento cocalero operando como una razón de peso para tentar puestos de representación política desde los cuales tener más posibilidad de frenar estas iniciativas.

3.2.2 El espejo boliviano: El ascenso de Evo Morales y su influencia en el Perú

Desde su constitución misma como actor social, el movimiento cocalero peruano tuvo un símil y referente inevitable en el proceso boliviano, más antiguo y de fuerte resonancia en el escenario internacional. De un lado, la experiencia cocalera en Bolivia desarrolla con éxito un proceso de movilización contenciosa que detiene las políticas de erradicación forzosa, logra articular sus demandas a la de distintos sectores y resulta decisiva para forzar la renuncia al poder de Sánchez de Lozada en octubre del 2003 (Escarzaga, 1999). De otro lado los cocaleros incursionan en la arena política electoral generando un instrumento político que logra representación territorial en las zonas cocaleras y

posteriormente, al confluir con otras organizaciones y partidos, logra transcendencia nacional alcanzando la presidencia. Asimismo la experiencia boliviana y la trayectoria de sus líderes actúan como una experiencia de la cual los cocaleros peruanos aprenden, redituando acciones y decisiones tomadas por sus similares bolivianos que consideran acordes con sus objetivos. Antes que comparar los dos procesos lo que nos interesa aquí es resaltar algunos rasgos del proceso boliviano con los cuales los cocaleros peruanos se identifican y toman en cuenta para su propia acción colectiva.

Al estudiar el proceso del movimiento cocalero boliviano debe tenerse en cuenta la revolución nacionalista de 1952, que cambió el sentido del campesinado como sujeto histórico politizando la sociedad y fortaleciendo las organizaciones sindicales. En cuanto a la hoja de coca, el cultivo para consumo tradicional en Bolivia se ha llevado a cabo por siglos en la región de las Yungas al norte de La Paz, mientras el Chapare al noreste de Cochabamba, como el Huallaga peruano y los llanos colombianos es la zona de producción ilegal, poblada por colonizaciones espontáneas y dirigidas a las cuales se sumaron más de 30 mil familias obreras despedidas de las minas del Estado ante la caída del precio del estaño y los efectos de la hiperinflación. Entre estas familias de “relocalizados” (despedidos) de las minas de Oruro que llegaron al Chapare se hallaba la familia Morales Ayma cuyo hijo Evo se convertiría en dirigente diputado y presidente. Estos ex mineros trasladaron su tradición sindical y organizativa a su nueva condición, formando los primeros sindicatos y Federaciones cocaleras en la zona. Se constituye así la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba afiliados a la CSUTCB (Central Única de trabajadores de Campesinos de Bolivia, afiliada a su vez a la Confederación Obrera Boliviana (COB)). A la par de ello, los productores generaron un discurso étnico, basado en la reivindicación de prácticas ancestrales como el uso de trajes tradicionales y del quechua, la whipala⁶⁹ y el acullico⁷⁰ como símbolos identitarios (Castillo, 2004).

Luego del fracaso del Plan Integral de Desarrollo y Sustitución de cultivos (PYDIS) puesto en marcha entre 1987 y 1989, el gobierno boliviano asumió una política represiva que movilizó activamente a los cocaleros. Encabezados por Evo Morales, los

⁶⁹ Bandera de los pueblos indígenas andinos.

⁷⁰ Masticar hoja de coca.

cocaleros realizaron en 1991 la primera Marcha de Productores de Coca por la soberanía y la dignidad Nacional. Ya como diputado nacional (electo en 1997 en alianza con un pequeño grupo de izquierda denominado Movimiento Al Socialismo MAS) Morales encabeza la Marcha por la vida, soberanía coca y territorio. En el 2000 la puesta en practica del Plan coca cero respaldado por los Estados Unidos, avivó la confrontación realizando los cocaleros del Chapare una marcha de Protesta a Cochabamba, en la cual obstaculizan caminos y pistas de aterrizaje. En medio de estos conflictos, la organización cocalera se fortalece y diversifica abarcando organizaciones de mujeres cocaleras y asumiendo la reivindicación de la hoja de coca un carácter de defensa nacional y de la identidad indígena en un país que se había constituido como república de espaldas al indio sus costumbres y tradiciones, entre las cuales la hoja de coca ocupa un lugar central.

Paralelo a este activo protagonismo en la protesta, en 1995 los cocaleros bolivianos conforman un organismo político sobre la base de la estructura orgánica del movimiento, constituyendo una suerte de “instrumento político” que compite electoralmente. Según este esquema, los dirigentes políticos se hallan sometidos a la estructura sindical que les dio origen, siendo elegidos los candidatos en la asamblea del movimiento el cual a su vez puede revocarlos y reemplazarlos. En 1997 los cocaleros colocan cuatro diputados y en 1999 se crea el MAS con Evo Morales como su principal líder, participando en elecciones municipales y ganando un quinto de las alcaldías del departamento de Cochabamba (Zegada, 2002). En las elecciones del 2002, el MAS logra colocar 7 senadores y 25 diputados de un total de 130 y Evo Morales queda a dos puntos de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 2005, tras la renuncia del presidente transitorio Carlos Meza y la convocatoria a nuevas elecciones, el MAS se posiciona como la primera fuerza electoral siendo elegido como nuevo presidente Evo Morales. Para Van Cott (2005) el éxito del movimiento indígena en general y cocalero en particular descansa en primer lugar en condiciones institucionales favorables expresadas por ejemplo en la promulgación de la ley de participación popular en 1994 que favoreció la descentralización del poder político y el acceso a puestos de representación de líderes indígenas en distritos y provincias. En segundo lugar, el éxito cocalero obedece a decisiones estratégicas entre las que resaltan la aglutinación de intelectuales kataristas e indianistas, que articulan un discurso político que llena el vacío de representación que tenían los pueblos indígenas. La

organización cocalera es parte constitutiva de este esfuerzo de intelectuales, políticos y líderes sociales por construir una representación política en un escenario de crisis institucional donde el clivaje étnico actúa como el eje central de la articulación.

Todo este proceso es seguido con particular atención por los cocaleros peruanos. Desde los primeros esfuerzos organizativos en los valles del Huallaga y el Apurímac a inicios del 2000, la experiencia de las movilizaciones en Bolivia son un referente permanente en el discurso cocalero, así como los esfuerzos de los líderes por establecer canales de interlocución con el movimiento boliviano. Sin embargo, no llegan a concretarse canales de coordinación permanente e institucional entre ambos movimientos, limitándose la relación al intercambio de gestos simbólicos de apoyo por parte de los bolivianos. Tal solidaridad se expresa por ejemplo en la visita de Evo Morales y otros dirigentes bolivianos invitados al III Congreso Cocalero realizado en Apurimac en enero del 2004 y en los pronunciamientos de solidaridad que las Federaciones del Trópico enviaron a la CONPACCP tras la detención de Palomino. Cuando en las distintas coyunturas de protesta el Estado acusó al movimiento cocalero boliviano de estar detrás de los reclamos en el Perú, el mismo Evo Morales negó cualquier vinculación formal con los cocaleros peruanos que pudiera significar financiamiento o asesorías. En tal sentido, lo que se da más bien es un vínculo de aprendizaje, de reconocimiento y reflejo que influye orientando las decisiones de los actores aportando marcos referenciales que estos adoptan para posicionar mejor su discurso y praxis política. Tal como lo reconoce la actual congresista Nancy Obregón el proceso cocalero boliviano es una experiencia que influye significativamente en la decisión de asumir una estrategia dual, reforzando la idea de constituir una experiencia política propia, al margen de los partidos tradicionales que excluían a los sectores indígenas y campesinos.

La experiencia Boliviana influyó mucho por supuesto, ha influido por que si un indígena cocalero pudo llegar a ser presidente, por que nuestro movimiento campesino no. Creo que ha ayudado a romper esa barrera del desprecio que solamente los mismos apellidos, los mismos nombres las mismas familias tenían que seguir siempre en el poder en el Congreso, se ha hecho un desprendimiento por que en el Perú los indios, los cholos nos hemos unido para derrotar a esos grupos de poder que siempre nos han dominado por décadas⁷¹.

⁷¹ Nancy Obregón, entrevista citada.

Para mediados del 2005, con la campaña electoral en pleno auge, las condiciones del contexto internacional, son tomadas en cuenta por los productores cocaleros en la discusión acerca de optar o no por una estrategia dual. De un lado, las presiones norteamericanas en un contexto de discusión del TLC alimentan la criminalización de la protesta y limitan las posibilidades de éxito por la vía contenciosa. De otro lado, la experiencia boliviana demuestra que es posible incursionar con éxito en el terreno electoral e impulsar cambios favorables al movimiento desde los puestos de representación política. Dichos elementos sumados a las reformas institucionales producto de una transición democrática que llega a su fin y a partidos políticos que buscan acercarse a los movimientos sociales, son los puntos básicos en la discusión del V Congreso de la CONPACC donde los cocaleros deciden participar en el proceso electoral del 2006.

CAPITULO IV

LA PARTICIPACION DEL MOVIMIENTO COCALERO EN LA ARENA POLITICA

La estrategia dual desplegada por el movimiento cocalero, que incluye su participación en la arena electoral, responde tanto a elementos internos constitutivos del grupo como a elementos externos, particularmente los cambios en la estructura de oportunidad política abierta con la crisis del fujimorismo y la posterior transición democrática. De un lado, culmina la actitud dialogante frente a las protestas agudizándose la represión, de otro lado los cambios institucionales resultan favorables para la participación política. Tales condiciones son evaluadas por los canales orgánicos del movimiento llegándose a un acuerdo sobre la pertinencia de sí participar. Sin embargo, el rol desempeñado por la dirigencia resulta fundamental pues la decisión final sobre cómo participar en elecciones es dejada a la discrecionalidad de los líderes que fortalecen su poder y generan distanciamientos al interior del gremio cocalero al tomar caminos divergentes. Asimismo, la exitosa votación obtenida, abre una nueva etapa en la dinámica cocalera, existiendo ahora autoridades vinculadas al movimiento que deben hacer valer sus intereses en el terreno representativo.

El presente capítulo busca analizar la participación del movimiento cocalero en la arena electoral. En primer lugar abordamos el proceso por el cual los cocaleros toman la decisión de competir en la arena electoral, lo cual supone evaluaciones y afirmaciones tanto por canales orgánicos formales (los Congresos) como por los líderes, quienes adquieren más peso al momento de concretar la participación. En segundo lugar, analizamos el desempeño del movimiento en las elecciones, deteniéndonos en cómo operan durante la campaña electoral los elementos constitutivos (la identidad y las estructuras organizativas) y en el comportamiento del voto cocalero. Finalmente, realizamos una primera aproximación a la gestión de las autoridades del movimiento, o vinculadas a éste, tanto a nivel parlamentario como de gobiernos locales, intentando explicar los ejes priorizados por éstas y la relación que mantienen con la organización cocalera, la misma que hace evidente el desafío de mantener una estrategia dual que, para las autoridades, implica afirmarse en la vía

contenciosa desde los puestos de representación, generando contradicciones con otros poderes del Estado.

1. ¿Participar o no participar?: La coyuntura electoral del 2006

1.1. La discusión sobre la vía electoral por los canales orgánicos de la CONPACC

Desde su conformación, la CONPACCP define al “Congreso Nacional” como la máxima instancia de coordinación y decisión. Este espacio consiste en jornadas anuales de reunión a las cuales asisten los representantes de los valles cocaleros comprendidos en la organización. Los mecanismos de discusión y toma de acuerdos en estos Congresos implican la discusión en Comisiones de trabajo y sesiones plenarias donde las comisiones presentan sus avances y propuestas sometiéndolos a votación, tomándose las decisiones de acuerdo a la postura de la mayoría de delegaciones (por valle y no por asistente). Tal como desarrollaremos, los tres primeros congresos de la CONPACC se caracterizaron por confluencias y distanciamientos entre los valles cocaleros, pero sobre todo por la afirmación de plataformas maximalistas y estrategias contenciosas para hacer oír sus demandas. En el IV Congreso la situación varía, abordándose ya la participación en el terreno electoral como un punto de agenda con miras a los comicios de abril del 2006.

1.1.1 Los primeros congresos de la CONPACC

El I Congreso cocalero “*Por la unificación de las cuencas cocaleras del Perú*” se realizó en Lima del 18 al 22 de enero del 2003 y asistieron dirigentes cocaleros de los 12 valles ilegales del país⁷² luego de haber coincidido meses atrás en la Mesa de Dialogo Nacional organizada por DEVIDA. Tras acordar por unanimidad la creación de la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) los agricultores definieron como su objetivo central la defensa del cultivo de hoja de coca, articulando una plataforma basada en los siguientes puntos: a) cese inmediato a la erradicación de los cultivos de la hoja de coca en todo el país, b) Discusión de una nueva Ley de Coca, c) Formación de una Comisión Ad Hoc para investigar el fracaso del "desarrollo alternativo" y recomendar que

⁷² Asisten los delegados de los valles del Río Apurímac-Ene, Alto Huallaga-Uchiza, Alto Huallaga- Puerto Pizana, Alto Huallaga-Aucayacu, Alto Huallaga-Tingo María, Aguaytía, Pichis Palcazo, La Libertad, Jaén- San Ignacio y el valle del Monzon. No asiste San Gaban que se incorpora después.

los proyectos sean discutidos con los agricultores, d) Retiro de las ONGs de las cuencas cocaleras para que el dinero de los países cooperantes llegue directamente a los agricultores y sus familias por intermedio de los Consejos Municipales. Se eligió también un Consejo Directivo unitario al que se incorporaron líderes de todos los valles, ocupando los lugares principales los dirigentes de las cuencas más representativas: del VRA es elegido Nelson Palomino como secretario general y del Huallaga Nancy Obregón como sub secretaria y Elsa Malpartida como secretaria de organización. Se acuerda además una estrategia de defensa coordinada mediante la cual las cuencas cocaleras realizarían huelgas campesinas si el gobierno erradicaba cultivos de coca de manera forzosa en alguna zona.⁷³

El Primer Congreso es ante todo un acto fundacional de unidad y de concertación respecto a las plataformas y repertorios de protesta acordes con una estrategia de lucha contenciosa. Elementos de corte identitario o de participación electoral no se hallan presentes en el debate puesto que se prioriza sentar las bases fundacionales de la organización. No obstante, el pronto reinicio de las erradicaciones dos meses después del Congreso, da lugar a la marcha de sacrificio de marzo del 2003 y pone a prueba la naciente estructura, más aun luego de la detención de Palomino, el líder más carismático y de mayor consenso. Este golpe supone para la dirigencia de la CONPACCP un proceso acelerado de aprendizaje, en tanto las líderes deben asumir la dirección en pleno despliegue de la protesta, acopiando recursos, buscando aliados y negociando con el Estado. Si bien todo esto se consigue subsanar con relativo éxito, al punto que el movimiento cuenta con un cuerpo de profesionales asesores y negocia con ministros y congresistas, las fricciones entre valles empiezan suscitarse en torno a dos puntos básicos: cómo llevar a cabo la defensa de Palomino⁷⁴ y qué postura asumir frente a la erradicación gradual y concertada planteada por el Decreto N° 044 avalado por las dirigentes luego de la marcha.

El II Congreso *“Por la revalorización e industrialización de la hoja de coca, en defensa del movimiento campesino de las cuencas cocaleras y contra el narcotráfico”* se realizó en Lima del 18 al 20 de Febrero del 2004 y fue un evento de ruptura, que marcó el

⁷³ Ver actas del I Congreso Cocalero

⁷⁴ Maricela Guillen, entonces presidenta de la FEPAVRAE, propuso para la defensa de Palomino la contratación del abogado Ricardo Noriega quien a cambio pidió apoyo para su movimiento político, cosa que rechazaron las dirigentes del Huallaga. Finalmente se descubrió que Noriega estaba inhabilitado para ejercer la profesión.

alejamiento definitivo del valle del Monzón y el retiro temporal de la FEPAVRAE. A este evento asistieron un total de 2000 delegados, incluyendo los a los representantes de los valles del Monzón y el VRA. La discusión se inició en un ambiente hostil, marcado en sus primeros días por las críticas de la FEPAVRAE y del Valle del Monzón, que coincidieron en rechazar cualquier forma de erradicación y en cuestionar la forma como se resolvió la Marcha de sacrificio del 2003; según ellos, claudicando muy pronto de exigir la libertad de Nelson Palomino. Siguiendo a Cabieses, el tema de fondo en la división es que los dirigentes del VRA y el Monzón asumen una postura mucho más radical –expresada en la consigna “coca o muerte”– negándose a aceptar la estrategia de reducción gradual y concertada que aceptaron las dirigentas del Huallaga tras la marcha de sacrificio. Lo cuestionable del caso es que estos mismos dirigentes también se reunieron con los funcionarios del gobierno y estuvieron de acuerdo en ese punto (Cabieses, 2006).

Finalmente, pese a que Nelson Palomino llamó por teléfono desde el penal para instar a la FEPAVRAE a mantenerse en el espacio, la división se concreta y los cocaleros del Monzón y el Apurímac abandonan violentamente el Congreso⁷⁵. Por su parte, los valles que se mantienen hasta el final del evento acuerdan un plan de lucha inmediato de cinco puntos: libertad de Nelson Palomino, suspensión de erradicación de hoja de coca, desactivación de DEVIDA, expulsión de las ONGs de los valles cocaleros y discusión de una nueva ley de coca. La directiva es ratificada en su totalidad, incluido Palomino como secretario general que en su llamada telefónica respalda a las dirigentas del Huallaga, poniendo en claro su apuesta por la CONPACCCP. De otro lado, los cocaleros reafirman la estrategia de “lucha frontal” que incluye la realización de paralizaciones regionales y nacionales. Tal postura se concretó en mayo del 2004 con la segunda marcha de sacrificio a Lima en rechazo al reinicio de las erradicaciones forzosas en el Huallaga. Los resultados de esta acción fueron escasos, pues la división de la organización resta peso a la protesta y el gobierno se niega a negociar, debiendo los agricultores regresar a sus valles sin siquiera haberse reunido con el gobierno. Tal situación de rápido desgaste y debilidad será el principal punto de discusión en el congreso del año siguiente.

⁷⁵ Meses más tarde, los valles del Río Apurímac, Monzón y parte de la selva del Cusco, forman la Junta Nacional de Productores Cocaleros, designando a Iburcio Morales como presidente y a Maricela Guillen como vicepresidenta, defendiendo irrestrictamente el cultivo de coca y su comercialización.

El III Congreso Nacional de la CONPACCP se realizó en Lima entre el 14 y el 17 de marzo del 2005 y reunió a 1800 delegados. Podría decirse que se trató de un evento de crisis y transición, influido por la necesidad de emprender la reunificación de las cuencas cocaleras. En esta ocasión la FEPAVRAE no asistió en tanto mantenía sus discrepancias con el tema de la erradicación y atravesaba además un proceso de reestructuración interna ante los cuestionamientos a la gestión de Maricela Guillen. El Valle del Monzon por su parte mantuvo el distanciamiento pese a que su proyecto de Junta de Productores cocaleros no había logrado mayor relevancia nacional. A estas ausencias que debilitaron la convocatoria, se sumaron las críticas a las dirigentes del Huallaga al frente de la CONPACC por los malos resultados de la segunda marcha de sacrificio y por la fuerte represión a las protestas locales desarrolladas en los valles el 2004. Durante el evento la discusión se centró en qué posición debían asumir los cocaleros frente a la erradicación gradual y concertada, medida apoyada en eventos anteriores pero que en términos prácticos no había sido llevada a cabo tal como lo propuso el Estado. Las coordinaciones con los productores para decidir el número de hectáreas a erradicar nunca se concretaron y por el contrario DEVIDA y el CORAH continuaron con las erradicaciones forzosas. El descontento de los delegados se expresó en la exigencia de re cambio dirigenical por lo que el Consejo Directivo en pleno puso sus cargo a disposición. Sin embargo, bajo el argumento de no contarse con la presencia de todos los valles cocaleros, no se eligió una nueva directiva, ratificándose de manera transitoria a Palomino y los demás líderes con el encargo principal de organizar el siguiente encuentro, al cual debían ser convocados los valles que permanecían alejados. Finalmente el evento concluyó sin una plataforma inmediata y con dos grandes acuerdos: el rechazo a toda forma de erradicación de los cultivos de coca y el encargo a la Junta Directiva transitoria de la preparación del IV Congreso Nacional en el más corto tiempo posible.

Los tres Congresos brevemente reseñados, son representativos de las distintas fases que atraviesa el movimiento cocalero. En estas ocasiones la participación en la arena electoral no es contemplada como un punto de discusión en las agendas, priorizándose lo referido a la consolidación interna del grupo y a las coordinaciones entre los valles para efectivizar las acciones de protesta. De otro lado, los Congresos ponen en evidencia los principales puntos de discrepancia entre las distintas cuencas y la frágil unidad basada en

el férreo liderazgo de Nelson Palomino y en la articulación de plataformas maximalistas. Si bien el primer encuentro abre grandes expectativas unitarias, este inicio es rápidamente cortado por la detención de Palomino. El siguiente evento expresa la pronta crisis derivada de la caída del caudillo y del desenlace de la marcha de sacrificio, siendo el principal punto de discordia el que la CONPACC haya aceptado trabajar con DEVIDA en la erradicación gradual y concertada. El incumplimiento de este acuerdo, con el reinicio de las erradicaciones forzosas, da lugar a la marcha del 2004 y a la ruptura del ala radical del movimiento liderada por el Valle del Monzón que rechaza toda forma de erradicación e interdicción, a la cual se suma temporalmente la FEPAVRAE. Para el III congreso la situación es grave: la estrategia de protesta ha mostrado sus límites, la represión estatal se ha agudizado y la división interna reduce las posibilidades de acción. Como salida temporal a la crisis se propone la convocatoria urgente a un nuevo Congreso para reunificar los valles. La diferencia sustancial es que este proceso coincide con la apertura de la campaña electoral con miras a elegir presidente y congresistas de la República, en un marco institucional signado por reformas que permiten la participación electoral.

1.1.2 El IV Congreso Nacional de la CONPACCP

El IV congreso de la CONPACC “*Unidad y reencuentro nacional por la defensa de la hoja de la coca*”, se realizó en el distrito de Quinua, región Ayacucho del 27 al 30 de septiembre del 2005. Desde el título del evento y el lugar elegido quedó en claro que la principal intención era reunificar a los valles cocaleros. Quinua además se hallaba cerca del Río Apurímac y constituía un lugar emblemático por que en sus pampas se libró la última batalla americana contra las tropas españolas en 1824 sellando la independencia del Perú y el continente. A la reunión asistieron 800 representantes de las cuencas fundacionales, incluida la FEPAVRAE que con la salida de Maricela Guillen y el nombramiento de Alejandro Gutiérrez como nuevo presidente, se alejó de la postura del valle de Monzón, único espacio que no asiste marcando así su retiro definitivo de la CONPACC. Para organizar la discusión se formaron seis comisiones de trabajo; a las ya tradicionales comisiones de asuntos legales, de estatutos, agropecuaria, de medidas de lucha, la de industrialización y la de comercialización de hoja de coca se agregó la comisión de gobierno, donde debía discutirse la relación con los gobiernos municipales y regionales, así como la posibilidad de participar en las elecciones de abril del 2006.

La comisión de gobierno a su vez abarcó dos puntos centrales: la relación con las municipalidades y gobiernos regionales y la posible participación del movimiento en el próximo proceso electoral. Al primer punto se le dedicó la mayor parte del tiempo pues acababa de resolverse el conflicto entre el poder ejecutivo y los gobiernos regionales de Huanuco, Cusco y Ayacucho que declararon legal el cultivo de hoja de coca en sus jurisdicciones, provocando el rechazo del gobierno central que apeló tal decisión al Tribunal Constitucional (TC). Aunque el TC se pronunció invalidando la norma, los cocaleros consideraron que el poner en debate público el caótico marco normativo sobre la hoja de coca⁷⁶ resultó favorable a sus intereses, dejando en claro la necesidad de coordinar acciones con los gobiernos regionales y locales. Se priorizó también la evaluación de la gestión municipal en los distintos valles y la forma en que se venían utilizando los recursos del desarrollo alternativo. La discusión sobre la participación en los próximos comicios electorales no llegó a concretarse y la comisión de gobierno arribó a la plenaria sin una propuesta sobre el tema. Ya en la plenaria, el debate priorizó la evaluación a la directiva saliente y las propuestas sobre quienes deberían ocupar los cargos. Luego de presentar el balance de sus actividades la directiva liderada por Obregón y Malpartida, enfrenta duras críticas centradas en la conducción de la marcha de sacrificio del 2003, la defensa legal de Palomino y sobre todo en el aval al Decreto N° 044 donde se aceptó la erradicación gradual y concertada, punto que ya había causado las divisiones anteriores.

Tras un intenso debate, la directiva -incluido Nelson Palomino aún preso en Lima- pone su cargo a disposición y se aprueba la renovación. Al elegir la nueva dirección Palomino es el único ratificado como secretario general, mientras que el representante de la FEPAVRAE Walter Hacha es elegido como sub secretario en reemplazo de Nancy Obregón y Daniel Apaza de Sandia secretario de organización en reemplazo de Elsa Malpartida. En aras de la unidad, las dirigientes depuestas acatan la decisión tomada por mayoría y saludan a la nueva directiva, resaltando que se habían cumplido el objetivo de reunificar la CONPACC tal y como se les encargó el Congreso anterior.

⁷⁶ Según este fallo del Tribunal Constitucional, respecto al tema coca existe “ocio legislador” pues no existe una ley que unifique y ponga en concordancia diferentes decretos supremos, leyes y normativas. Por ejemplo mientras la legislación peruana no reconoce expresamente el uso tradicional de la hoja de coca, si mantiene un monopolio estatal para su comercialización. Así mismo señala que existe un peso desmedido de los tratados internacionales, pues la política antidrogas se basa en lo establecido por lista I de Estupefacientes de la ONU, pese a que este documento equipara coca y cocaína, algo que contradice lo planteado por las leyes del Perú. (www.tc.gob.pe, 25 de mayo 2008)

Son varios los puntos que llaman la atención del IV Congreso y que resultan relevantes para analizar la participación electoral por la que finalmente se decide el movimiento cocalero. En primer lugar, se evidencia el desencuentro entre las prioridades de discusión interna del movimiento y la coyuntura política nacional. A pocos meses de una nueva elección presidencial y legislativa, los cocaleros se abocan a discutir problemas relacionados con la designación de una nueva directiva. La evaluación de los cambios en la estructura de oportunidad política, que podría resultar favorable para la participación del movimiento en la arena electoral, es dejada de lado pese a que intuyen que se trata de un momento político trascendente. La decisión final se limita a un genérico sí a la participación que no contempla pasos concretos en la constitución de un partido ni posibles alianzas con agrupaciones ya existentes. Posteriormente los mismos líderes cocaleros reconocen como un error no haber definido estos puntos.

En el IV congreso de la CONPACC realizado en la Pampa de la Quinua en Ayacucho se decide que debe de participar en elecciones pero no se creó el partido, ni siquiera se llegó a acordar una nueva fecha para discutir como se iba a participar de las elecciones...ese fue nuestra gran debilidad, por que con los problemas internos no decidimos esto⁷⁷.

En segundo lugar el IV Congreso expresa los límites de los canales institucionales del movimiento para zanjar temas de interés general para su propia vida orgánica. El Congreso, como estructura decisoria con sus comisiones de trabajo y discusiones plenarias, se revela como inefectivo para procesar el debate y arribar a acuerdos que, por ejemplo, contemplen la creación del instrumento político. El que discusiones de carácter más bien administrativo y de gestión interna ganen centralidad, tiene que ver directamente con las disputas entre los valles por obtener mayor poder dentro de la organización. Los cuestionamientos al trabajo de la dirigencia saliente liderada por las mujeres del Huallaga y sobre todo la elección de una nueva junta directiva se vuelven los puntos cruciales. El que no pueda zanjarse con claridad el asunto de la participación electoral minando la potestad del Congreso como máxima instancia decisoria a nivel nacional, delegando hacia las estructuras locales un tema que necesitaba ser discutido por todos los valles.

En tercer lugar el desenlace del IV Congreso demuestra el peso de los liderazgos y el sesgo caudillista que prima en la CONPACC y la vigencia de cuotas de poder local que no se ceden en aras del espacio nacional. De un lado destaca el ascendente de Nelson

⁷⁷ Pedro Arevalo, entrevista citada.

Palomino, al punto que pese a estar preso en Lima, es ratificado como máximo líder de la organización en los cuatro Congresos Nacionales. En tal sentido, Palomino cumple un rol fundamental tanto en la recomposición de la FEPAVRAE retirándole la confianza a Maricela Guillen, como en la vuelta de este gremio a la CONPACCP y la designación de Walter Hacha como sub secretario. Pese a su legitimidad y reconocimiento, las dirigentes del Huallaga no pueden competir con Palomino y más aun avalan su poder, consultando constantemente su opinión y apoyando que se mantenga como presidente, en parte como una forma de expresar solidaridad con el compañero detenido, pero también conscientes de que perder su apoyo significa socavar la cohesión del movimiento. De otro lado, destaca el alto nivel de discrecionalidad que mantienen los gremios locales, al punto que un tema tan importante como participar en las elecciones nacionales es dejado a criterio de cada dirigente y su respectiva organización local. No obstante la alta concentración de poder por parte de la dirigencia que ésta situación expresa, en Ecuador sucede algo similar la primera vez que el movimiento indígena incursiona en el terreno electoral, dejando que los dirigentes decidan como una forma de evitar que el grupo se debilite en debates que se sabe no alcanzarán consenso y tampoco resulta conveniente sancionar a quienes quieran hacerlo (Van Cott, 2005) En el caso cocalero, dejar a los líderes en libertad de definir su participación electoral parece tener una doble dimensionalidad; de un lado sería una forma de evitar discusiones que pueden traer nuevas rupturas en el gremio, de otro revela la persistente tendencia caudillismo de las dirigencias de los dos principales valles con implicancias importantes en el curso de la estrategia dual asumida.

1.2. Cuando los líderes deciden...

Al decidir si participar o no de las elecciones, los dirigentes cocaleros hacen despliegue de los aprendizajes incorporados y del capital de liderazgo que poseen, ya sea para convencer a las bases de que la decisión tomada es la correcta o para posicionarse en un escenario político aún desconocido. Los líderes juegan un rol crítico en la acción colectiva, concretando diferentes caminos, proponiendo objetivos y definiendo estrategias. Para ello se valen de un “capital de liderazgo” es decir de una serie de atributos, conocimientos y disposiciones que les dotan de autoridad interna a la vez que les permite cambiar la direccionalidad de las negociaciones compensando la falta de recursos materiales y

subsanando los déficits de las estructuras organizacionales. El capital de liderazgo además, se sustenta en tres componentes ya explicados; a) el capital cultural entendido como el conocimiento del mismo idioma, valores y prácticas compartidas con la base además de habilidades transculturales que les permiten relacionarse con otros diferentes a su entorno, b) el capital social compuesto por las redes de interacción con políticos y la sociedad civil y c) el capital simbólico relacionado con el carisma, afinidades y sintonías electivas que el líder puede generar con su base pero sobre todo con la comunidad, valiéndose de éste para incidir en el curso de la acción colectiva (Erikson, 2007).

En la coyuntura electoral del 2006 la CONPACCP carece de recursos materiales y adolece de serios problemas organizativos expresados en una apurada reunificación y en las permanentes disputas entre los valles. Ante esto, valiéndose de sus aprendizajes previos, los líderes toman decisiones y optan por participar en la política electoral estableciendo coordinaciones que dejan al descubierto afinidades radicales y un efectivo manejo de los distintos componentes del capital de liderazgo que poseen. Son dos las estrategias de participación electoral asumidas por los líderes cocaleros: la candidatura a través del Partido Nacionalista en el Valle del Huallaga en las elecciones nacionales de abril del 2006 y la candidatura a través de una agrupación política propia en el Valle del río Apurimac para las elecciones regionales y municipales de noviembre del mismo año.

1.2.1 La invitación de Ollanta: Mujeres y militares en el Huallaga

Finalizado el IV Congreso Nacional las dirigentas cocaleras retornan al Valle del Huallaga en una coyuntura particularmente crítica debido al saldo negativo de las movilizaciones de junio y julio, fuertemente reprimidas por la policía. Estos incidentes dejan en claro los límites de la protesta y el cierre de la oportunidad política abierta por la transición. Ahora, el contexto político se encuentra marcado por la campaña electoral, en la cual destaca la postura del Partido Nacionalista Peruano (PNP) respecto al tema coca, enmarcándolo en un discurso de soberanía nacional. Las declaraciones de Ollanta criticando la injerencia norteamericana y condenando la represión estatal a las protestas cocaleras, son leídas como un gesto de acercamiento con la organización y contribuyen a afirmar en la dirigencia una mirada favorable a la participación electoral que ya en el Congreso de Quinua se había esbozado. En estas circunstancias, Nancy Obregón y Elsa Malpartida, que hasta entonces se negaban sistemáticamente a participar de la arena política, son invitadas

por Ollanta Humala para formar parte de la lista de candidatos parlamentarios del PNP. Para Nancy Obregón, invitada a competir como candidata al Congreso por la región San Martín, lo que termina pesando en su decisión de ser candidata es la situación de repliegue del movimiento cocalero, pero también el interés que manifiesta Ollanta Humala empeñado en construir un equipo de gobierno con representación de los movimientos sociales más activos y un discurso de defensa de la soberanía nacional coincidente. La convocatoria de Humala tiene una vocación inclusiva, abocada a resaltar las posibilidades que puede abrir para el movimiento formar parte del sistema legal:

Antes no habíamos participado por que creíamos que no era momento, pensábamos que como dirigentes debíamos seguir al frente del movimiento cocalero llevando la vanguardia de la lucha, pero hubo demasiada represión por parte del Estado. Yo estuve presa y cuando Ollanta se enteró de nuestra detención me llamó y me dijo si tu estas presa nunca vas a poder apoyar a tu movimiento mientras estando afuera ganando las elecciones podrías organizar mejor, abrir nuevos espacios. Es esa su convocatoria la que me anima a participar por que el presidente Toledo desató una persecución política al movimiento cocalero y eso hizo que efectivamente diga si y apueste por salir al frente. Para mi ha sido muy difícil participar electoralmente yo no soy empresaria soy campesina, tenia temor si pero no me iba a quedar atrás, tenia q salir adelante.⁷⁸

En el mismo sentido va la postura de Elsa Malpartida, quien es invitada a participar como candidata del Partido Nacionalista Peruano (PNP) al Parlamento Andino⁷⁹. Como muchos líderes sociales, ante la crisis de los partidos políticos que aún vive el Perú, Malpartida comparte una visión negativa de la política. Sin embargo, resalta que la experiencia de la protesta les permite reevaluar tal postura y optar por competir en la arena electoral.

Fue una decisión radical que ni yo misma me lo esperaba si tres años atrás me preguntaban yo decía que no, yo era la primera en decir la política es una cochinado para que me voy a meter incluso hay grabaciones que corroboran eso. Pero en todo este tiempo de lucha nos hemos dado cuenta de que si no formamos parte del sistema, si nosotros mismos no nos posicionamos para poder defendernos nadie lo va a hacer y en ese contexto hemos

⁷⁸ Nancy Obregon, entrevista citada.

⁷⁹ En 1969 se crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN) formada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como un organismo de integración regional y cooperación entre los países miembros. Dentro de su estructura de funcionamiento el Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control de la CAN cuyos representantes desde 1997 son elegidos por el pueblo en elecciones directas. El Parlamento Andino está constituido por cinco representantes titulares por cada país miembro lo cual da un total de 20 parlamentarios. Entre sus principales objetivos se cuenta el armonizar las leyes de los países andinos y coordinar iniciativas legislativas de carácter regional. El Parlamento Andino se reúne ocho veces al año en su sede central ubicada en Bogotá, y puede reunirse de forma extraordinaria para conocer los asuntos urgentes y específicos, cuando así lo solicite por lo menos un tercio de los representantes. Los representantes peruanos al Parlamento Andino, independientemente de estas sesiones, realiza reuniones periódicas de trabajo. www.comunidadandina.org, 27 de junio 2007

*evaluado. Nancy aceptó la invitación y yo también, por que nosotros no hemos creado el partido no somos militantes del Partido nacionalista, somos invitadas.*⁸⁰

La decisión de las ex dirigentes de la CONPACCP de participar en la lista del ex comandante Ollanta Humala, ex jefe militar de la base contra subversiva de Madre Mía en pleno Huallaga, durante la etapa más cruenta de pacificación en 1992, asombró a muchos. Pese a que en ese momento, distintos organismos de derechos humanos acusaban a Humala de haber sido responsable de torturas y desapariciones perpetradas cuando operaba en la zona bajo el seudónimo de capitán Carlos⁸¹, los cocaleros se reafirmaron en su apoyo al PNP. Explicar esta cercanía entre el ejército y uno de los actores más afectados por el conflicto armado, sobre todo en el caso de mujeres que además de sobrevivir a la muerte, desaparición y/o tortura de sus familiares, debieron soportar crímenes como violaciones sexuales, merece un punto aparte.

Ensayar una explicación sobre la cercanía entre cocaleros y militares implica reparar en dos características importantes del ejército peruano relacionadas entre sí: su “tendencia dirigencial” que los lleva a sumir la conducción del Estado en coyunturas que consideran críticas, y su rol como “agente movilizador” que lo acerca a las poblaciones marginadas. Respecto al rol dirigencial, Kruijt (2003) introduce el término de “ejércitos políticos” para referirse a las instituciones militares que consideran su participación en los asuntos de gobierno como parte de sus legítimas funciones. El hecho de que los militares participen en política puede dar lugar a dictaduras militares caracterizadas por altos niveles de opresión pero también a regímenes reformistas donde los ejércitos políticos asumen tareas modernizadoras y de integración social. Centrándonos en los países andinos en ocasiones importantes - como el gobierno del general Velasco en el Perú o el de la Junta Militar presidida por Ramón Lara en Ecuador⁸²- la intervención militar se ha inscrito en una tendencia más bien reformista, cuyos orígenes pueden rastrearse en los procesos de

⁸⁰ Elsa Malpartida, entrevista citada.

⁸¹ Dentro de la estrategia contra subversiva del ejército peruano distintos comandantes destacados a una misma zona usaban el mismo pseudónimo como una manera de proteger su identidad frente a posibles atentados. En la Base Madre Mía fueron cuatro los oficiales que operaron con el seudónimo de Carlos, uno de ellos habría sido Ollanta Huamala, aunque aún no se ha esclarecido si él fue el responsable de las violaciones a los derechos humanos. www.aprodeh.org.pe 19 agosto 2007.

⁸² La Junta militar que gobernó Ecuador entre el 11 de julio de 1963 al 29 de marzo de 1965 estuvo conformada por Ramón Castro Jijón, Luis Cabrera Sevilla y Marcos Gándara, llevo a cabo reformas importantes tales como la nacionalización del petróleo y la reforma agraria (Barrera, 2001).

profesionalización de los ejércitos a comienzos del S. XX⁸³. En el Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Velasco Alvarado en los '70 es quizás el más representativo de estos gobiernos que asumen una tarea reformista y modernizadora. Velasco implementó una Reforma Agraria sumamente radical que liquidó el sistema de hacienda entregando las tierras a las comunidades campesinas al tiempo que dio al quechua categoría de lengua oficial. Nacionalizó también los principales recursos de la nación (tales como el petrolero y los minerales) y llevó a cabo una ambiciosa Reforma Educativa que modernizó los programas escolares, amplió la cobertura y potenció la educación superior a niveles aún no superados (Méndez, 2006).

En cuanto al carácter de “agente movilizador” adquirido por el ejército, este radica en su actuación en nombre del Estado para impulsar campañas consideradas claves para la aplicación de determinadas políticas que respalda el cuerpo militar. En el Perú, tal como se evidencia en determinados momentos de la historia nacional, estas campañas han generado un fuerte vínculo entre ejército y campesinado. En la guerra con Chile el ejército peruano organizó la resistencia a la invasión en base a guerrillas campesinas. Durante el Velasquismo el gobierno centró sus principales reformas en el campesinado y organizó el apoyo social en base al Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) un aparato burocrático de gran envergadura dirigido por militares que supervisaban la implementación de las reformas y movilizaban a la población en torno a ellas. En el conflicto armado en los '80, la alianza entre campesinos y militares para la formación de comités de autodefensa, resultó decisiva para la derrota de Sendero Luminoso. Según Méndez esta relación histórica se debe a que los gobiernos militares y los regímenes civiles autoritarios han sido los que más han implementado políticas estatales a favor del campesinado, es decir han hecho más por su incorporación a los beneficios del Estado y la ciudadanía (Méndez, 2006).

Tanto en su rol dirigencial como en su papel de agente movilizador, los militares estrechan niveles de confianza con los campesinos, dentro de los cuales los cocaleros no

⁸³ En el Perú la contratación de una misión militar francesa, con amplia experiencia colonial, influyó en la extensión de la presencia militar a todas las regiones del país en base al desarrollo de las escuelas de ingeniería militar y la participación del ejército en la construcción de redes de transportes. Otros componentes como las características de la oficialidad; más mestiza y abierta a los sectores populares, es algo que las diferencia frente a las fuerzas armadas del cono sur. A esto se debe sumarse la existencia de un imaginario social que suele ver al ejército como la única institución capaz de convocar la unidad nacional ante la debilidad de las clases dominantes (Rouquie; 1984).

son la excepción. Durante el Fujimorismo, este vínculo se basa en las coordinaciones entre campesinos y militares para derrotar a Sendero Luminoso. Pese a las violaciones a los derechos humanos que los militares cometen contra las comunidades en última instancia el campesinado cierra filas con el ejército. Esto se explica por el terror que Sendero llegó a implantar y a que las fuerzas armadas entendieron que campesino no equivalía a senderista, implementando una estrategia de alianza con la población que pasaba por la organización conjunta de los Comités de Autodefensa única organización autorizada por los Comandos Político Militares que ejercían el poder en las zonas de mayor violencia. Posteriormente el ejército promueve la conformación de organizaciones sociales de base dirigidas por mujeres como los Comedores Populares, pieza fundamental del aparato clientelista montado por el Fujimorismo, y se involucra en medidas como el “Soldado Amigo” que ordenaba la participación del ejército en tareas cívicas (arreglo de caminos, campañas de vacunación, etc.) en las zonas más afectadas por la violencia entre las que se cuentan el Alto Huallaga y el Río Apurímac (Kruijt y Tello, 2003).

En estos lugares, donde la acción senderista y la represión militar habían destruido toda organización autónoma y no tenía presencia ningún partido político, son los mismos militares quienes promueven la creación de organizaciones con las cuales establecer canales de diálogo necesarios para la implementación de políticas como por ejemplo las de sustitución de cultivos cocaleros. Las palabras de la congresista Nancy Obregón son ilustrativas al respecto y dejan en claro el vínculo que se establece con el ejército, sustentado en la coordinación de acciones concretas a favor de la comunidad. No se niega que hubo una cruenta represión militar, pero junto a esto va el reconocimiento de que posteriormente ese mismo ejército buscó incluirlos en la vida pública, promoviendo la organización y la elección de dirigentes. El que ésta sea una iniciativa vertical, en un contexto donde el ejército concentraba todo el poder, no es algo que se cuestione, por el contrario se resalta el hecho de que se impulse una participación directa sin intermediarios

Yo sabía muy bien que Ollanta no era ese capitán Carlos, mi pueblo sabe perfectamente que él no es. Por eso cuando Ollanta va a Tocache es bien recibido, la gente lo recuerda por que oficiales como él ha habido pocos. Ha habido muchos que nos machateaban, nos violaban, pero también ha habido algunos que han sido muy correctos y hasta nos han organizado. Yo he asumido la responsabilidad dirigencial gracias a un miembro del ejército peruano y lo reconozco. El teniente de la base contra subversiva de Puerto Pizana, que tenía el dominio de todo el distrito de La Pólvora, convocó a una reunión masiva a los 74 caseríos y nos hizo formar por que cuando el ejército te llamaba TODOS tenían que formarse y nos

dijo que teníamos que tener una organización y cada uno de nosotros debía de elegir un representante para poder coordinar y yo salgo elegida por mi caserío, de ahí continué en el Comedor, en la CONPACCP. Se motiva una participación directa, y hemos coordinado por ejemplo para frenar las erradicaciones concertadas, y así como el ejército alguna vez destruyo también después construyo. Yo vuelvo a recordar y vuelvo a sentir lo que hemos vivido, yo nunca podía conversar con un militar sentía asco por todas las acciones espantosas que habían hecho, pero ese día cuando el Teniente hablaba, en un tono muy educado, conocí otro prototipo de militar, que nos dio oportunidad(...) El pueblo nunca olvida, sabe recordar y sabe agradecer, el ejército alguna vez nos abrió una herida pero con su apoyo nos cicatrizo la herida. No queremos que se nos vuelva a hablar del pasado y no queremos recordar menos cuando se utiliza nuestro dolor como una táctica para desprestigiar a Humala y el Partido Nacionalista⁸⁴

En segundo lugar hay una conexión discursiva entre el PNP y el movimiento cocalero, que comparten un fuerte sesgo radical autoritario en la crítica al sistema político y las salidas necesarias para lograr su transformación. Como se explicó anteriormente, los productores cocaleros construyen un discurso radical atravesado por una tensión entre las posturas igualitarias del clasismo y la afirmación de la diferencia propias de las reivindicaciones étnicas, enmarcadas en una lógica que polariza fácilmente, tendiendo a encontrar enemigos irreconciliables. El discurso que levanta Humala comparte este radicalismo, criticando a “toda la corrupta clase política” y presentándose como el militar que va a terminar con los privilegios de las minorías, defendiendo la soberanía nacional y haciendo un gobierno a favor de los más excluidos por el modelo neoliberal, los mismos con quienes compartió las desventuras de la guerra interna. Asimismo, Humala explota en su discurso elementos relacionados con los valores y el quehacer militar, tales como la disciplina y el orden necesarios de implantar para resolver los principales problemas del país. Esta idea concuerda con las demandas de los sectores populares, agobiados por la inseguridad ciudadana expresada en robos, asaltos y pandillas juveniles que sucedieron al conflicto armado interno. No hay mayor elaboración ideológica ni referencias a socialismo o izquierdismo, es un radicalismo rudimentario, nacionalista y polarizador, que coincide sin dificultad con las posturas de las dirigentes cocaleras. En esa dirección se ubican las palabras de Elsa Malpartida:

Al conversar con Ollanta me di cuenta que habían coincidencias muy claras y muy marcadas en el tema, defender nuestra hoja, nuestro patrimonio (...) Yo soy de la zona del Alto Huallaga, soy de Tingo María y Madre Mía esta cerquísima y nunca he escuchado de Ollanta como asesino no hubo ni hay esa percepción. Además mirando el ejemplo de

⁸⁴ Nancy Obregón, entrevista citada.

*Chavez yo si creo que necesitamos mano dura en el país y qué mejor que un buen militar, hay mucha delincuencia, mucha corrupción de parte de los políticos y si no ponemos mano dura nunca lo vamos a corregir. Eso nos llevo a concluir que estábamos tomando una decisión correcta [...]*⁸⁵

Otro punto importante es el hecho de que sean dos mujeres las que alcanzan protagonismo político. Sin duda el rol que ambas jugaron al frente de la CONPACCP fue un punto crucial al ser invitadas, pues el despliegue de capital de liderazgo que hicieron al frente de la organización las colocó como las figuras publicas mas representativas del movimiento cocalero, incluso más que Nelson Palomino, quien pese a su poder al interior de la organización, resultaba un personaje menos mediático para la gran prensa. Debe destacarse también el papel de las mujeres en la zona del Huallaga, no solo por la disminución de la presencia masculina que trae como secuela la guerra interna, sino también por el proceso de promoción de la mujer que el Fujimorismo implementó vía el impulso a las organizaciones sociales de subsistencia. Si bien este enfoque se centra en que la mujer reproduzca en el ámbito público las tareas del hogar, es una ventana de oportunidad que las mujeres pueden aprovechar incursionando luego a otros terrenos. Ya durante la transición democrática, los cambios en legislación electoral como la ley de cuotas de género, hacen más atractivo para los partidos contar con figuras femeninas de fuerte ascendente popular. De este modo, factores del entorno influyen positivamente en el empoderamiento de las dirigentes pero sobre un capital que ellas ya poseen y que justamente les permite avanzar a nivel social y conseguir importantes triunfos políticos.

La invitación del PNP y su líder Ollanta Humala, es el camino elegido por las dirigentas cocaleras para participar en las elecciones generales de abril 2006. Esta participación es una decisión personal en base a coincidencias históricas, discursivas y de lealtades que no implica un compromiso a nivel de organizaciones, ni tampoco obliga a las líderes a militar en el PNP. Pasadas las elecciones la relación entre el movimiento y el nacionalismo no logra consolidarse y para las elecciones municipales de noviembre del 2006, Nelson Palomino anuncia la creación del partido cocalero Kuska Perú, agrupación que compite exclusivamente en la zona del Río Apurímac.

⁸⁵ Elsa Malpartida, entrevista citada.

1.2.2 La conformación de Kuska Perú: El poder del caudillo en el Río Apurímac

La liberación de Nelson Palomino el 5 de junio del 2006 marca un nuevo curso en la participación política de los productores cocaleros, generando una situación que puso en evidencia el poder siempre proclive al caudillismo de Palomino y la frágil unidad de la CONPACCP sucediéndose nuevas rupturas y distanciamientos al interior del gremio. Desde el inicio de su vida pública, como locutor radial primero y dirigente de la FEPAVRAE después, Nelson Palomino se condujo como un líder confrontacional y centralizador, capaz de hacer un despliegue sumamente efectivo de su capital de liderazgo sobre todo en términos culturales y en menor medida, también simbólico. Su trayectoria como dirigente rontero, maestro bilingüe y comunicador social le brinda elementos para tejer empatías con un público quechua hablante y de bajo nivel educativo. El programa que conducía en Radio Doble A era su mejor carta de presentación en tanto se transmitía completamente en quechua en el horario de mayor audiencia campesina (de 6.00 a 8.00am) abocándose a comentar las noticias nacionales y a criticar a las instituciones y los políticos. Desde este programa emprendió la campaña contra CARE Perú denunciándolos por la supuesta malversación de los fondos que debían ser para los cocaleros y por el trato despectivo que sus funcionarios sostenían con la población. El éxito de su campaña radial, le permitió escalar posiciones al interior de la FEPAVRAE y representarla en las conversaciones en Lima con DEVIDA relacionándose con los dirigentes de las otras cuencas cocaleras. En base a estas relaciones se conforma la CONPACCP, espacio donde también destacó rápidamente como el principal líder, siendo quien percibe con mayor claridad la urgencia de consolidar el gremio nacional y tejer alianzas políticas con agrupaciones y líderes que asuman algunos puntos de la plataforma cocalera. Si algo distingue a Palomino como líder gremial, además de su empatía cultural y simbólica con la base, es la exacerbación de un discurso radical que lejos de contener visiones transformadoras, se afirma en una escuela de politización que remarca las discrepancias y – al estilo senderista- ubica rápidamente al adversario como el enemigo al cual “aniquilar”. Al mismo tiempo, Palomino toma del fujimorismo elementos tales como el desprecio por la intermediación, centralizando decisiones y generando clientelas personales.

Al ser detenido acusado de protagonizar los disturbios contra CARE en el 2002 – donde se retienen funcionarios y posteriormente se quema el local- y durante los cuatro

años que dura su estadía en prisión Palomino no dejó de conducir los destinos de la CONPACCP ni perdió poder sobre la FEPAVRAE. Los dirigentes de ambas instancias mantenían permanente comunicación con él, ya sea vía telefónica o visitándolo por lo menos una vez al mes. De otro lado, al encontrarse preso en Lima, Palomino tiene la oportunidad de ampliar sus relaciones políticas, vinculándose con colectivos universitarios y círculos de activistas de izquierda que lo visitan y se solidarizan con su causa, formando por ejemplo la “Coordinadora Nelson Palomino Libertad” que aunque no alcanza mayor trascendencia publica es un gesto de solidaridad concreta. También visitan al líder cocalero políticos como el ex congresista Michel Martínez congresista por Unión por el Perú, que intento infructuosamente aliarse con los cocaleros y el movimiento etnocacerista liderado por Antauro Humala (hermano de Ollanta)⁸⁶. A nivel internacional su caso logra generar reacciones favorables, tales como la del líder cocalero Evo Morales o diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos que le expresan su solidaridad por correspondencia. En tal sentido mas allá de la dura experiencia de verse privado de su libertad, la cárcel no significó para Palomino el aislamiento ni como líder social ni como actor político, por el contrario le permitió establecer una serie de relaciones y acceder a diversos espacios con los cuales desde el VRA, probablemente, hubiera sido más difícil contactar no solo por el aislamiento geográfico sino por la dinámica mas coyuntural y ensimismada de la lucha gremial, circunscrita a demandas inmediatas relacionadas solo con el tema coca. Como el mismo Palomino lo reconoce la cárcel también es una “escuela”, un lugar de aprendizaje y nuevas relaciones en distinto niveles.

La cárcel ha sido una escuela y me ha ayudado a hacer distintas relaciones. Por ejemplo ahora pertenezco a la coordinadora indígena latinoamericana con sede en Guatemala y he recibido cartas con Evo Morales que siempre se ha solidarizado. También me visita gente como el congresista Michel Martínez, el es un amigo pero marco mi distancia con el por ser oportunista con apetito político. Con Antauro Humala también he conversado, pero yo no aplaudo a nadie (...) Como peruanos, como cocaleros lo principal ahora es la unidad mientras

⁸⁶ El denominado “Movimiento etnocacerista” es una agrupación política fundada en noviembre del 2002 por el mayor del ejército en retiro Antauro Humala. Si bien Ollanta y Antauro lideraron la rebelión militar contra Fujimori en noviembre del 2001, posteriormente tomaron caminos políticos separados. Mientras Ollanta asumió como agregado militar fundando luego el Partido Nacionalista, Antauro creó el movimiento etnocacerista, de corte militar y ultra nacionalista que demanda la supremacía de la raza cobriza en el Perú en contra los blancos y criollos. La vida de esta agrupación declina luego de que el 1 de enero del 2005 toma por asalto la comisaría de Andahuaylas (sierra sur) exigiendo la renuncia del presidente Toledo. Tras cuatro días de enfrentamiento y con el saldo de tres policías heridos Antauro Humala y 200 de sus seguidores fueron detenidos encontrándose aún en proceso judicial.

*no estemos unidos el Perú siempre va a ser vencido, por que siempre acá se busca el protagonismo personal*⁸⁷

A su salida de la prisión y pese a que desde la cárcel Palomino manifestó su abierto apoyo a la candidatura de Nancy Obregon y Elsa Malpartida, el líder tomó distancia de ambas dirigentes criticando la pronta división del Partido Nacionalista al escindirse el grupo Unión por el Perú⁸⁸. Anunció además que para las elecciones regionales y municipales los cocaleros construirían un partido propio, prescindiendo de las coordinaciones con Ollanta Humala. Estas declaraciones terminaron de distanciar a las dirigentes del Huallaga quienes se afirman en su lealtad al PNP. Por su parte Palomino retornó al VRA a emprender la construcción de su agrupación política., conformando en coordinación con la dirigencia de la FEPAVRAE la agrupación Kuska Tarpuy⁸⁹, a la cual definen como el instrumento político del movimiento cocalero. Con este nombre pensaban inscribirse para competir en las elecciones municipales y regionales en Ayacucho pero se presentaron dos inconvenientes: de un lado dada la premura del tiempo no consiguieron reunir las firmas necesarias del padrón electoral, de otro lado ya había una agrupación inscrita con el nombre de Tarpuy, un pequeño grupo de independientes liderada por José Urquiza Y Edwin Bustios, profesionales ayacuchanos vinculados anteriormente al fujimorismo. Ante ambos inconvenientes, Palomino y los cocaleros deciden que lo más factible para concretar la participación electoral es negociar con Tarpuy, compitiendo finalmente como Jatun Tarpuy⁹⁰. Estas negociaciones, reservan para Kuska la facultad de colocar los candidatos a alcaldes y regidores en la provincia de Huanta y La Mar y en todos los distritos de selva que estas provincias comprenden. Tarpuy por su parte coloca los candidatos para el gobierno regional en Ayacucho, y alcaldes provinciales y distritales en la zona de sierra. Según los cocaleros esta fue una alianza eminentemente electoral que no implicó ningún compromiso posterior y que excluyó a Palomino de candidatear por que la figura de libertad condicional a la que accedió para abandonar la cárcel se lo impedía.

⁸⁷ Nelson Palomino, entrevista citada.

⁸⁸ El Partido Nacionalista Peruano (PNP) para su participación en las elecciones nacionales se alió con el frente Unión por el Perú (UPP). Tras la derrota presidencial de Humala la UPP se separa de la alianza reduciendo sus fuerzas en el Congreso y participando por separado en las elecciones regionales y municipales.

⁸⁹ Kuska (Juntos) Tarpuy (siembra) podría traducirse del quechua al español como “Sembrando Juntos”

⁹⁰ Qatun (Grande) Tarpuy (siembra) puede traducirse del quechua al español como “La gran siembra”

En las elecciones Qatun Tarpuy se presentó como un movimiento regional ideológicamente “independiente” siendo uno de sus principales ejes de reivindicación la defensa de la hoja de coca y de los valores andinos como la reciprocidad y el trabajo. Más que un discurso abiertamente étnico con postulados y plataformas claras, se apoya en ciertos elementos de la etnicidad andina que le pueden valer la simpatía popular. Ya durante la campaña electoral la organización no se presentó a ninguna polémica o mesa de debate solo se expresó mediante volantes y comunicados radiales en un tono de abierta oposición a todos los partidos políticos tradicionales y cerrada defensa del cultivo de la hoja de coca y los campesinos del Río Apurímac. Los resultados fueron sorprendentemente favorables a Qatun Tarpuy, que ocupó el segundo lugar en las elecciones regionales y ganó en todas “las municipalidades cocaleras” de Ayacucho.⁹¹ Esto puede explicarse en tanto todos los alcaldes elegidos en los distritos del VRA eran dirigentes cocaleros con un fuerte ascendente social. Es el caso por ejemplo del actual alcalde de Sivia Alejandro Gutiérrez, ex presidente de la FEPAVRAE que reemplaza a Maricela Guillen e impulsa el acercamiento a la CONPACCP en el IV Congreso. Gutiérrez, campesino y ex comando de autodefensa de 38 años, era uno de los colaboradores más cercanos de Palomino y al frente del gremio cocalero había llevado a cabo una gestión concertadora, alejada de la radicalidad que primó con CARE. Para el alcalde, su participación en la política en general y como candidato en particular se explica por el respaldo de la misma población que reconoce su trabajo como líder campesino y lo elige prácticamente por unanimidad como su futuro alcalde:

Yo he sido dirigente del gremio a nivel del Valle, dentro de ello seguramente la población ha visto mi sinceridad, la transparencia de mi persona y me han propuesto, la misma organización me ha propuesto. Yo denegué la propuesta en cinco ocasiones por la razón de que siempre se dice este señor ha sido dirigente para protagonizar políticamente ese temor tenía de que me denigren mi imagen. Pero en la sexta reunión las principales organizaciones (FEPAVRAE, CADSVRAE, FECMAVRAE) decidieron que si o si tenía que ser candidato. He ganado con el 75% de los votos, solamente los comerciantes o las personas de capital del distrito no estaban de acuerdo, gente de la parte más urbana⁹².

La participación de Qatun Tarpuy es vista por las dirigentes del Huallaga como una iniciativa personalista de Nelson Palomino que se arrogó indebidamente la potestad de presentar a su partido como el brazo político del movimiento cocalero, sin haber consultado previamente a las bases por los canales institucionales, es decir a través de la convocatoria

⁹¹ Para consultar resultados electorales www.onpe.gob.pe

⁹² Alejandro Gutiérrez, entrevista citada.

de un nuevo Congreso Nacional. Para Nancy Obregón, el proyecto político de Nelson Palomino afectó profundamente la unidad del movimiento.

*Nelson menciona que ha pedido autorización a las bases pero es mentira. Hubiéramos querido que se haga un congreso para que la misma base decida y mientras no se haga eso nadie puede tomar la decisión a nombre personal. Nosotras siempre hemos afirmado que somos invitadas del PNO no como él que ha dicho que ya Kuska es el brazo político del movimiento [...]*⁹³

Ante estas declaraciones, Palomino ignora a las dirigentes y presenta el problema como un tema de celos políticos e intereses partidarios, en tanto las congresistas necesitaban consolidar protagonismo al interior del PNP y hacia la opinión pública presentándose como las auténticas representantes del movimiento cocalero en el Congreso de la República o el Parlamento Andino. En esta línea se afirman los alcaldes electos por Qatun Tarpuy, que defienden a Palomino y por el contrario cuestionan los beneficios que podría haber traído apoyar a Humala criticándole el “desconocimiento” de él y de las dirigentes del Huallaga sobre la realidad del VRA. Hay así una distinción entre los niveles de gobierno, afirmándose que para las elecciones presidenciales los votos si se orientaron de forma mayoritaria hacia el PNP pero no sucedió lo mismo a nivel local puesto que requería de otro nivel de conocimiento de la realidad

*No en concreto no podíamos juntarnos con Ollanta por que no podemos confiar en una persona que no ha vivido la realidad propia del campo. Toda persona que quiere hacer un cambio, aplicar unas políticas diferentes por la soberanía, si no conoce a fondo el terreno no va a poder simplemente. Casi el 60% estaba de acuerdo con la población ha votado por el PNP para presidente pero para las municipalidades ya es otra cosa por que esa persona no conocía a fondo la realidad del Valle y las señoras del Huallaga tampoco.*⁹⁴

En suma, la creación de Kuska Peru supone para el movimiento cocalero una nueva experiencia de participación política de carácter local, donde ya no se trata de invitaciones de los líderes partidarios sino de un esfuerzo propio, impulsado por Nelson Palomino pero con el apoyo unánime de la FEPAVRAE. La participación bajo el membrete de Qatun Tarpuy y los éxitos electorales conseguidos parecen confirmar el buen momento que atraviesa la organización cocalera pero a la vez evidencia contradicciones latentes a nivel de la CONPACCP que cuestionan esta iniciativa impulsada por Palomino, abriendo un nuevo ciclo de distanciamientos y rupturas. Lo que sigue entonces es analizar las dos experiencias

⁹³ Nancy Obregón, entrevista citada.

⁹⁴ Alejandro Gutiérrez, entrevista citada.

de participación electoral y cómo se desenvuelven en éstas la identidad y la estructura orgánica del movimiento cocalero.

2. La participación electoral del movimiento cocalero

Analizada la decisión de participar en la arena electoral del movimiento, consideramos pertinente detenernos en las formas en que operan en dicha participación los elementos constitutivos del movimiento como su identidad y estructura orgánica. Estudiamos en primer lugar cómo la identidad cocalera es puesta en escena, mostrando un carácter abierto y estratégico que facilita a los miembros del movimiento asumir esta nueva apuesta política como parte del nosotros colectivo, aunque a la vez pone de manifiesto tensiones discursivas que acaban resolviéndose según la historicidad de los valles, como sucede con el eje clase-etnia. En segundo lugar, analizamos el desempeño de las estructuras organizativas durante las elecciones, particularmente las debilidades de la CONPACCP para instituir una alianza formal con el PNP o conformar un instrumento político. Las disputas entre los dos principales valles no se resuelven, como tampoco lo hacen los conflictos entre líderes, primando miradas distintas del escenario y los actores políticos que terminan por afectar la unidad de la organización. No obstante, más allá de las dificultades y repercusiones, en los dos procesos electorales el voto cocalero muestra una tendencia favorable a los candidatos de la organización o propuestos por la misma, confirmando una aceptación tácita de la importancia de incursionar en el terreno electoral.

2.1 La identidad cocalera en la escena política: abierta y estratégica

Al desarrollar una estrategia dual, el movimiento cocalero despliega elementos característicos de su identidad que generan adhesiones y solidaridades al interior del movimiento y por fuera de éste. Características como el carácter abierto y receptivo de la identidad y la utilización estratégica de la misma para posicionarse en la disputa política, son dos elementos claves en esta apuesta cocalera. En el mismo sentido, se ponen de manifiesto las tensiones discursivas vinculadas al eje de discusión entre el clasismo y la revaloración étnica, elementos con los cuales el actor debe lidiar para no caer en el aislamiento y atraer a los votantes no cocaleros, necesarios para ganar la elección.

Una primera característica del despliegue de la identidad cocalera en la arena política tiene que ver con lo que Pizzorno (1989) denomina el manejo de una identidad “abierta” es decir receptiva a cambios e influencias del entorno político y temporal. Tal apertura identitaria implica un trabajo de constante resignificación de las subjetividades compartidas, que puede llevar al grupo a cuestionarse la lealtad o a afirmarse en esta asumiendo las nuevas decisiones. En la coyuntura electoral peruana, los cocaleros se abocan a un laborioso trabajo de resignificación de uno de los componentes más característicos de su identidad: la crítica radical al sistema político y su opción por la protesta. El movimiento cocalero irrumpe en la escena pública como un actor eminentemente contencioso; lo característico de su desempeño son las marchas, movilizaciones, enfrentamientos con la policía y una tendencia a rechazar las negociaciones con los actores políticos, tal como lo demuestra la consigna “Coca o muerte” enarbolada por el Valle del Monzón. Si bien el caso de Monzón es el más extremo, el movimiento en su conjunto y en general las grandes mayorías populares compartían este rechazo a la política representativa y sobre todo a los partidos. Siguiendo lo anotado por Tanaka (1998), el Perú no logra recuperarse aún del colapso del sistema de partidos, desbordados por los cambios una sociedad cada vez más mediática y de compleja representatividad. De otro lado, influyen en estas posturas el desprecio por las mediaciones, ya que como herencia del conflicto armado primero y el fujimorismo después, la política en los valles cocaleros fue sobre todo confrontación violenta y no actividad delegativa y dialogante. Al decidirse por la participación electoral los líderes deben presentar la nueva apuesta como parte de una etapa distinta, donde existen otras condiciones y otros personajes que justifican la competencia electoral. Las declaraciones de Nancy Obregón, reflejan bien estos cambios de significado y su vínculo con la apertura hacia lo electoral:

*Si antes a mí venían a invitarme yo les decía que no, uno por que en realidad no quería meterme en política y otro por que eran partidos ajenos a mis ideales, eran lo mismo de siempre. Lo nuestro era estar al frente del movimiento, dando la lucha, pero la represión del gobierno y la conversación con Ollanta nos han hecho cambiar esa idea, con el comandante hay muchas coincidencias, si se puede trabajar. Yo sé que no estoy al mismo nivel de los políticos pero ahora hay un pequeño espacio que me permite a mí participar y saber como se manejan las cosas, como actúa el enemigo [...]*⁹⁵

En el mismo sentido se ubican las declaraciones de Nelson Palomino, que ofrecen una explicación sobre el por qué se decidió participar: en primer lugar por pedido del mismo

⁹⁵ Nancy Obregón, entrevista citada.

movimiento y en segundo por que se encuentran los espacios propicios para hacerlo ya sea el partido liderado por Ollanta Humala o Kuska Perú:

Yo decía si a Nelson Palomino lo ven candidateando mátenlo, nosotros no somos politiqueros. Pero si hemos ido a comicios ha sido por pedido de los campesinos, de las bases, de la FEPAVRAE, de las rondas y las mujeres. Si los cocaleros están pensando ahora en el Congreso o en las municipalidades es para reclamar los derechos de los campesinos, no es para enriquecerse, las bases saben eso por eso nos están dando apoyo. Ahora también tenemos el espacio para participar, tenemos un partido [...].⁹⁶

La identidad compartida por el movimiento se muestra abierta a incursionar en un ámbito distinto y trata de presentarse acorde con la estructura de oportunidad política abierta con la transición democrática y los cambios que implica, ya sea permitiendo el espacio para nuevos partidos políticos críticos al sistema como el PNP, o viabilizando reformas legales como la promulgación del distrito electoral múltiple y la ley de partidos. Los dirigentes que participan como candidatos o apoyan decididamente la campaña electoral, consiguen bastante éxito en conducir el proceso de reflexión, evaluación y cambio favorable a esta nueva postura. De este modo, demuestran que participar en elecciones no equivale a traicionar la identidad del movimiento, por el contrario, las críticas a la clase política se mantienen lo mismo que la opción por la protesta. Lo que varía es la decisión sobre ocupar o no espacios de autoridad, afirmándose que esto será positivo y ampliará las posibilidades de hacer oír sus demandas.

Una segunda característica de identidad cocalera que opera de forma relevante durante su participación en la arena electoral es su utilización estratégica. Siguiendo a Berstein (1997) la identidad puede ser desplegada a nivel colectivo de forma coherente con la estrategia política decidida, lo cual no se restringe a cálculos instrumentales, abarcando también factores expresivos y de reconocimiento. Durante la participación electoral del movimiento cocalero puede identificarse un uso bastante efectivo de los tres usos estratégicos que la autora plantea. En primer lugar, la identidad es utilizada para el empoderamiento interno del movimiento en un proceso donde los líderes juegan un papel central ya sea resaltando valores, costumbres, actividades comunes o generando compromisos que sustentan en la necesidad de mantenerse unidos. La insistencia en reunificar la CONPACC y mantener un sólo gremio cocalero tiene que ver con esta apuesta

⁹⁶ Nelson Palomino, entrevista concedida a la revista “Cabildo Abierto”. Ayacucho, noviembre del 2006

identitaria que dota de referentes de sentido pero a la vez exige lealtad a las decisiones del grupo. En segundo lugar la identidad es utilizada para ganar posiciones en el escenario político; en el caso de actores tan estigmatizados como los cocaleros -frecuentemente tratados como delincuentes, terroristas, narcotraficantes- deslindar con estas relaciones y afirmar una identidad legal en el terreno político es una meta en si misma. Lograr el reconocimiento público del cocalero como un agricultor de la selva alta, es quizás uno de los triunfos más valorados por los dirigentes, teniendo en cuenta además la campaña mediática desatada por DEVIDA que enfatizaba los componentes de ilegalidad del cultivo.

Nos alegra que ahora somos cocaleros, ya no es como antes que éramos los terrucos, los peones del narcotráfico como nos quería hacer ver DEVIDA y nos presentan en la televisión. Creo que ya ha entendido la gente que somos agricultores que cultivamos fruta, café, también nuestra hoja de coca que ya no debe ser perseguida.⁹⁷

En tercer lugar y relacionado con lo anterior, el énfasis en los rasgos identitarios puede ser utilizado por el movimiento para cuestionar determinados consensos y aleccionar a la sociedad sobre sus particularidades. La campaña electoral se presentó como un escenario propicio para emprender una labor pedagógica respecto a la hoja de coca y así lo entendieron los candidatos vinculados al movimiento, que se abocaron a exponer las diferencias entre coca y cocaína, enfatizando además en la necesidad de legislar sobre el tema y definir políticas nacionales que vayan mas allá de la represión, comprendiendo estrategias de desarrollo para la Amazonía. Las candidatas y candidatos al Parlamento y las municipalidades asumen su identidad como punto de partida en una campaña que es electoral pero también aleccionadora.

Finalmente la identidad del movimiento opera en si misma como un rasgo de afinidad política, dentro de lo que Polleta y Jaspers (2001) denominan “identity politics”. Desde esta perspectiva, la identidad actúa como una conexión emocional y moral entre el individuo y su comunidad, motivando adhesiones y elecciones políticas tanto dentro del grupo como por fuera, convocando a otras personas que apoyan sus plataformas. En tal sentido, la identidad conlleva cálculos y elecciones pero abarca a la vez aspectos culturales y el desarrollo de sensibilidades que pueden ser muy fuertes como factores de cohesión. Durante el periodo electoral, los candidatos del movimiento apelan ante todo a la identidad cocalera para conseguir el apoyo y el voto de los miles de agricultores que viven en las

⁹⁷ Maricela Guillén, entrevista citada.

zonas de selva alta y en su mayoría producen coca. Tanto la congresista Nancy Obregón, la más votada en la región San Martín, como los alcaldes electos en el Río Apurímac transmiten esta identificación como la principal razón para ser elegidos. Pueden existir posiciones divergentes al interior de la organización, pero a la hora del voto los productores cocaleros deben votar por candidatos como ellos, que han compartido sus vivencias, que afrontaron los mismos problemas. Asimismo, durante el proceso electoral la identidad se expresa como una demanda en sí, exigiendo respeto al Estado y la ciudadanía. El eslogan de la primera marcha de sacrificio “*Cocalero un peruano como tu, ni narcotraficante ni terrorista*” refleja esta intención de interpelar a la colectividad nacional sobre la necesidad de detener estigmatizaciones tendenciosas. Este proceso, que abarca los actos de protesta y también las actividades proselitistas en las elecciones, trae resultados positivos en tanto se amplían considerablemente los marcos de reconocimiento. Desde el Estado, hasta antes de la creación de la CONPACCP el tema coca siempre fue tratado como un asunto policial a cargo del Ministerio del Interior, es con la transición democrática y luego de las marchas de sacrificio que se consigue ampliar la comprensión del tema incorporándolo en la agenda de desarrollo agrario y el Ministerio de Agricultura. Así mismo, hasta antes de las elecciones del 2006 las agendas de los partidos políticos no planteaban la necesidad de legislar sobre el cultivo, comercialización y consumo tradicional de hoja de coca. El movimiento cocalero, consigue introducir estos puntos en la discusión, frenando las estigmatizaciones y ampliando el debate a temas tales como el uso de plantas medicinales, la autonomía de la política nacional y el rol de los Estados Unidos.

En suma, el carácter abierto y estratégico de la identidad permite al movimiento cocalero lograr una mejor posición en la escena pública, operando favorablemente en su decisión de participar en los dos procesos electorales. Sin embargo, la participación política evidencia también tensiones irresueltas de la identidad, como sucede por ejemplo con la tensión discursiva entre el clasismo y la reivindicación étnica, que termina pesando en los distanciamientos entre los valles de acuerdo además a la historicidad de cada uno.

2.1.1 Discurso e historicidad: tensiones y marcos de sentido

Tal como se trató de explicar, el discurso del movimiento cocalero no se presenta como algo cerradamente estructurado, por el contrario es una construcción que si bien se encauza

dentro de la tradición radical peruana, mantiene latente una tensión entre la tradición igualitaria del clasismo y la afirmación de la diferencia de la revaloración étnica. Durante la campaña electoral dicha tensión se hace evidente resolviéndose de modo divergente según la historicidad de cada valle y la particular evaluación de los líderes. De otro lado, dado el carácter marginal del actor cocalero, se opta por enmarcar el discurso en otros socialmente legitimados que lo dotan de mayor potencial para ser escuchados. En este proceso, también cada valle cocalero elige distintos marcos discursivos, acordes con las historias locales y subjetividades predominantes entre sus pobladores.

En el caso del valle del Huallaga, tenemos una historicidad signada por procesos migratorios heterogéneos, la influencia de Sendero Luminoso y la pacificación militar, factores que inciden en la configuración del discurso predominante y el enmarcamiento que se hace del mismo. Al participar de los procesos electorales en el partido de Ollanta Humala, los cocaleros del Huallaga presentan su lucha como una reivindicación campesina. De un lado el discurso muestra el legado de la politización senderista, reflejada en el uso de una terminología vinculada al maoísmo⁹⁸ que alude constantemente la masa campesina, a la tercera colina, la larga marcha o el genocidio aprista. Antes que manifestar una identificación militante el uso de estas palabras es parte del repertorio político izquierdista predominante en dicha zona a la cual los líderes no son ajenos. Junto a esta orientación por el eje campesinista, destaca en el discurso cocalero del Huallaga una valoración positiva del mestizaje y el encuentro de distintas culturas, proceso que caracteriza la identidad al Valle del Huallaga: la confluencia de miles de peruanos y peruanas iguales en su condición de trabajadores del campo y específicamente cultivadores de hoja de coca. En diversas declaraciones, las candidatas cocaleras primero y los candidatos a alcaldes después, se presentan ante el movimiento y la sociedad local como candidatos del campesinado; no son una opción indígena, no pueden serlo pues dada la diversidad de procedencias se sabe que no se encontrara el eco suficiente. Las declaraciones de los candidatos afirman la identidad campesina a la vez que resaltan la figura del “país de todas las sangres” donde la primacía de lo indígena solo es posible a costa de minimizar la importancia de otras culturas. En tal

⁹⁸ Para un estudio detallado del maoísmo en el Perú puede verse: José Luis Renique. 2003. *La voluntad encarcelada: las 'luminosas trincheras de combate' de Sendero Luminoso del Perú*. IEP. Lima; Carlos Ivan Degregori. 2003. *Jamás tan cerca arremetió lo lejos: memorias y violencia política en el Perú*. IEP. Lima.

sentido, las palabras del alcalde del distrito de Mariano Dámaso Fredy “Nacho” Fernández resultan ilustrativas:

Los cocaleros de aquí no somos una organización que se definía como indígena por que acá los propios productores son lo que yo llamo todas las sangres, un valle cosmopolita, de diferentes culturas, no hay una cultura que sean netamente indígena de la que viene el cocalero, son más una organización campesina. Son pocos los que hablan quechua o chacchan coca, la masa campesina aquí ha venido aprovechándose que existe hoja de coca para poder trabajar, incluso en la parte ilícita como es el narcotráfico, ha llegado gente de todas las partes del Perú, de la costa, sierra y selva.⁹⁹

De otro lado, los cocaleros del Huallaga inscriben su discurso en un marco mayor de significado, pues como afirman Bendford y Snow (2000) los movimientos sociales operan en constante interacción con distintos agentes de sentido que pueden dotar a sus demandas de mayor resonancia. Un discurso puede tener mayor resonancia y ampliar su potencial movilizador en la medida que se presente como consistente, goce de credibilidad empírica y quienes lo enuncian tengan legitimidad. La coincidencia del discurso con determinada estructura de oportunidad política amplía aún más su efectividad y capacidad de generar adhesiones. Al participar con el PNP, los candidatos del Huallaga inscriben su discurso en un marco nacionalista-anti imperialista, de defensa de la soberanía y los intereses peruanos contra un enemigo externo como pueden ser los Estados Unidos, a quien se denomina el imperio. Esta retórica izquierdista de larga data en la región, toma un nuevo impulso a raíz del ascenso de Hugo Chávez que se presenta como una alternativa al modelo neoliberal de privatización y pérdida de soberanía de los estados, abriendo una nueva EOP favorable a esta postura. Líderes de la región como Rafael Correa, Evo Morales y el mismo Humala se suman a este polo, encontrando eco en los sectores más empobrecidos. En la zona cocalera, el discurso encuentra resonancia pues se presenta coherente, se apoya en hechos reales y quienes lo enuncian tienen credibilidad. Contra lo que piensan los sectores conservadores, actores políticos como Chávez o Morales encuentran un apoyo importante en las clases populares, siendo vistas sus acciones contra la desigualdad como esfuerzos concretos por beneficiar a las mayorías. Esto se vincula además a la innegable omnipresencia norteamericana en la lucha contra las drogas, ya sea en el desarrollo alternativo a través de

⁹⁹Entrevista a Fredy Fernández, alcalde del distrito de Mariano Dámaso, provincia de Leoncio Prado, realizada por Anahí Durand. Tingo María, 13 de enero del 2008.

USAID, CARE o CHEMONICS o en el plano represivo, con el cuartel de la DEA instalado en Tingo María.

Hay que reconocer cual es la farsa de la lucha contra las drogas, se persigue a los campesinos coccaleros erradicándole su coca simplemente por que a la Embajada norteamericana le da la gana, por que ellos no quieren que surjamos, por que es la época de la reconquista y lo que quieren es nuestra biodiversidad. Nosotros seremos pobres pero tenemos esos recursos, una riqueza enorme como es el agua que a ellos les interesa. Estamos enfrentando al imperio y es dramático por que no tenemos una política nacional, consensuada con consulta al productor coccalero... al APRA no le interesa por que ellos siguen las órdenes de Estados Unidos.¹⁰⁰

En el caso del valle del Río Apurímac, durante el proceso electoral el discurso de los candidatos acaba por orientarse con mayor énfasis hacia la afirmación de la identidad indígena. Inciden en esta orientación elementos de la historicidad como un proceso de colonización homogéneo que implica la extensión del espacio cultural andino expresado en componentes de la etnicidad como el uso cotidiano del quechua y el chacchado de la hoja de coca. La mayoría de pobladores del VRA proceden de comunidades indígenas de la sierra ayacuchana y no pierden el vínculo con éstas, viajando frecuentemente a intercambiar productos o visitar a sus familiares. La experiencia negativa de Sendero Luminoso, que llevó a los campesinos a formar los Comités de Autodefensa, incide también marcando distancia con la predica izquierdista. El reconocimiento como indígenas encuentra aceptación por parte de los coccaleros pues fácilmente se reconocen parte de un pasado común, con una misma raíz cultural y similar situación de exclusión. En distintas declaraciones los candidatos de Qatun Tarpuy y sobre todo Nelson Palomino hacen referencia a esta condición de indígenas, diferentes culturalmente pero con el mismo derecho de cualquier ciudadano peruano a gobernar sus localidades.

Ser indígena es una expresión que siempre se ha tomado desde un punto de vista que hace que sea lo mismo comunidad indígena y las comunidades campesinas por que justamente desde su formación el Estado ha hecho que las comunidades sean reconocidas como comunidades campesinas. En el VRAE vivimos los herederos de la zona selva ashaninka y nosotros quechuas de la parte andina que hemos migrado a la selva. Nosotros en conclusión nos reconocemos como comunidad indígena por las razones simplemente que pronunciamos nuestro propio idioma que es el quechua, si somos quechuas, huantinos, ashaninkas y como autoridades tenemos que apoyando a las comunidades retomando los valores de la zona alto andina y de la selva, revalorar las costumbres el ayni y la minka, [...]¹⁰¹

¹⁰⁰ Elsa Malpartida, entrevista citada.

¹⁰¹ Alejandro Gutierrez, entrevista citada.

Este discurso se enmarca a su vez en un marco mayor de significado relacionado con la revaloración étnico cultural como principal eje de articulación política, tal como fue asumido en los procesos de participación que se desarrollan en el continente desde inicios de la década del '90. Existe también una estructura de oportunidad política favorable a la participación política desde la etnicidad, tal como lo reflejan en la región andina lo sucedido en Ecuador con el Movimiento Pachakuti y en Bolivia con el triunfo del MAS de base aymara y cocalera, procesos que logran importante resonancia en el Perú. Como sostiene Van Cott (2005), en ambas experiencias, los clivajes étnicos operan como los ejes fundamentales de articulación política que actúan como base de la formación de partidos étnicos. En el VRA, la revaloración política de la etnicidad opera como el marco de referencia con mayor resonancia: en primer lugar se muestra consistente, con coherencia histórica y demandas vigentes, en segundo lugar los hechos demuestran su credibilidad empírica pues es real que en países vecinos la población indígena ancestralmente discriminada, accede al gobierno y trabaja en el Estado por lograr la equidad y el desarrollo desde el respeto a la diferencia. Finalmente quienes enuncian este discurso son líderes regionales legitimados, considerados un ejemplo a seguir, entre los cuales destaca el dirigente cocalero Evo Morales, a quien Palomino hace permanente referencia.

Nosotros estamos en un gran proyecto de la nación quechua, nosotros estamos en avance en recuperar nuestros valores culturales, somos culturas vivas. Mi cultura es una mixtura de quechua y Asháninka y es mi deber moral defender eso, por eso nosotros hemos hecho el proyecto Kuska, que defiende el derecho a nuestra identidad, que es nuestra lengua, nuestra hoja de coca. Nosotros, no estamos afiliados a ninguna organización indígena de escritor, vamos a avanzar con nuestra propia chaquitacla. (...) Nos identificamos plenamente con las luchas de nuestros hermanos indígenas en el continente,, somos parte de ese gran movimiento levantado en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, con ellos somos hermanos, con Evo Morales por ejemplo.¹⁰²

¿Por que el movimiento cocalero y sus principales líderes no logran conciliar etnia y clase construyendo un solo discurso? La respuesta a esta pregunta nos remite a debates de fondo sobre los desencuentros que atraviesan la sociedad peruana, relacionados con fracturas étnicas, prejuicios raciales y practicas discriminatorias aun en el mismo campo de los excluidos. Como afirma Sommers (1994) la identidad en un movimiento no es homogénea, responde a criterios de raza, género, etnia y a las formas en que se distribuye el poder en cada uno de los espacios donde el grupo tiene presencia. Cada uno de estos elementos cala

¹⁰² Nelson Palomino, entrevista citada.

hondamente en las subjetividades y referentes colectivos, haciendo que los procesos de identificación no siempre logren diluir todos los elementos divergentes en el “nosotros” compartido. En el movimiento cocalero quedan al descubierto tensiones irresueltas ligadas a la estructuración socio política de la sociedad peruana. No resulta muy sencillo pedir a un campesino del Huallaga, proveniente de la costa y admirador de Hugo Chávez, que se reconozca como indígena quechua aunque esto sea más favorable para la defensa de la hoja de coca. No es tan fácil pedir a los cocaleros del VRA renuncien a sus referentes étnicos y se sumen a la predica anti imperialista que ellos vinculan a Sendero Luminoso. Finalmente, los marcos subjetivos, las barreras culturales y las evaluaciones de los lideres, hacen que la tensión etnia -clase y la opción por el enmarcamiento en el anti imperialismo o en política étnica, no se ventilen ni resuelvan por canales orgánicos, decidiendo cada valle de modo independiente lo que considera mas acorde con sus fines, aunque implique abonar a la fragmentación social ya existente.

2.2 Alcances y límites de las estructuras organizativas

En la participación en la arena política las estructuras organizacionales y las relaciones que el movimiento teje con el Sector de Movimientos Sociales (SMS) inciden también de forma importante en el posicionamiento del grupo en la contienda electoral. La organización permite al movimiento solucionar problemas de coordinación interna, acopiar recursos y ordenar el despliegue de repertorios, haciendo posible un mejor posicionamiento para conseguir los objetivos. Asimismo, siguiendo a Melucci (1999) es a partir de las estructuras orgánicas que el movimiento teje diferentes niveles de articulación con otros actores presentes en la sociedad (ya sean de carácter local, nacional o internacional) consiguiendo mayores márgenes de autonomía a la par que amplía el campo de relaciones favorables a sus demandas. Muchas de las decisiones del movimiento se dan influidas por cambios en las posturas al interior del SMS tanto a nivel de la identificación partidaria de las bases como a nivel de las alianzas que las organizaciones concretan con los partidos políticos. Durante la participación del movimiento cocalero en los procesos electorales, la capacidad interna de la CONPACCP para viabilizar las decisiones estratégicas se ve seriamente limitada, dada la imposibilidad del IV Congreso de concretar un acuerdo sobre como ejecutar la participación. En las elecciones nacionales y en las municipales, son los gremios locales

como la FEPAVRAE o la APCLP-A y la APC Saúl Guevara, los que actúan como soporte principal en las campañas políticas. Esto repercute en las frágiles relaciones que los productores tejen con el SMS nacional, al cual consideran irrelevante por la crisis que aún lo afecta. No sucede lo mismo con el SMS local donde sí hay una mayor fluidez en las coordinaciones.

2.2.1 Participación de la CONPACC y gremios locales en las elecciones

Durante el IV congreso en Quinua, la CONPACCP resuelve su unidad de manera precaria pues si bien la FEPAVRAE fue reincorporada y se eligió una nueva directiva de consenso, no lograron zanjarse temas claves acordes con las estrategias asumidas. Dichos puntos pendientes, y específicamente el no decidir cómo participar en la coyuntura electoral, llevan a que la organización nacional vea limitado su accionar en plena campaña, haciendo evidente las diferentes posturas y evaluaciones de los valles. En el Valle del Huallaga, para las elecciones nacionales del 2006, la CONPACCP como estructura orgánica no cumple un rol importante, no pone a disposición de las candidatas ni recursos ni activistas, asumiendo Obregón y Malpartida su participación a título personal y con un apoyo más o menos decidido de sus bases locales. En los distintos eventos públicos en los que las dirigentes se presentan acompañando a Humala o al ser entrevistadas por algún medio de prensa, las líderes cocaleras se cuidan de dejar en claro que su participación no es una decisión orgánica de la CONPACCP si no como invitadas por el PNP. De esta manera, si bien se afirman en ser legítimas representantes del movimiento y sobre todo de sus lugares de procedencia, se cuidan mucho de no arrogarse la participación electoral como un mandato de la CONPACCP, cuidándose de no utilizar la organización para sus fines políticos. Es por esta razón que Nancy Obregón afirma que renunció al cargo en su Federación local, aunque posteriormente reciba el respaldo de ésta y sea nuevamente elegida en la Dirección.

Como no se pudo definir como participar en el IV Congreso de la CONPACC cuando decidí ser candidata pedí autorización a mi base que es la base Saul Guevara Díaz de Tocache, incluso renuncie al cargo que tenía para poder participar. Yo no tuve apoyo directo de la CONPACCP, tuve el aval de mi base cocalera pero al mismo tiempo renuncie aunque formalmente no se podía renunciar y me pidieron que no renunciara yo por ética preferí retirarme y me aboqué por completo a mi campaña política. Ya una vez obtenido el triunfo se tuvo una reunión general de toda la provincia de Tocache y fui elegida Secretaria General de toda la provincia sigo teniendo el cargo pero ya no es sectorial, es regional.¹⁰³

¹⁰³ Nancy Obregón, entrevista citada.

Pasada la coyuntura electoral la percepción general de las dirigentes es que la CONPACCP sale debilitada del proceso electoral. La falta de decisión respecto a como participar y sobre todo la postura cambiante de Palomino al salir de la cárcel, que retira apoyo al PNP presentando su partido como el brazo político del gremio, crean desconcierto en las bases y minan la credibilidad del espacio.

Cuando nosotras aceptamos candidatear fuimos a hablar con Nelson Palomino que era el Presidente de la CONPACC y en ese entonces estaba preso. Al principio él dijo muy bien hay que tratar de alguna manera de evitar que mas compañeros sean encarcelados, aceptó pero ya luego cuando salió y con la coyuntura política le ganaron sus intereses políticos personales que siempre tuvo y dijo que Kuska Perú era el brazo político de la CONPACCP y eso es mentira . Eso ha hecho que se perfilase y buscara un camino solo y eso ha retraído mucho la lucha de la CONPACCP. Yo creo que la masa estuvo de acuerdo con nosotras, voto por nosotras y nos ve como sus legítimas representantes... pero si existen controversias al interior de la organización cocalera, la CONPACCP si se ha visto afectada¹⁰⁴

De otro lado, durante el proceso electoral las candidatas cocaleras parecen no considerar como necesario tejer relaciones con los gremios del SMS nacional. Para la primera vuelta electoral, los gremios mas importantes tales como el Sindicato Único de la Educación (SUTEP), la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y la Confederación Campesina (CCP), se vincularon a grupos remanentes de lo que fue el frente Izquierda Unida. La afinidad partidista de los líderes y las coincidencias ideológicas en general, llevaron a que estos gremios mantuvieran su lealtad por estos grupos pese a sus posibilidades de ganar¹⁰⁵, distanciándose de Humala en tanto se declaraba “nacionalista” y no socialista y pesaban sobre él acusaciones de violación a los derechos humanos. La postura política ideologizada y la poca representatividad del SMS nacional, hace que se mantenga la relación de mutua indiferencia con los cocaleros, expresada ya en otras ocasiones, como la marcha de sacrificio del 2003. Para la segunda vuelta electoral los gremios del SMS asumen el apoyo a la opción consideran mas progresista y dejando de lado sus reticencias iniciales manifiestan su apoyo a Humala. No obstante, el anunciado apoyo no implica compromisos vinculantes entre los gremios y el PNP y tampoco significa una coordinación mas estrecha entre las representantes de la CONPACCP y los gremios del

¹⁰⁴ Elsa Malpartida, entrevista citada.

¹⁰⁵ Los grupos remanentes de lo que fue Izquierda Unida fueron el Partido Socialista (PS), el Movimiento Nueva Izquierda (MNI) y el Partido por la Democracia Social (PDS). Ninguna de estas tres agrupaciones obtuvo resultados electorales favorables, sin lograr superar el 2% de los votos.

SMS nacional. Subyace la lectura de que afirmar la relación con las organizaciones del sector, en permanente crisis y sobe ideologizadas, no resulta un aporte efectivo para los objetivos del movimiento cocalero.

Para las elecciones municipales la CONPACCP minimiza aun más su papel en la campaña electoral. La creación de Kuska Peru tras la liberación de Palomino y la crisis interna del PNP, complican la posibilidad de que el gremio nacional llegue a acuerdo respecto a como afrontar dicho proceso. Las campañas electorales recaen así en las federaciones locales y en los propios candidatos que terminan cargando el pasivo de la precaria consolidación del gremio cocalero nacional. En el Valle del Huallaga, dada la crisis interna del PNP, los cocaleros asumen la participación en las elecciones municipales de forma tangencial, presentando candidatos vinculados al movimiento solo donde es posible. En el caso de la APCLP-A, base de la CONPACCP en los distritos de Huanuco, el apoyo se orienta hacia las candidaturas del PNP en los distritos de Mariano Damaso y Hermilio Valdizan. Si bien el PNP consigue ganar en los distritos cocaleros donde se presenta, dadas las características de elecciones municipales, el apoyo del SMS local se diluye. Vale tener en cuenta que a nivel provincial y distrital las elecciones municipales son el momento en el cual diversos grupos de interés pugnan por conseguir representación política. En el caso del Huallaga, herencia de la violencia política y la pacificación militar, el SMS local se muestra bastante fragmentado, los principales grupos –clubs de madres, comerciantes, madereros o trabajadores del estado como maestros y personal de salud- no centralizan su apoyo a una sola lista, difuminándolo entre las doce listas que como mínimo se presentan en cada distrito. Los candidatos vinculados a los cocaleros no llegan a consolidar coordinaciones ni alianzas con otros gremios locales y el PNP, que pudo ser un factor aglutinador, ya no tiene la fuerza suficiente para ello.

En el Valle del Río Apurímac el escenario se presenta distinto en la medida que Kuska Perú es concebido como un proyecto de la FEPAVRAE para competir por los gobiernos locales exclusivamente en los distritos cocaleros. Es fundamental por ello el ascendente que Nelson Palomino tiene sobre el gremio y el papel que asumen los dirigentes de los distritos como Sivia, Llochegua o Santa Rosa que deciden participar como candidatos. Más allá de la alianza puntual con Tarpuy, los cocaleros tienen claro que su objetivo es posicionarse como una fuerza local, tendiendo puentes desde el gremio hacia el SMS local. La CONPACCP

aquí no tiene mayor relevancia, puesto que Palomino es cuestionado por los valles del Huallaga y Aguaytia, los cuales lo acusan de presentar a Kuska como el instrumento político cocalero sin contar con la aprobación de las bases. No obstante este repliegue de la CONPACCP, Palomino y la FEPAVRAE se enfocan en impulsar el proyecto de Kuska, buscando demostrar que los cocaleros están preparados para conducir la política local y desarrollar una gestión concertadora y dialogante. La FEPAVRAE juega un rol activo como estructura orgánica, convocando a reuniones del SMS cuyas redes en esta zona son menos fragmentadas, aglutinando así a los Comités de Autodefensa, los Clubs de Madres y las asociaciones de pequeños comerciantes, eligiendo en conjunto a los candidatos. Ya en plena campaña, el gremio asume responsabilidad en la labor proselitista, emitiendo spots radiales, distribuyendo afiches y volantes o coordinando presentaciones publicas en los distintos pueblos y caseríos del Valle. Las redes entre el SMS y el gremio cocalero se activan así de una manera más efectiva y terminan sumando al triunfo de Qatun Tarpuy en los distritos ayacuchanos del VRA.

Yo como dirigente del gremio a nivel de Sivia primero y del Valle luego he actuado con sinceridad y seguramente la población ha visto eso, la transparencia de mi persona y me han propuesto, la misma organización me ha propuesto. Luego de varias reuniones me ha propuesto la FEPAVRAE y ha contado con el apoyo de las principales organizaciones (CADSVRAE, FECMAVRAE) todos decidieron que si o si tenía que ser candidato. Para empezar decían que mi persona era la que representaba los intereses del campo y han apoyado en lo que han podido, se ha difundido el mensaje¹⁰⁶

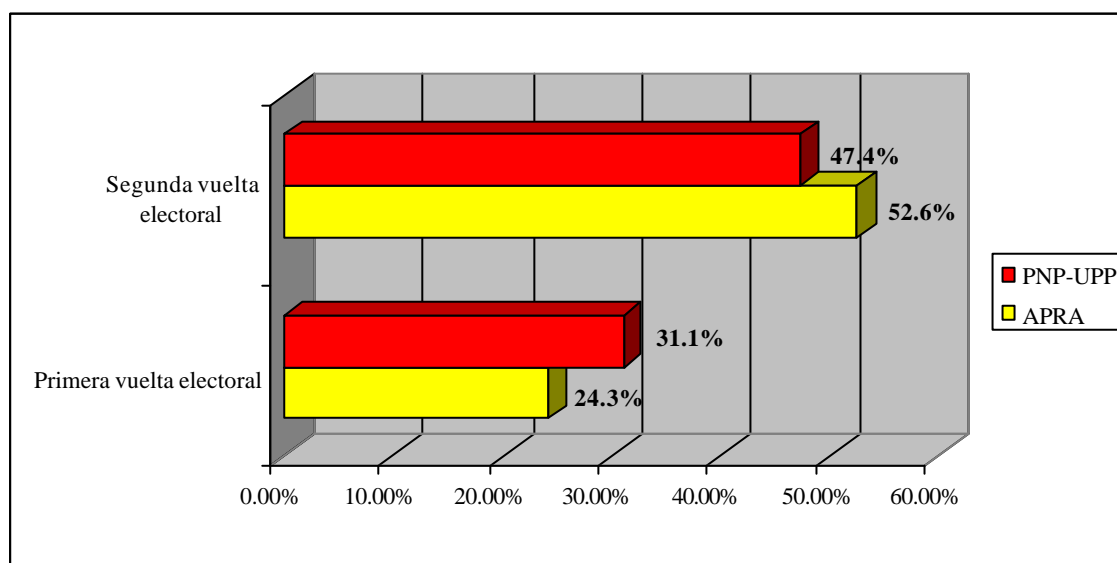
En suma tenemos que en las elecciones nacionales del 2006 la CONPACCP no tiene una participación relevante como estructura organizativa; no provee recursos, no moviliza a los miembros del grupo, no convoca nuevas adhesiones y solidaridades. Las estructuras organizacionales se muestran limitadas para decidir los canales y mecanismos por los cuales participar, recayendo esta responsabilidad en los líderes y en menor medida en las bases locales. De otro lado, las coordinaciones con el SMS nacional vuelven a ser evaluadas como irrelevantes primando, al igual que durante las protestas los distanciamientos y la desconfianza entre gremios muy ideologizados y los cocaleros, mas en sintonía con una política crítica al sistema y los partidos en su conjunto. No sucede lo mismo con el SMS en los distintos valles donde de acuerdo a las afinidades entre las organizaciones del sector y los cocaleros, son mayores las posibilidades de emprender coordinaciones y fortalecer vínculos como sucede en el Río Apurimac entre la FEPAVRAE y Qatun Tarpuy.

¹⁰⁶ Alejandro Gutiérrez, entrevista citada.

2.3 Y pese a todo un solo voto: La homogeneidad del voto en las zonas cocaleras

De manera mayoritaria, al presentarse candidatos del movimiento o vinculados a éste, los votos se orientan hacia ellos demostrando un claro apoyo a la decisión de incursionar en lo electoral. En lo que respecta a las elecciones nacionales para elegir al Presidente y los 120 Congresistas de la República, la primera vuelta se realiza el 9 de abril del 2006. En esta ocasión, el voto del electorado nacional se aglutinó en torno a tres partidos políticos: Partido Nacionalista Peruano- Unión por el Perú (PNP-UPP), el APRA y Unidad Nacional, que juntos concentran el 78% de los votos. El PNP-UPP, liderado por Ollanta Humala gana la primera vuelta mientras el APRA con su candidato Alan García ocupa el segundo lugar dejando atrás por un estrecho margen a la democracia cristiana representada por Unidad Nacional. Tal como lo establece la legislación electoral peruana, los dos partidos mas votados pasaron a una segunda vuelta definitiva, la misma que se realizo el 4 de junio del 2006. En esta segunda ronda, Alan García del APRA fue elegido nuevo presidente del Perú.

Gráfico N° 1: Resultados nacionales de las elecciones presidenciales



Fuente: www.onpe.gob.pe/ Elaboración propia

En términos de distribución territorial, en la primera vuelta los resultados nos demuestran una concentración regional del voto sumamente relacionada con los distintos desarrollos económicos y características socio históricas de las regiones. En el caso del PNP-UPP este partido gana en 18 de las 24 regiones del país, principalmente en las zonas más pobres de la

selva y la sierra centro y sur, donde alcanza niveles de votación sumamente altos. En cuanto al voto del APRA el apoyo a este partido se concentra en las regiones de la costa norte, una zona caracterizada por el desarrollo de la agro exportación y la presencia de centros urbanos importantes. En la segunda ronda electoral, la tendencia en la votación se repite: Ollanta Humala mantiene su victoria en 16 de los 24 departamentos del país y el APRA suma 3 regiones a sus triunfos de la primera vuelta. Estas tres regiones, entre las que se incluye Lima metropolitana, le son suficientes para ganar la presidencia en tanto se trata de las más densamente pobladas. (Ver Anexos)

En el caso de los valles cocaleros, en ambos procesos electorales el voto a favor de Ollanta Humala es unánime. En los distritos del Valle del Río Apurímac y el Valle del Huallaga la votación por el PNP no baja del 60%. En la segunda vuelta, el nivel de apoyo electoral a Humala sube a niveles históricos por encima del 70%. Sin duda, es un voto unánime que pone de manifiesto la identificación del PNP con el movimiento cocalero pero también el respaldo popular que logra la figura del comandante Humala.

Cuadro N° 1: Resultados elecciones presidenciales 2006 (por Valle cocalero)

<i>Región/ Valle cocalero</i>	<i>Provincia</i>	<i>Distrito</i>	<i>Partido Político electo</i>	<i>% Votos 1° vuelta</i>	<i>% Votos 2° vuelta</i>
Ayacucho/ Río Apurímac	Huanta	Llochega	PNP – UPP	82.29	95.32
Ayacucho/ Río Apurímac	Huanta	Sivia	PNP – UPP	73.1	92.47
Ayacucho/ Río Apurímac	La Mar	Ayna	PNP – UPP	64.98	88.7
Ayacucho/ Río Apurímac	La Mar	Santa Rosa	PNP – UPP	85.37	94.17
Ayacucho/ Río Apurímac	La Mar	Anco	PNP – UPP	80.91	91.88
Cusco/ Río Apurímac	La Convención	Pichari	PNP – UPP	71.5	90.2
Cusco/ Río Apurímac	La Convención	Kimbiri	PNP – UPP	79.73	90.55
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Hermilio Valdizan	PNP – UPP	45.52	74.63
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Mariano Damaso	PNP – UPP	41.95	73.92
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Jose Crespo	PNP – UPP	47.16	74.2
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Daniel Alomia	PNP – UPP	50.78	71.6
Huanuco/ Río Huallaga	Huamalies	Monzon	PNP – UPP	59.04	82.25
San Martín / Río Huallaga	Tocache	La Pólvora	PNP – UPP	82.8	90.63
San Martín / Río Huallaga	Tocache	Nuevo Progreso	PNP – UPP	56.51	81.07
San Martín / Río Huallaga	Tocache	Uchiza	PNP – UPP	62.01	72.47

Fuente: ONPE /Elaboración propia

En lo que respecta a la elección de congresistas, a los pobladores del Valle del Huallaga les correspondía elegir representantes en las regiones Huanuco y San Martín y Huanuco, mientras que a los del Río Apurímac les tocaba en Ayacucho y Cusco. El movimiento

cocalero solo llega a inscribir a Nancy Obregón como candidata por San Martín, pero en las otras regiones los candidatos del PNP- UPP se muestran abiertos a las plataformas cocaleras, inclinándose hacia ellos la votación en los valles cocaleros. Los resultados finales muestran que se repite la misma tendencia de votación presidencial, orientándose el voto cocalero a favor del partido liderado por Humala. En el caso de la región San Martín, Nancy Obregón es la congresista más votada lo cual implica que no solo votan por ella los cocaleros sino también de sectores urbanos de la región. En el caso de la región Ayacucho, se confirma también la tendencia de voto favorable al Partido Nacionalista, que obtiene un triunfo contundente al colocar los tres congresistas que correspondían a la región. La candidata más votada en esta ocasión es Juana Huancahuari, mujer quechua hablante, presidenta de la FEDECMA (Federación de Clubs de Madres de Ayacucho) con buena relación con el movimiento cocalero, pronunciándose repetidamente a favor de coordinar acciones a favor de sus demandas.

Cuadro N° 2: Congresistas electos más votados por región y partido político

<i>Candidatos electos más votados</i>	<i>San Martín</i>	<i>Huanuco</i>	<i>Ayacucho</i>	<i>Cusco</i>
Nancy Obregón (PNP- UPP)	30%	-	-	-
Janeth Cajahuanca (PNP-UPP)	-	33%	-	-
Juana Huancahuari (PNP-UPP)	-	-	40%	-
Oswaldo Luisar (PNP-UPP)	-	-	-	29%

Fuente: www.onpe.gob.pe

En cuanto a la elección de los cinco representantes peruanos al Parlamento Andino, los resultados electorales se muestran algo distintos en la medida que la elección es nacional y no por distrito electoral, siendo las regiones más pobladas las que terminan eligiendo. En el caso de la candidata cocalera Elsa Malpartida, aunque consigue concentrar una cantidad considerable de votos en las zona andina y la amazonia, queda como la cuarta más votada muy lejos del Rafael Rey del partido Unidad Nacional, que concentra sus votos en Lima

Respecto a los procesos electorales municipales y regionales estos se desarrollan el 19 de noviembre del 2006. Para entonces, la alianza entre el Partido Nacionalista y Unión por el Perú se había disuelto, presentándose ambas agrupaciones por separado. Ollanta Humala se mantiene como líder del Partido Nacionalista pero UPP se queda con el símbolo electoral. En el caso del Valle del Huallaga las dirigentes reafirman su apoyo al PNP pero no logran inscribir candidatos municipales en todos los distritos del valle. A nivel regional y provincial, el movimiento cocalero no presenta candidatos y los resultados favorecen al

Frente Amplio regional, agrupación de profesionales independientes, que concentran mayor apoyo en los centros urbanos, particularmente la ciudad de Tingo María.

En el Valle del Río Apurímac, la participación de Qatun Tarpuy a nivel regional y provincial varía considerablemente el panorama. En el caso de la provincia de Huanta, zona natal de Nelson Palomino y conformada en su mayoría por distritos de selva, Qatun Tarpuy gana la municipalidad por un margen considerable, pasando a ser el primer y único gobierno local provincial en manos del movimiento cocalero. A nivel de resultados distritales, en el caso del VRA en todos los distritos ayacuchanos donde Qatun Tarpuy presenta candidatos a alcaldes municipales, consigue ganar con votaciones bastante altas para el nivel local. En los distritos cuzqueños del VRA, Qatun Tarpuy no presenta candidatos y resulta ganador el partido Unión por el Perú. En el caso del Valle del Huallaga, el apoyo a los candidatos no es tan contundente como en las elecciones anteriores pero se mantiene sobre todo en los distritos donde la organización cocalera apoya a determinados candidatos. En los distritos de Huanuco, el Partido Nacionalista obtiene dos victorias distritales y los de San Martín, el frente regional Nueva Amazonia, que mantiene buena relación con la congresista Nancy Obregón, consigue dos victorias importantes en Tocache.

Cuadro N° 3: Elecciones municipales distritales: consolidado distritos cocaleros

<i>Región/ Valle cocalero</i>	<i>Provincia</i>	<i>Distrito</i>	<i>Partido Político electo</i>	<i>% Votos distrito</i>
Ayacucho/ Río Apurímac	Huanta	Llohega	Qatun Tarpuy	41.69
Ayacucho/ Río Apurímac	Huanta	Sivia	Qatun Tarpuy	30.81
Ayacucho/ Río Apurímac	La Mar	Ayna	Innovación Regional	28.13
Ayacucho/ Río Apurímac	La Mar	Santa Rosa	Qatun Tarpuy	31.56
Ayacucho/ Río Apurímac	La Mar	Anco	Qatun Tarpuy	27.41
Cusco/ Río Apurímac	La Convención	Pichari	Unión por el Perú	71.07
Cusco/ Río Apurímac	La Convención	Kimhiri	Unión por el Perú	28.34
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Hermilio Valdizan	Partido Nacionalista	25.85
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Mariano Damaso	Partido Nacionalista	38.71
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Jose Crespo	Frente Amplio Regional	37.83
Huanuco/ Río Huallaga	Leoncio Prado	Daniel Alomia	Frente Amplio Regional	29.68
Huanuco/ Río Huallaga	Huamalies	Monzon	Frente Amplio Regional	44.39
San Martín / Río Huallaga	Tocache	La Polvora	Nueva Amazonia	35.18
San Martín / Río Huallaga	Tocache	Nuevo Progreso	APRA	26.5.
San Martín / Río Huallaga	Tocache	Uchiza	Nueva Amazonia	35.02

Fuente: www.onpe.gob.pe

En términos estrictamente electorales entonces, el voto cocalero se orienta de forma mayoritaria hacia los candidatos del movimiento o vinculados a este. En las elecciones nacionales, dado el arrastre del Partido Nacionalista (PNP-UPP), y la presencia en éste de dos de las dirigentes cocaleras más reconocidas, el voto cocalero se comporta mucho más homogéneo. En las elecciones municipales provinciales y distritales el voto se presenta menos homogéneo debido principalmente a la decisión del VRA de participar con un partido propio, lineamiento opuesto a las dirigentes del Huallaga que persisten en el apoyo a Humala pese a la crisis interna que atraviesa el PNP-UPP. No obstante la votación también termina orientándose hacia los candidatos cocaleros, como ocurre con los triunfos de Qatun Tarpuy en el VRA y los del PNP en los distritos del Huallaga. De este modo, el movimiento cocalero cuenta hoy con una Congresista, una parlamentaria andina, y varios alcaldes desempeñándose ya en la arena política, sin que esto implique abandonar la vía contenciosa.

3. El movimiento cocalero en la arena política: una primera aproximación

Actualmente, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, el movimiento cocalero cuenta con representantes políticos que ocupan puestos de autoridad y amplían sustantivamente los canales de acción e interlocución tradicionalmente utilizados para hacer oír sus demandas. De esta forma los y las líderes de la organización cocalera deben desempeñarse en el terreno de la representación política atendiendo de un lado al sector cocalero que no abandona la protesta, y de otro a la sociedad en su conjunto, es decir a todos los ciudadanos que viven en las comunidades donde ahora existen autoridades vinculadas al movimiento. Deben afrontar así el desafío de responder a las demandas sectoriales del movimiento y a reclamos universales como representantes del Estado. En el presente punto realizamos un primer acercamiento al desempeño de los líderes del movimiento cocalero –o vinculados a éste- en la arena política¹⁰⁷. En primer lugar abordamos el ejercicio de la representación política en el sentido propuesto por Pitkin (1967) como la relación entre representantes y representados que contempla mecanismos, procedimientos y también significados por los cuales se establecen canales de interlocución

¹⁰⁷ Se trata de un análisis preliminar dado el poco tiempo de gestión que estas llevan: las autoridades parlamentarias asumieron el cargo el 28 de julio del 2006 y los alcaldes el 1 de enero del 2007

y se concreta el acceso a determinados beneficios. Nos centramos así en la relación establecida entre el movimiento y las autoridades cocaleras, deteniéndonos en las acciones que legisladoras y alcaldes priorizan y su relación con las actuales demandas cocaleras. Asimismo, prestamos atención a los canales de interlocución que se establecen entre el movimiento y las autoridades, con el fin de ver su incidencia en la agenda de trabajo de los gobernantes. En segundo lugar analizamos los esfuerzos del movimiento por mantener la dualidad estratégica y ejercer la representación política en un sentido más cercano a lo planteado por Laclau (2001) como el esfuerzo por conciliar el interés sectorial con el interés general, incorporando demandas marginales que exceden las exigencias de su grupo pero que transmiten puntos de identificación. Para ello, nos detenemos en la posición que las autoridades ligadas al movimiento sostienen frente a la vía contenciosa, estrategia por la cual continúan apostando no solo los productores cocaleros sino también otros sectores sociales que se identifican con dichas autoridades y les exigen sumarse a las protestas.

3.1 La relación entre las autoridades y el movimiento cocalero

3.1.1 El Congreso y el Parlamento Andino: iniciativas e interlocución

Un primer espacio de gobierno donde el movimiento cocalero obtiene representación política es el Congreso de la República. Dadas las características del poder legislativo peruano, la representación es de carácter partidario y territorial por lo que la ex vicepresidenta de la CONPACCP Nancy Obregón pertenece al grupo parlamentario Nacionalista y representa a la región San Martín. De otro lado, los congresistas se organizan en 22 Comisiones de trabajo ordinarias, encargadas del estudio y dictamen de asuntos ordinarios de la agenda del congreso y con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. La Congresista Obregón integra la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas¹⁰⁸.

Desde su designación como Congresista, Nancy Obregón ha intentado mostrarse consecuente con sus propuestas electorales, particularmente las relacionadas con la aprobación de la ley de coca, la reformulación de las políticas de desarrollo alternativo y una mayor regulación en la interdicción del narcotráfico, reclamando por una estrategia nacional

¹⁰⁸ Información tomada de la pagina www.congreso.gob.pe 17 junio del 2007

contra las drogas autónoma de los Estados Unidos, tal como lo anunciara también su líder Ollanta Humala. Sin embargo, en la práctica concretar estas propuestas no resulta tan sencillo pues la dinámica política parlamentaria implica negociaciones, alianzas y correlaciones que permitan obtener la mayoría necesaria para la promulgación de normas importantes. En el caso específico de la congresista Obregón, ella tiende puentes con los representantes de Ayacucho que pertenecen al PNP, mientras que los representantes de otras regiones cocaleras como Huanuco y el mismo San Martín pertenecen a otros partidos y prefieren guardar distancia frente al tema. Un primer aspecto que resalta en su trabajo es su propuesta para que se revise el papel de DEVIDA, lo cual incluye una reestructuración de los fondos del desarrollo alternativo, la eliminación de los condicionamientos y la creación de un ente fiscalizable que podría ser el Ministerio de Agricultura. Esto implica por ejemplo coordinaciones con gobiernos europeos como el de Finlandia para el apoyo a reforestación, de modo que se diversifiquen las actividades económicas alternativas y se disminuya la dependencia con la cooperación norteamericana. Un segundo aspecto de la labor congresal de Obregón, particularmente destacado en sus declaraciones, es lo que ella denomina “defensa de los derechos humanos de los cocaleros” y que refiere a asesoría legal o acompañamiento en caso de represión a alguna protesta. Finalmente se cuenta el tema de la Ley de coca una de las principales banderas electorales cuyo proyecto ya fue elaborado pero para su aprobación requiere pasar por una serie de filtros en los cuales no ha tenido éxito. Antes que nada necesita ser aprobado por la Comisión de Defensa Nacional donde participa Obregón. Tras recoger sugerencias de ese grupo de trabajo, debe pasar a la Comisión de Agricultura y luego al Pleno donde es discutida y devuelta a su Comisión de origen para nuevas modificaciones. Finalmente necesita que el Pleno la apruebe por mayoría y la ratifique el Presidente de la República. Actualmente el proyecto de Ley N° 00280/2006 “Declarar patrimonio natural de la nación a la hoja de coca” fue presentado por la congresista Obregón el 19 de setiembre del 2006 y a la fecha sigue postergada su discusión en Comisión. Es por ello que al ser consultada sobre cuáles han sido las acciones priorizadas, la congresista manifiesta cierta frustración por la lentitud con en la promulgación de la ley.

Las acciones fundamentales han sido defender los derechos humanos los derechos básicos de los cocaleros, cuando hay algún tipo de represión contra ellos yo estoy ahí. Hay leyes que se están avanzados pero ahora tomo conocimiento de que para aprobar una ley necesitamos

*mayoría, pero estamos dando ese análisis la ley de coca esta paralizado por el momento aunque en esta nueva legislatura vamos a hacer lo imposible por que pueda retomarse, [...]*¹⁰⁹

Respecto a la interlocución con el movimiento cocalero y la influencia de este dialogo en las acciones priorizadas por la Congresista, destaca el establecimiento de “canales directos”. La relación entre los cocaleros y su representante no pasa por la CONPACCP ni por el del Partido Nacionalista ni por las municipalidades, se da de forma directa entre la parlamentaria y su gremio local la Asociación de Cocaleros de Tocache Saúl Guevara Díaz. Según Obregón la relación es fluida y se basa en la información permanente de sus acciones, las visitas a la zona y el apoyo a los cocaleros cuando visitan Lima para realizar diferentes gestiones, poniendo a disposición su oficina parlamentaria. Nuevamente se hace evidente el rechazo a las intermediaciones y la desconfianza en los actores del sistema político. No confía en los alcaldes, tampoco en las autoridades del ejecutivo; todas las gestiones son directas con el gremio local y esto es para la congresista una forma de afirmar la confianza entre ella y sus representados.

*Existen básicamente canales directos yo les informo de todo al detalle. Cuando los cocaleros llegan acá y necesitan un nexo con cualquier institución o Ministerio yo pongo la oficina a su disposición estamos siempre en contacto con ellos. Es una relación directa, incluso los donativos que hago no los mando al alcalde los mando directamente a la organización cocalera ellos saben a quien repartir y eso les duele a las autoridades de allá, les arde por que mis apoyos van directo a la organización cocalera yo confié totalmente en ellos.*¹¹⁰

En cuanto a la gestión de Elsa Malpartida en el Parlamento Andino, debe mencionarse que el trabajo en esta instancia tiene una dinámica particular. Los representantes parlamentarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reúnen ocho veces al año en su sede central ubicada en Bogotá, para coordinar y discutir las iniciativas legislativas conjuntas de la Comunidad Andina. Además de estas sesiones ordinarias, los representantes peruanos al Parlamento Andino, tienen una oficina en Lima y realizan reuniones ordinarias de manera mensual. Cada parlamentario, indistintamente del país al que representa, integra una Comisión de trabajo ordinaria, participando Malpartida de la Comisión de Medio Ambiente, biodiversidad y desarrollo humano. Entre las acciones priorizadas que la Parlamentaria destaca, se cuenta la evaluación de convenios a nivel de Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre reforestación y protección de la Amazonía y el cuidado de la biodiversidad

¹⁰⁹ Nancy Obregón, entrevista citada.

¹¹⁰ Nancy Obregón, entrevista citada.

regional. Sin embargo, a lo que Malpartida ha colocado más énfasis es a las coordinaciones con los parlamentarios de Bolivia para gestionar el retiro de la hoja de coca de la Lista de Estupefacientes prohibidos de la ONU. Este proceso ha sido fundamental para fortalecer los vínculos con el movimiento cocalero boliviano, contando ahora con un espacio institucional que facilita el logro de un objetivo común que de lograrse tendría una gran repercusión mundial. No obstante, tal como indica la misma Elsa Malpartida, presentar la iniciativa no es tarea sencilla e implica dar una serie de pasos de manera conjunta. En primera instancia los países que presentan la petición deben demostrar científicamente que la coca no es droga y tiene un valor médico nutricional; para ello biólogos y químicos peruanos y bolivianos trabajan en la elaboración de suplementos alimentarios y coagulantes médicos en base a hoja de coca. Una vez que los resultados de estas investigaciones han sido aprobados por la OMS deben presentarse a la ONU junto a una solicitud formal firmada por el Presidente de uno de los países miembros de la CAN, que en este caso sería Evo Morales, con el respaldo de los parlamentarios andinos de Perú y Bolivia. Una vez presentados estos documentos, la ONU empieza el proceso de evaluación y su fallo final puede tardar de dos a tres años entre apelaciones de las partes y recomendaciones adicionales. No obstante es ya un paso fundamental para los cocaleros el que la solicitud se encuentre en curso y que los representantes parlamentarios de ambos países hayan logrado coordinar esfuerzos y tener protagonismo en un nuevo espacio institucional en el que ahora tienen presencia.

Por ahora hemos privilegiado trabajar por el retiro de la coca de la lista de prohibiciones de la ONU. Para que esto proceda tiene que presentar la solicitud un presidente de un país inmerso en la problemática de la hoja de coca en este caso lo va a hacer Evo Morales. Pero para que proceda ese retiro tiene que demostrar técnica y científicamente que la hoja de coca no es droga, en eso estamos trabajando junto a los bolivianos, eso tiene que ser revisado y aprobado por la OMS. Todos los documentos se presentaran y tiene que solicitarse una resolución del Parlamento Andino aprobando el retiro de la hoja de coca. Evo Morales tiene también parlamentarios andinos que representan a Bolivia y con ellos estamos trabajando. No creo que ya el 2008 la coca sea despenalizada pero es como un juicio, una vez presentada la solicitud ellos deniegan nosotros apelamos y así vamos avanzando.¹¹¹

En cuanto a los mecanismos de interlocución que la parlamentaria establece con los productores cocaleros, destaca nuevamente esta vocación por los “canales directos” afirmando este tipo de relación como la más conveniente para mantener la legitimidad y la confianza con los productores. En tanto la representación de Malpartida es a nivel nacional y

¹¹¹ Elsa Malpartida, entrevista citada.

no por región, su contacto es con los productores de las distintas cuencas del país y no tanto con su gremio local la APCLP-A de Huanuco en el Huallaga. Lo mismo que Nancy Obregón, Elsa Malpartida no menciona como un posible canal de interlocución ni a la CONPACCP ni al Partido Nacionalista ni a instancias gubernamentales locales, lo importante para la representante es mantener el vínculo directo con los productores.

*El contacto ha sido y es directo he estado en Sandia, San Gaban, en Ucayali estoy viajando constantemente a todos los valles, estoy visitándolos como cuando era dirigente, no hago sentir la diferencia sigo demostrando que somos lo mismo y que ser congresista es caminar, no soy congresista de vitrina trabajamos muy directamente Eso es lo bueno por eso cuando yo llego no me dicen congresista me dicen compañera, [...]*¹¹²

Tanto a nivel del Congreso como del Parlamento Andino resaltan los esfuerzos de las autoridades cocaleras por demostrar consecuencia con sus plataformas electorales, impulsando iniciativas como la ley de coca o el retiro de la hoja de la lista de estupefacientes de la ONU y emitiendo propuestas para reformular la política de desarrollo alternativo y lucha contra el narcotráfico. Estos puntos, que formaban parte de las plataformas de lucha en las protestas cocaleras, son retomados desde la arena institucional debiendo tanto Malpartida como Obregón asumir una dinámica de negociaciones y procedimientos muchas veces lentos y burocráticos. Sin embargo, tal como las mismas líderes lo señalan, hay logros concretos que reafirman la apuesta por la vía institucional; es el caso de las acciones conjuntas emprendidas con los representantes de Bolivia o el contar con equipos profesionales que a su vez brindan asesoría y seguimiento a las demandas de los productores. De otro lado, resalta el énfasis y la valoración positiva que las representantes cocaleras otorgan a la interlocución directa, reafirmando la prolongada crisis de representación que vive la sociedad peruana y que se expresa en la desconfianza por la intermediación política, privilegiándose el contacto directo con el representado, una práctica particularmente exaltada durante el fujimorismo y su gobierno de “democracia directa”. La mediación partidaria del gremio nacional o de la autoridad local son pasadas por alto, primando un recelo que a su vez debilita a estos espacios, generándose una suerte de círculo vicioso que no logra ser superado.

¹¹² Elsa Malpartida, entrevista citada.

3.1.2 La relación en los Gobiernos locales

Los gobiernos locales en el Perú refieren a las municipalidades provinciales y distritales cuyos alcaldes son elegidos por voto directo desde la promulgación de la primera Ley de Municipalidades en 1981. Desde entonces, los gobiernos locales adquieren importancia, reconfigurando las elites de poder pero también ubicándose como centros de disputa política donde son frecuentes los conflictos y protestas contra las autoridades electas. A fin de paliar éstos crecientes conflictos locales e incorporar figuras que permitan la participación ciudadana en mayo del 2003 se promulga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que establece mecanismos como el Plan de Desarrollo Concertado y los Presupuestos Participativos en los cuales deben participar los líderes de las organizaciones sociales presentes en la provincia o distrito democratizando el ejercicio del poder en el espacio local. Asimismo reglamenta los procedimientos de revocatoria y vacancia municipal favoreciendo el cambio de autoridades ante la prueba de ejecución de delito o mal uso de la autoridad¹¹³

Para analizar la gestión municipal en los dos valles elegidos podemos centrarnos en los dos distritos más poblados de ambos lugares y los de mayor producción cocalera: Mariano Dámaso en el Huallaga y Sivia en el Río Apurímac. En el distrito de Mariano Dámaso es elegido como alcalde Hugo Fernández Echevarria invitado del Partido Nacionalista que se desempeñaba desde años atrás como locutor radial conduciendo un programa de noticias y análisis político en una radio de la provincia. Desde su programa, Fernández tiende puentes con el movimiento cocalero dando cobertura a las protestas e invitando a los productores para que expongan sus reclamos. Si bien no tiene un vínculo directo con la organización cocalera, recibe el apoyo electoral de los productores que lo consideran cercano a su problemática. Esta cercanía y el apoyo electoral recibido no significan que el movimiento tenga un nivel de control sobre el alcalde ni que este se sienta obligado a desarrollar una agenda favorable a los cocaleros. Tal ausencia de compromisos influye sin duda en la actual conflictividad del distrito pues el alcalde, acusado de abandono de cargo y malversación de fondos públicos, afronta un proceso de vacancia solicitado por 5 de los 6 regidores con el apoyo mayoritario de la población. Al ser consultado sobre las principales acciones de su gestión el alcalde afirma haber priorizado proyectos productivos y

¹¹³ Para un análisis detallado de la legislación municipal y sus implicancias puede consultarse: Muñoz Paula.2005. *El diseño institucional municipal 1989-2004*. Asociación SER. Lince, Lima, Perú.

de reforestación para los distintos sectores que se hallan en la localidad expresando su distancia con los cocaleros. Fernández no brinda datos precisos respecto los avances de los proyectos o sobre convenios que se halla gestionando y que en la práctica no significan ni inversión de recursos ni apoyo técnico.

*Proyectos productivos, firma de convenios que incluyen productores en general no solo cocaleros, también para el que siembra papaya, plátano, yuca, vemos de que manera puedan tener dentro de sus comunidades un desarrollo y así sus productos puedan salir a la ciudad. (...) Por ejemplo esta resultando el proyecto de plantaciones de maracuya y reforestación a través del proyecto especial Alto Huallaga, en mi distrito ya no hay muchas plantaciones de hoja de coca.*¹¹⁴

De otro lado, en la interlocución establecida entre el alcalde y las organizaciones sociales, particularmente el gremio cocalero de la APLP-A, prima la conflictividad y el distanciamiento al punto de estar en curso la solicitud de vacancia. Según el alcalde su trabajo se ha centrado en mantener un diálogo directo con el productor a través de las instancias planteadas por la Ley, particularmente el Plan Concertado donde de forma obligatoria deben asistir representantes de las organizaciones sociales formulando líneas estratégicas que luego se plasman en el presupuesto participativo municipal. Salvo estos canales reglamentados no existe un nivel de coordinación específico con los productores cocaleros, colocándose nuevamente el énfasis en los “canales directos” sin lograr detallar qué prácticas o espacios implican éstos en concreto. Para el alcalde los problemas que atraviesa su gestión se limitan a “intereses políticos” de grupos minoritarios que se interponen a su trabajo. Sin embargo no puede negar las acusaciones en curso tales como el cambio de la sede municipal del distrito a la capital de provincia y el mal uso de fondos municipales para la construcción del nuevo local.

*Mi relación es de organizarlos para trabajar en proyectos productivos, hay un nivel de dialogo si y es un contacto directo, voy a las comunidades para ver cuales son sus necesidades de desarrollo. Más que todo hacemos reuniones del Plan Concertado de Desarrollo. (...) Lo demás son problemas políticos no es un problema social Los que están políticamente detrás de esas protestas no tienen fuerza organizativa, mas bien yo como líder que ha alcanzado la mas alta votación sigo teniendo liderazgo[...]*¹¹⁵.

En el caso del distrito de Sivia en el Valle del Río Apurímac, la situación es distinta dada la relación que el movimiento cocalero y el alcalde establecen antes de su elección. Alejandro Gutiérrez, ex presidente de la FEPAVRAE es propuesto como candidato por las distintas

¹¹⁴ Fredy Fernández, entrevista citada.

¹¹⁵ Fredy Fernández, entrevista citada

organizaciones sociales y electo por el partido Qatun Tarpuy, razón por la cual existe una mayor presión para que se cumplan las promesas electorales, particularmente las relacionadas con el apoyo agrario a las diversas ramas productivas incluidos los cocaleros. Es importante señalar que el Ejecutivo aprobó en noviembre del 2007 el denominado “Plan VRAE” con el fin de frenar el avance del narcotráfico y sus sicarios en una de las zonas más violentas del país. Dicho Plan apunta principalmente a incrementar la presencia militar pero también contempla algunos recursos para las municipalidades que aun no han sido entregados pero que ya generan expectativas. Hasta el momento, tal como señala el alcalde, las acciones de la gestión se han centrado en proyectos productivos que sean alternativas sostenibles a la hoja de coca pero que a la vez no impliquen la eliminación de los cultivos tal como si lo exigen los programas de desarrollo alternativo de DEVIDA. De otro lado, al consultar al alcalde sobre acciones relacionadas con la identidad indígena, marco discursivo central en la campaña electoral, resalta que no se hayan tomado acciones específicas, refiriéndose medidas más bien simbólicas como resaltar los “valores andinos” y las costumbres de la zona, haciendo latente la diferencia entre sostener un discurso étnico y plasmarlo en la gestión.

Por el momento se nos ha permitido priorizar un presupuesto de 103 mil soles primero para establecer sub gerencias de desarrollo, ahora recién se me va a permitir elaborar perfiles de proyectos de desarrollo productivo (...) Mi sueño en el tema coca es hacer proyectos de producción orgánica, voy a incluir la hoja de coca dentro de los productos orgánicos por desarrollar. (...)Respecto al tema indígena la municipalidad esta apoyando a las comunidades retomando los valores de la zona alto andina y de la selva, revalorar las costumbres...pero medidas específicas todavía no, estamos haciendo proyectos de apoyo agrario.¹¹⁶

Respecto a la interlocución entre el gobierno local y las organizaciones sociales, lo afirmado por el alcalde coincide con las demás autoridades entrevistadas en resaltar la primacía del contacto directo con la población como el canal privilegiado para las coordinaciones. Respecto a las relaciones entre la municipalidad y el gremio cocalero, éstas también parecieran centrarse principalmente en los espacios establecidos por la Ley. El alcalde Gutiérrez pone especial énfasis en deslindar su función municipal de su papel como ex dirigente cocalero, señalando que no puede haber concesiones ni tratos más favorables a la FEPAVRAE puesto que como autoridad representa a sector más amplio de la población que incluye distintas ramas productivas. Debe resaltarse también que en el caso de Sivia, la

¹¹⁶ Alejandro Gutierrez, entrevista citada.

conflictividad social no parece ser un problema para la gestión, por el contrario el apoyo al alcalde se mantiene y las protestas sociales, sumamente frecuentes y violentas los años anteriores, han disminuido considerablemente. La situación de estabilidad se refleja además en el hecho que Sivia sea de los pocos distritos en que no se han presentado solicitudes de revocatoria a autoridades locales.

*La relación es principalmente directa con la población pero para las organizaciones sociales existen los espacios donde se coordina, esta el Presupuesto Participativo, el Plan de desarrollo ahí la FEPAVRAE participa lo mismo que FECMAVRAE, que las CADSVRAE. Pero dentro de la organización están los socios, los productores y en este caso si ellos hacen alguna protesta en conveniencia de sus intereses, la municipalidad no participa, por que nosotros no podemos asumir ese protagonismo, [...]*¹¹⁷

En los distritos analizados las gestiones de las autoridades vinculadas al movimiento cocalero resultan cualitativamente diferentes entre si, lo cual tiene que ver con el liderazgo y procedencia política de los alcaldes y con la fuerza del sector de movimientos sociales para lograr que asuman compromisos. En el distrito de Mariano Dámaso en el Valle del Huallaga, el alcalde elegido establece una relación de cercanía durante la campaña pero que no va mas allá de un apoyo declarativo propio de quien necesita esos votos para ganar. Asimismo, el gremio cocalero no cuenta con fuerzas para vincularse otros sectores y lograr que el alcalde asuma una plataforma clara de apoyo a los productores. No es el caso de Sivia donde si existe un nivel de relación vinculante entre las organizaciones y Qatun Tarpuy, avalada por la trayectoria dirigenal de Alejandro Gutiérrez. Estas diferencias se expresan posteriormente en la conflictividad social de cada distrito –expresada en protestas sociales y reclamos contra la autoridad el poder estatal local o nacional– la cual alcanza altos niveles de confrontación en M. Damaso mientras que en Sivia no se manifiesta. De otro lado, en cuanto a las acciones priorizadas, ambos alcaldes coinciden en resaltar la opción por los aspectos productivos vía la gestión de proyectos y firmas de convenios. En el caso de Sivia estos proyectos incluyen explícitamente a la hoja de coca sin que esto implique un trato especial para los cocaleros, cuidándose el alcalde de resaltar el trato igualitario para todos los actores sociales. No ocurre lo mismo en el distrito de M. Damaso donde el alcalde marca una clara distancia con el tema coca y su cultivo. Resulta significativo también que ambos alcaldes, al igual que las parlamentarias, pongan énfasis en los “canales directos”

¹¹⁷ Alejandro Gutierrez, entrevista citada-

como los prioritarios para la interlocución con la población, convirtiéndolos prácticamente en garantía de eficacia política y buen gobierno, por encima de los espacios establecidos por ley como el Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo. Es cierto que el tiempo de ejercicio que llevan los alcaldes (un año y cinco meses) aún es corto para analizar con mayor rigurosidad su gestión, pero un elemento como la conflictividad social en Mariano Dámaso es ya indicador de un profundo distanciamiento respecto a los intereses de los movimientos sociales que se aspiraba a representar. Queda pendiente saber si en el caso de Sivia, se logre plasmar una propuesta de conducción territorial con una mirada realmente alternativa sobre el problema del cultivo de coca y mantener a la vez los niveles de entendimiento con los sectores sociales que se ven representados en la gestión.

3.2. El desafío de mantener la dualidad: representación política y protesta

Un último punto importante para explicar el actual estado de la dualidad estratégica en el movimiento cocalero refiere al proceso por el cual los actores ejercen puestos de poder político pero a la vez mantienen un vínculo con la base que los conmina a apoyar las protestas que realizan. Esto implica entender la representación no solo de manera delegativa sino también en el sentido expresivo mencionado, según el cual los cocaleros y otros sectores marginados se identifican con determinadas posturas de sus autoridades, haciendo coincidentes sus demandas sectoriales a reclamos generales presentes en otras organizaciones sociales. En tal sentido, el desafío para las autoridades ligadas al movimiento cocalero es conciliar la gestión política con los intereses de la organización, intentando no distanciarse de la arena contenciosa y sorteando la tensión que se origina entre universalidad y particularidad. Una tarea difícil dada la presunta incompatibilidad legal del ejercicio de la autoridad con la protesta contra el Estado y por la variedad de demandas presentes hoy en una sociedad profundamente fragmentada como la peruana, donde incluso los mismos gobernantes no logran establecer niveles de encuentro y consenso entre sí.

Hasta la fecha, las autoridades vinculadas al movimiento cocalero no han podido articularse como un cuerpo único de representación, repitiendo más bien los distanciamientos ya manifestados en la CONPACCP. En tal sentido, resulta primordial anotar que los niveles de coordinación entre las distintas autoridades coinciden con sus valles de procedencia y con el camino de participación política elegido. A nivel de

representación parlamentaria hay estrecha relación entre la Congresista Obregón y la Parlamentaria andina Elsa Malpartida, ambas del Valle del Huallaga y ligadas al proyecto político del PNP liderado por Ollanta Humala. A nivel de los alcaldes del Río Apurímac estos también tienen una dinámica fluida de intercambio, participando en su mayoría de la agrupación Qatun Tarpuy. Sin embargo, al momento de establecer coordinaciones entre el gobierno local y el parlamento, lo que priman son los celos y distanciamientos limitando las posibilidades de lograr objetivos comunes.

En el caso de las autoridades del Valle del Huallaga, tanto Elsa Malpartida como Nancy Obregón han intentado coordinar esfuerzos a fin de no duplicar tareas y sustentar mejor sus propuestas. Esto sucede específicamente con la elaboración del proyecto de Ley de Coca y con la presentación de la Solicitud de despenalización de la hoja de coca a las Naciones Unidas. En el primer caso, si bien Obregón es la encargada formal del tema, hubo un intercambio entre asesores y profesionales de ambos despachos que cuidan los aspectos legales, la concordancia y viabilidad del proyecto de ley. En el segundo caso, correspondiente a las funciones de Malpartida, ambas representantes han asumido la relación con los parlamentarios bolivianos, coordinando bilateralmente las investigaciones que deben sustentar científicamente las propiedades medicinales y nutricionales de la hoja. Asimismo ambas ex dirigentas se han mostrado juntas en sucesivos eventos públicos, presentándose como parte de un mismo proyecto político encabezado por Humala y consecuentes con el movimiento cocalero. Conviene señalar que es distinto el caso de los alcaldes, pues como ya fue señalado aunque en el Huallaga existan dos municipios donde ganaron alcaldes del PNP – Hermilio Valdizan y Mariano Dámaso- éstos no tienen una relación orgánica con los cocaleros, habiéndose mostrado cercanos a este sector como parte de una táctica para conseguir votos. Tampoco existe coordinación entre los alcaldes de ambos distritos, abocándose las dos autoridades a lidiar con sendos pedidos de vacancia y revocatoria.

En el caso del Río Apurímac destaca el nivel de coordinación establecido entre los alcaldes de los siete distritos del Valle, incluidos los cuatro que fueron elegidos por Qatun Tarpuy, los cuales dan un nuevo impulso a la Asociación de Municipalidades del Valle del Río Apurímac y Ene (AMUVRAE). Esta instancia se forma en 1998, con financiamiento de USAID como un espacio para que los alcaldes coordinen entre sí y tiendan puentes de

entendimiento con las distintas instituciones presentes en la zona, abordando por ejemplo lo referido a los Programas de Desarrollo Alternativo. No obstante, entre el año 2000 y el 2003, cuando las protestas contra CARE y la cooperación norteamericana alcanzaron su máxima intensidad, la AMUVRAE entró en un periodo de inactividad del que empieza a recuperarse tras las elecciones municipales del 2006. Actualmente, la AMUVRAE agrupa a las municipalidades de Ayacucho (Anco, Sivia, Llohegua, Ayna y Santa Rosa) y de Cusco (Kimbiri y Pichari) y tiene su sede en San Francisco (Ayna). Sus principales tareas tienen que ver con la discusión de los Planes de desarrollo y la elaboración de proyectos conjuntos. También ha vuelto a operar como cede de coordinación para asuntos técnicos con agencias del Estado, particularmente con DEVIDA, la agencia del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Recursos Naturales (INRENA). Así lo manifiesta el jefe de la oficina de DEVIDA en el Río Apurímac Alejandro Gómez:

Hace poco tuvimos una reunión técnica con funcionarios de AMUVRAE, la Agencia agraria e INRENA, fue una reunión que nos permitió conjugar esfuerzos para promover una economía sostenible en las zonas del programa, mejoramos la infraestructura social y económica en las zonas de intervención, prueba de ello es que todos los puentes, todos los caminos han representado una fuerte inversión de la cooperación internacional. Coordinación con la AMUVRAE y con las mismas municipalidades cuando participamos de alguna reunión técnica o evaluación de su presupuesto participativo¹¹⁸

La relación entre los distintos niveles de gobierno, es decir entre parlamentarias y alcaldes tiene una tónica específica, visibilizándose distanciamientos que aún no han podido ser subsanados. Así por ejemplo, la relación entre la parlamentaria andina y los alcaldes de la región Huanuco, es prácticamente nula. A decir de Malpartida y sus asesores se ha tratado de coordinar algunos proyectos productivos pero no se ha encontrado respuesta de los alcaldes de H. Valdizan y Mariano Dámaso, dificultándose la relación por la crisis de legitimidad que ambos enfrentan y que se expresa en los pedidos de vacancia y acusaciones de corrupción. Para el alcalde de Mariano Dámaso, las parlamentarias no se preocupan por acercarse a las municipalidades, acusándolas de buscar réditos políticos personales y de estar vinculadas con los sectores opositores que exige su salida liderando el pedido de vacancia. Al margen de la veracidad de su acusación y su escaso sustento, lo cierto parece ser que no existen canales de coordinación ni acciones conjuntas coordinadas entre las representantes parlamentarias y los alcaldes de la región.

¹¹⁸ Alejandro Gutierrez, entrevista citada.

En las municipalidades del Valle del Río Apurímac de la zona ayacuchana en poder de Qatun Tarpuy y particularmente en el caso de Sivia, se reconoce que la relación con el Parlamento Andino y las Congresistas de la región es mínima, sin haberse logrado establecer canales para coordinar acciones que podrían beneficiar al conjunto del movimiento como la ley de coca. En el caso de la interacción entre los alcaldes de la AMUVRAE y las congresistas ayacuchanas, todas pertenecientes al PNP y provenientes de la zona de sierra, a partir del 2008 se han emprendido algunas iniciativas conjuntas, debido principalmente a que la aprobación de determinados proyectos productivos requiere del aval de un congresista que otorgue mayor respaldo a la propuesta. Existe particularmente una buena relación con la Congresista Juana Huancahuari quien recibe al alcalde de Sivia Alejandro Gutiérrez en sus visitas a Lima y desde su despacho viene apoyando gestiones específicas relacionadas con la aprobación de los perfiles de proyectos. Se manifiesta así una postura más abierta a concretar acciones conjuntas aunque en la práctica todavía solo se trate de gestiones burocráticas.

*Por el momento no hay coordinación con el Parlamento Andino y muy poca con los congresistas ayacuchanos. La ley de coca esta en las manos de las Congresistas, eso es competencia de ellos si nos solicitan apoyo nosotros podemos apoyarlos pero no se ha dado (...) Lo que si como ahora se nos permite elaborar perfiles de proyectos hemos empezado a acudir a las autoridades del Congreso, tanto a las instancias pertinentes con nuestros estudios en la mano para priorizar ganadería, piscigranjas y otros proyectos, [...]*¹¹⁹

Las dificultades para lograr una articulación más sólida entre las distintas autoridades de las cuencas cocaleras, ya sea a nivel parlamentario o de gobiernos locales, acaban por replicar las rivalidades y preeminencias de cuotas de poder local ya presentes en la CONPACCP y que los sucesivos Congresos Nacionales del gremio no pudieron remediar. Tal situación limita las posibilidades de identificar intereses comunes y de trazar estrategias unificadas para lograr cambios cualitativos respecto al tema coca desde la arena política. Asimismo, repercute considerablemente en las posibilidades de las autoridades vinculadas al movimiento cocalero para representar a los sectores nacionales que expresan su descontento en protestas y movilizaciones que se multiplican por el país, exigiendo principalmente una mejor distribución de los recursos. El reclamo de estos sectores, incluyendo los productores cocaleros, es que sus autoridades a quienes años atrás vieron encabezando las protestas,

¹¹⁹ Alejandro Gutierrez, entrevista citada.

desempeñen un papel activo de oposición en esta misma línea, asumiendo también protagonismo en la vía contenciosa.

3.2.1 Autoridades y vía contenciosa

Desde que las autoridades cocaleras fueron elegidas, el hecho de que deban participar o no de las protestas sociales de su sector ha sido uno de los temas que mayor polémica ha causado en el Perú. Para las autoridades vinculadas al movimiento cocalero, apoyar y sumarse a las protestas pareciera ser considerado parte de sus legítimas funciones y como tal han acompañado diversos paros y movilizaciones¹²⁰. Para el poder ejecutivo esto es un atentado contra el Estado y la gobernabilidad democrática, promulgándose el Decreto Ley N°982 que sanciona a las autoridades que participen en movilizaciones. Detengámonos en este último punto a analizar estos tres aspectos: la dinámica contenciosa que continúa desarrollando el movimiento cocalero, la postura de sus autoridades parlamentarias y locales y la reacción del gobierno del APRA orientada a afirmar la incompatibilidad entre el ejercicio de la autoridad estatal y el protagonismo en las protestas.

A nivel de las autoridades parlamentarias del Alto Huallaga, destaca en primer lugar la postura de la parlamentaria andina Elsa Malpartida, abiertamente favorable a continuar liderando las protestas cocaleras. Desde que Malpartida asumió funciones en julio del 2006, se han desarrollado tres paros regionales convocados por los productores cocaleros del Alto Huallaga, el primero en mayo del 2007, el segundo en junio y el último del 9 al 20 octubre del mismo año. En todas estas acciones las exigencias fundamentales son el cese de los operativos de erradicación forzosa ejecutados por el CORAH, el cierre de DEVIDA y la reformulación de los programas de desarrollo alternativo que siguen siendo fuente de conflictos. Si bien en los dos primeros paros cocaleros la dirigente manifestó abiertamente su apoyo, en el paro de octubre se trasladó al Alto Huallaga a sumarse a las protestas campesinas. Según la policía, durante las movilizaciones un grupo de cocaleros encabezados por Elsa Malpartida atacó a un equipo de erradicadores del CORAH, impidiendo su labor, apropiándose de información oficial y causando daños a la propiedad pública. Aunque la parlamentaria andina niega haber encabezado esta acción, la fiscalía de la ciudad de Tocache

¹²⁰ Es el caso de la huelga cocalera del Valle del Huallaga en mayo del 2007 donde intervinieron Obregón y Malpartida o del paro cocalero del Valle del Río Apurímac convocado por la FEPAVRAE en julio del 2007 y que contó con el respaldo de los alcaldes vinculados a Quatun Tarpuy. www.larepublica.com.pe 26 de mayo 2008

formalizó la denuncia en su contra bajo los cargos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, el presidente del Congreso de la República solicitó que la Comisión de Ética del Parlamento Andino analice la conducta de Malpartida pues esta instancia puede determinar sanciones que van de la amonestación a la destitución. Sin embargo, por contar con inmunidad parlamentaria, la ex dirigente no tiene la obligación de acudir ante el despacho de un fiscal o un juez razón por la que el proceso judicial aún permanece detenido. Tampoco el Parlamento Andino ha dictado alguna sanción contra ella ni se ha pronunciado al respecto. Para la parlamentaria no hay nada errado en su actitud y las denuncias son parte de las represalias que toma el gobierno contra ellas por oponerse a la política del ejecutivo y permanecer en las calles junto a sus bases. Tal como ella lo afirma, continuará apoyando las protestas pues es parte de su labor hablar en nombre de los miles de peruanos excluidos.

Yo sigo en la protesta, enfrentando al gobierno, por eso estamos en el ojo de la tormenta y dicen que nos van a desaforar no tenemos miedo, nosotros somos gente de campo que no vamos a extrañar esta vida, volveremos a nuestras raíces y seguiremos por el camino de la lucha. Yo creo que las autoridades tenemos el derecho a ejercer la protesta, el pueblo me ha elegido por que sabe que voy a seguir reclamando y voy a seguir hablando a nombre de esos millones de peruanos que quieren decir algo y no pueden hacerlo, ellos me han dicho estate ahí y represéntanos, y eso hago voy a cumplir el mandato.¹²¹

La posición de la congresista Nancy Obregón es prácticamente la misma que la sostenida por Elsa Malpartida en el sentido de entender su participación en las protestas como parte de sus funciones y un compromiso con los sectores a los que representa, particularmente con Tocache, su provincia de procedencia. Desde que Obregón asumió como Congresista, se han desarrollado dos paros cocaleros en su zona, el primero la quincena de marzo del 2007 y el segundo en septiembre del mismo año. Durante el primer evento de protesta la Congresista manifestó su apoyo a las protestas pero no llegó a trasladarse a la zona debido a su agenda en el legislativo. Sin embargo, sus declaraciones fueron suficientes para que el Procurador solicitara su detención inmediata. No olvidemos que por los violentos incidentes durante las protestas del 2005 Nancy Obregón fue enjuiciada y pasó un dos meses en prisión hasta que logro su libertad condicional, una de cuyas pautas de conducta le impiden “participar o instigar acciones de protesta”. Según la Procuraduría, Obregón violó las reglas de conducta que le exige su condición de procesada al amenazar al gobierno con la “insurgencia” de las bases cocaleras si no detenían las erradicaciones. Por su parte el

¹²¹ Elsa Malpartida, entrevista citada.

legislador Luis Galarreta solicitó que la conducta de la legisladora pasara a la Comisión de Ética del Congreso de la República para evaluar una posible sanción. En esta oportunidad la inmunidad parlamentaria de la congresista hizo que el pedido del procurador fuera descartado y tampoco el Congreso logró juntar los votos para enviar el caso a la Comisión de Ética. Durante el segundo evento de protesta la congresista se trasladó a Tocache pero esta vez cumplió un rol más bien mediador, gestionando la presencia del ministro de agricultura quien se comprometió a suspender temporalmente las erradicaciones forzadas en la zona hasta revisar aspectos técnicos del cronograma, permitiendo el cese de las movilizaciones. Si bien la congresista Obregón resalta el papel apaciguador que cumplió en dicha ocasión, no duda en pronunciarse claramente a favor de continuar participando activamente en las protestas, considerándolo como necesario en tanto el Estado no cumple con los cocaleros. La plataforma de lucha que levanta es básicamente la misma que sostuvo la CONPACCP en las marchas de sacrificio de años anteriores: cese de las erradicaciones, empadronamiento a los productores en ENACO y una política nacional en el tema coca. Mientras esto no se resuelva la Congresista piensa permanecer al “frente de las masas”

Si he participado en las últimas protestas en Tocache, por que es mi tierra he estado ahí, hemos llevado al ministro y se ha podido parar la exacerbación de la masa y eso me ha dado bastante satisfacción por que creemos que es mejor evitar la violencia y fundamentalmente el derramamiento de sangre. Eso que menciona el ejecutivo de que van a haber desafueros es una sonsera por que si mi pueblo sangra, yo no voy a estar sentada en mi curul, como autoridad tengo el legítimo derecho de poder protestar con la masa. Principalmente demandamos al Estado el cese de las erradicaciones, por un nuevo empadronamiento de los productores, por una política realmente peruana en el tratamiento del problema cocalero y no un seguimiento arrastrado a lo que dicen los Estados Unidos¹²².

En el Valle del Río Apurímac, la postura asumida por los alcaldes de Qatun Tarpuy es bastante similar a la sostenida por las autoridades del Valle del Huallaga. No obstante presenta algunas variantes relacionadas con dos factores: uno la postura asumida por la FEPAVRAE desde la salida de Nelson Palomino de la cárcel, mucho menos confrontacional y más orientada a sentar presencia en el espectro político, y dos la ausencia de erradicaciones pues en el VRA se continúa enfatizando en los programas de desarrollo alternativo y en la lucha contra el narcotráfico en base a un incremento de la presencia militar. Ambas razones pueden explicar por qué en el Río Apurímac se produce solo un evento de protesta significativo entre el 9 y el 12 de julio del 2007 y no dos o tres como

¹²² Nancy Obregón, entrevista citada.

ocurre en las distintas zonas del Huallaga. Durante las protestas de julio miles de productores de coca convocados por la FEPAVRAE inician un paro regional al que se suman organizaciones sociales como la FECMAVRAE además de empresas de transporte, centros comerciales y trabajadores estatales. Como parte de las protestas se cierran las principales vías de acceso a la selva y se realiza un mitin en el aeródromo de Kimbiri donde se hace presente Nelson Palomino, el presidente de la FEPAVRAE Julian Quispe y también los alcaldes de Sivia, Llochegua, Ayna, Kimbiri y Pichari, exponiendo como principales demandas el empadronamiento de los productores de coca por ENACO y la revisión de Plan VRAE, considerado excesivo en gastos militares y escaso en apoyo para el sector agrario. En esta ocasión la violencia estuvo controlada siendo mínimos los enfrentamientos con la policía; el paro duró durante los días anunciados y luego las actividades volvieron a la calma. Hasta hoy el paro de julio ha sido la última protesta de envergadura en la zona y también la última vez en que Nelson Palomino apareció en público debido a diferencias con la dirigencia cocalera y a las pautas de conducta que le impone su libertad condicional entre ellas movilizarse sin permiso del juez. No obstante esta aparente calma en las protestas, no se hicieron esperar las acusaciones de “instigadores” contra los alcaldes por el hecho de haber respaldado el paro cocalero. El presidente de DEVIDA exigió drásticas sanciones para los alcaldes aunque éstas finalmente no llegaron a concretarse. Alejandro Gutiérrez, alcalde de Sivia, deja claro que la protesta es un legítimo derecho de ciudadanos y autoridades pero a la vez procura que diferencie su labor como dirigente gremial y su labor como alcalde, justificando su participación en las movilizaciones sólo si “el pueblo lo demanda”.

Nosotros estamos contra las erradicaciones, estamos en contra de que alguien toque nuestros intereses como cualquier ciudadano tenemos nuestros derechos, estamos en un país democrático tenemos derecho a protestar si no se nos respeta (...) La FEPAVRAE ahora hace menos huelgas y paros eso cambio desde el momento en que yo asumí como dirigente, cambiamos por que hacer huelgas, marchas o paros es buscar la inestabilidad de la población, incomodar al gobierno central que tampoco es responsable de todos nuestros problemas, preferible es tener un perfil de proyecto, un estudio sustentado. La federación y la municipalidad van por caminos separados pero si nos unimos en determinadas ocasiones, cuando lo reclama el pueblo¹²³.

Las autoridades cocaleras de ambos valles coinciden entonces en defender su participación en las protestas, ya sea asumiendo el liderazgo al frente de las movilizaciones o jugando un papel mediador para paliar la intensidad del conflicto. Ante esta postura, la respuesta del

¹²³ Alejandro Gutiérrez, entrevista citada.

gobierno del APRA ha sido el enfrentamiento y la penalización, confrontando sus representantes en el ejecutivo y el legislativo la actitud de las autoridades. También el Poder Judicial, a través de las fiscalías y procuradurías ha asumido esta posición, respondiendo prontamente con denuncias y pedidos de sanciones para las autoridades que insisten en la vía contenciosa. Quizás el esfuerzo más ilustrativo de la política del gobierno por el contrarrestar tal actitud sea la promulgación en julio del 2007 del Decreto Legislativo N° 982 que modifica el Código Penal¹²⁴. Entre otros puntos, dicha norma sostiene que las autoridades o funcionarios públicos que participen de huelgas o protestas serán sancionados con inhabilitación y penas de cárcel. La oposición de diversas fuerzas políticas a la norma ha logrado que se anteponga una acción de inconstitucionalidad, encontrándose actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional. Si bien la Ley N° 982 no se ha aplicado todavía, es representativa de la posición del gobierno frente a la participación de las autoridades en las protestas y busca de alguna manera frenar el creciente descontento popular que demanda principalmente una mejor redistribución del crecimiento macroeconómico. Ni a las parlamentarias ni a los alcaldes vinculados al movimiento cocalero tal postura del poder ejecutivo parece intimidarlos, por el contrario se reafirman en su decisión de mantenerse activos en la arena contenciosa, asumiendo los riesgos que esto conlleva. El hecho de que la CONPACCP no haya podido aun recomponerse de su última crisis tras la participación en las elecciones por caminos separados, no ha sido un impedimento para que los gremios locales desarrollen paros y movilizaciones demandando en cada uno de ellos que sus autoridades políticas respalden sus acciones. En tal sentido, el desafío de mantener la dualidad estratégica no solo implica que el movimiento cocalero consolide estructuras organizativas que le permita participar de manera más cohesionada en la arena política y recobrar protagonismo contencioso a nivel nacional. Implica también que las autoridades elegidas por el movimiento demuestren a las bases que es posible lograr mejoras para el sector desde la vía institucional sin perder la identidad confrontacional, aunque esto signifique lidiar con un contexto político adverso de creciente criminalización de la protesta social.

¹²⁴ Diario Oficial El Peruano, Lima 22 de julio del 2007

CONCLUSIONES

Al intentar explicar la estrategia dual desplegada por el movimiento cocalero hemos querido dar cuenta de una problemática compleja donde, diversas condiciones históricas, intereses políticos, evaluaciones y tramas personales se encuentran y relacionan entre sí delineando diversos senderos a seguir. Estos caminos no siempre resultan coincidentes y asumir uno, otro u ambos, conlleva costos y consecuencias para los actores y sus formas de encarar la acción colectiva. Entre 1998 y el 2007, los productores cocaleros del Perú desarrollan acciones contenciosas y a la vez incursionan en la política de representación, asumiendo que ambos caminos no son excluyentes entre sí. Según nuestra hipótesis inicial, el desarrollo de dicha estrategia dual podía explicarse a partir de la interacción de elementos internos entendidos como componentes constitutivos del actor, y elementos externos relacionados con la estructura de oportunidad política nacional e internacional, mediando entre ambos la acción de los líderes. Concluida la investigación, creemos que dicha hipótesis ha podido comprobarse en aspectos sustanciales, a la vez que en otros ha generado nuevas interrogantes que podrían ser abordadas en futuras investigaciones.

Dentro de los factores internos al grupo más relevantes para comprender la dualidad estratégica del movimiento cocalero, destacamos a la identidad colectiva y las formas organizacionales compartidas. En el caso de la identidad, su carácter abierto y confrontacional permite a los cocaleros orientar sus estrategias sin lidiar con rigideces ideológicas, operando de modo funcional al movimiento tanto al momento de la protesta como de la competencia electoral. Condiciones históricas tales como la constante movilidad migratoria, la violencia política y la pacificación signan profundamente al actor, moldeando un nosotros abierto que le permite adaptarse a situaciones límite. De otro lado, el discurso que asume la identidad colectiva se inscribe dentro del horizonte de impugnación al Estado denominado aquí “tradicción radical”, caracterizado por la convivencia de dos marcos referenciales de fuerte resonancia y en permanente tensión: el clasismo y la reivindicación étnica. Los cocaleros, y particularmente los líderes, asumen en su identidad y destacan en el discurso uno u otro de acuerdo a las características de los pobladores y a las evaluaciones políticas del momento.

En el caso de las estructuras organizativas, resulta fundamental el hecho de que, tras casi veinte años de ausencia gremial en las zonas de selva alta, los productores cocaleros logren constituir estructuras y legitimar liderazgos. Dicha articulación orgánica presenta diferentes niveles de consolidación, mostrándose como fragmentada a nivel nacional y cohesionada a nivel local. En los principales valles, la APC- Tocache y la AHPCLP en el Huallaga y la FEPAVRAE en el Río Apurímac se constituyen como los gremios más importantes del sector de movimientos sociales, institucionalizando liderazgos y una dinámica interna que les permite continuar la acción contenciosa y ser un referente constante para las autoridades en la arena electoral. Es distinto el panorama a nivel nacional, donde los principales valles no han cedido sus cuotas de poder en aras del fortalecimiento de la CONPACCP, gremio que ha debido afrontar alejamientos, rupturas y reunificaciones. No obstante, esto no impide que se tomen decisiones descentralizadas y coordinadas entre los distintos valles que permiten al actor posicionarse como un interlocutor válido ante el Estado y los partidos políticos.

Dentro de los factores externos que permiten el despliegue de la dualidad estratégica, identificamos determinadas estructuras de oportunidad política (EOP) nacionales e internacionales. A nivel nacional, la EOP abierta con la crisis del régimen autoritario de Fujimori a fines de los '90 implica la flexibilización del control militar en los Valles, favoreciendo las protestas y la organización cocalera. Asimismo, la posterior transición democrática trae cambios sustantivos en el terreno institucional, reformándose la política antidrogas, la legislación electoral y las agendas de los partidos. Esto incide en las evaluaciones del movimiento, presentando como posible alternar el desempeño en el terreno contencioso y en el electoral. Si bien la estructura de oportunidad política favorable a la protesta se cierra agudizándose la represión masiva y selectiva, las reformas institucionales de la transición democrática marcan un nuevo escenario político sobre el cual los cocaleros discuten y asumen la participación electoral del 2006.

En cuanto a los factores del entorno internacional, constatamos el “rol fundamental que desempeñan las tendencias y sucesos internacionales al momento de fijar políticas y alineaciones internas” (Mc Adam, 1996: 62). En tal sentido la política neoconservadora de Bush presiona al Perú para la implementación del plan de reducción de cultivos “Coca cero” y en la negociación del TLC que implica nuevos condicionamientos al estado peruano

en el tema coca para acceder a los “beneficios comerciales” bilaterales. El gobierno de Toledo cede a dichas presiones reiniciando las erradicaciones forzosas de los cultivos y condicionando los programas de desarrollo alternativo en los valles. Todo esto alimenta el ciclo de protestas cocaleras a la par que incide en el cierre de la EOP abierta con la crisis del fujimorismo que flexibilizó la represión, llevando al movimiento a replantear su accionar hasta entonces eminentemente contencioso. El triunfo de Evo Morales en Bolivia y la trayectoria del movimiento en dicho país, es un elemento que influye fuertemente en la decisión de los cocaleros peruanos, operando como un referente para las evaluaciones propias.

Los liderazgos por su parte, adquieren una importancia central en la adopción de la estrategia dual, vinculando aspectos internos y externos. De un lado, los líderes son quienes impulsan la conformación de estructuras organizativas, presentan la identidad y articulan discurso, encabezando las acciones de protesta. De otro lado, ocupan un papel central en la evaluación de las estructuras de oportunidad política, siendo los que finalmente deciden la conveniencia de participar en la arena electoral y la forma de hacerlo. Desarrollan así un proceso de aprendizaje en el cual retoman experiencias pasadas y otras cercanas como la boliviana, que opera como un referente tanto para la protesta como para el desempeño en la política representativa. Sin embargo, estos fuertes liderazgos llegan a ser contraproducentes para el movimiento; pues a la vez que permiten viabilizar decisiones que el colectivo no puede tomar, sesgan las posibilidades de consolidar instancias nacionales y democratizar las decisiones generándose una especie de círculo vicioso entre líderes cuasi caudillistas y una débil organización.

¿Cómo los cocaleros concretan la opción por la vía contenciosa? Las protestas cocaleras se desarrollan en reacción al inicio de las erradicaciones forzosas y los nuevos condicionamientos para acceder al desarrollo alternativo que impone el desgastado gobierno de Fujimori. En los principales valles, después de años de férreo control militar, se suceden movilizaciones espontáneas con altos niveles de violencia y dirigidas por una nueva generación de líderes formados al calor del conflicto armado interno y el fujimorismo. La caída del régimen y la consecuente reformulación de la política cocalera, permite al movimiento dialogar con el Estado, cumpliendo DEVIDA un rol fundamental en el encuentro de los distintos valles y la creación de la CONPACCP. Es a partir de esta

instancia que, retomando un repertorio ya existente, los cocaleros realizan la marcha de sacrificio a Lima de mayo del 2003. Esta acción es clave pues permite al movimiento presentar su identidad estratégicamente como productores de la selva alta, deslindando con las estigmatizaciones de terroristas y narcotraficantes. Logran además posicionarse en la opinión pública como un actor social organizado y negociar con el gobierno de Toledo. No obstante, durante esta acción es detenido Nelson Palomino y pocos meses después se reinician las erradicaciones con mayor violencia, mientras la organización cocalera, debilitada por la caída de su líder, es incapaz de responder la arremetida estatal. La agudización de la represión cierra la oportunidad política y muestra los límites de la estrategia contenciosa, evaluándose nuevas opciones.

¿Como se concreta la participación cocalera en el terreno electoral? La opción del movimiento por participar en elecciones es un proceso complejo, en el cual confluyen opciones identitarias, decisiones de los líderes y nuevas condiciones institucionales. La transición democrática implica la reformulación de tres leyes importantes: la ley orgánica de elecciones (LOE) que acaba con la figura de distrito único favoreciendo a los líderes locales, la ley de partidos políticos que permite la inscripción como candidatos a invitados no militantes, y la ley de cuotas de género que obliga a los partidos a contar con un mínimo de figuras femeninas en sus listas parlamentarias. Estos cambios legales coinciden con el surgimiento de nuevos partidos políticos particularmente el Partido Nacionalista liderado por Ollanta Humala que levanta un discurso anti imperialista de defensa de la soberanía nacional coincidente con las posturas cocaleras. En el IV Congreso Nacional de la CONPACCP el movimiento cocalero intenta discutir por canales institucionales su participación en la coyuntura electoral. Sin embargo, la detención de Palomino y las persistentes disputas entre los valles, impiden tomar una decisión al respecto, dejándose a discrecionalidad de los líderes definir su participación electoral. Finalmente se delinean dos caminos de participación: la figura de “invitadas” y el instrumento político.

Las dirigentes del Valle del Huallaga Nancy Obregón y Elsa Malpartida, deciden participar como candidatas al parlamento invitadas por el Partido Nacionalista. Tal opción por el ex comandante Ollanta Humala, puede inscribirse en una histórica cercanía entre militares y campesinos, pero también responde a rasgos autoritarios y marcos nacionalistas compartidos por la identidad cocalera y el discurso humalista. Las dirigentas levantan un

discurso campesinista enmarcado en reivindicaciones de clase y soberanía nacional que encuentra una EOP favorable en la admiración que los gobiernos progresistas de la región como el de Rafael Correa o Hugo Chávez despiertan en los sectores populares. Durante la campaña, ambas candidatas se cuidan de no involucrar a la organización en actividades proselitistas aunque cuentan con el cerrado apoyo de sus valles de precedencia. Finalmente Malpartida es electa representante peruana al Parlamento Andino y Obregón Congressista de la República por la región San Martín. No obstante, para las elecciones municipales la figura de invitados muestra sus límites, pues los conflictos al interior del PNP afectan las posibilidades electorales del movimiento cocalero, el cual junto al PNP solo coloca alcaldes en dos distritos del Huallaga.

El “instrumento político” es la vía de participación electoral que asumen los productores del Valle del Río Apurímac. Tras la salida en libertad de Nelson Palomino, los cocaleros de la FEPAVRAE en coordinación con los distintos actores del SMS local, organizan el partido Kuska Perú que participa en las elecciones municipales como Qatun Tarpuy. La evaluación que subyace es que resulta mucho más positivo contar con un partido político directamente vinculado a los intereses de la organización y ante la crisis del PNP es mejor guardar distancia. Prima también una visión gradual, pues se opta por disputar espacios de representación a nivel distrital y provincial, que es donde el movimiento concentra mayor fuerza. Durante la campaña, los cocaleros remarcan en su discurso los componentes étnicos, concientes del ascendente indígena de los pobladores del valle y también de una EOP favorable a este marco luego del triunfo del MAS en Bolivia. Finalmente los candidatos cocaleros de Qatun Tarpuy ganan en cuatro de las seis municipalidades distritales del VRA Ayacuchano y en la provincia de Huanta.

En ambos casos el rol de los líderes es fundamental, pues en ellos recae la decisión final de participar. La figura de invitadas es una fórmula apurada por la coyuntura ante la falta de consenso del gremio y si bien en un primer momento permite triunfos importantes, al poco tiempo muestra sus límites pues la organización no puede resistir la crisis del partido. La opción por el instrumento político es también una fórmula decidida por un solo sector (el VRA) en el cual no se involucra al gremio nacional, si bien Kuska Tarpuy consigue algo más de estabilidad y cohesión con el movimiento, es una alternativa sumamente localista. Vale preguntarse entonces si ¿resulta positivo para el movimiento que

la decisión final de participar en elecciones recaiga en los líderes? Por un lado dejar en libertad de acción a los líderes busca evitar que la organización, que venía recomponiéndose de rupturas anteriores, se desgaste en un debate que de seguro no alcanzaría consenso. El problema es que antes que desgastarse el gremio no se había consolidado y eludir la discusión abona a la fragmentación territorial y al poder de los principales valles, impidiendo la democratización interna. En tal sentido, la experiencia cocalera peruana demuestra que para la participación de los movimientos sociales en la arena electoral no es necesario una sólida estructura organizativa, aunque ésta sí influyen en el éxito y sostenibilidad de las vías elegidas. En el caso del instrumento político, el vínculo directo entre partido y movimiento permite un mejor posicionamiento de los intereses cocaleros, algo que no sucede en el Huallaga donde la crisis del PNP impacta también las posibilidades del movimiento.

Vemos así que en el despliegue de la estrategia dual el movimiento cocalero no se transforma en partido y tampoco desaparece. No obstante, mantener la dualidad no es tarea sencilla y deja abierta una serie de interrogantes relacionadas con la sostenibilidad misma de la estrategia dual ¿Es compatible para una autoridad desempeñarse como representante del Estado y a la vez liderar protestas en contra de determinadas políticas estatales?, ¿el que las autoridades participen de las protestas abona a la crisis de las instituciones profundizando la brecha entre estado y sociedad o por el contrario es parte del legítimo derecho de todo ciudadano a expresar su descontento?, ¿debe el movimiento que promovió a las autoridades exigirles que se pongan al frente de sus protestas por que consideran se deben mas a ellos que a otros sectores también presentes en la sociedad? En el caso del movimiento cocalero, el empeño de los líderes, ahora convertidos en autoridades, por acompañar las protestas les ha valido enfrentar acusaciones en un contexto de criminalización expresado en la promulgación del DL N° 982. De otro lado, ha sesgado también su mirada respecto a las posibilidades de coordinar acciones a favor del movimiento desde la arena política. Formados en medio de la crisis del sistema de partidos, que critica las instancias de mediación y se afirma en los canales directos, las autoridades cocaleras presentan serias dificultades para tejer articulaciones entre los distintos niveles de gobierno donde han ganado puestos de autoridad, siendo prácticamente nula la coordinación entre alcaldes y congresistas replicando una fragmentación territorial ya vivida a nivel organizativo.

Asimismo, persisten serias dificultades para conciliar el interés sectorial del movimiento y el del conjunto de la nación, distanciando el interés particular del universal en la sociedad peruana.

Si bien frente a la crisis de representación política, el movimiento logra constituirse como un canal de articulación de intereses en una zona donde no existían partidos políticos, replica también problemas que afectan al sistema político peruano en su conjunto tales como la tendencia al caudillismo y la permanente debilidad institucional. La participación cocalera en la arena política muestra la confluencia de política de protesta y de representación donde el movimiento puede construir su propio aparato partidario a la vez que interactuar con los partidos no sólo en base a cálculos instrumentales sino también a coincidencias discursivas y afinidades identitarias. Queda pendiente aún saber cómo a futuro el movimiento encarará su participación en la arena electoral y contenciosa, por ahora, queremos finalizar anotando el esfuerzo cocalero por lograr su inclusión en la vida política desde los cauces de la institucionalidad democrática, lo cual hasta hace poco más de una década, parecía imposible sobre todo en la selva alta donde la confrontación armada era la “práctica política” predominante. Es tarea del Estado, de los actores políticos y del mismo movimiento cocalero, continuar en este camino, evitando replicar así viejas historias de exclusión y violencia.

BIBLIOGRAFIA

- Albó, Xavier. 1991. "El retorno del indio". En: *Revista Andina*, Año 9, N° 18. Centro Bartolomé de las Casas. Cusco, Perú.
- Antezana, Jaime. 2005. *El movimiento cocalero en el Perú, de la reducción gradual al coca o muerte*, Documento de trabajo, Lima, Perú.
- Barrera, Augusto. 2001. *Acción colectiva y crisis política, El movimiento indígena ecuatoriano en los 90*. Ediciones Abya Yala. Quito, Ecuador.
- Bedoya, Augusto. 2003. *Las estrategias productivas y el riesgo entre los cocaleros del Valle del río Apurímac y Ene*. Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) Lima, Perú.
- Bendford, Robert y Snow, David. 2000. *Framing processes and social movements, an overview and assessment*. Annual Review of sociology, Vol 26, USA.
- Berstein, Mary. 1997. *Celebration and suppression: The strategic uses of identity by lesbian, and gay, movement*, Arizona Justice Studies, Vol. 103, N°3, Arizona.
- Blondet, Cecilia y Rospigliosi, Fernando. 2004. *El consumo tradicional de la hoja de coca en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Cabieses, Hugo. 2007. "Coca compleja, drogas y cocaleros en los Andes". En: *Hablan los diablos Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú*. TNI – OXFAM. Lima, Perú.
- Cabieses, Hugo. 2005. "Sobre coca, cocaleros y drogas: fallos satánicos y debates de fondo". En: *Revista Debate Agrario*. N° 39. CEPES, Lima, Perú.
- Cadena Roa, Jorge. 2003. "State pacts, elites and social movements in Mexico transition to democracy". En: Jack Goldstone. *States, Parties, and Social movements*. Cambridge University Press. Reino Unido.
- Casquette, Jesús. 1998. *Política, cultura y movimientos sociales*. Editorial Bakakeaz. Bilbao, España.
- Cerulo, Karen. 1997. "Identity Construction, new issues, new directions". En: *Annual Reviews of sociology*. Vol N° 23. USA.
- Cohen, Jean y Arato, Andrew. 2000. *Sociedad civil y teoría política*. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de México, México.

- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 2003. *Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*. Fondo Editorial CVR. Lima, Perú
- Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Febrero 2004 *Actas del II Congreso Nacional Ordinario*, Lima, Perú.
- Cotler, Julio. 1999. *Drogas y política en el Perú: la conexión norteamericana*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Della Porta, Donatella. 1996. "Social movements and the estate; thoughts on the policing of protest". En: Adam, Mc Carthy and Mayer Zald ed. *Comparative perspectives on social movements*. Cambridge University Press. Reino Unido.
- De la Cadena , Marisol 2004. *Indígenas mestizos, política de raza y cultura en Cusco Perú 1919 -1991*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú
- Degregori, Carlos Iván. 1993. "Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú". En: Alberto Adrianzén y otros. *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*. Instituto Francés de Estudios Andinos - Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Perú.
- Durand, Francisco. 2005. "El problema cocalero y el comercio informal para uso tradicional". En: *Revista Debate Agrario* N° 39. CEPES. Lima, Perú.
- Durand, Ursula. 2006. "El camino cocalero". En: *Perú Hoy, nuevos rostros en la escena nacional*". DESCO. Lima, Perú
- Durand, Anahí. 2007. "El movimiento cocalero y su difícil construcción en el Perú, Itinerario de desencuentros desde el Río Apurímac". En: *Hablan los diablos Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú*. TNI – OXFAM. Lima, Perú.
- Del Pino, Ponciano. 1996. "Tiempos de guerra y de dioses, Ronderos, evangélicos y senderistas en el Valle del Río Apurímac. En: Carlos Ivan Degregori. *La derrota de Sendero Luminoso*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Escárzaga, Fabiola. 1999. "Campesinado indígena en México, Bolivia y Perú, de la reformas agrarias a la colonización de la frontera". En: *Revista Argumentos*. N°32 Abril –Agosto. UAM Xohchimilco, México.
- Escobar, Arturo y Sonia, Alvarez. 1992. *The Making of social movements in Latin America*. Westview Press. USA.

- Erickson, Sharon y Clifford, Bob. Marzo 2006. "When do leaders matter?, Hypotheses on leadership dynamics in social movements". En: *Mobilization the international Quaterly Review*. Volume II, Number 1. San Diego, USA.
- Everett, Kevin. Junio 1992. "Professsionalization and Protest: Changes in the social movement sector, 1961- 1983. En: *Social Forces*, Vol 70, N° 4. University of North Carolina. North Carolina, USA.
- Foucault, Michelle. 1973. *El orden del discurso*. Editorial Tusquets. Barcelona, España.
- Flores Galindo, Alberto. 1999. *La tradición autoritaria, Violencia y democracia en el Perú*. Aprodeh - SUR Casa de estudios del socialismo. Lima, Perú.
- Foweraker, Joe. 1993. *Popular Mobilization in México, the teacher's movement 1977-87*. Cambridge University Press. Reino Unido.
- Foweraker, Joe. 1993. Popular organization and institutional change. En: Foweraker y Ann Craig. *Popular Movements and Political change in Mexico*". Universidad de San Diego. San Diego, USA.
- Goldstone, Jack. 2003. "Bridging institutionalized and Noninstitutionalized politics". En: Jack Goldstone. *States, Parties, and Social movements*. Cambridge University Press.
- González, Daniel y Tavera, Ligia. 2007. "Mirando al futuro sosteniendo un espejo hacia el pasado: el caso del Movimiento del CGH en la UNAM". *Cuadernos de trabajo*. Instituto Mora. N°1, Diciembre. México.
- Gootenberg Paul. 1998. *Entre la coca y la cocaína: un siglo o más de las paradojas de la droga entre Estados Unidos y el Perú, 1860 -1980*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Gutierrez, Raquel y Escárzaga Fabiola. 2006. *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*. México. UNAM-UAP-JP-UACM. México.
- Jenkins, Craig y Klandermans, Bert. 1995. *The politics of social protest*. University of Minnesota. Minnesota, USA.
- Kietschelt, Herbert. July 1993. *Social movements, political parties and democratic theory*. Annals of the American Academy. USA.
- Kriesi, Hanspeter. 1996. "The impact of nacional context on social movements in a politcal context". En: Adam, Mc Carthy and Mayer Zald ed. *Comparative perspectives on social movementes*. Cambridge University Press. Reino Unido.

- Kruijt, Dirk y Krees, Koonign, ed. 2003. *Ejércitos políticos, Las fuerzas armadas y la construcción de la nación en la era democrática*. Instituto de estudios Peruanos. Lima, Perú
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. 1985. *Hegemonía y discurso socialista, hacia una radicalización de la democracia*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Laclau, Ernesto. 2006. *La razón populista*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Levitsky, Steven y Lucan, Way. April 2002. "The rise of Competitive authoritarianism". En: *Journal of Democracy*. Volume 13, Number 2. USA.
- Luca de Tena, Belen. 2000. *La guerra de la Cocaína*. Editorial Debate. Madrid, España.
- Mainwaring, Scott. Julio 2006. "The crisis of representation in the Andes". En: *Journal of Democracy*. Volumen 17, N° 3. USA
- Mariategui, José Carlos. 1979. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Ediciones Era. Ciudad de México, México.
- Mayorga, René. 1992. *¿De la anomia política al orden democrático? Democracia, estado y movimiento sindical en Bolivia*. CEBEM. La Paz, Bolivia.
- Mc Carthy, John y Mayer Zald. 1977. "Resource Mobilization and social movements: a Partial Theory", En: *The American Journal of Sociology*. Vol 82, N°6. University of Chicago. Chicago, USA.
- Mc Adam, Dough; Mc Carthy, John y Mayer Zald ed. 1996. *Comparative perspectives on social movements*. Cambridge University Press. Reino Unido.
- Mendéz Cecilia. Septiembre 2006. "Las paradojas del autoritarismo: Ejército, campesinado y etnicidad en el Perú". En: *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*. N° 26. Quito, Ecuador.
- Melucci Alberto. Mayo- Agosto 1999. "La acción colectiva como construcción social". En: *Revista de Estudios Sociológicos*. Vol. IX, N° 26. El Colegio de México. Ciudad de México.
- Melucci, Alberto. 1999. *Acción Colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México. Ciudad de México.
- Montoya, Rodrigo. 1998. *Multiculturalidad y política, derechos indígenas, ciudadanos y humanos*. SUR, Casa de Estudios del Socialismo. Lima, Perú.

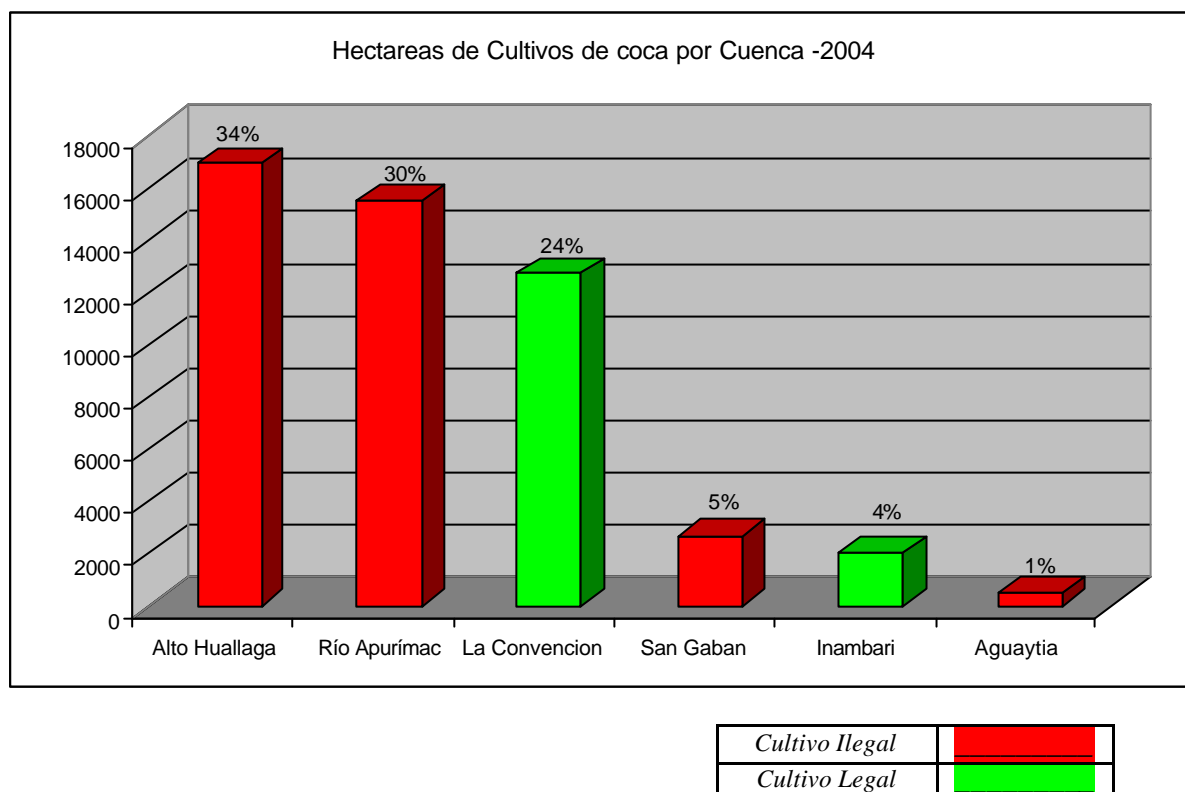
- Naciones Unidas, Oficina contra las drogas y el delito (ONUDD). 2007. *Cultivos de coca en la Región Andina*. Monitoreo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, www.onnud.org.pe. Junio del 2007
- O' Donnell y Schmitter. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions*. Johns Hopkins University Press. USA.
- Offe, Claus. 1996. *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Editorial Sistema. Madrid, España.
- ONPE. Oficina Nacional de Procesos Electorales. www.onpe.gob.pe. 16 de abril 2008.
- Pajuelo, Ramón. 2007. *Reinventando comunidades Imaginadas: Movimientos indígenas, nación y procesos sociopolíticos en los países andinos*. IFEA-IEP. Lima, Perú.
- Polleta Francesca y Jasper James. 2001. "Collective Identity and social movements". En: *Annual Review of Sociology*. Vol. 27. Columbia University. USA.
- Pitkin, Hanna. 1967. *El concepto de representación*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España.
- Pizzorno, Alessandro. 1989. "Algunas críticas de otredad: Una crítica a las teorías de la elección racional". En: Foxley y otros. *Democracia, desarrollo y el arte de traspasar fronteras*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Quijano, Anibal. 1978. *Imperialismo clases sociales y Estado en el Perú*. Centro de Investigaciones Sociales- Mosca Azul Editores. Lima, Perú
- Quintana, Juan. 1998. *Soldados y ciudadanos, Un estudio sobre el servicio militar en Bolivia*. PIEB. La Paz, Bolivia.
- Renique, José Luis. 2007. *La nación radical, Perú 1888-1992, De la utopía a la tragedia*. Documento de trabajo. Lima, Perú
- Renique, José Luis. 2003. *La voluntad encarcelada: las luminosas trincheras de combate de Sendero Luminoso*. Instituto de estudios Peruanos. Lima, Perú
- Rouquie, Alain. 1984. *El Estado militar en América Latina*. Editorial Siglo XXI. Ciudad de México, México.
- Rospigliosi, Fernando. 2005. "Coca legal e ilegal en el Perú" En: *Revista Debate grario*. N° 39. Lima, Perú.
- Sartori, Giovanni. 1986. *"Representación" Elementos de ciencia política*. Editorial Ariel, Barcelona, España.

- Soberon, Ricardo. 2004. "Política antidrogas: de la Corrupción y el fracaso a la debilidad y la desidia". En: *Revista IDEELE*. N° 135, Junio –Julio. Lima, Perú.
- Soberon, Ricardo. 2007. "El Control de drogas en el Perú en época de democracia". En: *Hablan los diablos Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú*. TNI – OXFAM. Lima, Peru.
- Sommers, Margaret. 1994. "The narrative constitution of identity: A relational and network approach". En: *Theory and Society Review*, N°23. Netherlands.
- Tanaka, Martín. 1998. *Los espejismos de la democracia, el colapso del sistema de partidos en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú.
- Tanaka, Martín. 2005. *Democracia sin partidos Perú 2000- 2005*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Tarrow, Sydney. 1996. "States and oportunitites, the political structuring of social movementes". En: Adam, Mc Carthy and Mayer Zald ed. *Comparative perspectives on social movements*. Cambridge University Press. Reino Unido
- Tarrow, Sydney. 1997. *El poder en movimiento, los movimientos sociales la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial. Madrid, España.
- Tavera, Ligia. 2000. "Movimientos sociales". En: Baca y otros compiladores. *Léxico de la Política*. FLACSO Mexico, CONACYT, Fondo de Cultura Económica, México.
- Tavera, Ligia 2007. *Reglas formales e informales de la representación política: movimientos sociales y partidos políticos*. Documento de trabajo
- Tilly, Charles. Diciembre 2005. "How political identities work". En: *Hellenic Political Science Review*. Cornell University. USA.
- Touraine, Alain. 1990. *América Latina Política y Sociedad* Editorial Espasa. Madrid, España.
- Van Cott, Donna. 2005. *From Movements to parties in Latin America: The evolution of ethnic politics*, Cambridge University Press. New York, USA.

ANEXOS

A. HOJA DE COCA Y COCAINA EN EL PERU Y LOS PAISES ANDINOS

Gráfico N°1: Cultivos de hoja de coca en los Valles del Perú – 2004 (hectáreas)



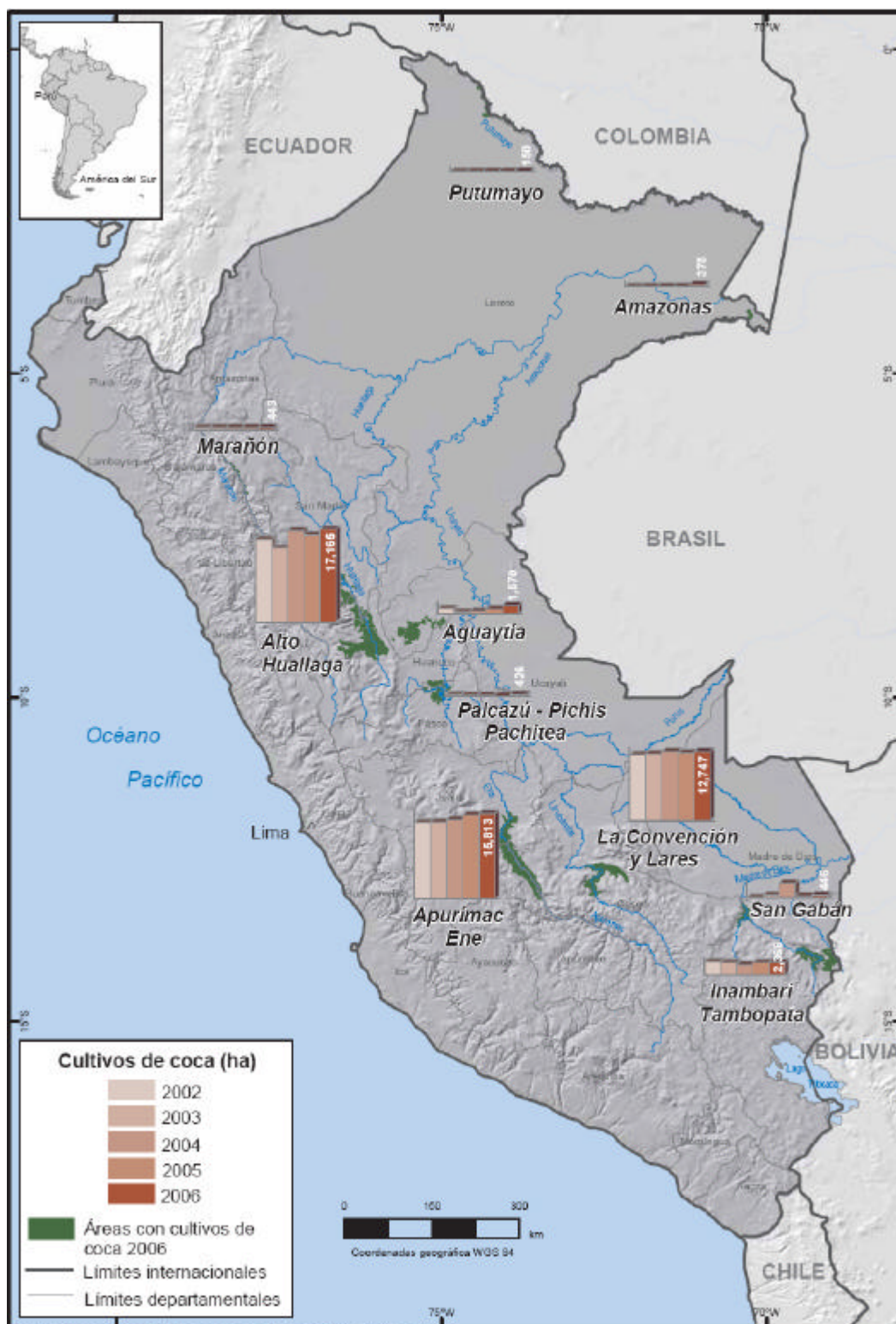
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo - ONUDD/ Elaboración propia

Cuadro N° 1: Cultivos de hoja de coca por Valle cocalero (hectáreas)

Valle	2001	2002	2003	2004	%
Alto Huallaga	14,481	15,286	13,646	16,900	34
Apurimac Ene	12,600	14,170	14,300	15,000	30
La Convención y Lares	13,980	12,170	12,340	12,500	24
San Gaban	No hay datos	No hay datos	470	2,700	5
Inambari Tambopata	2,520	2,430	2,260	2,000	4
Aguaytia	1,051	1,070	510	550	1
Total	44,632	45,126	43,526	49,650	100

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo - ONUDD

Gráfico N° 2 Producción de coca por cuencas cocaleras en el Perú 2005- 2006



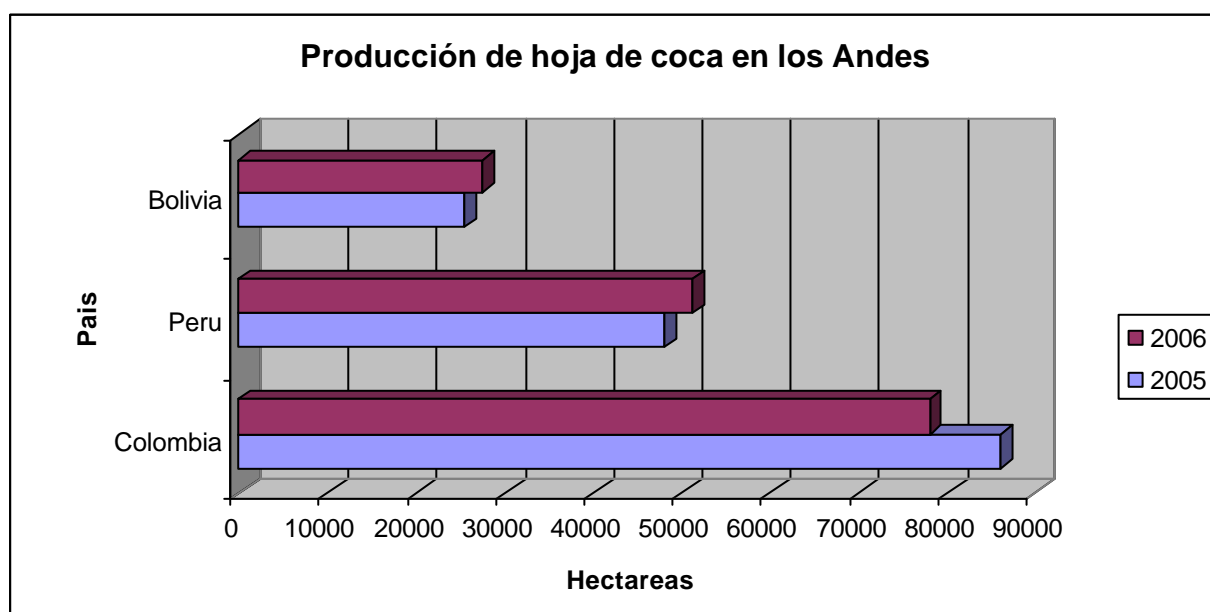
Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD - Gobierno de Perú
 Los límites políticos y los nombres utilizados en este mapa no implican la aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

**Cuadro N° 2: Producción de hoja de coca en la región Andina 1996-2006
(En hectáreas)**

Año / país	Bolivia	Perú	Colombia	Total
1996	48,100	94,400	67,200	209,700
1997	45,800	68,800	79,400	194,000
1998	38,000	51,000	101,800	190,800
1999	21,800	38,700	160,100	220,600
2000	14,600	43,400	163,300	221,300
2001	19,900	46,200	144,800	210,900
2002	21,600	46,700	102,000	170,300
2003	23,600	44,200	86,000	153,800
2004	27,700	50,300	80,000	158,000
2005	25,400	48,200	86,000	111,400
2006	27,500	51,400	78,000	156,900

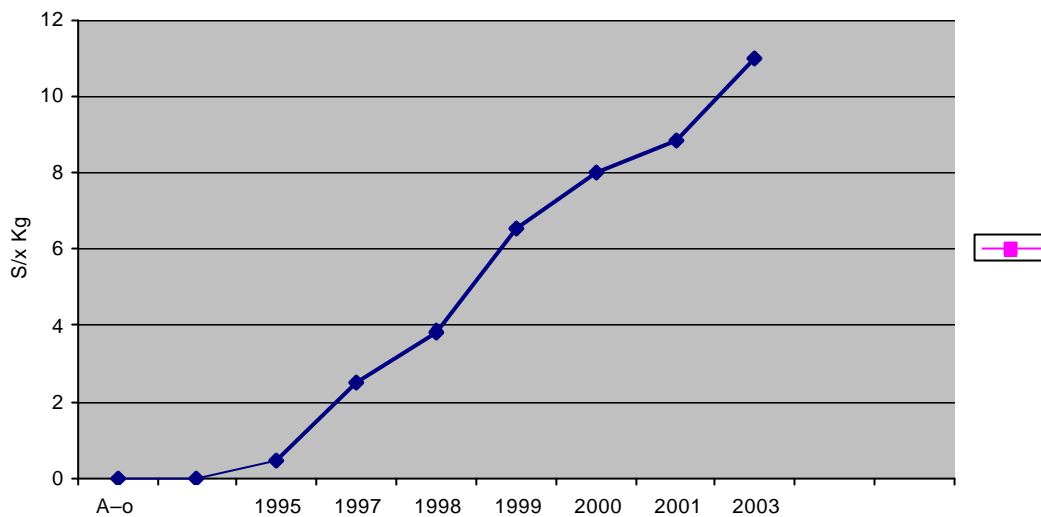
Fuente: ONUDD/ Elaboración propia

Gráfico N° 3: Cultivos de hoja de coca en la región andina (hectáreas)



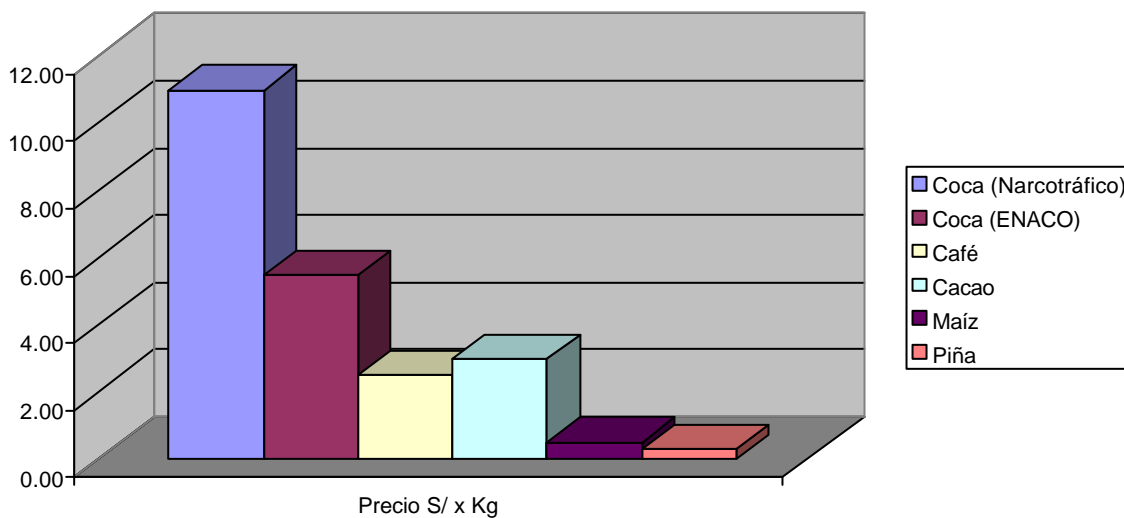
Fuente: ONUDD/ Elaboración propia

Gráfico N° 4: Evolución de los precios de la coca Perú 1995-2003
(Soles x Kilo)



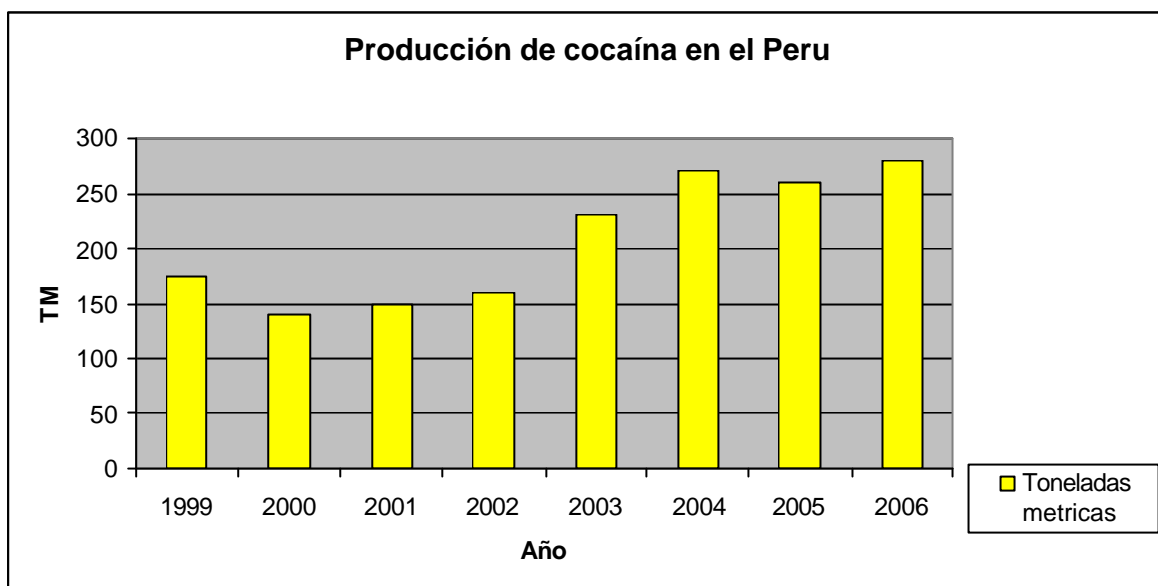
Fuente: www.devida.org.pe /Elaboración propia

Gráfico N° 5: Promedio de precios por tipo de cultivos
(2004-2006)



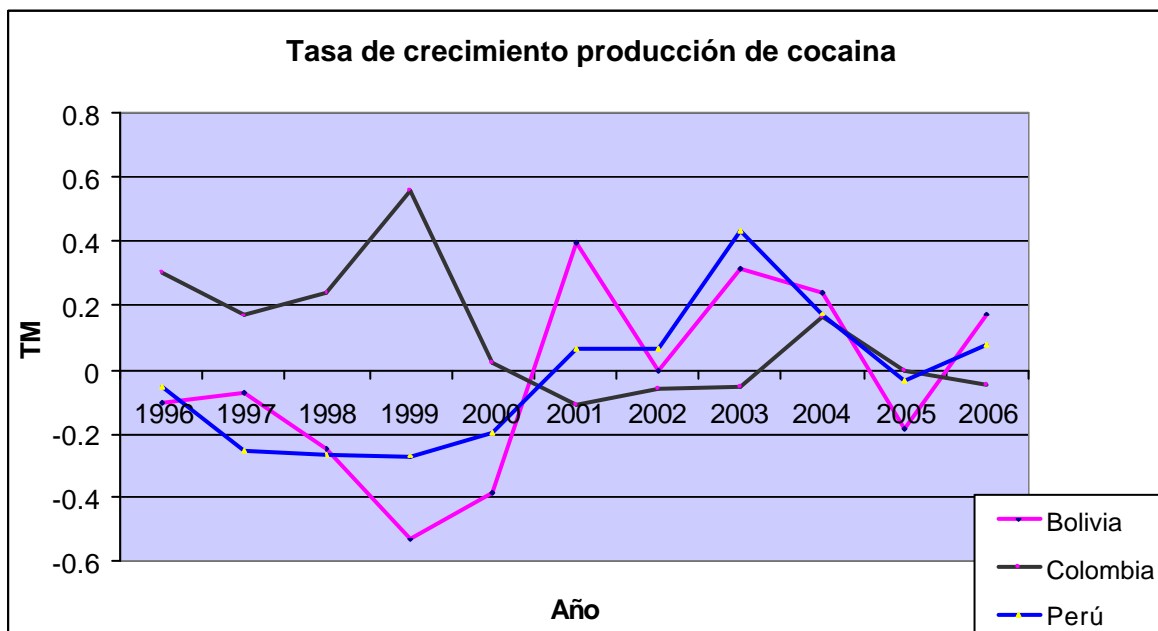
Fuente www.minagricu.gob.pe /Elaboración propia

Gráfico N° 6: Producción de cocaína en el Perú 1999-2006 (Toneladas Métricas)



Fuente: ONUDD- DEVIDA / Elaboración propia

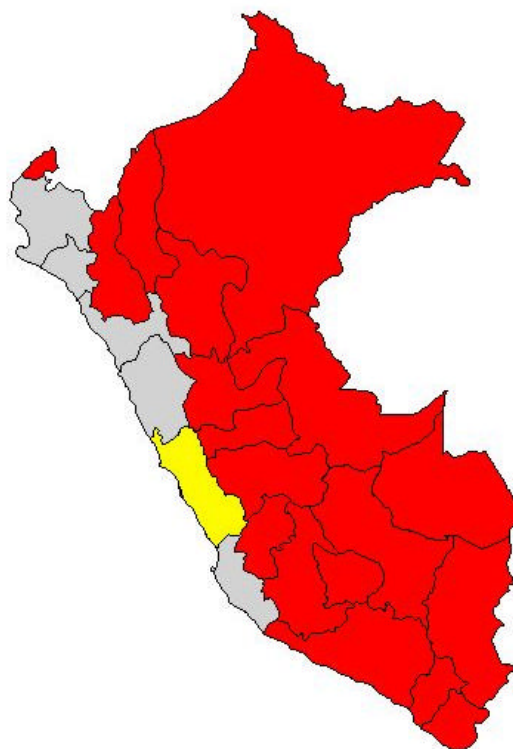
Gráfico N° 7: Tasa de crecimiento en la producción cocaína en los países andinos 1996-2006 (%)



Fuente: ONUDD- DEVIDA / Elaboración propia

B. DATOS Y RESULTADOS ELECTORALES




Resultados Elecciones Presidenciales 1 vuelta - 2006

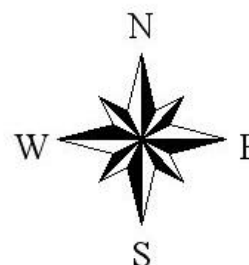


200 0 200 400 Miles



Eleccnacional1.shp

-  APRA
-  Unidad Nacional
-  Union por el Peru-PNP



Cuadro N° 1: Congresistas electos por la región San Martín (Valle del Huallaga)

<i>Partidos mas votados</i>	<i>Congresistas electos</i>	<i>Votos validos</i>
Partido Nacionalista- Unión por el Perú	Nancy Obregon	23,975
Alianza por el Futuro (Fujimorismo)	Rolando Reategui	18,501
APRA	Aurelio Pastor	17,166

Fuente: ONPE /Elaboración: Anahí Durand

**Cuadro N° 2: Congresistas electos por la región Ayacucho
(Valle del Río Apurímac)**

<i>Partidos mas votados</i>	<i>Congresistas electos</i>	<i>Votos validos</i>
Partido Nacionalista- Unión por el Perú	Juana Huancahuari	40,600
Partido Nacionalista- Unión por el Perú	Elizabeth León	17,684
Partido Nacionalista- Unión por el Perú	Jose Antonio Urquizo	12,794

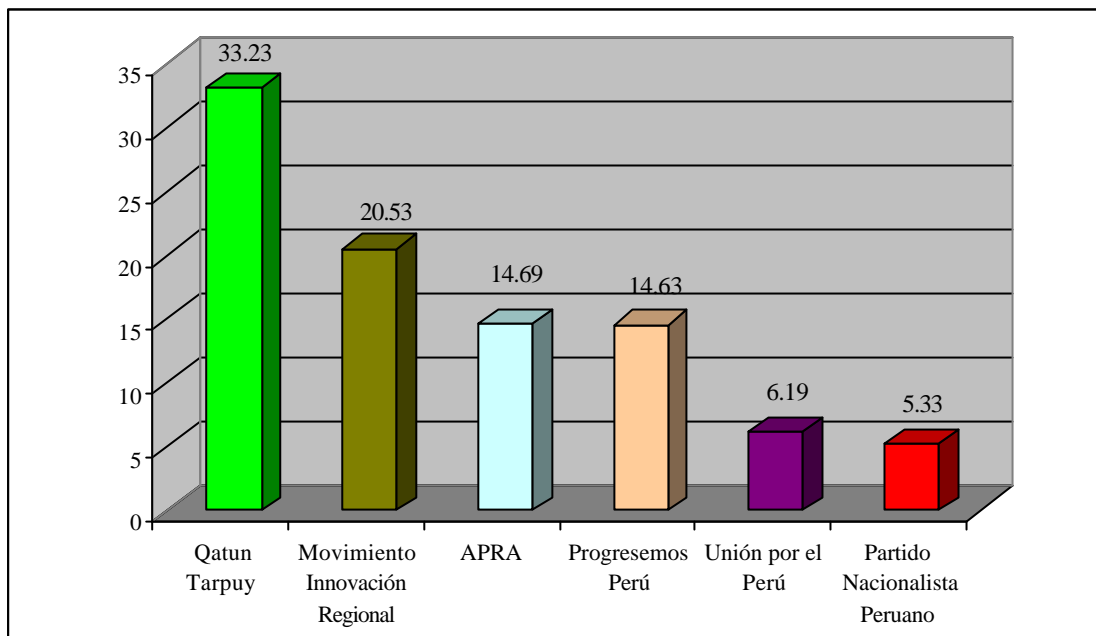
Fuente: ONPE /Elaboración: Anahí Durand

Cuadro N° 3: Parlamentarios andinos electos a nivel nacional

<i>Partidos mas votados</i>	<i>Congresistas electos</i>	<i>Votos validos</i>
Unidad Nacional	Rafael Rey	611.638
APRA	Wilbert Bendezu	333.092
Partido Nacionalista-UPP	Juan Mariategui	291.223
Partido Nacionalista-UPP	Elsa Malpartida Jara	270.932
APRA	Rosa Marina León	235.63

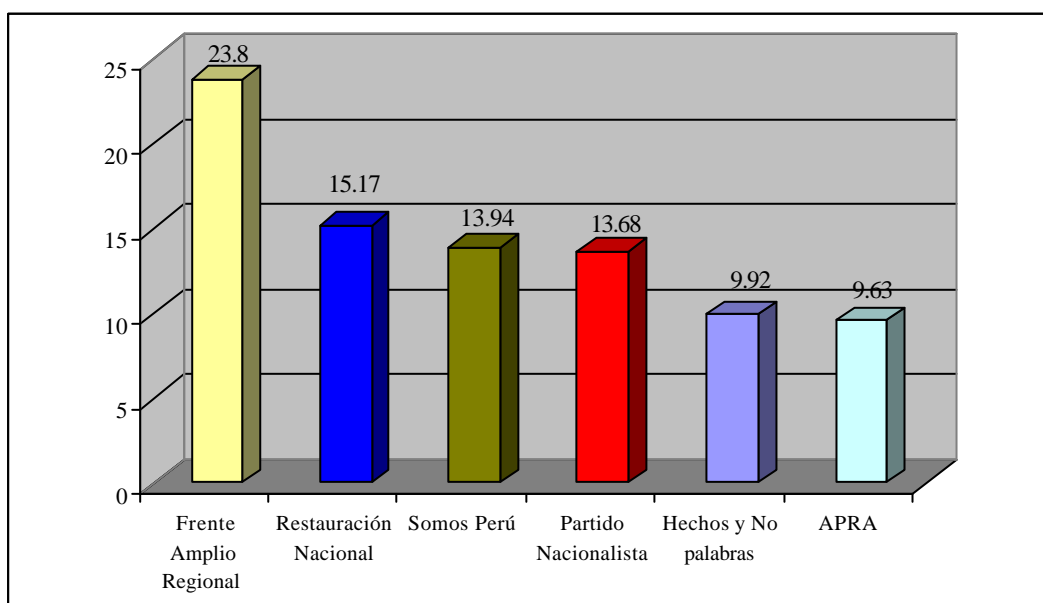
Fuente: ONPE/ Elaboración. Anahí Durand

Gráfico N° 1: Resultados elecciones municipales provincia de Huanta, Ayacucho (%)



Fuente: ONPE/ Elaboración propia

Gráfico N° 9: Resultados elecciones municipales provincia de Leoncio Prado, Huanuco (%)



Fuente: ONPE/ Elaboración propia

C. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

1. Criterios de elección de los entrevistados

a.) Líderes del movimiento cocalero:

Nos referimos a quienes asumieron un cargo en la organización del movimiento, ya sea a nivel nacional en la CONPACCP o en alguna federación local entre el 2001 y el 2006. Dentro de este grupo se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

- . Tiempo de pertenencia a la organización: Incluyó en primer lugar miembros fundadores de la CONPACCP que aportaron sobre las orientaciones fundacionales del movimiento. También se contó a los dirigentes actuales que conocen las demandas y objetivos de la organización hoy, estableciéndose comparaciones en el tiempo.
- . Pertenencia territorial: Incluyó a los dirigentes nacionales de la CONPACCP y a los líderes de las federaciones locales en los Valles del Río Apurímac y el Huallaga, contrastando enfoques y prioridades a nivel local y nacional.

b) Autoridades del movimiento cocalero:

Nos referimos a las autoridades que provienen del movimiento cocalero o mantienen alguna vinculación con este. Dentro de este grupo se tomó en cuenta los siguientes criterios de elección.

- . Puesto de representación: Contempló a alcaldes distritales, alcaldes provinciales y representantes parlamentarios elegidos en las elecciones del 2006
- . Relación con el movimiento: Implicó distinguir entre aquellas autoridades provenientes de las organizaciones cocaleras y los que establecen un nivel de relación para participar en las elecciones.

-Profesionales vinculados al Movimiento cocalero¹²⁵:

En este grupo comprende la entrevista a profesionales conocedores del tema en base a los criterios siguientes

- . Trayectoria académica: Participación en investigaciones en ciencias sociales referidas a la problemática cocalera en el Perú y/o la región andina.
- . Trayectoria laboral: Desempeño laboral en alguna institución privada o pública directamente vinculada con la problemática cocalera en el Perú y/o la región andina.

¹²⁵ Vale anotar que en este grupo no se aplicó una pauta semi estructurada dejándose la conversación abierta de acuerdo a la experiencia de cada profesional.

2. Pautas de entrevista

a) Pauta de Entrevista semi estructurada para líderes del movimiento cocalero

Nombre:

Sexo/ Edad:

Escolaridad:

Ocupación principal:

Cargo directivo:

Lugar de nacimiento/Lugar de residencia:

Lengua materna:

Tema 1: Información sobre el componente identitario

- ¿Cómo se forma la organización cocalera, qué permite la confluencia de los valles?
- ¿Cómo se definirían ustedes, como una organización indígena o campesina, por qué?
- ¿Qué opinión de la política norteamericana, cuánto creen que influye en el tema cocalero?
- ¿Cómo llega usted a ocupar este puesto directivo, por qué cree que lo eligen?
- ¿Cuando se fundó la organización, cuáles eran los objetivos, han variado, ¿por qué?
- ¿Cuáles eran las principales demandas al momento de la fundación y cuáles son hoy, a quiénes se las presentaban y por qué?
- ¿Qué mecanismos utilizaban al momento fundacional para hacer oír sus demandas (protestas), cuáles usan ahora, son los mismos, cree que son efectivos?

Tema 2: Información sobre el proceso de participación en la arena electoral

- ¿En qué momento se decide en las elecciones, ¿cuáles son las principales razones?
- Dentro del movimiento quienes fueron los principales promotores de la idea de participar en las elecciones?, ¿hubo quienes se opusieron, por qué?
- ¿Existieron elementos externos al movimiento que los motivaron a participar, cuáles fueron y por qué? (actores políticos, leyes favorables, la experiencia boliviana, etc.)?
- ¿Por qué decidieron participar con el Partido de Ollanta Humala, ¿cómo evalúa esta decisión?, ¿el que fuera militar influyó en algo positiva o negativamente?
- ¿Por qué después se forma el partido Kuska Perú ¿cómo evalúa esta decisión?

** Tema 3: Información sobre la relación entre el partido y las autoridades electas*

- Existen canales de interlocución entre el movimiento y las autoridades elegidas, hay mecanismos por los que se les pueda controlar?
- ¿Cuáles son las principales acciones que ha emprendido la autoridad en torno al problema cocalero, ustedes están de acuerdo con ellas?
- El movimiento ha abandonado la protesta?, cree que las autoridades deberían participar de las protestas ¿por qué?
- En general cómo evalúa la actual relación entre las autoridades electas y el movimiento, qué podría mejorar, cree que fue una buena decisión ser autoridad?

b) Pauta de entrevista semi estructurada para autoridades cocaleras

Nombre:

Sexo/ Edad:

Escolaridad:

Ocupación principal:

Cargo directivo:

Lugar de nacimiento/Lugar de residencia:

Lengua materna:

Tema 1: Información sobre la identidad y el vínculo de la autoridad con el movimiento cocalero antes de ser elegida

- ¿Qué relación tenía usted con la organización cocalera antes de ser autoridad?
- ¿Comparte los objetivos y demandas del movimiento cocalero, cree que están bien orientados o deberían dirigirse a otros actores?
- ¿Cree que es una organización de carácter indígena o campesina?
- Antes de ser autoridad, ¿participó de las movilizaciones y protestas convocadas por la organización cocalera, cree que fueron efectivos?
- ¿Qué opina de la política internacional (Estados Unidos) respecto al problema cocalero, cuánto cree que influye en su actual tratamiento por el gobierno?

** Tema 2: Información sobre la participación del movimiento en la arena electoral*

- ¿Cómo llega usted a ser candidato por el movimiento cocalero, por qué?
- ¿Qué elementos lo deciden a participar como candidato del movimiento cocalero?

- Dentro del movimiento quienes eran los principales promotores de su candidatura, hubo reticencia en algunos líderes o en algún sector del movimiento?
- ¿Por qué cree que el movimiento cocalero decide participar en el Partido de Ollanta Humala, ¿cómo evalúa esta decisión, usted estuvo de acuerdo, por qué?
- ¿Por que cree que después un sector del movimiento forma el partido Kuska, ¿cómo evalúa esta decisión, usted estuvo de acuerdo, por qué?

Tema 3: Información sobre la relación entre el partido y las autoridades electas

- ¿Existen canales de interlocución entre el movimiento y las autoridades, cuales son?
- ¿Cómo autoridad qué medidas ha priorizado en su gestión, las consultó a la organización cocalera o fueron tomadas autónomamente?
- ¿Ha participado o encabezado acciones de protesta relacionados con el problema cocalero, qué se demanda principalmente y ante quienes?
- ¿Cómo evalúa la relación con las autoridades nacionales (ejecutivo y legislativo), que les exigiría frente al problema cocalero?
- En general cómo evalúa la actual relación entre las autoridades electas y el movimiento, qué podría mejorar, cree que fue una buena decisión participar con la organización?

3. Período de realización de las entrevistas:

Las 19 entrevistas realizadas en el marco de la investigación se ejecutaron en tres períodos distintos.

. El primer período comprendió septiembre del 2006: Se entrevistó a Nelson Palomino y el ex ministro Fernando Rospigliosi.

. El segundo período comprendió agosto del 2007: Se entrevistó a líderes, autoridades y profesionales residentes en Lima.

. El tercer período comprendió enero del 2008: Se entrevistó a líderes y autoridades residentes en los valles cocaleros.

3) Relación de entrevistados: Matriz de sistematización

<i>Nombre del entrevistado</i>	<i>Sexo</i>	<i>Edad</i>	<i>Lengua Materna</i>	<i>Lugar de Nacimiento</i>	<i>Lugar de residencia</i>	<i>Escolaridad</i>	<i>Principales cargos</i>
Elsa Malpartida Jara	Fem	48	Español	Huanuco (sierra)	.Lima .Tingo María Provincia Leoncio Prado Región Huanuco Valle del Huallaga	Superior técnico en contabilidad	. Representante Peruana en el Parlamento Andino . Ex Secretaria de organización de la CONPACCP
Nancy Obregón Peralta	Fem	40	Español	Lima (padres de la región Apurímac)	. Lima . La Pólvara Provincia de Tocache Región San Martín Valle del Huallaga	Superior Técnico en enfermería	. Congresista de la República . Ex Vicepresidenta de la CONPACC
Fredy Hugo Fernández Echevarria	Mac	34	Español	Huanuco (sierra)	. Tingo María . Mariano Dámaso Provincia Leoncio Prado, Huanuco Valle del Huallaga	Secundaria completa	Alcalde del distrito de Mariano Dámaso en la provincia de Leoncio Prado
Alan Valdivia	Mac	21	Español	Huanuco capital (sierra)	Mariano Dámaso Provincia Leoncio Prado, Huanuco Valle del Huallaga	Secundaria completa	Secretario de organización
Pedro Arevalo	Masc	43	Español	Huaraz Ancash	La Pólvara Tocache Alto Huallaga	Primaria completa	Ex Dirigente APC- Tocache
Nelson Palomino La Serna	Masc	46	Quechua	San Francisco (padres de la sierra de Huanta)	San Francisco, Provincia La Mar Región Ayacucho Valle del Río Apurímac	Secundaria completa	Ex Presidente de la CONPACCP
Alejandro Gutierrez	Masc	40	Quechua	Huanta (sierra)	Sivia, Provincia Huanta Región Ayacucho Valle del Río Apurímac	Primaria completa	Ex presidente de la FEPAVRAE Alcalde de Sivia
Maricela Guillen	Fem	42	Quechua	Sivia (padres de Junín)	Sivia, Provincia Huanta Región Ayacucho Valle del Río Apurímac	Primaria completa	Ex secretaria de organización de la FEPAVRAE
Julián Quispe López	Masc	38	Quechua	Huanta (sierra)	Kimbiri, Prov. La Convención Región Cusco Valle del Río Apurímac	Secundaria Incompleta	Actual presidente de la FEPAVRAE
Manuel Lamburggini	Masc	57	Español	Huanuco capital	Tingo María Prov. Leoncio	Superior Universitaria	Jefe de la Oficina DEVIDA para el

					Prado Región Huanuco Valle del Huallaga	Administración de empresas	Valle del Huallaga
Alejandro Gómez	Masc	54	Español	Lima	San Francisco Provincia La Mar Región Ayacucho Valle del Río Apurímac	Superior Universitaria Ingeniero Agrícola	Jefe de la Oficina DEVIDA para el Valle del Apurímac
Carlos Condori	Masc	45	Español	Huamanga	Huamanga Provincia Ayacucho Región Ayacucho Valle del Río Apurímac	Superior Universitaria Antropólogo	Comisionado Adjunto para la Paz (Ministerio del Interior)
Elías Espinoza Castañeda	Masc	49	Español	Huanuco capital	Tingo María Prov. Leoncio Prado Región Huanuco Valle del Huallaga	Técnico en enfermería	Comisionado Adjunto para la Paz (Ministerio del Interior)
Fernando Rospigliosi	Masc	55	Español	Lima	Lima	Superior Universitaria Sociólogo	Ex Ministro del Interior del Perú (2002-2004)
Ciro Moreira	Masc	41	Quechua	Huanta (sierra)	Huamanga Provincia Ayacucho Región Ayacucho	Superior Universitaria Ingeniero Agrícola	Ex asesor de la AMUVRAE
Hugo Cabieses	Mac	58	Español	Lima	Lima	Superior Universitaria Economista	Ex asesor CONPACCP